

Nombres Propios

FUNDACIÓN CAROLINA

2006

NOMBRES PROPIOS 2006. FUNDACIÓN CAROLINA



Nombres Propios

FUNDACIÓN CAROLINA

2006

Nombres Propios

FUNDACIÓN CAROLINA

© DE LOS TEXTOS: sus autores

© DE ESTA EDICIÓN:

2007, Fundación Carolina
C/ General Rodrigo, 6 - 4º c Alto
Edificio Germania. 28003 Madrid
Tel.: 91 456 29 00 / 28 66. Fax: 91 533 67 53
www.fundacioncarolina.es

COORDINADOR DE LA EDICIÓN:

Alfonso Gamó

DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN:

Calamar Edición y Diseño, s.L.

Las opiniones y juicios expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y, por tanto, no siempre tienen por qué coincidir con el punto de vista de la Fundación Carolina.

IMPRESIÓN: Impresa, s.A.

ENCUADERNACIÓN: Gómez Aparicio, s.A.

DEPÓSITO LEGAL: M-XXXXXXXXXX

Edición no venal

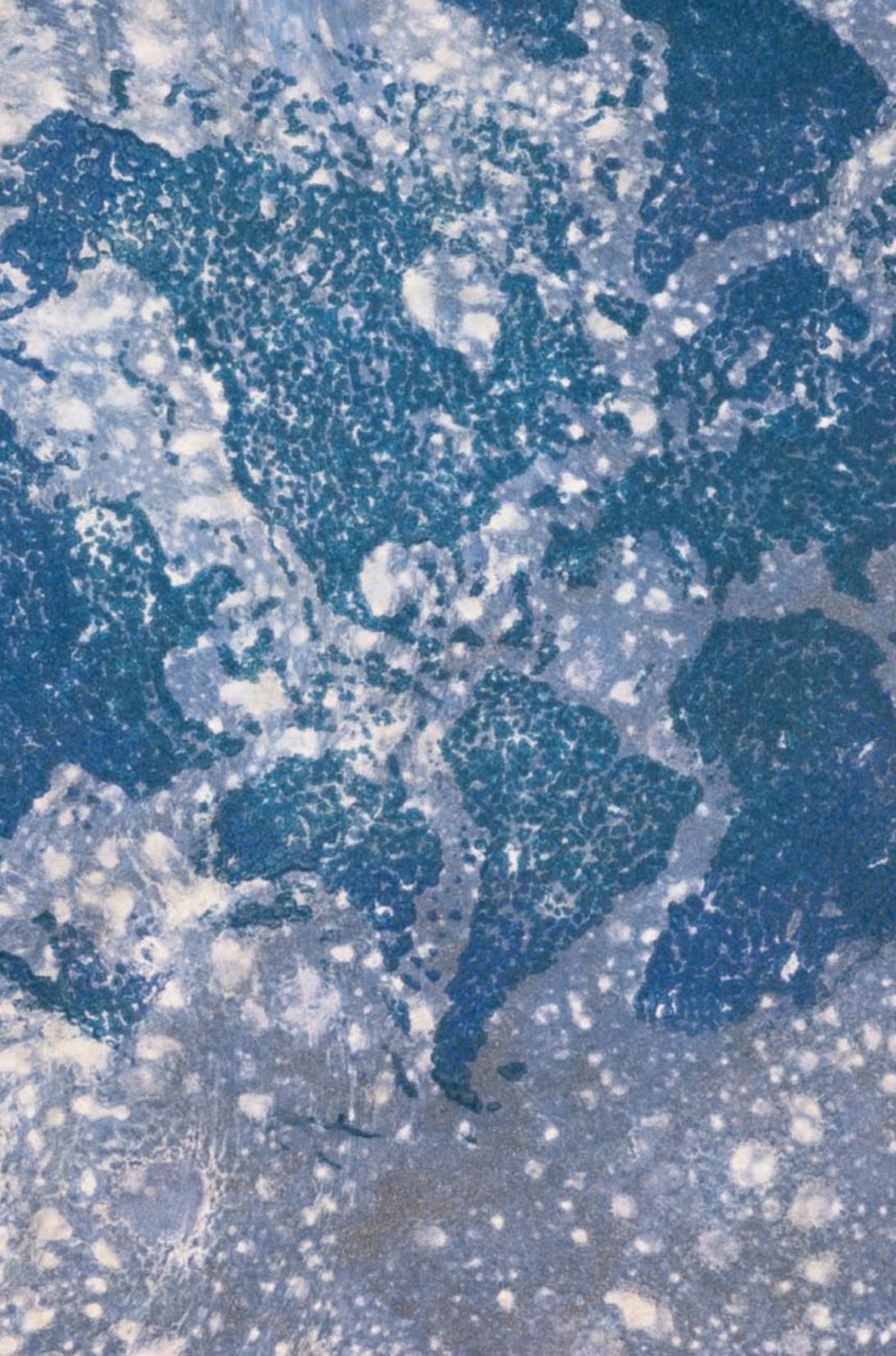
Impreso en España – *Printed in Spain*

Índice

Presentación	11
<i>Rosa Conde</i>	
Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa	13
<i>Leire Pajín, 28 de noviembre de 2005.</i>	
La RSE y la Fundación Carolina	19
<i>Ramón Jáuregui, 30 de noviembre de 2005.</i>	
Luces y sombras de la política en América Latina	23
<i>Manuel Alcántara Sáez, 30 de noviembre de 2005.</i>	
La Cumbre de Salamanca: una nueva apuesta por el espacio iberoamericano	31
<i>Celestino del Arenal, 5 de diciembre de 2005.</i>	
La Comunidad Sudamericana de Naciones: algo se mueve en América del Sur	37
<i>Francisco Aldecoa, 12 de diciembre de 2005.</i>	
Las tareas de Evo. Bolivia el día después	41
<i>Joan Prats, 26 de diciembre de 2005.</i>	
Fiebre reeleccionista en América Latina	49
<i>Daniel Zovatto, 9 de enero de 2006.</i>	
Ganando la batalla contra el hambre	55
<i>Emilio Lamo de Espinosa, 16 de enero de 2006.</i>	
Elecciones en Chile	59
<i>Ludolfo Paramio, 23 de enero de 2006.</i>	
Las incógnitas del nuevo escenario latinoamericano	63
<i>Máximo Cajal, 6 de febrero de 2006.</i>	
América Latina y el informe PISA.....	67
<i>Julio Carabaña, 13 de febrero de 2006.</i>	
Bachelet presidenta	73
<i>Amelia Valcárcel, 20 de febrero de 2006.</i>	

Elecciones presidenciales en Chile	77
<i>Guy Bajoit</i> , 27 de febrero de 2006.	
Latinoamérica 2006: superar la melancolía, atrapar la oportunidad	83
<i>José Juan Ruiz</i> , 6 de marzo de 2006.	
El público (Hay Festival).....	91
<i>Carmen Posadas</i> , 13 de marzo de 2006.	
El sombrero del mago	95
<i>Sergio Ramírez</i> , 20 de marzo de 2006.	
La cooperación española y América Latina: una agenda compartida hacia la justicia entre hombres y mujeres.....	101
<i>Aurora Díaz-Rato</i> , 27 de marzo de 2006.	
América Latina en la mentalidad española	107
<i>Pedro A. Vives</i> , 3 de abril de 2006.	
El nuevo cine iberoamericano	117
<i>Cristina Peri Rossi</i> , 10 de abril de 2006.	
Idea de la cooperación en la mentalidad española	121
<i>Pedro A. Vives</i> , 24 de abril de 2006.	
Tradición Republicana	129
<i>Judith Astelarra</i> , 8 de mayo de 2006.	
Mercedes Roffé, la poesía en diálogo con la poesía	135
<i>Marta López-Luaces</i> , 15 de mayo de 2006.	
Los desafíos de la protección social en América Latina y el Caribe	141
<i>José Luis Machinea</i> , 22 de mayo de 2006.	
Mercado, desconfianza y cooperación al desarrollo	147
<i>Francesc Granell</i> , 5 de junio de 2006.	
Nuevo gobierno en Costa Rica: paradojas y desafíos	153
<i>Luis Guillermo Solís Rivera</i> , 12 de junio de 2006.	
Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?	161
<i>Bernardo Kliksberg</i> , 19 de junio de 2006.	
Partidos y <i>outsiders</i> en las elecciones peruanas	167
<i>Rafael Roncagliolo</i> , 3 de julio de 2006.	
Relación entre las TIC y el desarrollo: aproximación a los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información	173
<i>Estefanía Chereguini</i> , 17 de julio de 2006.	

Culturas alternativas, culturas de punta, nosotros y nuestras circunstancias.....	181
<i>José Rojas Bez, 24 de julio de 2006.</i>	
Elecciones mexicanas: lo que ya se sabe	187
<i>José María Tortosa, 31 de julio de 2006.</i>	
La nueva narrativa hispanoamericana. ¿Una ruptura con el Boom?.....	193
<i>Jorge Eduardo Benavides, 7 de agosto de 2006.</i>	
Un nuevo contrato social para América Latina	199
<i>Ernesto Ottone, 21 de agosto de 2006.</i>	
El codesarrollo en su laberinto	205
<i>Alberto Acosta, 4 de septiembre de 2006.</i>	
México desde Italia y al revés	211
<i>Ugo Pipitone, 11 de septiembre de 2006.</i>	
El Plan África 2006-2008.....	217
<i>Álvaro Iranzo, 25 de septiembre de 2006.</i>	
Violencia social y globalización en América Latina.....	223
<i>Manuela Mesa, 9 de octubre de 2006.</i>	
El futuro de la protección social en América Latina: la respuesta de la cooperación española	231
<i>Juan Pablo de Laiglesia, 23 de octubre de 2006.</i>	
Ecuador: dos estilos y dos opciones doctrinarias	237
<i>Javier Ponce, 30 de octubre de 2006.</i>	
El continuismo en la política brasileña	243
<i>Manuel Alcántara Sáez, 6 de noviembre de 2006.</i>	
Mujeres líderes iberoamericanas.....	249
<i>Amelia Valcárcel, 13 de noviembre de 2006.</i>	
Apuntes para una agenda de desarrollo en América Latina.....	255
<i>Narcís Serra, 20 de noviembre de 2006.</i>	
Nicaragua: en busca del consenso.....	261
<i>Sergio Ramírez, 27 de noviembre de 2006.</i>	
Construyendo la Comunidad Iberoamericana.....	267
<i>Enrique V. Iglesias, 11 de diciembre de 2006.</i>	
Índice temático y de autores	275



Presentación

ROSA CONDE

Directora de la Fundación Carolina

Cuando a finales de noviembre del año 2005 pusimos en marcha la iniciativa de una nueva página web, hicimos hincapié en que se creaba con vocación de constituirse en un espacio para la reflexión, la difusión, el debate y el intercambio de ideas relacionadas con la cooperación internacional y con América Latina.

Por ello, decidimos crear un lugar destacado, “Nombres Propios”, que albergara artículos de opinión y colaboraciones periódicas de personalidades del mundo de la política, la economía, la cultura y el pensamiento, así como de especialistas en sus respectivos ámbitos, de España y de América Latina.

Esta publicación que ahora presentamos recoge los 43 artículos que hemos recibido y publicado desde esa fecha hasta finales de 2006, con el objetivo de ampliar su difusión y promover el intercambio de puntos de vista sobre temas de actualidad y el examen de acontecimientos de interés relacionados con la agenda latinoamericana e internacional. Prueba de ello son los numerosos artículos que analizan los resultados de los comicios acaecidos durante 2006 en una buena parte de los países de la región latinoamericana.

Sin embargo, no sólo la actualidad ha marcado los contenidos de la sección. También ha servido para dar a conocer planes, estrategias y políticas, tanto de la cooperación española como de otros

agentes sociales, para analizar hechos relevantes en el escenario internacional o para comentar aspectos relacionados con la producción cultural.

Quiero agradecer a todos los autores, ya con “nombre propio” para la Fundación Carolina, sus contribuciones. A los más cercanos, que colaboran en otras tareas con la Fundación, y a aquellos que se han acercado por primera vez a nosotros desde estas páginas, con la confianza de ver de nuevo su nombre en la próxima edición de este libro.

Madrid, enero de 2007

Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa

LEIRE PAJÍN

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

Desde hace 15 años, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y Europa, de lengua española y portuguesa, se reúnen anualmente para reflexionar sobre los desafíos del desarrollo de los países iberoamericanos, así como para impulsar la cooperación, la coordinación y la solidaridad regionales.

La última Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad española de Salamanca a mediados del pasado mes de septiembre, presentó una novedad frente a lo acaecido en Cumbres anteriores: los días previos a las reuniones de los mandatarios se celebró un Encuentro Cívico que congregó a más de 80 responsables de organizaciones sociales, sindicales y centros de estudio representativos de la pluralidad de las sociedades iberoamericanas.

Los participantes en el *I Encuentro Cívico Iberoamericano* discutieron, elaboraron y aprobaron un “*Manifiesto de las organizaciones de la sociedad civil*” en el que plantearon una serie de iniciativas concretas dirigidas, tanto a los Jefes de Estado y de Gobierno, como a las propias instituciones del Sistema Iberoamericano, especialmente a su Secretaria General (SEGIB).

El *Manifiesto* presenta dos tipos de propuestas, unas orientadas a la creación y enriquecimiento de una *agenda social iberoamericana*, y otras encaminadas a la creación de un *espacio permanente y plural*

de participación social como expresión de la voluntad de implicar a las organizaciones de la sociedad civil en un renovado proyecto iberoamericano, que se quiere que sea incluyente, social y participativo, basado en la solidaridad y el apoyo mutuo.

El gobierno español, consciente de sus especiales responsabilidades hacia América Latina y firme partidario de la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas, ha tomado buena nota de estas recomendaciones, aunque ya venía trabajando seriamente para dar respuesta a muchas de las inquietudes reflejadas en un Manifiesto que está dotado de una gran legitimidad al haber sido elaborado por un abanico tan amplio y representativo de las organizaciones sociales ibéricas y latinoamericanas.

LA DEFINICIÓN DE UNA AGENDA SOCIAL IBEROAMERICANA

A pesar de las sucesivas generaciones de reformas políticas y económicas que se han puesto en marcha, América Latina es la única región del mundo en desarrollo que, pese a transitar por situaciones democráticas generalizadas, no acaba de mostrar los éxitos esperados ante los desafíos del desarrollo. La mayoría de las economías latinoamericanas han alcanzado una buena estabilidad macroeconómica, en algunos casos han crecido notablemente y, sin embargo, este crecimiento no reduce en la proporción que sería deseable y esperable las desigualdades sociales y la pobreza en prácticamente ningún país de la Región.

Por el contrario, la exclusión social sigue siendo tan grave como antes de que se iniciaran las reformas, hace veinte años y, en no pocos casos, esta exclusión se ha acentuado. Según el informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborado recientemente por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y otras agencias de las Naciones Unidas, la Región destaca por ser la más rezagada del mundo en términos de equidad, entre otros factores, debido a la mala distribución del ingreso que predomina en la práctica totalidad de los países que la conforman.

Esta desigualdad en la distribución del ingreso está atentando contra el proceso de desarrollo y afectando las tasas de crecimiento económico, lo que a su vez explica, en gran medida, la ausencia de avances en

la reducción de la pobreza que padece la Región. La extrema desigualdad explica, asimismo, la falta de consolidación y legitimación de las instituciones democráticas encargadas de canalizar la voluntad colectiva.

Durante los últimos 25 años se ha extendido como nunca la democracia representativa en América Latina. Las democracias, aunque con sobresaltos, funcionan relativamente bien en cuanto a las instituciones formales. Se han creado y modernizado un buen número de ellas y se les ha dotado de una mayor transparencia e independencia respecto a los poderes públicos, pero la Región está lejos de tener sistemas que garanticen los derechos cívicos de todos sus ciudadanos.

Ante la presencia de instituciones frágiles, y en ocasiones poco acostumbradas a la rendición de cuentas, los gobiernos pueden sufrir crisis de representatividad e incluso de gobernabilidad. Después de un periodo de cierto optimismo por la vuelta a la democracia, el auge de varios esquemas de integración y la entrada de importantes inversiones extranjeras –destacando las españolas entre ellas–, los ciudadanos latinoamericanos, sobre todo los más desfavorecidos, se dan cuenta de que la base de todo, el régimen político, está lejos de consolidarse y de ser capaz de dar respuestas a sus necesidades.

Es difícil que los segmentos desfavorecidos se sientan representados por instituciones –y se “apropien” de las políticas públicas–, que sistemáticamente les excluyen de los beneficios del crecimiento económico. El resultado es un deterioro gradual, pero creciente, de la institucionalidad democrática. Ello pone, una vez más, de manifiesto que no puede haber desarrollo democrático sin derechos sociales y sin garantías para la dignidad de las personas.

ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

La difícil situación por la que atraviesan bastantes países de América Latina hace patente la necesidad de trabajar vigorosamente a favor de lo que el reciente informe del PNUD, *La Democracia en América Latina*, ha denominado la “ciudadanía integral”, o lo que es lo mismo, la idea de que “el ciudadano de hoy debe acceder a sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado”. Hay que recordar que, para muchos,

el desarrollo no es sino el reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Este concepto forma parte de una necesaria revalorización de la *Política* que, en palabras del PNUD, “pasa por aplicar medidas que promuevan una institucionalidad legítima, fortalezcan una sociedad civil activa y, sobre todo, promuevan un amplio debate sobre el Estado, la economía y la globalización”.

Promover la legitimidad de las instituciones iberoamericanas, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil e impulsar estos debates eran los objetivos que se propuso la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional cuando, de acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España (CONGDE) y los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), decidió encargar a la Fundación Carolina la organización del *I Encuentro Cívico Iberoamericano*.

Lo expresó con toda claridad en la clausura del Encuentro la Vicepresidenta del gobierno español con palabras que yo suscribo plenamente: “Una ciudadanía activa y cohesionada es una condición necesaria para que la sociedad progrese en la dirección de una mayor justicia. La participación en los distintos procesos y organizaciones que tienen por objeto la discusión y defensa de los asuntos públicos es el mayor capital de las democracias. La acción de las organizaciones y agentes sociales es un factor fundamental para dinamizar y fortalecer las redes de solidaridad y compromiso cívico que permiten que una sociedad progrese. Debería ser posible concertar, jerarquizar las divergencias, y buscar acuerdos sobre los asuntos sustanciales que inciden en el desarrollo de los países iberoamericanos.”

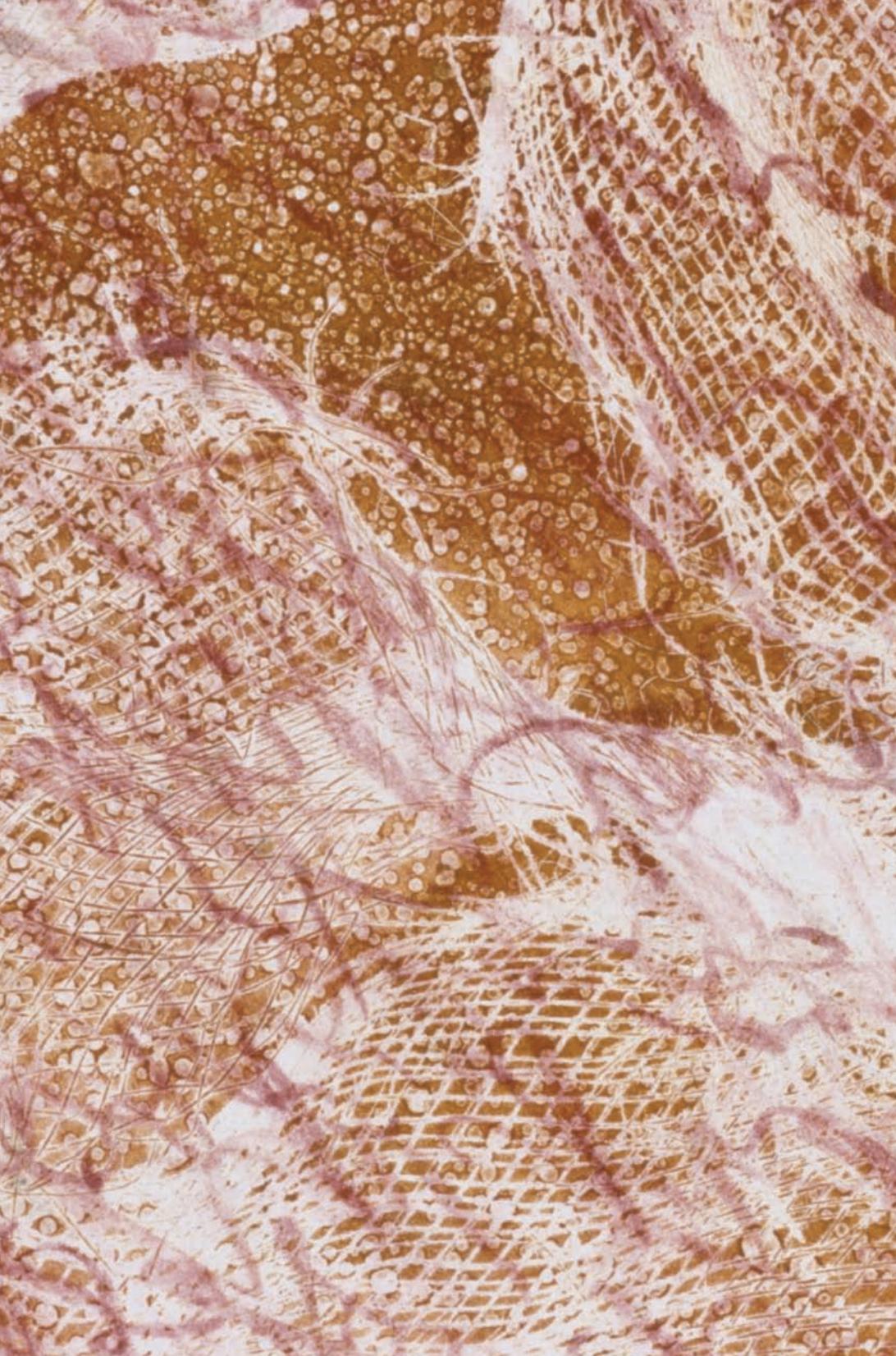
El gobierno de España aspira a crear un espacio común iberoamericano basado en la democracia, la cohesión social y territorial, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por ello, recogiendo el sentir de la gran mayoría de nuestros ciudadanos (siete de cada diez, según el Barómetro de la Fundación Carolina), ha realizado una apuesta política decidida para sumarse a los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la pobreza. El gobierno ha elaborado un calendario para aumentar nuestros fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el alcanzar el 0,5 por ciento del Producto Interior

Bruto (PIB) en esta legislatura. Como hitos intermedios, este año destinaremos más del 0,3 por ciento del PIB a la AOD y el 0,35 por ciento en 2006. En 2008, al final de la legislatura, el 0,5 por ciento, supondrá una cantidad en torno a los 5.000 millones de euros, de los cuales al menos el 40 por ciento irán destinados hacia América Latina.

Uno de los principales objetivos de la política española hacia la Región, como señala el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, es destinar parte de esos recursos a la promoción de la calidad de la democracia desde una participación real y efectiva de la ciudadanía, y el ejercicio y respeto a los derechos fundamentales. Por ello, el gobierno español está empeñado en el apoyo y la promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político; en el apoyo y el fortalecimiento de los procesos y de los mecanismos de diálogo social; y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, coincidiendo así con la voluntad de muchos de los gobiernos de la región. En este sentido, las actuaciones de la Cooperación Española en el sector de la *governabilidad democrática y el desarrollo institucional* pasan por el apoyo al desarrollo de una Administración al servicio del ciudadano, y por la buena gestión de los asuntos públicos y el fortalecimiento de unas Administraciones Públicas que se dirijan a garantizar la equidad y calidad en el acceso, gestión y prestación de los servicios públicos.

Confío que el deseo de escuchar y construir el espacio común iberoamericano, junto con sectores amplios y socialmente comprometidos de las sociedad civil, tenga continuidad en años venideros. Nuestro principal objetivo es dar respuesta a los asuntos que preocupan a los ciudadanos y las ciudadanas, y por eso es fundamental la participación de la sociedad civil y los agentes sociales en el Sistema de Cumbres Iberoamericanas. Nos satisface especialmente que las conclusiones de estos Encuentros sean recogidas por la SEGIB para continuar trabajando la agenda social iberoamericana y en la articulación de una ciudadanía iberoamericana. Confío, en fin, en que se celebre en Montevideo, como es nuestro deseo, una segunda edición del Encuentro Cívico. Con el esfuerzo de todos y todas iremos construyendo un mundo más justo e incluyente.

Madrid, noviembre de 2005



La RSE y la Fundación Carolina

RAMÓN JÁUREGUI

Diputado. Portavoz del PSOE en la Subcomisión de RSE del Congreso

A lo largo de los días 3 y 4 de noviembre se ha celebrado, en la Casa de América de Madrid, una Conferencia Internacional sobre la Responsabilidad Social de las Empresas organizada por la Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica. La iniciativa no ha podido ser más oportuna. De una parte, porque la Fundación Carolina ha incluido entre sus objetivos estratégicos el fomento de esta cultura empresarial y es una plataforma privilegiada para servir de intermediaria entre las grandes empresas españolas y el entorno sociopolítico de América Latina. De otra, porque el debate de la RSE está alcanzando en España un nivel de máxima intensidad.

Efectivamente, en estos momentos se están produciendo en nuestro país cuatro grandes iniciativas de corte institucional:

1. Un foro social de expertos que, convocados por el Ministerio de Trabajo, agrupa a medio centenar de organizaciones cívicas, universidades y expertos, que están desgranando y definiendo los principales rasgos de la RSE en España.
2. El diálogo social en una mesa creada *ad-hoc*, constituida por Comisiones Obreras, UGT y CEOE, que orientará al gobierno en sus políticas de RSE desde el punto de vista de sindicatos y empresarios.
3. La subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados e integrada por todos los grupos políticos que elaborará un Li-

bro Blanco sobre la RSE en España junto a una serie de conclusiones y propuestas en materia de políticas públicas sobre RSE.

4. La comisión de expertos creada en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está elaborando la actualización de las normas de transparencia y de buen gobierno de las empresas españolas.

Paralelamente, son muy numerosas las iniciativas y las actividades de desarrollo de la RSE en nuestro país que surgen desde ámbitos privados. Son cada vez más frecuentes los proyectos de investigación, incluidas cátedras universitarias, dedicadas a este tema, que afloran en universidades y escuelas de post-grado. Son también notables las organizaciones empresariales que, con carácter asociativo, están desarrollando políticas de RSE. Se conocen también diversas propuestas de autorregulación, guías y herramientas diversas para la puesta en marcha de las políticas de RSE de las empresas españolas. Desde luego, las memorias sociales y sostenibles proliferan en la mayoría de las grandes empresas. Una buena muestra de todo este enorme mundo que está surgiendo sobre la RSE es el hecho de que nuestro país es uno de los que destacan por el número de empresas que se han incorporado a los diez principios de Global Compact, iniciativa lanzada por Kofi Annan en el año 2000.

Las jornadas internacionales organizadas por la Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica se han inscrito en este contexto y se han sumado a otras muchas propuestas de reflexión que se vienen produciendo en nuestro país desde muy diversas iniciativas. La particularidad de estas jornadas ha sido el que, en una única sesión, se han podido analizar todos los planos principales del debate sobre la RSE en nuestro país. Efectivamente:

a) Una mirada al exterior nos permitió conocer la experiencia británica, danesa y el estado de la cuestión internacional desde Naciones Unidas. Manuel Escudero, asesor actual de Naciones Unidas para el desarrollo de la RSE, nos trasladó el punto de vista de la iniciativa Global Compact. El señor Roberts nos informó de la política británica a favor de la RSE, siendo como es el Reino Unido uno de los principales promotores de la cultura de RSE. Jette Steen Knudsen nos

explicó el peculiar sistema de partenariado entre las Administraciones Públicas y las empresas, que dirige la política de RSE en Dinamarca.

b) La mesa que reunió al Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras, UGT y CEOE nos permitió conocer el punto de vista de los interlocutores sociales y del gobierno español y los planes de todos ellos en la política del gobierno y en las previsiones del diálogo social.

c) ONG, consumidores, ecologistas y medios de comunicación discutieron sobre RSE, desde el punto de vista, tan importante en esta materia, de los protagonistas de una sociedad civil, cada vez más articulada y más presente en el mundo de las empresas.

d) Cajas de ahorros y los principales bancos del país analizaron la RSE desde el sector financiero y, especialmente, la problemática relativa a las inversiones socialmente responsables.

e) Auditoras, consultores y gestores de la RSE, analizaron junto a un representante de AENOR las aplicaciones de RSE a las empresas y específicamente los sistemas de control y verificación de la RSE en nuestro país y en el mundo.

f) Por último, los representantes de las grandes compañías españolas en Latinoamérica analizaron sus políticas de RSE en España y sus actuaciones en esta materia en América Latina.

Una de las grandes conclusiones de las jornadas tiene que ver precisamente con este último punto, porque su actuación constituye el mascarón de proa de nuestro país en América Latina y en casi todo el mundo. Hoy, la imagen de España la dan grandes multinacionales españolas que operan en 30 o 40 grandes países del mundo desarrollando políticas de relación laboral, social y económica que son evaluadas por millones de personas.

El fomento de la RSE en estas grandes compañías favorece la percepción favorable de nuestro país en enormes espacios planetarios. Una empresa con actitudes de RSE, es una empresa competitiva, moderna y sostenible en el horizonte empresarial del futuro. Los intereses de empresa y de país convergen en las políticas de RSE. A su vez, las grandes compañías arrastran a sus proveedores en esta cultura empresarial y probablemente sea ésta, la mejor y quizás la única, manera de trasladar a las PYMES la aplicación de los criterios sociales y sostenibles que entraña la RSE.

Carlos Solchaga, moderador de la mesa redonda en la que participaron las grandes multinacionales españolas, señalaba en su introducción al coloquio la enorme importancia de esta cultura de responsabilidad social en las relaciones con los países de América Latina, dadas las peculiares circunstancias que atraviesan estos países. La negativa experiencia vivida en algunos países con las empresas norteamericanas, las enormes tensiones políticas producidas en la superación de las dictaduras y las enormes necesidades sociales que siguen existiendo en toda América Latina, hacen especialmente sensibles a esas sociedades para con las empresas españolas. No hay que olvidar tampoco que nuestras empresas prestan servicios básicos para la comunidad: servicios financieros, energía, telecomunicaciones, agua, son elementos esenciales de la vida y están sometidas, además, a intervenciones públicas y regulaciones estatales imprescindibles. Ese delicado contexto, unido a la importancia de lo español en ese continente, hace particularmente sensible la percepción de nuestras empresas y es en ese marco en el que la RSE adquiere capital importancia como vitola de excelencia de las empresas españolas y de España en América Latina.

La función de la Fundación Carolina en esta materia resulta insustituible. Así lo puso de manifiesto Rosa Conde en la inauguración de la Conferencia, quien comprometió el trabajo futuro de la Fundación en el desarrollo de otras iniciativas en la promoción de esta cultura empresarial. Compromiso que previamente habían asumido Leire Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien particularmente anunció la posibilidad de medidas legales de Fomento a la RSE en nuestro país, antes de que finalice esta Legislatura.

En el año 2006 culminarán todas estas iniciativas que se están desarrollando, y esperamos que sea un gran año para el avance de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Madrid, noviembre de 2005

Luces y sombras de la política en América Latina

MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ

Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Salamanca

INTRODUCCIÓN

La reflexión sobre el desarrollo político de América Latina es una tarea antigua que siempre ha puesto de relieve la preocupación por quedar explicado utilizando tanto teorías que ponen el acento en factores de fuera de la región como en aquellas que lo ponen en otros de carácter más doméstico; en determinantes estrictamente políticos frente a otros de cariz sociológico, económico o cultural. Sin necesidad de llevar a cabo una exposición de las mismas, ni plantear un enunciado erudito baste recordar las aproximaciones desde el populismo, la modernización, el elitismo, la cultura política, el dependentismo y el neoinstitucionalismo entre muchas. Los distintos esfuerzos llevados a cabo han tenido que enfrentarse con la heterogeneidad de los países que componen la región terminando por generar marcos cognitivos a veces demasiado amplios que proyectaban inexactitudes y clamorosos vacíos como consecuencia, fundamentalmente, de un exceso de atracción del Cono Sur. Además, siempre fue difícil encontrar épocas en las que las enormes diferencias entre países no fueran la nota dominante.

Al abrirse el nuevo milenio, y tras haber sido testigo la última década del siglo xx de las profundas transformaciones registradas en la región por la reforma neoliberal, las cosas son, sin embargo, diferentes en la medida en que los países de América Latina mues-

tran una insólita homogeneidad política. Si bien continúan existiendo diferencias de mayor o menor calado en los diseños constitucionales, en el carácter y número de los partidos políticos existentes, en el grado de descentralización, en la aceptación prácticamente irrestricta del mercado frente al otrora todopoderoso y central Estado y en los patrones de cultura política de sus ciudadanos, la democracia, es la lógica de funcionamiento de los sistemas políticos existentes para todos los países con la excepción de Cuba. Tal es así que esta práctica uniformidad ha abierto una insólita discusión académica centrada en la calidad de la propia democracia, algo que no se plantearía si no se diera por dada su misma presencia.

LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2004 confirma que la democracia, entendida básicamente como la forma por la que mediante procesos electorales periódicos, libres, competitivos, limpios y bajo el sufragio universal se elige al personal político, se encuentra firmemente asentada. Este informe sitúa a todos los países de la región considerados para el periodo 1990-2002 en el índice de democracia electoral en una horquilla comprendida entre 0,80 y 1 con las únicas excepciones de Colombia (0,57) y de Guatemala (0,60). La extensión de la fórmula democrática a un universo que prácticamente agrupa a la totalidad de los países latinoamericanos y por un lapso no despreciable es, además, un hecho histórico toda vez que esta circunstancia no se dio en ningún momento anterior.

Sin embargo, los niveles de desarrollo democrático son muy distintos en función de los países. Un estudio reciente¹ establece para 2002 una clasificación por la que 9 de los 17 países suspenderían, de acuerdo con la clásica tabla de calificaciones entre 1 y 10 y tres países mantendrían una nota de sobresaliente: Uruguay, Chile y Costa Rica. Estas marcadas diferencias entre países se ven también avaladas por los análisis anuales realizados por *Freedom House* y otra se-

1. Polilat-com (2003). *Índice de Desarrollo Democrático de América Latina -IDD-Lat 2003-*. Konrad Adenauer Stiftung. Buenos Aires.

rie de organismos similares. Si bien la democracia está presente en la región la intensidad de su presencia, en términos fundamentalmente de su calidad, contempla diferencias entre países. Desde una perspectiva comparada la historia siempre habló del excepcionalismo de países como los tres recién citados, pero también se registran diferencias en el seno del mismo país de una época a otra y ello sin necesidad de que hubieran transcurrido muchos años. En este sentido la calidad de la democracia en Perú si se consideran los últimos años de la década de 1990 y se comparan con los primeros de la década siguiente revela cambios hacia una mejora sorprendente. Casi de la misma manera y para idéntico periodo podría considerarse el caso de Argentina. El puntual sello personalista de un gobernante o profundas crisis económico-sociales pueden estar en la base de ello.

LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

Los países de América Latina comparten el presidencialismo como forma de gobierno generalizada, si bien las diferencias entre ellos en lo atinente a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la presencia de un mayor o menor número de partidos, la existencia de una sola Cámara o de dos y el grado de influencia de las regiones son significativas. Ello hace que sea muy difícil referirse a un modelo único. También se producen variaciones, aunque de menor calado, en lo relativo a la fórmula de elección presidencial, donde el *ballotage* ha ganado mucho terreno afectando a una mayoría de países, a los cambios registrados en la prohibición de la reelección, a la incorporación de nuevas instituciones como son los Consejos Generales del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y similares que introducen una enorme heterogeneidad en la región.

En general, la obsesión por incidir en las instituciones como panacea para articular mejores gobiernos, en clave de una fiebre de búsqueda de la gobernabilidad, ha sido el denominador común a lo largo de la década de 1990 donde prácticamente todas las Constituciones y las principales leyes políticas fueron reformadas con mayor o menor profundidad. Tras un intenso proceso de modificaciones el

ciclo continuo de la reforma política no se ha estabilizado y permanece abierto, como acontece al finalizar 2005 en Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá. La pulsión neoinstitucional sigue presente y mantiene su fuerte componente fetichista animada en gran medida por organismos multilaterales, algunos de ellos con vocación de cooperación para el desarrollo. La “utopía reformista”, incentivada notablemente por la consultoría internacional que encontró un fértil terreno para su expansión, ha sido un mantra que ha consumido recursos financieros, esfuerzos, ilusiones y vanas promesas de efectos precarios inmediatos. Sin desvalorizar la necesidad de algunos cambios de sentido muy diferente en función de las necesidades de los distintos países la oleada homogénea de reformas, a veces por imperativos de organismos y de países donantes y otras por demandas miméticas de las elites políticas nacionales², no parece haberse detenido.

EL CAPITAL POLÍTICO

El capital político, entendido como el grado de confianza en las diferentes instituciones y actores políticos, sufre un proceso de descapitalización supuestamente por dos factores: el pobre desempeño de la economía, en lo atinente al mantenimiento de tasas de crecimiento continuadas en la década de 1990 y al fracaso en la disminución de la brecha de la desigualdad; y el crecimiento de la percepción de corrupción generalizada. En efecto, de acuerdo con el referido informe del PNUD, el índice regional de confianza en instituciones (los tres Poderes del Estado y el poder municipal) y actores (elite política y partidos) era en 2002 de 1,91 (en una escala de 1 a 4) con grandes diferencias entre los países. En ese momento concreto Argentina (1,43), inmersa en una seria crisis, era el país que se situaba muy claramente en la posición inferior de la escala, lejos de Guatemala (1,71), Ecuador (1,72) y

2. Un estudio sobre 231 líderes latinoamericanos ha puesto de relieve que la “reforma política” es el principal problema a enfrentar para fortalecer la democracia. Así lo sostienen el 45 por ciento de los entrevistados. Destaca la gran brecha frente a otras cuestiones como “combatir a la inequidad” (18 por ciento), “políticas económicas” (10 por ciento), “combatir la corrupción” (9 por ciento) y “políticas sociales” (8 por ciento). PRODDAL (2002). *Ronda de consultas con líderes de América Latina*.

Colombia (1,77). Los valores más altos los tenían Honduras (2,24) y Costa Rica (2,23).

En cuanto a los indicadores de percepción de la corrupción tanto los estudios de Transparencia Internacional como del Foro Económico Mundial para 2002 muestran una región con valores muy elevados que también registra, no obstante, diferencias entre los distintos países, siendo Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela los países que entonces se situaban claramente por debajo de la, ya de por sí baja, media regional.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA REPRESENTACIÓN

En algunos países se sigue manteniendo el principio de concebir la política más en términos de participación que de representación lo que explica las turbulencias movimientistas propiciadas, sobre todo, en el mundo andino que, no obstante, adquieren componentes diferentes. Venezuela en un polo al sostenerse sobre la renta petrolera y haberse elevado sobre un liderazgo caudillesco, y Bolivia y Ecuador en el otro por tratarse de expresiones más difuminadas y heterogéneas. Además, Colombia y Perú se enfrentan a una situación de práctica desaparición de sus partidos. En Colombia los partidos se encuentran desconcertados por el liderazgo uribista que pugna por la insólita reelección presidencial, en términos históricos, pero también continúan atomizados por liderazgos clientelares regionales y con enormes dificultades para estabilizar un espacio político para la izquierda. En Perú la crisis de finales de la década de 1980 no hizo sino profundizarse durante el periodo de Fujimori y en la actualidad el país se enfrenta a un grave vacío partidista con candidaturas electorales presidenciales que se superponen a viejos liderazgos como los que representan Valentín Paniagua, Lourdes Flores o Alan García, quien busca el regreso al poder quince años después de su ignominiosa salida.

Sin embargo, los partidos políticos existen y siguen articulando gran parte de la vida política en la mayoría de los países (a las excepciones recién señaladas de los países andinos habría que añadir el caso de Guatemala). Se mantienen firmes identidades partidistas y los partidos,

de inequívoco semblante ideológico, se dividen entre aquellos que muestran esquemas de actuación muy institucionalizada y aquellos de corte más coyuntural-electoralista³.

Bien es cierto, no obstante, que para una muestra representativa de la élite política apenas únicamente en Uruguay y en Honduras cumplen su papel, aspecto que se puede complementar con el índice de confianza que los partidos merecen a los latinoamericanos, donde apenas Uruguay, Costa Rica (1,89) y Honduras (1,80) se aproximan a valores intermedios en la escala elaborada de 1 a 4. El bajo perfil que muestran los partidos, a pesar de los altos índices de la opinión pública latinoamericana que les consideran figuras imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, puede tener que ver con razones históricas y con el éxito de la implantación del modelo neoliberal. Las primeras hacen alusión a las continuas interrupciones de la vida política democrática, a la proscripción de los partidos por gobiernos no democráticos y a la persecución sistemática de buena parte de los líderes partidistas. En cuanto al éxito del modelo neoliberal, sobre todo en su cariz político, se ha probado su certera capacidad para afectar significativamente el debilitamiento de las bases en pro de una organizada lucha de clases y de los canales para la movilización efectiva del descontento popular.

LOS RETOS DE UNA CIUDADANÍA INCOMPLETA

En América Latina, con leves diferencias nacionales, según ha puesto de relieve el informe del PNUD se puede considerar que la ciudadanía política está prácticamente alcanzada desde la perspectiva de la responsabilidad vertical que se ejerce mediante el voto y algo menos lograda en los mecanismos de responsabilidad horizontal que suponen el desarrollo del Estado de derecho. Cuestiones relativas a la independencia y profesionalización de los jueces, al control de la gestión de los funcionarios públicos, al uso de mecanismos de democracia directa y a la eliminación de prácticas de corrupción y de clientelismo en la gestión de

3. Ver Manuel Alcántara (2004). *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y estructura interna de los partidos políticos latinoamericanos*. ICPS. Barcelona.

los asuntos públicos están todavía pendientes de implementarse debiendo enfrentarse a veces a la falta de voluntad política para abordarlas y en otras ocasiones a la pesada inercia del legado histórico.

A pesar de que la ciudadanía civil ha tenido el mayor desarrollo doctrinario y normativo teniendo las mujeres y las comunidades indígenas pleno reconocimiento de sus derechos civiles y habiéndose avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos la realidad es muy diferente. La desigualdad *de facto* por motivos económicos, culturales y étnicos y la violencia imperante que restringe la seguridad y pone en peligro la integridad física son una constante diaria ante la que la administración de justicia nada hace por falta de medios o de capacidades.

En cuanto a la ciudadanía social, ésta representa uno de los retos más serios que enfrenta América Latina. Las carencias en prestaciones sociales básicas son generalizadas a prácticamente todos los apartados coincidiendo con otros déficits de ciudadanía civil ya que los colectivos más marginados de una y otra son coincidentes.

Este panorama ofrece, por tanto, una ciudadanía incompleta con un sesgo que, por primera vez, favorece a la ciudadanía política donde se han alcanzado importantes logros en las dos últimas décadas, pero cuyo éxito puede terminar siendo irrelevante si no se avanza en la ciudadanía social y se consigue hacer real la ciudadanía civil cuyo logro en el presente es meramente formal. No progresar en la persecución de estos dos tipos de ciudadanía puede concluir con el fracaso de la primera, ya que el entramado sobre el que se monta la democracia electoral puede derrumbarse como consecuencia del desencanto generalizado convertido en anomia política cuando no en franca hostilidad abierta al sistema democrático. El éxito del reto depende de una combinación afortunada de voluntad política y de instituciones eficaces.

Salamanca, noviembre de 2005



La Cumbre de Salamanca: una nueva apuesta por el espacio iberoamericano

CELESTINO DEL ARENAL

Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid

La aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de noviembre de 2005, de la incorporación de la Conferencia Iberoamericana como organismo observador en esa organización internacional, apenas transcurrido un mes desde la Cumbre de Salamanca, que había acordado precisamente solicitar ese estatus, constituye la expresión mas evidente del impulso político que han conocido las Cumbres Iberoamericanas en dicha Cumbre y pone claramente de manifiesto la apertura de una nueva etapa en las mismas.

Las Cumbres Iberoamericanas, a pesar de los intentos periódicos de revitalizarlas, mediante el reforzamiento de su estructura institucional, habían venido languideciendo poco a poco, como consecuencia, por un lado, de su escasa operatividad práctica y de una agenda alejada de las cuestiones que realmente interesaban a los países iberoamericanos y, por otro, debido a un protagonismo español, exagerado en los últimos tiempos, que había contribuido a alejar aún más a algunos de los principales países iberoamericanos de las mismas.

Este escenario desfavorable cambia, sin embargo, significativamente a partir de 2004, especialmente después de la celebración de la Cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica, en noviembre de

ese año. Toda una serie de nuevos hechos, que van desde la progresiva toma de conciencia por parte de los países iberoamericanos de la creciente importancia de los intereses y vínculos económico y sociales entre España y América Latina, derivados de las inversiones españolas en la región, de los flujos migratorios y de las remesas que se dirigen hacia la misma, pasando por la creación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el nombramiento de una persona, Enrique Iglesias, con una larga experiencia y un elevado perfil internacional, que suponía que por primera vez las Cumbres disponían de un órgano político de carácter permanente con importantes competencias, hasta llegar a la nueva política latinoamericana puesta en marcha por el gobierno de Rodríguez Zapatero, basada en la búsqueda de concertación y en un claro giro social, que conectaba con las preocupaciones dominantes en la mayoría de los países latinoamericanos, van a conformar un escenario especialmente favorable para la revitalización de las Cumbres Iberoamericanas.

Si cada uno de estos hechos aisladamente considerado no hubiera servido para cambiar significativamente el rumbo de las Cumbres, la conjunción de todos ellos generará un nuevo horizonte, que incrementará el interés de los países iberoamericanos por avanzar en el reforzamiento del espacio iberoamericano.

A todo lo anterior se sumará la cuidada preparación de la Cumbre de Salamanca, por parte del gobierno español, con el fin de garantizar que la misma fuese un éxito y contribuyese a reforzar el espacio iberoamericano. En esta línea, además de desarrollar una intensa actividad diplomática al respecto y de proporcionar renovados contenidos a las ya tradicionales reuniones ministeriales sectoriales, se organizarán toda una serie foros y encuentros iberoamericanos, tanto de nivel intergubernamental como de civil. Entre los mismos hay que destacar el I Foro de Parlamentarios Iberoamericanos (Bilbao, 30 de septiembre), el I Encuentro Empresarial Iberoamericano “Un impulso a la integración económica” (Salamanca, 13-14 de octubre) y el I Encuentro Cívico Iberoamericano “Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa” (Salamanca, 13-14 de octubre), que formularán propuestas concretas, contribuyendo a reforzar notablemente la agenda de la Cumbre con temas de real interés

para los países iberoamericanos y a generar un clima nuevo en relación a la misma, cargado de esperanzas y de expectación en cuanto a un nuevo protagonismo.

La Cumbre de Salamanca, celebrada el 14 y 15 de octubre de 2005, no ha defraudado esas expectativas, participando en la misma todos los Jefes de Estado y de Gobierno, salvo los de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Entre todos ellos existía una clara conciencia de que se asistía al inicio de una nueva etapa, que había que aprovechar para reforzar un espacio iberoamericano, caracterizado por la existencia de cada vez más importantes vínculos e intereses políticos, económicos, sociales y culturales, que era necesario atender adecuadamente y aprovechar para hacer valer la presencia de Iberoamérica en el mundo.

El nuevo formato de la Cumbre, en base a exposiciones y debates ordenados en tres mesas de trabajo, centradas en temas concretos, como desarrollo y Objetivos del Milenio, inmigración e Iberoamérica en el mundo, con el fin de facilitar la consecución de acuerdos en algunas de las cuestiones de más interés en la agenda de los países iberoamericanos, se ha revelado sumamente útil como método de trabajo, permitiendo avances significativos en los campos mencionados.

Al mismo tiempo, la activa “diplomacia” desarrollada por el nuevo Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, en los prolegómenos y durante la Cumbre, volcado en dar un importante impulso a la nueva dinámica, contribuyó al éxito de dicha Cumbre.

El tono general de la Declaración de Salamanca y de las Declaraciones y Comunicados especiales refleja perfectamente el compromiso con la operatividad y el giro social que están experimentando las Cumbres Iberoamericanas y supone al mismo tiempo un claro reconocimiento del importante papel que se atribuye a la SE-GIB en esta nueva etapa.

A la ya tradicional afirmación de principios sobre la vigencia de la democracia y los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, la apuesta por el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del multilateralismo y el derecho internacional, se ha añadido en esta ocasión un significativo número de compromisos concretos a ejecutar en los próximos meses.

Los avances más significativos, desde el punto de vista de la operatividad y visibilidad, se han producido, en primer lugar, en lo relativo a la proyección internacional de las Cumbres, apostándose por que las mismas refuercen su presencia en el escenario internacional y actúen con una sola voz a través de la SEGIB y del Secretario General Iberoamericano; en segundo lugar, en lo relativo a la comunicación e interacción entre las dimensiones intergubernamental y civil del espacio iberoamericano, que hasta ahora habían vivido en términos generales una al margen de otra y que partir de Salamanca tienen canales de comunicación abiertos, y, finalmente, se han asumido todo una serie de compromisos concretos en relación a algunas de las cuestiones que mas interesan a los países iberoamericanos.

Entre estos compromisos, que suponen una fuerte apuesta por el futuro, merece la pena destacar el acuerdo para la convocatoria de una Conferencia Iberoamericana sobre Emigración, antes de la celebración de la próxima Cumbre, con el objetivo de diseñar un modelo de gestión que permita regular y coordinar los flujos de emigrantes, que deberá ir acompañado de un Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que garantice los derechos básicos de los emigrantes y de sus familias; el acuerdo para poner en marcha un mecanismo iberoamericano de coordinación en materia de prevención y respuesta rápida a las catástrofes naturales; la puesta en práctica de un Plan Iberoamericano de Alfabetización, con el objetivo de poder declarar la región libre de analfabetismo antes del año 2015; la elaboración de una Carta Cultural Iberoamericana; el impulso a la propuesta de condonación de deuda por educación; la creación de redes temáticas iberoamericanas de cooperación en donación y transplantes, en políticas de medicamentos, en la lucha contra el tabaquismo y en enseñanza e investigación en salud pública; el apoyo a la ya en marcha Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, con el objetivo de crear un Espacio Iberoamericano de Justicia; la puesta en marcha de una Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas y el respaldo a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití, en la que participan importantes contingentes de militares iberoamericanos.

Compromisos todos que corresponde poner en práctica a la SEGIB, que desde sus primeros pasos ha visto como contaba con el pleno apoyo de todos los Jefes de Estado y de Gobierno.

La Cumbre de Salamanca ha supuesto, por lo tanto, un antes y un después, en relación a la dinámica de las Cumbres y al espacio iberoamericano, en lo que a operatividad y visibilidad se refiere. Se ha rebajado notablemente el tono retórico y grandilocuente que las caracterizaba, se ha iniciado un cambio en su formato con el fin de hacerlas más operativas, se han introducido importantes compromisos que inciden en cuestiones de interés para los países iberoamericanos, se ha apostado por el protagonismo internacional del espacio iberoamericano y se han establecido canales de relación y comunicación entre las dimensiones intergubernamental y civil del espacio iberoamericano, que con seguridad contribuirán a dar contenidos reales a la agenda de las Cumbres. Todo ello con un Secretario General Iberoamericano y una SEGIB que no han dudado en asumir con todas sus consecuencias el reto de hacer realidad estos nuevos planteamientos.

Se ha abierto, como decíamos al principio, una nueva etapa en las Cumbres Iberoamericanas que esperamos responda a las expectativas que se han generado. El espacio iberoamericano, cada vez más consistente y activo, lo necesitaba y lo esperaba desde hacia tiempo.

La próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Uruguay el próximo año, será el momento oportuno para valorar con una mínima perspectiva lo correcto del nuevo rumbo que las Cumbres han iniciado en Salamanca y si la apuesta de los Jefes de Estado y de Gobierno fue simplemente flor de un día o sólido esqueje plantado con el fin de recoger pronto sus frutos.

Madrid, diciembre de 2005



La Comunidad Sudamericana de Naciones: algo se mueve en América del Sur

FRANCISCO ALDECOA

Catedrático de Relaciones Internacionales.
Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM

El 8 de diciembre se cumplió un año de la Declaración de Cusco, adoptada en el seno de la III Cumbre de Presidentes de Sudamérica, que pondrá en marcha un ambicioso proyecto de integración subcontinental, la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esta Declaración tiene una gran relevancia por diversos motivos: el primero de ellos es que se trata de una Declaración política de todos los Estados de América del Sur.

En segundo lugar, es destacable que se establezca una fundamentación política y de valores comunes de este proyecto: “la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”. Además, los Estados parte se proponen en común la lucha contra la pobreza y se adopta el compromiso de desarrollo de un modelo social.

Desde el punto de vista internacional, la Comunidad Sudamericana de Naciones nace con la “determinación de desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico,

ambiental, y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

¿Qué tiene de novedad esta Declaración? En primer lugar, muestra una identidad política, un objetivo compartido de conseguir la cohesión social y el desarrollo de unos valores y la ambición de lograr una dimensión exterior. El contexto también es clave: coincide en un momento de cambio político en los Estados sudamericanos y de una demanda creciente de América del Sur en la sociedad internacional.

Esta demanda de América del Sur como actor internacional es resultado del proceso político conocido como el Nuevo Regionalismo, que sostiene que la globalización, lejos de ser un proceso homogeneizador tiende a una progresiva y continua diferenciación entre los modelos presentes en la sociedad internacional. El proyecto de Comunidad Sudamericana de Naciones pone de manifiesto que en América del Sur comienzan a verse las cosas de forma diferente que en América del Norte. La reciente Cumbre de las Américas de noviembre de 2005 en Mar de Plata ha permitido constatar esa realidad, la falta de una visión común en el Norte y en el Sur de América.

La Comunidad Sudamericana de Naciones permite visualizar que, en la sociedad internacional de la globalización, comienza a emerger como una entidad Sudamérica frente a Latinoamérica. En eso progresivo distanciamiento entre los modelos políticos, económicos y sociales, América Latina se rompe en dos. En el norte se está produciendo una integración silenciosa: México, tiende cada vez más a acercarse al de los Estados Unidos a través del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Sudamérica, por el contrario, avanza hacia un modelo propio que, de alguna manera, tiene similitudes con el europeo.

¿Qué elementos comunes presenta la Declaración de Comunidad Sudamericana de Naciones con otras declaraciones? Este nuevo proyecto político se basa como otros anteriores en la búsqueda de un área de libre comercio, como motor de crecimiento regional. Se trata fundamentalmente de una relación intergubernamental, sólo de Presidentes, ni siquiera de administraciones o de Estados. Cuenta, como

es el caso de otras experiencias de la zona, con un proyecto de institucionalización muy débil.

¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? Sobre este proyecto de integración regional planean no pocas incertidumbres; así en Sudamérica se avecina una época de fuertes cambios políticos. En el plazo de un año, celebrarán elecciones presidenciales casi todos los Estados sudamericanos. Otro factor de incertidumbre que no puede olvidarse es la presión que ejerce e incrementará América del Norte, que tiene un gran interés de imponer su modelo librecambista del Área de Libre Comercio de las Américas. Por último, otro factor que rema en contra de este ambicioso proyecto es el fuerte nacionalismo presente en muchos de los Estados de la zona.

Aún cuando no puedan esconderse las incertidumbres, en todo caso, en el año transcurrido se han mantenido fijas las previsiones y se ha avanzado en la puesta en marcha. Así en la Segunda Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, celebrada en Brasilia en el mes de septiembre, se retoman todas las ideas esenciales. Se dirá que “la Comunidad Sudamericana de Naciones fortalecerá la identidad de América del Sur y contribuirá, en coordinación con otras experiencias de articulación regional y subregional, al fortalecimiento de la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe”. Se llegará a hablar de la coordinación y concertación política y diplomática que afirme a la región como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas.

La novedad fundamental de todo este proceso reside en relanzar el objetivo del área de libre comercio en América del Sur y no en América Latina y en buscar elementos objetivos de integración en las áreas de la integración física, con la construcción de infraestructuras conectadas, y en la energética, con la constitución de la Petrosur.

El proceso de configuración de la Comunidad Sudamericana de Naciones muestra el surgimiento de un nuevo actor internacional, Sudamérica. Este hecho coincide con una necesidad objetiva de la sociedad internacional y fortalece en la escena internacional al Mercosur como actor económico. En el ámbito de las relaciones internacionales el actor Sudamérica empieza a funcionar con independencia frente a Estados Unidos, defendiendo otras estrategias, como el mul-

tilateralismo eficaz junto a la Unión Europea, lo que se traduce en posiciones comunes en distintos foros internacionales.

La Comunidad Sudamericana de Naciones, por frágil que sea, es un ejemplo de que en el último año la situación en América del Sur se mueve tratando de afianzar una identidad internacional propia. Otro elemento de este cambio es el reciente nombramiento de José Miguel Insulza como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ostentando ese cargo por primera vez un pro-sudamericano en vez de un pronorteamericano. Y manifestación de ese cambio es el resultado de la reciente Cumbre de las Américas en que los países sudamericanos se han negado a suscribir las tesis de la Administración Bush, dando continuidad a la posición que iniciaron con ocasión de la Guerra de Irak.

Madrid, diciembre de 2005

Las tareas de Evo

Bolivia el día después

JOAN PRATS

Director del Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya

*Aún está oscuro
cuando va a amanecer*

La prensa internacional, incluida la española, no ha tratado bien ni a Bolivia ni a Evo Morales que ha sido caricaturizado y descalificado como indio ignorante, cocalero, confiscador, aliado y hasta subordinado de Castro y de Chávez, bloqueador de caminos, falso demócrata, incompatible con la “comunidad internacional”, arruinador seguro del país y, por si todo esto no bastara, hasta de títtere de su vicepresidente, un intelectual brillante, leal y de muy buen hacer político, que ha elaborado una propuesta de “capitalismo andino” pero al que los asustadores califican de “comunista radical” envuelto en piel de cordero. Y con todo, cosas de la democracia, el pueblo ha hablado y ha derribado todo este inmenso castillo de naipes: Evo, con Álvaro detrás suyo, tienen por delante la posibilidad de dar un giro histórico a Bolivia. ¿Cómo han conseguido una victoria tan contundente y sin precedente en la corta historia democrática del país?

En 1982 Bolivia inició un proceso de democratización que desde 1985 se encauzó y estabilizó mediante el Decreto 21060 habilitador de las políticas de liberalización, de equilibrios macroeconómicos, de privatización, de estabilización y de algunas reformas estructurales... que luego, en 1989, se empaquetaron para toda América Latina en el llamado Consenso de Washington. Se trató de un modelo de gobernabilidad democrática muy elemental e imperfecto, conocido como

“democracia pactada”, que hasta finales de los 90 mereció el reconocimiento y apoyo de la “comunidad de donantes”. Se basó en la hegemonía política indiscutible de unos partidos políticos débilmente institucionalizados, nada programáticos, sujetos a liderazgos caudillistas, clientelistas, patrimoniales, prebendarios y corruptos. Se creció económicamente, pero poco y mal. El empleo aumentó poco y de forma muy desigual, en correspondencia con el modelo de desarrollo de base estrecha que se impulsaba, y disminuyó drásticamente cuando lo hizo el crecimiento. Se fracasó en la lucha contra la pobreza y ni se intentó la lucha contra la desigualdad. Los avances en educación y salud no pudieron capitalizarse en desarrollo. No se supo, ni se quiso, reformar el Estado que quedó capturado por las camarillas empresariales, nacionales y transnacionales, y patrimonializado por los partidos políticos. Se avanzó en la descentralización y la participación popular, pero se dio a los partidos políticos el monopolio de la gestión política local con lo que se limitó el potencial del sistema. Se inició el reconocimiento formal del carácter multiétnico y pluricultural del país, pero no se desarrollaron políticas de reconocimiento e igualdad.

Desde 1998 dejó de funcionar el sistema. El crecimiento económico disminuyó notablemente y el desempleo se incrementó y con él la conflictividad social. La corrupción se hizo insostenible. En el curso de los conflictos fueron ganando fuerza y legitimidad los movimientos sociales, viejos y nuevos, crecientemente focalizados en la defensa del control público de los recursos naturales y los servicios públicos esenciales. Son estas fuerzas las que llevarán al MAS a ser el segundo partido político en las elecciones de 2002 y las que acabarán expulsando a Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Cuando los crecidos movimientos sociales sintieron que nuevamente el gas, como había pasado en su día con la plata y el estaño, serían extraídos y exportados no percibiendo a cambio sino modestas regalías e impuestos a administrar por un Estado incapaz de supervisar, corrupto y en manos de un sistema político clientelista, estalló la rebelión. La causa fundamental de los rebeldes era impedir que las próximas generaciones volvieran a encontrarse sin gas y sin desarrollo. Su protagonista principal fue la ciudad de El Alto. Sus ciudadanos pu-

sieron los muertos pero impusieron también una nueva agenda: la agenda de octubre de 2003 con dos temas claves: el referéndum sobre el gas y la Constituyente.

El Presidente Carlos Mesa aceptó la agenda e intentó gobernar en circunstancias difíciles. Con gran respaldo de la opinión pública debido a su brillante personalidad, pero sin partido ni apoyos sociales organizados, con la oposición de todos los partidos tradicionales en el Congreso y con una sociedad fragmentada y crecientemente movilizada, pudo gobernar mientras mantuvo un forzado entendimiento con Evo Morales que llegó hasta el referéndum del gas de julio de 2004. A partir de este momento todo comenzó a torcerse. El Presidente creyó que disponía de autoridad para imponer su propia política gasística (muy influida por su apreciación de la “comunidad internacional” y las responsabilidades ante ella) y el Congreso, incluido el MAS, se alió en su contra. Los cívicos cruceños, ante la eventualidad de una Asamblea Constituyente en la que serían minoritarios, relanzaron las demandas autonomistas, apoyadas en una gran movilización social y espoleadas por la conspiración contra Mesa. Aún así se llegó a las elecciones municipales de diciembre de 2004 que confirmaron la plena desafección popular respecto de los partidos tradicionales. El MAS se convirtió en el primer partido político pero no consiguió ganar en ninguna de las grandes ciudades. Su votación apenas superó el 20% —fue ligeramente inferior a la obtenida en las elecciones generales de 2002— y no consiguió ganar en ninguna de las grandes ciudades. El Presidente Mesa, cercado por un Congreso hostil, por los movimientos sociales radicalmente opuestos a su política gasística, por las mil reivindicaciones corporativas explotadas oportunistamente y por el rechazo abierto del autonomismo cruceño, aunque intentó diversas maniobras de recomposición de alianzas, todas le estallaron en las manos. Al final de su mandato hizo, sin embargo, una gran maniobra política de alcance histórico: forzó la renuncia a la sucesión presidencial de los Presidentes del Senado y del Congreso, pasando el testigo al Presidente de la Corte Suprema, un jurista de prestigio internacional y trayectoria intachable, Eduardo Rodríguez Beltzé. Se impedía de este modo que los partidos políticos tradicionales desprestigiados accedieran a la Presidencia de la Repú-

blica, lo que hubiera generando sin duda un conflicto civil de alcances potencialmente devastadores.

Durante todo este convulso tiempo se fue gestando la teoría del empate catastrófico según la cual el país se encontraba en una extrema polarización territorial (occidente-oriente) y social (derechazquierda), sin que ninguna de las partes pareciera poder imponerse sobre la otra resultando de este modo muy difíciles los proyectos constituyente y autonomista planteados desde cada frente. Los pactos para reducir las incertidumbres y viabilizar ambos procesos resultaban tan necesarios como imposibles. Muchos pescadores en río revuelto insistieron en la ingobernabilidad, según ellos inevitable, para impedir a toda costa el avance hacia la Constituyente. Comentaristas y sesudos analistas insistían en que las elecciones generales no podrían resolver nada.

Pero todos nos equivocamos. El Presidente Rodríguez ha pilotado con guante de seda y mano firme un difícil proceso, lleno de avatares e intentos desestabilizadores procedentes principalmente de los políticos tradicionales condenados al paro y atrincherados en el Congreso. Le han ayudado el ser hombre de Estado y el no tener ninguna ambición política. También la gran labor articuladora y desactivadora de su operador político, Jorge Lazarte, así como la prudencia de los movimientos sociales y del MAS que no se dejaron llevar por ninguna de las numerosas provocaciones orientadas sin duda a hacer fracasar las elecciones generales y a Prefectos finalmente celebradas. Su resultado demuestra que a lo largo del proceso que va de octubre de 2003 a diciembre de 2005 se ha ido rompiendo el empate catastrófico. El pueblo le ha dicho a Tuto Quiroga que siga trabajando por un proyecto político que exprese y discipline democráticamente a la derecha boliviana y que hoy tiene ya importantes parcelas de poder en las Prefecturas y en el Congreso. Le ha dicho a Samuel Doria Medina que merece respeto, pero que todavía tiene que demostrar que no ha hecho un partido para un hombre sino que él es el hombre que va a construir un partido de centro que le trascienda. Le ha dicho al MNR que es un activo histórico de Bolivia, que no debe desaparecer, pero que, si no supera su patrimonialización por el gonismo, puede quedar definitivamente liquidado. Les ha dicho a todos los que no salieron, o ni si-

quiera pudieron concurrir, que ya se acabó su tiempo político. Y sobre todo le ha dado a Evo la confianza y la hegemonía para que dirija el gran cambio económico y político que el país necesita.

La sabiduría política no consiste en saber donde quiero estar en cinco o diez años, sino en saber qué no puedo dejar de hacer aquí y ahora para avanzar hacia un futuro promisorio, aunque siempre incierto. Hasta que no sabes qué hacer aún no has entendido, decía Wittgenstein. El político y el ciudadano necios creen que todo tiene que hacerse en un corto espacio de tiempo cuando lo crucial es siempre saber qué no puede dejar de hacerse en cada momento para no perder el futuro. En este sentido tres son las tareas que propongo a reflexión:

La primera consiste en viabilizar la Constituyente y las Autonomías. Para ello hay que aclarar, en primer lugar, el régimen competencial de las Prefecturas. La vieja política puede estar tentada de refugiarse en algunas de ellas, erigiéndolas en bastiones de la oposición y manejando de modo poco transparente y responsable los nuevos recursos del gas. Es urgente proceder a regular tanto las competencias de los nuevos prefectos como las garantías de que su ejercicio se hagan con transparencia y responsabilidad democrática. Hasta que lleguen las Autonomías es fundamental que los prefectos elegidos y nombrados por el Presidente dispongan de un ámbito de responsabilidad claro, que no pueda interferir ni ser interferido arbitrariamente por el Ejecutivo nacional. En segundo lugar, hay que garantizar los referendos de autonomía en los Departamentos que así lo quieran, estableciendo nacionalmente los criterios a seguir para formar esta voluntad y ejercer en su momento el correspondiente derecho. Al establecer esta regulación de las preautonomías hay que reconocer y legalizar el proceso seguido por Santa Cruz. En tercer lugar, hay que procurar consensuar al máximo la futura Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente.

La segunda consiste en demostrar a la ciudadanía, los movimientos sociales y la comunidad internacional que se va a recuperar efectivamente el control nacional de los recursos naturales a lo largo de todo su ciclo desde la exploración hasta la comercialización. Para ello serán necesario dos cosas nada fáciles: (1) revisar los contratos actuales y dar garantías a los inversores internacionales de que obtendrán beneficios

justos que compensen sus riesgos e inversiones, tratando de evitar la conflictividad internacional y enfrentándola eficazmente cuando resulte inevitable y (2) crear las capacidades nacionales para la dirección, regulación, participación y supervisión de todo el ciclo del gas, así como las necesarias para asegurar que los beneficios que se deriven de este recurso sirvan para sustituir su extinción por capital humano, de infraestructuras y social. Este segundo punto es el más difícil pues requiere una combinación de compromiso productivo y de combate a los capturadores de rentas de todo tipo. Un día Bolivia se quedará sin gas y nada habrá tenido sentido si vuelve a pasar lo que se hizo con la plata y el estaño. El gas ha de servir para ayudar a transitar de la economía de base estrecha a la de base ancha, generando clases medias productivas y empleo formal y digno, ampliando la base tributaria del país y sobre ella construyendo un estado capaz de garantizar servicios públicos para todos, es decir, de universalizar la ciudadanía. Para este tránsito resultará fundamental la mano visible de un Estado reformado.

La tercera me parece ser la construcción decidida y progresiva de un sistema político y de un Estado capaz de impulsar políticas de desarrollo sostenible y con equidad. Esta es una tarea que comienza ya desde hoy y se acelerará con la Constituyente, pero que seguirá mucho tiempo después de ella. Hay que despatrimonializar el Estado, irlo convirtiendo crecientemente en un Estado de derechos y de deberes para todos, universalizando para ello la seguridad jurídica. Hay que hacer una gestión pública no sólo técnicamente meritocrática sino también transparente y sometida al control social y legal. Hay que dar cauce al derecho a la autonomía departamental y saber articularla con la autonomía indígena y municipal. Hay que combatir no sólo la corrupción sino hurgar en las estructuras corruptoras cambiando reglas de juego e incentivos de comportamiento. Larga tarea para muchos años y para más de dos y hasta tres gobiernos, pero que toca hoy empezar con algunas medidas ejemplificadoras y que den sentido de dirección. No hay que seguir a la cooperación internacional en este campo (se ha equivocado casi siempre) sino saber liderarla para que su apoyo sirva a un plan de Estado genuinamente nacional.

Evo y Alvaro, los guaraní, chiquitanos, aymaras, quechuas, cholos, blanquitos clases medias urbanas y hasta algún que otro empre-

sario, la mayoría en definitiva de este espléndido pueblo boliviano, injusta e inmerecidamente pobre pero esforzado, alegre, digno, rico en recursos, biodiversidad, historia, humanidad y futuro, el pueblo les ha comprometido a impulsar y dirigir democráticamente un proceso de dignificación y de soberanía que refunde la República sobre una Nación que por integrar por primera vez en la historia a todos/as merezca ese nombre. Ustedes ya saben que no se les ha votado para que impulsen ningún programa de extrema izquierda sino para que procedan a realizar profundas reformas democráticas, económicas y sociales que eleven los derechos individuales y colectivos de todos/as. La democracia es un viaje sin fin hacia la creación de las condiciones sociales y culturales que permiten la participación política igual y libre. Su fundamento moral es la convicción última de que ninguna vida vale más ni puede ser el instrumento de ninguna otra. Yo le he pedido a Quispe, y le pido a Evo, perdón por 300 años de colonialismo. Estoy seguro de que a muchos españoles nos gustaría que el Príncipe de Asturias aprovechara la ocasión de su investidura como Presidente para hacer algún gesto en este sentido, pues ahora es el momento de iniciar el reencuentro abortado en 1992. Mirando al pasado sin ira podremos encontrar la cooperación justa para el futuro que hoy, más que nunca, es responsabilidad de todos con ustedes delante.

Barcelona, diciembre de 2005



Fiebre reeleccionista en América Latina

DANIEL ZOVATTO

Director Regional para América Latina de *International IDEA*

La fiebre reeleccionista que vive América Latina en los últimos años cobró nueva fuerza con el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad colombiana, del pasado mes de agosto de 2005, que abrió el camino para la reelección del presidente Uribe. Pero Colombia no es un caso aislado. En Costa Rica, donde estuvo prohibida desde 1969, fue reinstalada vía judicial por la Sala Constitucional en 2003 (en su modalidad alterna), y actualmente el ex presidente Oscar Arias es el favorito para las elecciones de febrero de 2006. En República Dominicana la modalidad de reelección consecutiva fue vedada en 1994, y nuevamente implantada por el Congreso a finales de 2002. Perú es el único país que en la última década marchó en sentido inverso a la tendencia reeleccionista, ya que luego de estar permitida en forma consecutiva (durante el régimen fuji-morista), en el 2000 se restringió a la modalidad alterna.

El objetivo de este breve artículo es ofrecer una visión comparada latinoamericana del régimen legal, las tendencias de las reformas y, sobre todo, de las experiencias documentadas en materia de reelección desde el inicio de la Tercera Ola Democrática (1978) a la fecha.

SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIA REGIONAL

La legislación latinoamericana en vigor se inclina notoriamente a la reelección: más de dos terceras partes de los países de la región (14 de 18)

la permiten. Sin embargo, la normativa presenta variaciones importantes. Mientras en cinco países (Argentina, Brasil, República Dominicana, Venezuela y ahora Colombia) la reelección consecutiva está permitida, en nueve casos sólo es posible después de transcurrido al menos un mandato presidencial (Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay). Por su parte, únicamente cuatro naciones: Guatemala, Honduras, México y Paraguay prohíben totalmente la reelección.

La tendencia regional de las reformas durante los últimos 27 años es claramente favorable a la reelección. Argentina, Brasil y Perú (en 1993), y Venezuela y República Dominicana (en 2002) pasaron de la reelección alterna a la inmediata. Cabe señalar que República Dominicana realizó dos reformas en este tema: en un primer momento, en 1994, pasó de la reelección inmediata a la alterna, pero en 2002 volvió a la reelección consecutiva. Ecuador abandonó la prohibición total que había en materia de reelección y pasó a permitirla, pero sólo después de un mandato presidencial. En Costa Rica, como ya vimos, la Sala Constitucional la reimplantó, pero también de manera alterna. Por su parte, en tres países donde la reelección inmediata estaba permitida al inicio de la Tercera Ola, esa posibilidad fue modificada: en Paraguay está prohibida en todo momento; en Nicaragua sólo se admite después de transcurrido un periodo. Finalmente, en el caso de Colombia hubo dos reformas: mientras en 1991 se adoptó un enfoque restrictivo (prohibición total), en 2005 se aceptó la reelección de forma inmediata. En cambio, Perú, como ya indicamos, pasó de la reelección inmediata (regulada en 1993), a la alterna (en 2000).

Hay que acentuar que todas las reformas recientes en favor de la reelección, en especial en su modalidad consecutiva, tuvieron nombre y apellido: Menem en Argentina, Cardoso en Brasil, Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Mejía en República Dominicana, y ahora Uribe en Colombia. En todos estos casos las reformas se llevaron a cabo durante la presidencia de mandatarios que buscaron su reelección inmediata, y que de hecho la obtuvieron en los cuatro primeros países. El único que no lo logró fue Mejía en República Dominicana, y está por verse qué pasará con Uribe en Colombia.

BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia comparada latinoamericana de los últimos 27 años ofrece interpretaciones para todos los gustos. En siete de los 14 países que permiten la reelección inmediata o alterna (Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, República Dominicana Uruguay y Venezuela), la medida se ha ejercido. Venezuela es el único país donde dos presidentes ejercieron un segundo mandato (Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera), durante el periodo 1978-2005. En otros dos, El Salvador y Chile, si bien la reelección está permitida, ningún ex presidente la ha intentado hasta la fecha. En Panamá, el ex presidente Balladares durante su mandato trató de aprobar una reforma, vía referéndum, para cambiar de la reelección alterna a la consecutiva, pero fracasó en su intento. Por último cabe señalar los casos de Nicaragua y Ecuador, países en los que, pese a los intentos de algunos de sus ex mandatarios (Daniel Ortega en el primer caso; Borja, Febres Cordero y Hurtado, en el segundo), la reelección hasta ahora nunca ha tenido lugar.

Desde el punto de vista de la conveniencia o el perjuicio de la reelección, existe un debate de nunca acabar, en el que suele incurrirse en confusiones importantes (no se hace distinción entre sistemas presidenciales y parlamentarios), o en el que se desconocen las diferencias de cultura política (entre el presidencialismo estadounidense y los latinoamericanos, por ejemplo), las cuales desempeñan un papel crucial en este tema.

Los críticos sostienen que la reelección expone al sistema político al riesgo de una “dictadura democrática” y refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo. Apuntan, además, que los segundos mandatos son por lo general de mala calidad. Al menos seis experiencias desde 1978 a la fecha parecen confirmar los argumentos acerca de sus peligros y defectos: la de Stroessner en Paraguay (inconclusa como secuela del golpe de Estado de 1989, después de varias reelecciones sucesivas); la de Balaguer en República Dominicana (cuyo último mandato fue acortado de cuatro a dos años a consecuencia del fraude cometido durante su última reelección en 1994); la de Fujimori en Perú (inconclusa debido a su fuga del país por fraude y corrupción); la de Me-

nem en Argentina (acosado por problemas económicos, desempleo y denuncias de corrupción), así como los mediocres segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez (inconcluso por destitución) y de Rafael Caldera en Venezuela.

Los defensores de la reelección, por el contrario, argumentan que ésta permite aplicar un enfoque más “democrático”, en la medida en que posibilita a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su presidente y responsabilizarlo por su desempeño, ya sea premiándolo o castigándolo según sea el caso. Si bien durante el último cuarto de siglo en América Latina son únicos los ejemplos de Cardoso en Brasil (inmediata) y de Sanguinetti en Uruguay (alterna), constituyen experiencias moderadamente positivas de ambas modalidades de reelección –aunque en ambos casos sus primeros mandatos fueron más exitosos que los segundos–. Diferente suerte corrió la experiencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, que tuvo que renunciar a mitad de su periodo. Aún está por verse la suerte que correrá el gobierno reelecto (bajo la modalidad alterna) de Leonel Fernández en República Dominicana, único presidente reelecto en ejercicio en este momento en América Latina.

Sin embargo, este panorama podría cambiar radicalmente en los próximos dos años cuando una docena de los países de la región realicen sus elecciones presidenciales, en las cuales varios mandatarios actuales (Uribe en Colombia, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina) podrían buscar su reelección inmediata mientras que otros (Arias en Costa Rica, García en Perú, Ortega en Nicaragua) su reelección alterna.

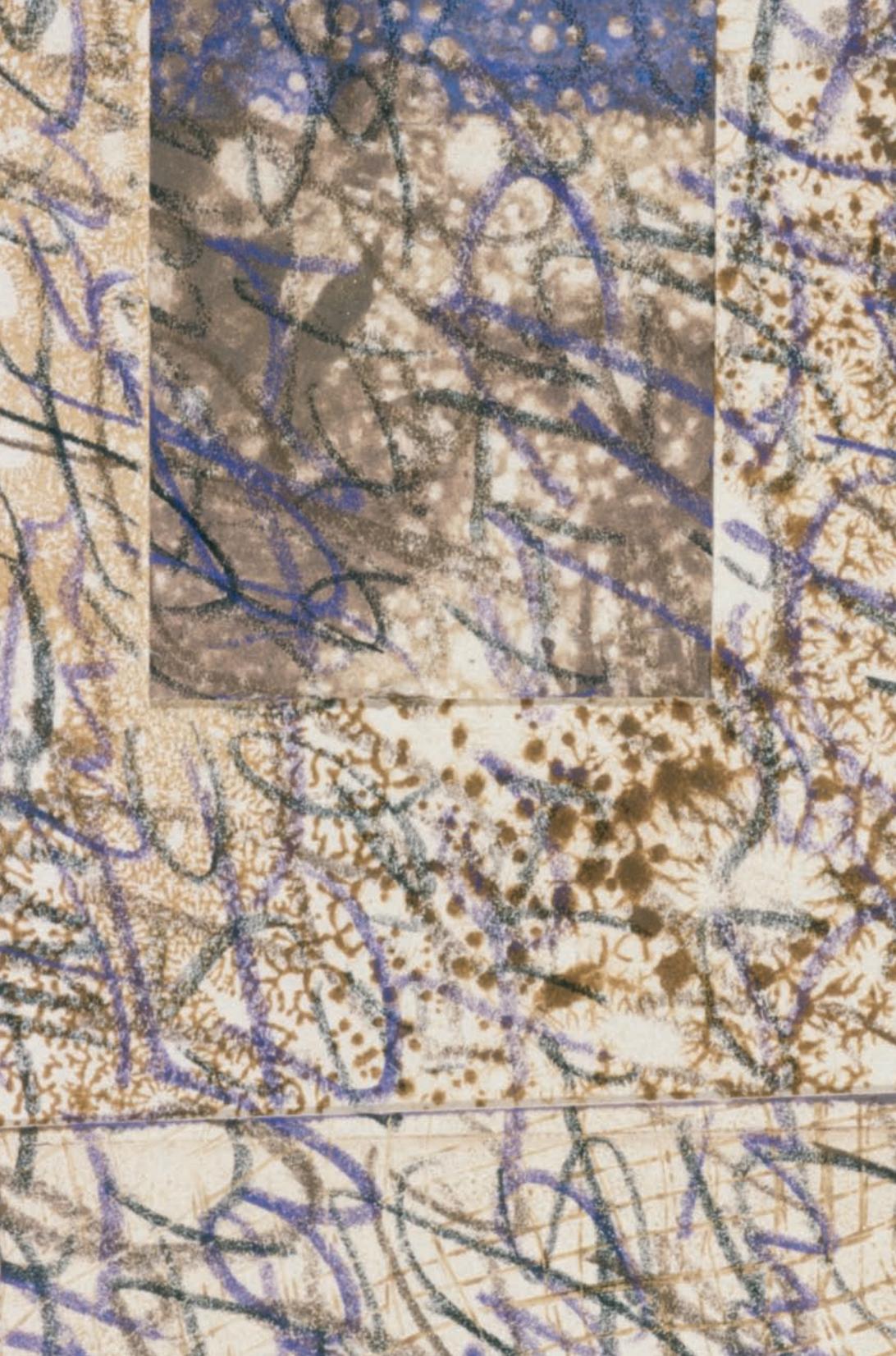
CONCLUSIÓN

Esta fiebre reeleccionista es una mala noticia para una región como la nuestra caracterizada por la debilidad institucional, la personalización creciente de la política y el hiperpresidencialismo. Por su parte, el regreso de la figura del presidente-candidato, unido al mal uso y abuso de los fondos públicos y al clientelismo, son elementos adicionales de preocupación por sus efectos negativos en lo que refiere a las condiciones de equidad de la contienda electoral.

En el caso particular de la Argentina, la experiencia de los últimos cien años en materia de reelección a nivel nacional ha sido desastrosa. De los tres presidentes que fueron reelectos, dos de ellos (Yrigoyen y Perón) no finalizaron sus segundos mandatos debido a sendos golpes de estado (en 1930 y 1955 respectivamente). El tercer periodo de Perón, interrumpido por su fallecimiento, precipitó al país a una grave crisis, a severas violaciones de los derechos humanos y a un nuevo golpe militar (1976). Menem, por su parte, si bien fue el único presidente del último siglo que terminó su segundo mandato, lo hizo en un contexto de marcada debilidad y desprestigio.

Por todo ello, somos de la firme opinión de que la consolidación de nuestras frágiles democracias no pasa por líderes carismáticos y providenciales, obsesionados por acumular poder y obtener reelecciones sucesivas, sino por el fortalecimiento y la calidad de las instituciones, la madurez de los ciudadanos y una sólida cultura cívica.

San José de Costa Rica, enero de 2006



Ganando la batalla contra el hambre

EMILIO LAMO DE ESPINOSA

Catedrático de Sociología. Universidad Complutense de Madrid

El 90% de los jóvenes españoles disponen de teléfono móvil. Este año se venderán en España entre dos y tres millones de televisores nuevos de pantalla plana TFT para sustituir a otros antiguos. Son dos datos tomados al azar que muestran algo de lo que no somos del todo conscientes: los países desarrollados (y España es uno de ellos), tras dejar atrás la pobreza, estamos transitando desde el simple bienestar hasta la afluencia, e incluso en no pocos lugares, hacia la opulencia.

Es por ello tan insultante que haya hambre en el mundo. Más de 800 millones de personas la sufren. Tan irritante que no es demagógico decir que se trata de una obscenidad, y es por ello comprensible que las políticas de ayuda al desarrollo son tan populares y cuentan con tanta legitimidad. Todos tenemos nuestra pizca de mala conciencia. No porque seamos responsables de su pobreza, pues casi nunca lo somos. Pero sí podemos ser responsables de que esa pobreza continúe.

Pues bien, la buena noticia es que Dios escribe derecho con renglones torcidos y, aunque sea por caminos insospechados, el mundo le está ganando la batalla al hambre.

Según el Banco Mundial la proporción de personas que viven por debajo del umbral de un dólar diario se redujo del 28% al 21% entre 1990 y 2001, sobre todo en Asia, y concretamente en China, India e Indonesia. Sólo en China el número de pobres (con ingresos inferiores a 1 dólar diario) habría pasado de 490 millones en 1981 a sólo

(sic.) 88 millones en el 2003. Por supuesto, también en América Latina. Según la CEPAL, hace quince años casi uno de cada dos latinoamericanos (el 48,3%) eran clasificados como pobres o indigentes. Pero para el 2005 la tasa había caído al 40,6%. El economista español Sala i Martín estima que la pobreza mundial ha caído del 20% al 5% en veinte años. De modo que, puede que no nos enteremos pues la prensa no suele dar buenas noticias, pero el hecho es que, aunque no con la velocidad que deseamos, la batalla del hambre la estamos ganando.

¿Cómo? De muchos modos y no pocos insospechados. Lo usual es pensar en la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional. Es lógico, pues para eso está pensada. Pero la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) supuso en 2004 tan sólo el 0,25% del la Renta Nacional Bruta de los países donantes, muy alejado del objetivo del 0,7%, que sólo cumplen cinco de los 22 países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (Por cierto, España, con el 0,25%, sigue a la cola de la UE). Y su eficacia real está siendo cuestionada más y más.

Probablemente más importante que la ayuda al desarrollo es la democracia. Hace ya años que el premio Nóbel Amartya Sen demostró que no hay hambrunas en democracias. Y desde luego, las democracias contribuyen a legitimar reformas fiscales y potenciar el gasto social. Por ejemplo, la democratización de América Latina es causa directa de que, desde 1990, el gasto social en la región ha crecido nada menos que un 40%. Los positivos datos anteriores sobre el hambre tienen más que ver con la tercera ola democratizadora (que ha doblado el número de países libres en 30 años), que con el incremento de la cooperación. Casi el 90% del PIB mundial se genera en países clasificados como libres por Freedom House. La democracia no es un producto de lujo; más bien al contrario, es un producto de primera necesidad. Los más de veinte países de la liga árabe (la única región del planeta que aun no ha pasado por esa tercera ola democratizadora) tienen un PIB agregado que es similar al de España, a pesar de que buena parte de ellos son productores de petróleo.

Pero quizás más importante aún que la AOD y la democracia, es el comercio mundial, como muestra el caso de China, en absoluto democracia, pero que lleva casi quince años creciendo al 10% ininterrumpidamente. Y ello gracias a un comercio internacional sin barreras ni

restricciones, y muy especialmente el de productos agrícolas, un sector que representa tan solo el 4% del PIB global pero que absorbe el 66% del proteccionismo en el comercio de bienes. Pensemos que en el 2002 la AOD suponía 58.000 millones de dólares, pero ese mismo año los subsidios a la agricultura de los países ricos fueron de 201.000 millones. Se trata, como ha escrito Guillermo de la Dehesa, de “un mecanismo oscuro y diabólico de transferencia de rentas de pobres a ricos en todos los países de la OCDE” y “uno de los mayores escándalos económicos y sociales del mundo e incomprensible en unas sociedades que presumen de ser las más democráticas”. Los datos de las ayudas a los agricultores pueden llegar a ser simplemente obscenos: cada vaca europea recibía un subsidio anual de 435 dólares (en 2001), que es prácticamente el PIB per capita en buena parte del África subsahariana (467 dólares).

¿A quien perjudican esos subsidios? A países como Brasil, Argentina o Marruecos, que se ven imposibilitados de exportar sus productos agrícolas. Es sorprendente que, contra toda previsión y tirando por tierra todo el discurso altermundialista, hoy son los países pobres, agrupados en el G20 (un bloque que se creó en la cumbre de Cancún y liderado por Brasil, India y China), la vanguardia del desarme arancelario, mientras la UE y los Estados Unidos se resisten a desmantelar sus subsidios y tarifas. Según el Banco Mundial, la liberalización del comercio agrícola sacaría de la pobreza a nada menos que 144 millones de personas y generaría 151.000 millones de dólares anuales hasta el año 2015 (por cierto, más del 75% de estos beneficios irían a parar a los propios países avanzados vía reducción de precios al consumo, pero nuestros gobiernos prefieren plegarse al lobby agrícola). El reciente compromiso de la cumbre de Hong Kong ha aceptado finalmente suprimir los subsidios a las exportaciones agrícolas para 2013; la Unión Europea (y sobre todo Francia), que era quien más se oponía a fijar una fecha para desmantelar la Política Agraria Común, terminó cediendo.

De modo que, como afirma el eslogan, *trade, not aid*: Comercio, no ayuda. No me mandes cooperantes; déjame que yo te mande mis plátanos o la leche. No me des peces, cómprame los que yo pesco, que lo hago más barato que tú.

Y finalmente, acudamos a otro eslogan En cierta ocasión el embajador de Marruecos en Madrid me decía: “O os enviamos nuestras

naranjas, o enviamos nuestros trabajadores, pero lo que no podemos hacer es quedarnos ambas cosas.” Y como no han podido enviar las naranjas o los plátanos, nos enviaron sus trabajadores, que son hoy nuestros emigrantes, pero cuyas remesas hacen milagros.

Según el Banco Mundial, las remesas de los más de 200 millones de emigrantes repartidos por el mundo superarán los 232.000 millones de dólares en 2005, cuando en 1980 eran de sólo 18.000. El primer país receptor es India y el segundo China, pero el tercero es México. De hecho, América Latina es una de las regiones del mundo que recibe más remesas, hasta un 2,3% del PIB de media, pero que sube al 4% en Cuba, al 6% en Ecuador, por encima del 15% en América Central y hasta un 30% en Haití. Una cantidad que es casi idéntica a la inversión extranjera directa en la región. Resultados que constituyen una estimación mínima, ya que las remesas informales podrían ser hasta un 75% superior a las contabilizadas. El primer remesador del mundo es la Unión Europea, con 33.042 millones de dólares en 2002, cifra que bastaría para pagar un salario anual a 37,8 millones de trabajadores a la tarifa mínima vigente en Bulgaria. Según Iñigo Moré, sólo con las remesas que emite España se podría pagar un sueldo anual a 4,3 millones de trabajadores búlgaros.

El mundo va bastante mejor de lo que piensa la mayoría, sobre todo la mayoría de los occidentales, sin duda quienes tienen una visión más pesimista. Hablábamos de la tercera ola democratizadora, que ha extendido la libertad y el respeto a los derechos humanos por tres continentes (Europa, Asia y América). Hablábamos también de los avances frente al hambre, sin duda el azote más inaceptable de todos. E incluso podríamos aludir a la seguridad y las guerras, pues todos los datos disponibles indican que su número y su letalidad ha descendido, y no aumentado, como cree casi todo el mundo. No vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero tampoco en el peor. Y según todos los datos, nuestro mundo es hoy más próspero, más libre y más seguro de lo que lo era hace veinte años.

Madrid, enero de 2006

Elecciones en Chile

LUDOLFO PARAMIO

Profesor de Investigación. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, el 16 de enero, confirmó los resultados de la primera vuelta celebrada el 11 de diciembre y los pronósticos de las encuestas, con una clara victoria (por 7 puntos) de la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, frente al candidato de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera.

El 46,5% del voto obtenido por este último, ligeramente inferior a la suma de los votos obtenidos en la primera vuelta por su candidatura y la del candidato de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sugiere una cierta desmovilización del electorado de la derecha frente a la movilización a favor de Bachelet, no sólo de los electores de centroizquierda de la Concertación, sino también de quienes votaron en la primera vuelta por Tomás Hirsch, candidato de una alianza del Partido Comunista y del Partido Humanista (verde).

El mero hecho de que Piñera, como candidato de Renovación Nacional, compitiera en la primera vuelta con Joaquín Lavín, ya revela que la derecha acudía a la convocatoria con divisiones internas más fuertes que las posibles tensiones dentro de la Concertación entre demócratacristianos y socialistas. Esas divisiones responden en buena medida al ocaso político de la figura del general Pinochet, sobre el que se han sucedido los procesamientos a lo largo del año pasado, y no sólo por delitos contra la vida y los derechos humanos, sino también por enriquecimiento ilícito, muy difícil de aceptar incluso por quienes defienden la actuación represiva de la dictadura.

Mientras la UDI mantiene una indudable filiación pinochetista, Renovación Nacional tuvo durante el plebiscito de 1989 una posición mucho más independiente, y Piñera votó entonces contra la continuidad de Pinochet. Su candidatura se explica de hecho por un proyecto de reequilibrar la Alianza hacia el centro, escapando no sólo a la hipoteca de Pinochet sino al lastre electoral que arrastraba Lavín, tanto por su identificación con el pasado como por su derrota ante Ricardo Lagos en 1999.

En este sentido, el cambio más importante que han traído las elecciones y que fácilmente se podría perder de vista, es que en la segunda vuelta el candidato de la Alianza, es decir, de la derecha chilena, no ha sido estrictamente un líder conservador, sino representativo de una derecha empresarial moderna. Esto podría suponer no sólo el fin de una época sino el comienzo de una significativa transformación a medio plazo de la política chilena. Pero, a corto plazo, puede aumentar la división interna de la derecha, lo que quizá condicione la viabilidad de una de las grandes reformas pendientes, el cambio de la ley electoral heredada del régimen militar que a través de un sistema binominal fuerza la formación de coaliciones y castiga a la irrelevancia a las fuerzas menores.

En otro orden de cosas, lo más notable de las elecciones es que no sólo haya ganado de nuevo la presidencia un candidato de la Concertación, sino que se haya tratado de una candidata, y nuevamente, como Ricardo Lagos, socialista. El hecho es más digno de atención si se toma en cuenta que durante los primeros meses del gobierno de Lagos se extendió entre amplios sectores de la Concertación un cierto fatalismo sobre el supuesto fin del ciclo de esta coalición. El fatalismo se basaba en primer lugar en lo apurada que había sido la victoria de Lagos, en segundo lugar en los síntomas de malestar de los demócratacristianos, y en tercer lugar en las dificultades económicas que afectaban al modelo tras los años de más fuerte crecimiento que se habían conocido bajo el gobierno de Frei.

Ese fatalismo se plasmaba en la creencia de que en 1999 lo nuevo, sobre todo para los chilenos más jóvenes, había sido el mensaje populista de Lavín, y de que en 2005 era inevitable que el desgaste de la Concertación, tras 16 años de gobierno, condujera al triunfo de la de-

recha, de la Alianza, como alternativa a lo ya conocido. Aunque ahora resulte evidente que la profecía andaba desencaminada, conviene subrayar las razones de que no se haya cumplido. La primera es muy obvia: el derrumbamiento de la imagen de Pinochet y el desgaste de Lavín tras seis años de oposición a la defensiva a causa de las desventuras judiciales del general.

Pero hay otras razones. La más visible es que Michelle Bachelet ha conseguido aparecer como lo nuevo, no sólo frente a un Joaquín Lavín conocido y desgastado, sino frente a la propia Concertación. En primer lugar por ser mujer, y una mujer con una vida familiar poco o nada tradicional, pero también por ser hija de un militar torturado por la dictadura, y por contar con un perfil de energía y eficiencia combinadas con una gran proximidad a los ciudadanos. Es revelador el fracaso del intento de Piñera por hacerse valer como un empresario estrella (“más presidente”) frente a una simple mujer. El propio Piñera, en su ejemplar discurso de aceptación de la derrota, saludó en el triunfo de Bachelet un reconocimiento a todas las mujeres chilenas. Ese ascenso hacia la visibilidad y el protagonismo de las mujeres ha sido un gran activo para la candidata de la Concertación.

Hay otra razón de mucho peso para el nuevo triunfo de la Concertación. Ricardo Lagos sale de la presidencia con una alta popularidad (70%) y en medio de consignas de sus partidarios para que sea de nuevo candidato cuando termine el gobierno de Bachelet. No sólo ha tenido una brillante gestión económica, con un crecimiento del 6% en 2005, sino que bajo su mandato se han completado las reformas de la Constitución para eliminar los residuos autoritarios: el nuevo Senado estará libre por vez primera tras el retorno a la democracia de senadores vitalicios y designados. Los jueces han logrado terminar con la imagen de impunidad de los responsables de la represión bajo la dictadura, y se han puesto en marcha políticas sociales para reducir la desigualdad y ampliar y mejorar la educación y la atención sanitaria.

Bachelet va a contar con mayoría de centroizquierda en ambas cámaras, lo que facilitará la tarea legislativa, contando además con la posibilidad de llegar a acuerdos con Renovación Nacional si esta fuerza mantiene y desarrolla su orientación centrista. En este sentido, y teniendo en cuenta su experiencia previa en los gobiernos de Lagos

como ministra, primero de Sanidad y luego de Defensa, Bachelet tiene grandes posibilidades de realizar una buena gestión.

A medio plazo su principal problema político puede ser mantener la alianza con la Democracia Cristiana, ya que ésta se siente frustrada por su pérdida de peso electoral y por la sucesión de dos presidentes socialistas. Si se abandona el actual sistema binominal puede ser mayor la tentación, al menos para un sector de la DC, de tratar de resucitar el viejo esquema de tres tercios, conformando un centro con Renovación Nacional y relegando a la UDI a la derecha pura y dura.

A corto plazo, en cambio, el principal desafío para el nuevo gobierno chileno será sin duda la política exterior. En un mercado de energía muy tenso, Chile necesita garantizar el suministro de gas para hacer posible la continuidad de su crecimiento económico, pero Argentina tiene problemas para cumplir sus contratos por depender de Bolivia, y este país y Perú, los dos grandes proveedores potenciales de gas, mantienen un histórico contencioso territorial con Chile, que en el caso de Bolivia se ve agravado por el discurso nacionalista que ha marcado la llegada al poder de Evo Morales. No es casual, por supuesto, que el todavía presidente Ricardo Lagos haya decidido asistir a la toma de posesión de Morales, y no sería raro que en este aspecto se produjeran iniciativas espectaculares en los próximos meses.

Madrid, enero de 2006

Las incógnitas del nuevo escenario latinoamericano

MÁXIMO CAJAL

Embajador de España

La ola de izquierdismo que en los últimos tiempos anega la América de habla española y portuguesa va acompañada de otro fenómeno que tiñe de tintes inéditos este ya de por sí novedoso escenario, tanto por la amplitud de aquélla cuanto por el protagonismo que, en esta nueva etapa que pugna por abrirse camino, están adquiriendo las masas indígenas, prácticamente ajenas hasta ahora a cualesquiera manifestaciones de activismo político a escala nacional. Lo que está sucediendo, la irrupción de estos dos actores ocasionales de la política en Latinoamérica, la victoria electoral prácticamente generalizada de las fuerzas progresistas, pendientes de lo que suceda en México en julio próximo, de la mano del despertar del indigenismo –el alzamiento popular por medio del voto democrático, que escribía Luis Alberto Moniz en *Clarín* el pasado 2 de enero–, es un acontecimiento cuyo alcance, ciertamente, es todavía prematuro calibrar.

Es, en cualquier caso, un ¡basta ya! preñado, qué duda cabe, de incógnitas. Un grito que surge, unánime, de un numeroso grupo de países, nada homogéneos por cierto, en los que el poder ha estado monopolizado por formaciones conservadoras, cuando no de derecha extrema, en mayor o menor colusión casi siempre con las oligarquías tradicionales y con las fuerzas armadas y de seguridad. Es la emergencia, unísona, de la palabra y de la acción del indígena. Una

combinación, inimaginable hace apenas unos años, cuya síntesis encarna hoy el boliviano Evo Morales. Pero es también la manifestación, inequívoca, de un estado de cosas que no podía perdurar impunemente. Son los signos precursores de un profundo cambio de tendencia en la región que, además, no puede contemplarse al margen de esas otras señales que, en Cuba, apuntan ya al postcastrismo.

Pero este despertar promisorio tiene ante sí un futuro incierto. Un porvenir en el que se combinan, en proporciones desiguales según la perspectiva con que se mire, el temor y la esperanza. De tal manera que este experimento sin precedentes, que es también una oportunidad histórica, sólo saldrá adelante si funcionan los regímenes de progreso que gobernarán prácticamente en exclusiva desde el Cabo de Hornos hasta el Río Grande; si los nuevos gobernantes y los que ya están curtidos en las tareas que les son propias, son capaces de aprender la lección y de hacer frente con éxito, por relativo que éste sea, al inmenso desafío que, para empezar, les espera en casa. Y fuera de ella también, porque lo mismo no les dejan.

Reto interno el suyo que sólo es comparable a la nefasta herencia que, en el conjunto del continente, les ha legado la derecha, las más de las veces corrompida y corruptora, detentadora histórica del poder y de la riqueza nacionales desde la independencia en las primeras décadas del siglo XIX a esta parte. La difícil papeleta que, al margen de la legítima pugna política, representa la esperable labor de zapa de esas fuerzas políticas y económicas, adueñadas de las mejores tierras, de la industria y las finanzas, y de las riquezas naturales del subsuelo. La misma que, cerrando los ojos, nunca reparó en lo que sucedía en torno suyo, si es que no lo alentó, y que incluso coadyuvó materialmente a la aniquilación de cuantos, marxistas o no, laicos y creyentes, se habían revuelto contra tanta injusticia. Los de siempre, cuyo patriotismo sin tacha se mide por las cuentas corrientes y los depósitos anónimos en los bancos de Miami, Ginebra o en cualquiera de los muchos paraísos fiscales que sin duda frecuentan.

También tendrán que capear los nuevos gobernantes, en su despego de los Estados Unidos de América, la desconfianza y el recelo, cuando no la manifiesta animadversión, del poderoso vecino anglosajón del Norte, cuya irresistible propensión a la injerencia ha dejado

sembrado su patio trasero de muñecos rotos, de hijos de perra que dejaron de ser *sus* hijos de perra, y de terroristas súbitamente convertidos en *freedom fighters*, en luchadores por la libertad. Washington, cuyas recetas económicas se han manifestado por lo general incapaces de mejorar las mínimas condiciones de vida de las masas más desfavorecidas. El centinela que en los interminables años de la Guerra Fría desestabilizó, y echó abajo, a los pocos intentos reformadores que afloraron por aquellas tierras, al tiempo que favorecía sin pestañear la emergencia y la consolidación, a escala continental, de sistemas represivos, de la Tierra del Fuego al río Usumacinta esta vez, cuya brutalidad ha quedado finalmente al descubierto pero que, por demasiado tiempo, ha estado amparada y justificada por los imperativos de una lucha contrainsurgente en la que todo estaba permitido.

Tampoco es ajena a esta sacudida la propia Iglesia católica que, con su inmisericorde persecución de la Teología de la Liberación, contribuyó en cierta medida, al emparentarla con el comunismo durante la pasada década de los ochenta, a legitimar la represión que también se abatió sobre los religiosos y las religiosas, curas y monjas, que denunciaban tanto abuso y que pagaron con sus vidas la solidaridad que mostraron a los oprimidos y humillados. Y resulta chocante, a la vista de las prisas con que beatifica y canoniza a unos y otros, la contumacia con que el Vaticano ha ignorado, despreciándolos, a cuantos dieron testimonio, con el sacrificio de sus vidas, del por él tan pregonado amor al prójimo; los auténticos y verdaderos mártires de su fe. Tan grande y escandaloso ha sido el desinterés mostrado por la jerarquía católica, con evidentes y desde luego heroicas excepciones, por la suerte terrenal de sus fieles más desamparados, y tan manifiesta su colusión con el poder establecido, que han sido los protestantes evangélicos los que los han captado por millones, desplazando así a aquélla de la acción pastoral.

Es, ciertamente, en el propio escenario nacional donde estos nuevos actores tropezarán con las mayores dificultades, algunas de las cuales tienen un carácter congénito. La izquierda latinoamericana carece de uniformidad, como diversos son los países donde ahora gobierna. Las referencias marxistas, pese a pulsiones repentinas, están desacreditadas. Como lo está el capitalismo en su más pura manifestación.

También la fórmula tradicional de gobierno, el caudillismo populista, levanta suspicacias. Cayeron felizmente las dictaduras. Lo que debe imponerse ahora es la democracia paciente gestionada por gobiernos honestos sin relumbrón, el buen hacer del aparato estatal y municipal y el fortalecimiento de la sociedad civil. No caben, desde luego, modelos unívocos para este nuevo mundo que se despreza.

Otro de los obstáculos, de dimensiones colosales, es la marginación del campesinado indígena. Cómo incorporar a este universo ajeno, que fue a lo largo del siglo xvi la víctima del verdadero *choque de civilizaciones* y que, desde entonces, se había autoexcluido mentalmente de la comunidad de vida nacional que difícilmente siente como suya. ¿Hasta qué punto los recientes acontecimientos en Bolivia, Ecuador y Perú movilizarán otras reivindicaciones indigenistas, del maya guatemalteco al mapuche chileno?

Una parte importante de la respuesta a tanta pregunta reside en cómo gestionará este formidable reto la nueva izquierda latinoamericana –indígena en parte ella misma–, para conciliarlo con las aspiraciones e intereses de los otros segmentos de la población, blanca y mestiza, hecha al control del poder y espectadora recalcitrante de este tardío despertar.

Si, como decía el *New York Times* el pasado día de Navidad, Washington tiene que cambiar su manera de hacer las cosas en América Latina, la responsabilidad de la Unión Europea, y la española más concretamente, reclaman también, aunque por muy diversas razones, una revisión en profundidad de nuestra actitud respecto de aquellas repúblicas. Cuando menos, aunque seguramente no sólo, apostar decididamente por políticas de acompañamiento social para sus pueblos, favorecer y fortalecer políticas integradoras orientadas a la generalización de los servicios públicos, y ser más exigentes con la responsabilidad que, en este terreno, incumbe a sus gobiernos.

Madrid, febrero de 2006

América Latina y el informe PISA

JULIO CARABAÑA

Catedrático, Facultad de Ciencias de la Educación UCM

En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó un estudio sobre la competencia de los alumnos de quince años en lectura, matemáticas y ciencias, con especial atención a la primera. Participaron los treinta países miembros del organismo, incluyendo México, más otros como Brasil y (con un año de retraso) Argentina, Chile y Perú. En el año 2003 el estudio se centró en las matemáticas, estando esta vez presentes México, Brasil y Uruguay, entre muchos otros países no miembros de la OCDE. Los estudios, bautizados como PISA (Program for International Student Assessment) permiten, por primera vez en la historia, comparar rigurosamente lo que los más diversos sistemas educativos han enseñado a sus alumnos de 15 años; por esto, y porque ponen en cuestión muchas ideas pedagógicas bien establecidas, están teniendo una enorme repercusión mundial.

¿Cuáles han sido los resultados de América Latina (AL)? Mucho más bajos que la media de la OCDE. Por convención, la media de la OCDE se sitúa en 500 puntos. En el primer estudio, centrado en la lectura, las medias de los países latinoamericanos fueron: Argentina 421; Brasil 398; Chile 411; México 423; Perú 329. Las medias de Portugal y España, fueron también más bajas que las de los países de la OCDE, pero no tanto: 472 y 493 puntos, respectivamente. En el segundo estudio, centrado en las matemáticas, los alumnos mexicanos

han obtenido una puntuación media de 385 puntos, los brasileños de 356 y los uruguayos de 422. Las medias de España y Portugal, fueron esta vez de 466 y 485, respectivamente.

¿Cómo explicar estas diferencias? Tres alumnos de doctorado tratan de responder bajo mi dirección esta importante pregunta. Lucrecia Rodrigo se ocupa especialmente de Argentina y Claudia Córdoba de Chile, mientras Miquel Reynés trabaja sobre Togo y Ghana. No tenemos todavía una explicación satisfactoria, pero hemos descartado ya como insuficientes las más habituales.

El hecho más importante, y que más ayuda a descartar explicaciones plausibles *prima facie*, es que en los países de AL los resultados de los estudios PISA *no son más desiguales* que en los países desarrollados en general. Más precisamente, en AL no es mayor que en Europa la distancia entre los hijos de las familias en mejor y peor situación sociocultural. Por ejemplo, la media de Brasil (398) está a unos cien puntos de la media española (493); pues bien, esos mismos cien puntos separan a los hijos de profesionales brasileños (428) de los hijos de profesionales españoles (526); o a los hijos de analfabetos brasileños (348) de los hijos de analfabetos españoles (434). Otro caso: en el país iberoamericano con puntuación más baja, Perú, los hijos de la gente sin estudios puntúan 285, los hijos de los universitarios puntúan 375.

Este hecho crucial obliga a desechar la mayor parte de las explicaciones económicas y culturales de la brecha en aprendizaje entre los alumnos europeos y americanos. Consideremos en primer lugar la explicación por la desigualdad económica. Brasil es uno de los países con más desigualdad económica del planeta. Como ha escrito Castro, en el comentario que acompaña al Relatorio del MEC brasileño, es comprensible que los alumnos pobres, frecuentando escuelas igualmente pobres, tengan resultados deplorables. Pero los alumnos de clase alta de las mejores escuelas no hay por qué imaginar que vayan a ser peores que los de los países ricos. Y no obstante lo son. Pese a que están predominantemente en escuelas privadas caras, los hijos de la clase alta brasileña leen más o menos igual que los hijos de los obreros españoles.

La propia economía queda en general malparada como explicación. Si la abundancia de recursos no funciona con los alumnos de

clase alta, no se ve por qué habría de funcionar en general. Y, en efecto, PISA muestra claramente que ni la riqueza del país ni el gasto por alumno valen como explicaciones de las diferencias entre países. Como hemos visto, hay dos grandes grupos, los países que están en torno a 500 puntos y los países que están en torno a 400. Es verdad que los primeros gastan más que los segundos. Pero también es verdad que entre los primeros hay enormes diferencias de gasto por alumno que no se reflejan en diferencias de aprendizaje. Estados Unidos o Italia gastan cuatro veces más que Eslovaquia en que sus alumnos aprendan lo mismo. Y Eslovaquia gasta lo mismo que México, con resultados mucho mejores. Que los recursos importaban poco en el interior de Estados Unidos lo demostró ya en 1966 el Informe Coleman. Ahora, PISA ha venido a demostrar que ocurre lo mismo entre países. La lección no es, claro está, que no hagan falta mejores escuelas ni profesores dignamente considerados en AL. Pero PISA recuerda que, una vez alcanzado un cierto nivel de recursos, los alumnos no aprenden más simplemente porque tengan mejores campos de deporte o profesores con mayores sueldos.

Aunque reprimiendo la idea, mucha gente piensa en explicaciones étnicas. PISA parece mostrar que los países pequeños y étnicamente homogéneos, como Finlandia y Corea, tienen mejores resultados que los países grandes con gran diversidad étnica, como Estados Unidos, Rusia o incluso Francia y Alemania. Pero los resultados de comparar los diversos países americanos entre sí no da mucho sustento a esta idea: Argentina, Uruguay o Chile tienen ciertamente resultados mejores que Perú, pero no que Brasil o México.

El hecho de que la medias sean distintas y las desigualdades iguales, afecta también gravemente a la explicación favorita de los sociólogos, el “capital cultural”. Según esta teoría, popularizada a partir de la obra de P. Bourdieu, las diferencias en aprendizaje por clases sociales se deberían a los hábitos aprendidos en casa. No es lo mismo, suele decirse, criarse con unos padres que leen, escuchan música y vigilan la marcha de sus hijos que en un hogar sin libros y ajeno, si no hostil, a la cultura escolar. Pues bien, esta explicación, que quizás dé cuenta de una pequeña parte de las diferencias en el interior de los países, tiene mal traslado a las diferencias entre paí-

ses. Exigiría, en efecto, atribuir a las clases ilustradas de Brasil un “capital cultural” igual al de los españoles que nunca fueron a la escuela.

Puede considerarse la tradición como una variedad del “capital cultural”. Los países socialistas han estado separados durante casi medio siglo de los países capitalistas y actualmente son mucho más pobres. No obstante, sus alumnos aprenden igual que los alumnos de los países vecinos con los que comparten historia. Hungría, la República Checa o Polonia tienen los mismos resultados que Austria o Alemania; Serbia tiene los resultados de Grecia o Turquía. Pero tampoco esta explicación por la tradición cultural se aplica bien a las diferencias entre países de AL. Argentina y Uruguay alcanzaron la plena escolarización hace cien años, en Brasil está todavía por lograr (una tercera parte de los jóvenes de 15 años no van a la escuela). Pero los resultados de sus alumnos escolarizados apenas difieren.

Otra idea muy divulgada y lógica, que se sostiene mal contra los datos PISA, es que el nivel baja cuando todos van a la escuela. La idea no es más que una aplicación del principio del *trade-off* universal entre cantidad y calidad, y se utiliza mucho en España para explicar el presunto descenso de los niveles en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La tasa de escolarización de los mexicanos de 15 años es del 58%, la de los brasileños es del 65%; y sin embargo, otra vez, no por ello tienen mejores resultados que Uruguay o Argentina, con escolarización mucho mayor. Esto significa que, si la cantidad tiende a bajar el nivel, hay otra fuerza que compensa esta tendencia. Quizás el esfuerzo de lograr la escolarización universal eleva el nivel de todos los alumnos.

Excluidas las causas económicas y las culturales, ¿qué nos queda para explicar las diferencias de aprendizaje? Dos hipótesis se perfilan. Una apunta al currículum y a la didáctica. PISA ha medido competencias para la vida real, no los conocimientos “académicos” que se enseñan en las escuelas. Como escribe Castro sobre Brasil, “la escuela no ha estado enseñando a sus alumnos a leer un texto escrito y a sacar de él las reflexiones y conclusiones lógicamente permitidas”. Es una explicación interesante para la lectura, pero ¿y las matemáticas? ¿Tampoco las matemáticas que se enseñan en las escuelas de AL son las que se necesitan para la vida según la

OCDE? Podría ser, pero es improbable. La otra hipótesis sugiere que el retraso de los países americanos se debe, sobre todo, a que las escuelas exigen menos a los estudiantes. Es nuestra hipótesis favorita, y estamos trabajando sobre ella. Todavía nos falta mucho para confirmarla y, si alguna vez la confirmamos, tendremos un nuevo problema. Pues habrá que volver a la cuestión de qué tiene que ver esta hipotética falta de exigencia con las condiciones económicas y con las tradiciones políticas y culturales de los países.

Madrid, febrero de 2006



Bachelet presidenta

AMELIA VALCÁRCEL

Catedrática de Filosofía. Universidad de Oviedo

Michelle Bachelet, esta mujer redondeada y risueña, es una persona especial. Es una verdad andante. “No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza”, afirmaba el Presidente Allende poco antes de morir en el sitiado Palacio de la Moneda. Ella y su Presidencia son la prueba viva de esas indiscutibles palabras. Ha sido formada en ese duro proceso hacia la democracia que ha marcado tantas geografías políticas en la segunda mitad del siglo xx, hasta ser aceptada. Encarna en ella misma la inmediata y turbada historia de Chile. La ha vivido toda, como hija de militar torturado y muerto en la cárcel, como exiliada, como opositora al pinochetismo, como política en activo, asesora primero en defensa y dos veces ministra antes de alcanzar la Presidencia. Para los parámetros que se piden, viene avalada por un curriculum irreprochable. Sólo que, las personas como ella, de su casta y metal, no tienen curriculum, sino biografía. Sucede a cuantas y cuantos han tenido que ganarse en su propia vida el espacio que ocupan. Ella ha debido hacerlo como demócrata y como mujer. Ser una mujer ha jugado con peso en su existencia.

En eso Bachelet no es única. El que una mujer esté al frente de un país no es nuevo. Varias reinas en Europa lo hacen ahora y bastantes más lo hicieron en el pasado. Lo nuevo es el impulso desde abajo que lleva a que haya mujeres en toda la escala. Lo nuevo son las capacitaciones de las mujeres, que entonces ya no son excepcio-

nes, sino parte de una nueva regla de la democracia: que nadie sea discriminado en razón de género. Esta regla comienza a dar ahora, a principios del *xxi*, resultados palpables. Mujeres en los Parlamentos, las instituciones, los cargos. La presencia de mujeres en cargos electos, incluso en los más altos, es la clara novedad actual. Merkel en Alemania, Halonen en Finlandia, Jonson Sirleaf en Liberia, Clark en Nueva Zelanda, McAaleese en Irlanda, Bachelet en Chile ya no son efímeras, ni casuales, pero ni moda; tampoco actúan, como a veces ha ocurrido con las iniciales líderes contemporáneas, en nombre y por delegación de clanes carismáticos o en circunstancias extremas. Ejemplos sobran: Indira Gandhi, Bandaranaike, Aquino, Buto... Golda Meir.

No, las actuales líderes son normales y elegidas en circunstancias corrientes. Representan, sin duda, la voluntad de sus estados, pero también y sobre todo las nuevas posiciones de las mujeres en el conjunto social. El día del triunfo de Bachelet centenares de mujeres se lanzaron a celebrarlo en las calles llevando una banda presidencial. Y muchas más, que no tuvieron la ocurrencia, se sintieron igualmente parte de su victoria. Como en algunos juegos infantiles, Bachelet ficha por sí misma y por todas las demás. En su currículo ambiguo de mujer, obligada a luchar por su libertad personal y su presencia pública, la Presidenta ha puesto en la mesa de su Gobierno una novedad radical: la paridad.

Los gobiernos paritarios son menos todavía que las Primeras Ministras o Presidentas. La renovación de valores que la paridad representa es tan grande, que ni siquiera quienes la viven o la promueven son completamente conscientes de ella. Bachelet ejemplifica esta innovación, pero, en sabio equilibrio, también la continuidad. Es heredera del Gobierno Lagos, como Ludolfo Paramio destacaba en su análisis de las elecciones de enero. Gobierno, dígame, que ha logrado devolver a Chile una democracia digna y desterrar al pasado, para la investigación o la sociología, los anómalos, e incluso pintorescos, flecos políticos que todavía pendían de la extinta dictadura. Un gobierno Lagos con importantes réditos de estima y cumplimiento.

La prensa chilena y la internacional ponen bajo los ojos de Bachelet su tarea futura. Sin embargo, tarea y misión no son del todo

sinónimos. Su tarea presidencial es conducir la política de su país y sin duda lo hará bien, porque ya tiene demostrado que sabe como hacerlo. Fuera le están esperando los temas fronterizos y energéticos, ahora fundidos en uno. Dentro las políticas educativas, sanitarias e integradoras; tiene grandes desafíos y mejor talante para afrontarlos. No le falta trabajo. Empero, su misión podría ser otra: continuar y afianzar la innovación de valores en marcha con una proyección que brilla fuera de su país. Chile es una sociedad todavía tradicional y excluyente. Un país machista, dice su gente, algunos con regodeo y muchos más con cansancio. Hasta hace nada sin divorcio, con doble moral, incluido su acompañamiento de hipocresía: “queridas” e hijos ilegítimos sobre los que pendían temor, silencio y cobardía; normas sexuales duras y ramplonas para las mujeres, abiertas y cazadoras para los varones; homosexualidad pintoresca y vergonzante. Todo ello amparado por visiones religiosas acartonadas, más aún, osificadas, pero con gran peso y presencia pública. Un panorama moral en el que hace falta renovar el aire. Una sociedad que desea la concordia y aumentar su estima propia. Una sociedad más abierta que necesita una convivencia pública también más laica. Una misión, en fin, la de Bachelet que trasciende con mucho un mandato presidencial, con plazo marcado, pero que ella también encarna en su condición de mujer que vive su tiempo, el del feminismo.

Por todo, lo inmediato y el fondo del asunto, Chile va a ser observado por el resto del continente y por Europa con la mayor atención, interés y esperanza. Vargas Llosa escribió estos días que deseaba para él que se convirtiera en un país aburrido, con todo lo bueno que eso conlleva; lo principal, una democracia sólida y asentada, sin sobresaltos ni constantes refundaciones. Sea, mas esa parte fría de la democracia nunca debe hacernos perder de vista su ígneo fondo de fusión valorativa. Y ahí la paridad es protagonista. La política paritaria supone que las mujeres se vuelven individuos, sujetos, iguales, pares. Ahonda y pone a la luz una ética nueva. Duplica la extensión de lo que Kant llamó “reino de los fines”. La paridad no es sólo, y ya sería una enorme novedad, una política; es una ética que ha venido gestándose en la matriz universalista de la Modernidad. Una ética práctica que ha inventado libertades sin cesar en los últimos treinta años.

El feminismo es lo mejor que le ha pasado a la democracia. Y sin el desarrollo y consolidación de la democracia no sería posible. Amplía sin descanso la ciudadanía. Urge a tomarse en serio la igualdad humana, el respeto y los derechos. Abroga prácticas seculares de discriminación. Y compromete de un modo tan pegado a la piel, que lleva el debate moral a las casas, los cuartos, las relaciones más cercanas. El feminismo, sobre cualquier otra ética o política, tiene una inmensa capacidad de implicarnos. Nos hace negociar y constantemente aprender que el libre consentimiento en lo que se hace es la base verdadera de la cordialidad y confianza entre los sexos. Todo esto, y sabiéndolo, representa la Presidenta Bachelet. Ella es a la par un mojón del camino recorrido y una proa cara al futuro. Una suerte de Atlante, que lleva con humor, pero también firmeza, su papel de avanzadilla.

Madrid, febrero de 2006

Elecciones presidenciales en Chile

GUY BAJOIT

Sociólogo, Université Catholique de Louvain

Se siente, se siente, Michelle es Presidente! ... O, más bien, Presidenta... gritaba la gente en las calles, en la noche del 15 de enero pasado.

La verdad es que todavía no se siente nada, *salvo una inmensa esperanza*. Michelle Bachelet, primera mujer presidenta de Chile, comenzará a gobernar el 11 de marzo y prometió formalmente tomar 36 medidas en los cien primeros días de su gobierno. La mayoría de estas promesas conciernen a la cuestión social y la seguridad ciudadana. Inmensa esperanza, pues, de la mujeres, desde luego, pero también del pueblo en general –de toda esta buena gente que corre todo el día para ganar, por mes, *menos del ingreso medio por hogar* (570.000 pesos) y que constituyen el *ochenta por ciento* de la población–. El euro vale 650 pesos chilenos: hagan el cálculo¹.

Planteemos, primero, el decorado y la escena. Desde la vuelta a la democracia en 1990, el abanico político chileno presenta *cuatro grandes tendencias*:

- La *Concertación*: coalición del centro demócrata-cristiano y de la mayor parte de la izquierda –socialistas, socialdemócratas y radica-

1. Lo hago por ustedes: 100.000 Pesos =154 Euros.

les—; ganó las tres elecciones anteriores, que dieron los gobiernos de Aylwin (1990), Frei (1996) y Lagos (2000); esta vez, presentaban una candidata: Michelle Bachelet.

- La *Unión Democrática Independiente* (UDI): un partido que, sin connotación peyorativa, podemos llamarlo “populista”, porque se trata de un partido de derecha (nació en la dictadura y con la bendición del General Pinochet), pero que tiene también un apoyo popular real. En un mundo marcado por la inseguridad y la crisis de las grandes ideologías, vemos renacer, en muchos países, personajes políticos que, a pesar de ser (o porque lo son) de la derecha muy conservadora, consiguen un apoyo popular más o menos importante. Esta vez, el candidato de la UDI era Joaquín Lavín, que se presentaba por segunda vez: perdió, por poco, contra Lagos en 2000.

- *Renovación Nacional*: un partido que pertenece claramente a la derecha clásica (y clasista); se apoya en el éxito del modelo económico neoliberal (que logró multiplicar por tres el producto interno bruto per cápita en Chile en veinte años). Su candidato actual era Sebastián Piñera, un exitoso empresario, que prometió fortalecer aún más el modelo económico, pero se declaró también preocupado por la redistribución de la riqueza.

- *Juntos Podemos Más*: una coalición de izquierda “renovada”, que articula a los comunistas con los humanistas y los (incipientes) ecologistas. Tiene un proyecto abiertamente antineoliberal y alterglobalista. Además, insiste mucho sobre lo injusto que es el sistema electoral binominal en Chile: con tal sistema, la segunda minoría (la derecha) está aventajada, mientras que la tercera (la izquierda) no tiene ninguna posibilidad de elegir un presidente y le es muy difícil elegir diputados o senadores. Su candidato, esta vez, fue Tomás Hirsch.

En las *franjitas* (minutos estrictamente “minutados” de propaganda en los canales de la televisión), todos los candidatos insistieron sobre los mismos temas, los que preocupan hoy a los ciudadanos chilenos:

- La *desigualdad* que es asombrosa: cada mes, los hogares del decil más rico ganan (2.180.000 pesos) 34 veces más que los del decil más pobre (65.000 pesos) y casi tres veces más que los del decil que los precede directamente (800.000 pesos); el promedio general (570.000 pesos) corresponde a los hogares del octavo decil –lo que indica la relativa desaparición de la clase media–.

- Las *políticas sociales* (salud, educación, vivienda, previsión social...): Tomás Hirsch estima que los esfuerzos de los gobiernos concertacionistas fueron muy insuficientes y que esta actitud se explica por su exceso de complicidad (¡de duplicidad!) con el empresariado; Michelle Bachelet admite que queda mucho por hacer, pero asegura que están en el buen camino; Joaquín Lavín y Sebastián Piñera critican los errores cometidos y prometen una mejor distribución de la riqueza y políticas sociales más eficaces.

- La *inseguridad* preocupa a todos los ciudadanos: en un país donde la desigualdad es tan violenta, a los ricos les cuesta dormir y circular tranquilos... A los ricos, pero también a los menos ricos, y hasta los pobres. La derecha prometió “mano dura” –desde la “tolerancia cero” (que ya está siendo aplicada) hasta la relegación de los delincuentes en una isla del Pacífico–; la Concertación pretendió combinar la “mano dura” con la “mano inteligente”.

De *economía*, se habló muy poco (salvo, por supuesto, Tomás Hirsch, que pretende tener un modelo alternativo). Pero, para los tres otros, es una *evidencia* que el modelo neoliberal tiene que seguir: los buenos resultados anteriores están allí para confirmarlo, la coyuntura es excelente ¡y los chinos compran mucho cobre! *Ninguno parece darse cuenta que los tres problemas que preocupan tanto a los chilenos derivan directamente de la aplicación de este modelo.* Ni tampoco de su inmensa fragilidad: esta economía sigue dependiendo de la exportación de bienes agro-mineros (cobre, frutas, mariscos, salmón, madera, vinos...), incluso aunque sean más elaborados que antes. Pero... mientras que el barco vaya, dejémonos llevar, y ¡viva la buena suerte!

Resultados: en la primera vuelta son eliminados Lavín (23%) y Hirsch (5%), y seleccionados Bachelet (46%) y Piñera (25%); se supone —se espera— que, en la segunda, los electores de Lavín van a votar por Piñera (48%) y los de Hirsch por Bachelet (51%). ¡Parece cocinado!... Pero, felizmente, para sostener el suspenso, hay dudas.

Hirsch dijo que él, personalmente, iba votar nulo; pero los comunistas se enojaron: ¿como renunciar así a “vender” lo más caro posible su 5% de votos? Lavín, olvidando las viejas peleas, se echó en los brazos de Piñera: “soy un soldado más”, dijo; pero este gesto, de una lealtad sospechosa, hizo dudar algunos de sus electores (sobre todo populares); algunos demócrata-cristianos estaban confusos: Piñera jugó hábilmente con su supuesto “humanismo cristiano” para seducirlos.

Además, variable original, única en la historia de Chile, ¡Michelle es una mujer! Y esto no deja de sorprender a muchos, esto remueve el piso, esto cambia el juego. Es hija de un general torturado y asesinado por la dictadura militar; es socialista, fue revolucionaria y refugiada política en Alemania del Este; es divorciada, tiene un hijo y dos hijas y no tiene marido; es agnóstica... ¡oh! Es médica (como Allende); fue ministra de Defensa y después de Salud; habla alemán, inglés y francés. Es todo un personaje... ¡pero es una mujer! Y el viejo machismo se despierta: ¿Será competente, será capaz? ¿será cierto que una mujer haría la política de otra manera? ¿de cuál manera? Piñera, con su demagogia inteligente, juega sobre estas propensiones, acrecentando la duda.

Con todas estas incertidumbres, lo que iba pasar el 15 de enero, día de la segunda vuelta, era imprevisible. Por esto, el Presidente en persona, Ricardo Lagos, y su Gobierno, tomaron claramente partido en favor de Bachelet. Por ejemplo, sabiendo que Lavín está en contra y Piñera dispuesto a negociarlo, el Gobierno mandó al Parlamento un proyecto de ley para cambiar el sistema binominal: se esperaba una buena pelea que dividiera públicamente la derecha. No lo lograron, pero crearon un malestar en la “Alianza” (UDI + RN), a una semana de la elección. Piñera denunció, por supuesto, esta maniobra discutible en buena democracia.

El 15 de enero, Michelle Bachelet ganó la elección presidencial con un avance indiscutible: 53,5%, contra 46,5% para su adversario. ¿Quién la eligió? ¿Las mujeres que, por primera vez, votaron más a

la izquierda que a la derecha? ¿Los comunistas que negociaron su voto y que, con disciplina, votaron para ella? ¿Los demócrata-cristianos que no se dejaron tentar por el “humanismo cristiano” de Piñera y que no se asustaron por el agnosticismo de Bachelet? ¿Los machistas, que encontraron la ocasión ideal para hacerse “buena conciencia”... o que la encontraron bonita (¿signo de su buen gusto!)? ¿Los modernizadores, pensando que, para la imagen internacional de Chile, “hace bien” una mujer Presidenta? En todo caso, no fueron los mapuches, que son los más numerosos en la única circunscripción donde ella perdió. En fin... los chilenos han elegido la primera Presidenta de su historia. Así es.

Y ¿ahora?... Ahora, *se levantó una gran esperanza*. ¿Cuál? Se espera que, con Michelle de Presidenta, la “torta neoliberal” –que no deja de crecer–, vaya a ser, por fin, redistribuida más equitativamente. No se puede decir que sus predecesores no hicieron nada para reducir la desigualdad: hicieron bastante. Pero, la desigualdad creció, y la gente piensa –y al fin y al cabo, esto es lo que importa– que hicieron poco, o en todo caso, que hicieron mucho menos de lo que se hubiera podido hacer. Esta esperanza, en un pueblo despierto y vigilante, es una arma de doble filo: por un lado, es la mejor –quizás la única– garantía de la democracia y de la justicia social; por otro es un peligro, porque los pueblos que esperan son más exigentes que los desesperados.

Una metáfora. Michelle Bachelet tiene una cadena en cada mano: sobre la que tiene en su mano derecha, va a tirar, tan fuerte como puede –como suele hacerlo tan bien–, la CPC (la Confederación de la Producción y del Comercio: los patronos, la élite dirigente, los ricos); sobre la que sujeta su mano izquierda, van a tirar las múltiples organizaciones sociales en las cuales su elección despertó tanta esperanza. Ella, es cierto, preferiría desplazarse hacia la izquierda; pero tiene que gobernar: “voy a ser la Presidenta de todos los chilenos” (como dicen siempre los elegidos). ¡Ojalá que las cadenas no se rompan... y que la Presidenta sea fuerte!

Concepción, febrero de 2006



Latinoamérica 2006: superar la melancolía, atrapar la oportunidad

JOSÉ JUAN RUIZ

Economista, División América Grupo Santander

La tesis fundamental de esta colaboración es que en América existen hoy países que tienen la oportunidad de consolidar procesos de modernización y de aumento sostenido del bienestar de sus ciudadanos. Y que esos países, bien por su tamaño e importancia estratégica, bien por la consistencia de su modelo de desarrollo, pueden acabar arrastrando a la región a una mejora de su prosperidad y protagonismo relativo en la economía global.

Esta visión –que abiertamente contradice a una notable mayoría de expertos que preconizan el inevitable y definitivo rezago político y social de América Latina– se apoya básicamente en tres pilares: la fuerza de los números, la fuerza de las ideas y la fuerza de las instituciones.

LA FUERZA DE LOS NÚMEROS

En 2005, por tercer año consecutivo, Latinoamérica ha cerrado un buen ejercicio y encara el siguiente con buenas perspectivas. El último consenso de analistas de mercado¹ apunta a que, salvo que se

1. Promedio de crecimiento de Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander. Fecha de cierre, 15 de Diciembre 2005. Latinoamérica es el promedio ponderado por PIB de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Los datos del consenso son: crecimiento 3.9%, inflación del 5.5% y superávit corriente del 0.3% del PIB.

produzca un shock externo que definitivamente desestabilice la economía global, la región crecerá en el año 2006 a ritmos del 4.0%, con una inflación del 5,4% un superávit de cuenta corriente del 0.7% del PIB y un déficit fiscal del 1.1% del PIB.

Si este escenario se materializa, la transformación macroeconómica en los 4 últimos años habría sido digna de mención. Efectivamente, la región habría acumulado desde el año 2002 un crecimiento del 17%, habría reducido la inflación en un 40%, recortado su nivel de endeudamiento público desde el 54.6% del PIB del año 2003 hasta el 42% del PIB en 2006, y habría aprovechado las buenas condiciones de precios, volúmenes y abundante financiación internacional para reducir la ratio deuda externa/exportaciones desde el 191% que alcanzaba en el año 2003 hasta menos de una vez el valor de sus exportaciones al finalizar 2006. Además, habría acumulado reservas internacionales hasta los 240 mil millones de US \$, el nivel más alto de activos externos jamás alcanzado por la región, y revertido la sobre-reacción cambiaria que se produjo entre 2001 y 2003.

Pero la mejora no es solo macroeconómica. El crecimiento con estabilidad de precios y sostenibilidad de las cuentas públicas y externas se ha traducido –como era de esperar– en nítidas mejoras sociales. En el trienio 2003-2005 la región ha aumentado anualmente su PIB per cápita en un 3.1%, una tasa que multiplica por cinco el promedio de los últimos veinticinco años y que ha permitido que la región alcanzase un PIB per cápita en dólares de Paridad de Poder de Compra (PPP) de 8.543 US \$. En términos absolutos, este incremento es el mayor aumento² registrado en América Latina a lo largo de todo el periodo 1980-2005, y permite que el nivel de renta promedio PPP de la región sea equivalente al 75% de la renta promedio de los países emergentes de Europa y un 75% superior a la renta per cápita promedio de Asia emergente.

Además, el crecimiento con estabilidad ha reducido el número absoluto y el porcentaje de latinoamericanos viviendo por debajo del

2. Se ha calculado la media móvil de 3 años de aumentos interanuales absolutos del PIB per cápita. En 2006 ese dato asciende a 374 US \$. El siguiente mejor dato fue el de 1994 cuando se logró un incremento de 256 US \$.

umbral de pobreza. En concreto, el aumento del empleo, la moderación de la inflación y el aumento del salario nominal han permitido, según los datos de CEPAL, que desde 2003 hasta el 2005 el número de ciudadanos que viven bajo el umbral de pobreza se haya reducido en 13 millones de personas y que el porcentaje de personas viviendo en pobreza haya pasado del 44.3% al 40.6%. La caída del número de personas que viven en la indigencia es más acusada: 10 millones de personas han salido de la miseria, y el porcentaje de personas afectadas ha pasado del 19.2% al 16.8%.

Y aunque no se disponen de datos actualizados sobre los cambios en la distribución de la renta y la riqueza, la hipótesis más frecuente entre los expertos del Banco Mundial es que, respecto a la situación de mediados de los noventa, la distribución es ligeramente más igualitaria como consecuencia de la ampliación de las clases medias de Brasil y México. Otros estudios apuntan, por el contrario, a que la mejora en la distribución de las dos grandes economías de la región se ve más que compensada por el fuerte aumento en la desigualdad que se produjo en Argentina y Venezuela tras sus respectivas hecatombes macroeconómicas de principios de siglo.

Aunque todavía queda mucho por hacer, no puede pasarse por alto que el balance económico y social de la región es el mejor en muchas décadas. La fuerza de los números es que éste es el mejor punto de partida desde hace muchos años.

LA FUERZA DE LAS IDEAS

Por una razón u otra, mis siete recientes años de vida profesional han estado vinculados a América. Y en el campo de las ideas, siete años en América Latina dan mucho juego. A lo largo de ese periodo quienes trabajamos en América hemos asistido a bruscos movimientos en lo que podríamos llamar el “paradigma” de la excelencia macroeconómica o política. Hemos visto pasar de la dolarización —o como mínimo la defensa sin complejos de los tipos de cambio fijos— a la apuesta sin vacilaciones por los regímenes de tipo de cambio libremente flotantes. Del compromiso inquebrantable con el Consenso de Washington a todo tipo de Agendas alternativas: Buenos

Aires, Porto Alegre, incluso Barcelona. De las “relaciones carnales” con Estados Unidos al ALBA³ y al Eje del Bien.

Visto así, parecería que América Latina continúa sumida en la más absoluta de las confusiones sobre el qué hacer. Pero basta ras-car un poco la superficie para descubrir que no. Que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, en la región hoy hay consensos permanentes. Primero, con la democracia. Y luego con la equidad. Ninguno de estos acuerdos son de importancia menor. Entre otras cosas porque cuando realmente ambos se convierten en las guías de las políticas de un gobierno, aparecen mecanismos sociales, económicos y políticos que hacen más difícil la aparición de la arbitrariedad y la demagogia.

Hasta la fecha ningún país de la región ha decidido que su proyecto de convivencia no pasa por mantener del proyecto democrático. Ni nadie tampoco –pese a los llamamientos a toda suerte de innovaciones que van desde el neo-liberalismo al neo-populismo pasando por el neo-indigenismo o la nueva izquierda– ha puesto en cuestión el protagonismo de la economía de mercado y el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible. Lo que sí está ocurriendo es que, una vez más, América Latina está demostrando que no es precisamente el campo más propicio para el pensamiento único, las “tallas únicas” o el *pret-à-porter* ideológico. Aquí lo que gusta es el trabajo artesano. Lo que apasiona es la singularidad del modelo político y la creatividad para diseñar –una vez tras otra– “modelos nacionales” de desarrollo económico. A esas viejas tradiciones latinas hay que acercarse con esa mezcla de ternura y exasperación que en Jorge Luis Borges despertaba el peronismo. Es parte del “acervo” de lo incorregible del continente.

Ahora bien, la realidad es que, cuando uno analiza lo que están haciendo los países, es fácil darse cuenta que incluso los países médicamente más heterodoxos están respetando los principios democráticos y han adoptado políticas de prudencia monetaria o fiscal impensables hace años. América Latina ha aprendido que para crecer sostenidamente hay que asegurar la estabilidad de precios, mantener la solidez patrimonial del sector público, permitir la flotación del tipo de

3. Alternativa Bolivariana al ALCA

cambio, moderar la dependencia del ahorro externo y crear sólidas instituciones que garanticen la persistencia de estas políticas de Estado. Y el consenso sobre las políticas macro se extiende al ámbito político como lo prueba que las sociedades supuestamente más polarizadas celebran elecciones, y hablan de la necesidad de la inversión directa extranjera y del respeto de los derechos de los inversores.

En realidad, sobre todo el debate sobrevuela el debate sobre cómo acometer reformas de primera, segunda y tercera generación de las economías, de los sistemas políticos y de las pautas culturales. Reformas de los mercados de bienes y factores. De los sistemas fiscales, de las instituciones de defensa de la competencia. Mejoras de los sistemas educativos y sanitarios. Reformas del Estado y de la Administración de la Justicia.

Lo que, si se piensa bien, no es muy distinto de lo que ocurre en otras partes del mundo. Todo ello hace pensar que en América Latina, quizás más que en ningún otro sitio, es imprescindible separar el grano de la paja. Lo que es circunstancial, de lo que es estratégico. Lo que es escenografía y lo que es fundamental. Hecho este análisis, si bien la región tiene riesgos latentes en algunos países, en la mayoría de ellos y ciertamente en Chile, y en los dos países más determinantes del continente por su masa crítica: Brasil y México, se está en condiciones de aprovechar los consensos sociales que se han alcanzado para afianzar un modelo de democracia y de crecimiento sostenible perfectamente asimilable –si no superior– al de otras regiones del mundo. Y lo que quizás sea más importante a corto plazo: que ese modelo, por su éxito económico y político, se convierta en un modelo para el resto de países de la región. Esta es la fuerza de las ideas: que esta vez hay un modelo de éxito que es exportable a la región.

LA FUERZA DE LAS INSTITUCIONES

Quienes conocemos esta región sabemos que los países del continente que han construido y consolidado sus reformas e instituciones son hoy mucho más fuertes. En el ámbito económico hay un caso paradigmático de reforzamiento institucional: la aparición de Bancos Centrales independientes y responsables ante la comunidad inversora y la sociedad

de “entregar” una baja tasa de inflación. Esta nueva “infraestructura institucional” no sólo ha conseguido que la inflación deje de ser un problema “estructural” de América.

La forma en la que han conseguido este éxito histórico también ha sido importante. Haber operado con independencia y transparencia, haciendo públicos sus metas y objetivos ha incorporado a la economía política latina la noción de que ser predecible y ganar “credibilidad” son en sí mismos objetivos deseables con valor económico tangible. Las experiencias de Chile y de México nos han enseñado que cuanto mayor es la credibilidad menores son los costes de retornar al punto de equilibrio. Y que también hemos aprendido que la única forma de ser creíble es cumplir lo que se promete.

Esta es la fuerza de las instituciones: el ejemplo de quienes las han cuidado y reforzado puede ser emulado por el resto de países de la región porque el éxito es fácilmente comprensible. Latinoamérica ha demostrado que no está incapacitada para el diseño institucional. Y que las reglas que se crean –cuando se cumplen– pagan los dividendos prometidos.

LAS NUEVAS FRONTERAS

Aunque contar con la mejora de la infraestructura institucional a la que acabo de hacer mención es un gran salto adelante, en el muy corto plazo lo que resultará decisivo para sostener el crecimiento será comenzar a cobrar los dividendos todavía no percibidos de la estabilización macroeconómica y de las reformas ya realizadas.

Ahora la ortodoxia tiene que comenzar a pagar dividendos. Y entre otras muchas posibles reformas y avances, hay una que puede ser muy rentable social y económicamente en el corto plazo: la “bancaización” de América.

La región había ido preparando y transformado su sistema bancario –saneándolo, concentrándolo, eficientándolo y rentabilizándolo– precisamente para que, cuando el Estado dejara de absorber la mayor parte del ahorro nacional, los ciudadanos hubiesen recuperado la confianza y los tipos de interés reflejasen la mayor competencia y los menores riesgos, el negocio bancario se normalizara. Para que los ban-

cos dejen de ser el coto reservado al 20% de los ciudadanos latinoamericanos y para que el porcentaje que el crédito al sector privado representa sobre el PIB —el 25%— deje de ser otra de las clamorosas singularidades del continente.

Hay muchas formas de ilustrar el potencial de crecimiento de la bancarización pero hay una muy clara: no es una quimera pensar que el negocio bancario de la región pueda duplicarse en 4 años y triplicarse en siete. Y si eso ocurriese, la demanda interna adicional que se generaría sería capaz de añadir al crecimiento de la región alrededor de 1,5 puntos porcentuales por año. Y eso supondría pasar de crecer al 3% a hacerlo al 4,5%, un umbral que, si se traspasa y se mantiene, podría cambiarle la cara definitivamente al continente. O al menos a los países que estuvieran construyendo los consensos de Estado y las instituciones necesarias para hacer sostenible esta auténtica revolución de expectativas. Nuevamente se puede trazar otra frontera al continente. Y algunos países parece que esta vez sí que se lo han tomado en serio.

Madrid, marzo de 2006



El público *(Hay Festival)*

CARMEN POSADAS

Escritora

“**M**ire maestra, y le ruego perdone el atrevimiento, pero mis amigas y yo venimos en ómnibus desde un pueblito del interior que está a cuatrocientos kilómetros de distancia y querríamos hacernos una foto con usted. Sí, aquí mismito, para que se vea el teatro al fondo. Muchas gracias. Ya tenemos varias sacadas acá ¿sabe? una con Laura Restrepo y Ricardo Franco; dos con Vila-Matas y Javier Cercas firmando autógrafos, otro par con los gringos, Kureishi y sobre todo Vikram Seth. ¿Vio que buen mozo es? Regio el maestro, aunque más bien chiquito”.

Quien así me hablaba era una mujer de unos sesenta años que formaba parte de un grupo de personas de diversas edades que hacían cola bajo el inmisericorde sol del Caribe para entrar al teatro y comprar libros. “Para nosotros son re-caros ¿sabe? pero entre todos hicimos una chanchita y así podemos intercambiar”.

Yo había llegado la noche anterior y aquel era mi primer contacto con la ciudad y su gente. Después supe que mi interlocutora estaba entre las muchas personas que habían llegado hasta Cartagena de Indias recorriendo cientos de kilómetros para asistir a esa fiesta de la palabra que se organizó a finales de enero, un encuentro de escritores de lengua inglesa y española convocado por el *Hay Festival*. Este festival, que comenzó como un pequeño encuentro en el País de Gales, se ha convertido poco a poco en una de las citas literarias más importantes del mundo y su finalidad es acercar el escritor a sus lec-

tores. Maravillosa iniciativa para nosotros, los escribidores, que, lo pienso muchas veces, somos como esos náufragos en una isla desierta que lanzan al mar sus mensajes en una botella sin tener la más remota idea de dónde o a quién llegarán. Uno tiende a creer que a nadie, que lo más probable es que se hayan estrellado contra alguna roca, pero entonces surgen iniciativas como las del *Hay Festival* y logran que tanto afán solitario cobre su verdadero sentido. “Maestra” (ahora era un joven de aspecto aindiado quien así me interpelaba y confieso que me encantó, aunque aún no me acostumbro a que me llamen con tan bella palabra) “Mire, maestra, este poema, lo escribí hace un ratito para usted, ¿me hace la merced?” Agradecí el regalo y observando los diversos grupos, me pregunté qué tenían en común todas esas personas que se arremolinaban en torno al Teatro Heredia esperando que comenzara la primera mesa redonda del festival. En apariencia nada en absoluto. Había entre ellos, según supe más tarde, estudiantes de la universidad de Bogotá que habían fletado un avión para llegar hasta allí. También señoras de la sociedad cartagenera que alquilaban palcos para compartir con sus amigos. Había guionistas de cine que trabajaban en Estados Unidos y que venían al *Hay Festival* a fichar autores; había también intelectuales de campanillas o de nombre sonoro. Pero todos ellos no son más que una anécdota. La enorme mayoría del público estaba formada por personas de limitadas posibilidades económicas, era gente que había hecho un gran esfuerzo para costearse el viaje y el precio de la entrada. Maestros de escuela de zonas rurales, por ejemplo, editores de pequeñas revistas literarias sostenidas con el entusiasmo y el fervor de sus escasos suscriptores, amas de casa de Bucaramanga, poetas paupérrimos, jubilados de Barranquilla, profesores de lengua, de literatura, de historia, también muchachitas que por su aspecto parecían gustar más de las telenovelas que de los libros, chicos con pinta de raperos, amén, cómo no, de algún jovencísimo escritor en ciernes.

Y todos nos reuníamos día tras día en un marco digno de tan inusual ágora. Porque si curioso era el público, más lo era el edificio que nos cobijaba.

Y es que hay que decir que el Teatro Heredia de Cartagena parece sacado directamente de las páginas de una novela de García

Márquez. Hasta tal punto es así que lo primero que pensé fue que si al volverme en mi butaca encontraba sentada detrás de mí a Fermina Daza, no iba a sorprenderme en absoluto. Tampoco si quien allí estaba era el mismísimo Mauricio Babilonia y sus mariposas amarillas. La sala es barroca, caribeña. Las arañas son un inverosímil entramado de brazos metálicos que representan quién sabe si unas lianas, y los palcos son tan protuberantes que ellos y sus gárgolas parecen estar a punto de salir revoloteando sobre la platea. Pero donde más fácil resulta dejarse llevar por la imaginación es al contemplar el telón de seguridad, porque en él pueden verse diversos personajes de tiempos pretéritos. Hombres de levita y mujeres con miriñaque que pasean por las calles de la ciudad y que están a punto de ascender a los cielos con sus parasoles y sus perritos, muy dignos ellos... pero cabeza abajo. Hay literatura pues en cada una de las esquinas de esta curiosa sala y, en medio de aquel decorado extravagante, tan colorido como los palcos, tan silencioso como las gárgolas, el público atento a cada una de nuestras palabras.

Sin embargo, un día ocurrió algo imprevisto. Habitualmente las luces se repartían por igual entre el estrado y la sala, de modo que tan iluminados estábamos los escritores que interveníamos en el acto como los espectadores. Pero de pronto, cuando llegó el turno a la mesa redonda en torno al tema del humor en la que yo participaba, las luces de la sala fallaron y nosotros quedamos iluminados, allá arriba, en apariencia solos en medio de un teatro a oscuras. Los otros tres participantes eran mi muy querido “Negro” Fontanarrosa (elegido por todos nosotros como el escritor más destacado del festival), Fernando Savater y otro gran amigo, Daniel Samper. “Empecemos hablando en serio”, nos propuso el Negro justo antes del apagón. “No nos hagamos los chistosos desde el principio”, añadió, y todos le hicimos caso, porque, como también dijo el Negro, en una charla dedicada al humor es mucho más eficaz no hacer gala de él. Así, entre las palabras serias y la negrura total de la sala, la conversación empezó titubeante. “Qué mal nos va a quedar” pensé yo, “qué difícil es comunicar cuando uno no ve a quién se dirige”. Pero entonces el Negro contó el primer chiste y en ese mismo momento la sala se iluminó como por ensalmo. Surgieron entonces las gárgolas del Teatro

Heredía, sus palcos volantes, su araña con brazos en forma de lianas y también las cientos de personas riendo de un modo que no tuve más remedio que pensar que se trataba de un sortilegio más de tan mágico lugar. Ya no volvieron a apagarse las luces ni tampoco las risas en toda la noche y a mí me gustaría agradecer desde estas líneas al público del festival su generosidad, su entrega, su atenta mirada y sobre todo su risa que iluminó la sala, no sólo ese día sino los todos los duró nuestro encuentro. Inolvidable.

Madrid, marzo de 2006

El sombrero del mago

SERGIO RAMÍREZ

Escritor

Cuando el recién electo presidente de Bolivia se presentó en el Palacio de la Zarzuela vestido con su suéter de variados colores, algo desusado para un visitante oficial que comparece en una audiencia real, no pude dejar de recordar que el primer signo de rechazo a los viejos tiempos al triunfar en Nicaragua la revolución sandinista, fue despojarse precisamente del saco y la corbata. Campeaban entonces los uniformes verde olivo, y eso hacía aparecer más amenazante la trasgresión del protocolo; ahora se trata de un presidente que rechaza el saco y la corbata, pero que se halla lejos de los atuendos militares. Este cambio en las manifestaciones de irreverencia es un signo de los tiempos. La izquierda llega al poder por los votos, vestida de civil, y no por las armas, en uniforme de campaña.

El suéter y los pantalones vaqueros no pueden ser tomados sin embargo como un constante de imagen para los líderes de izquierda que han venido ganando elecciones presidenciales desde finales de la década de los años noventa del siglo pasado, empezando con el coronel Hugo Chávez en Venezuela. Evo Morales, un líder sindical minero, ha entrado al Palacio Quemado de la manera más desenfadada, pero Lula da Silva, un líder sindical metalúrgico, cuida mucho su compostura formal y ni siquiera lleva hirsuta la barba. Se la hace recortar con cuidado, como símbolo de respetabilidad.

Y lo mismo Chávez. Pese a su amor por los uniformes militares, prefiere ahora los trajes bien cortados que traen menos problemas a su imagen que las casacas con entorchados de gala que antes

solía ponerse para los desfiles, y que recordaban más bien al condecorado dictador Marcos Pérez Jiménez. Por su lado, Ricardo Lagos, siguió siempre vistiéndose igual que antes de entrar al Palacio de la Moneda, como un profesor universitario que se cuida de las ostentaciones, simplemente porque ya fuera del cargo, sus condiciones de vida no serán demasiado diferentes de las muy modestas que tenía antes, fiel a la tradición republicana seguida por la mayoría de los presidentes chilenos.

Los cambios acelerados, y sorprendentes para muchos, que han venido ocurriendo en América Latina, no se limitan, por supuesto, a formas de vestirse, formales o irreverentes. Lo singular tiene que ver con la identidad de los nuevos actores políticos, se vistan como se vistan, con lo que representan, y con lo que dicen o quieren representar.

Los presidentes que los electores están llevando al poder son, además de dirigentes sindicales, coroneles juzgados por sedición, como Chávez, cardiólogos como Tabaré Vázquez, que reserva un día la semana para ver a sus pacientes en su clínica de Montevideo, o pediatras como Michelle Bachelet; o líderes provinciales de viejos partidos, como el peronista Néstor Kirchner en Argentina. El partido Justicialista de Kirchner siempre ha sido, aún en vida de Perón, una contrastada amalgama de tendencias de derecha e izquierda, baste recordar que al mismo pertenece también Carlos Menem, juzgado por corrupción, y que tiene preferencia por las patillas de prócer y trajes de estrella de la farándula.

Todos son de izquierda, pero no por eso pertenecen a un paisaje político homogéneo. ¿Por qué están allí? ¿Qué los une, y qué los desune? Están allí, en primer lugar, porque en América Latina se ha dado un ejercicio continuado de elecciones desde el fin de las dictaduras militares en los años ochenta del siglo pasado, y los electores, con cotas más o menos altas de participación, están aprendiendo a hacer uso del instrumento que la democracia pone en sus manos, para cambiar la tendencia de los gobiernos. A nadie extraña en Europa que las olas electorales se lleven en un momento a los gobiernos de derecha, más o menos de manera uniforme, y traigan a gobiernos de izquierda para reponerlos, de acuerdo a las circunstancias determinadas por los grandes temas sociales o económicos. Esta

es una razón para explicar los cambios entre nosotros, pero no suficiente, desde luego que los factores de conciencia, determinados por la cultura política, distan de ser iguales en ambos continentes.

A principios de la década de los noventa, la democracia fue puesta en América Latina en el mismo saco junto con las versiones más extremas de economía de mercado. Tras la caída del muro de Berlín y la disolución del llamado socialismo real, todo lo que tenía que ver con participación del estado en la economía, algo inherente a la idea de socialismo, cayó en el desprestigio, y los partidos de izquierda, situados en un espectro muy variado, a falta de un proyecto propio abrazaron el mercado porque a nadie se le ocurría entonces, sino con vergüenza, hablar más de economía planificada, o economía dirigida.

Pero el mensaje del liberalismo a ultranza proclamaba que mientras menos restricciones a la economía de mercado, más pronto llegaría el reino del bienestar y del pleno empleo. Mientras más compañías estatales fueran privatizadas y más se neutralizara el papel del estado, mayores beneficios lloverían al instante sobre la población que, de paso, sólo conocía las consecuencias del socialismo, o sus intentos, por la experiencia de la revolución cubana, y en alguna medida, por la experiencia mucho más heterodoxa de la revolución sandinista en Nicaragua.

Los electores, armados de esperanza, y de paciencia, comenzaron a ver como todas las promesas de bienestar instantáneo tardaban el llegar, y cómo las privatizaciones se volvieron focos de corrupción y enriquecimiento, y cómo los sacrificios impuestos por las políticas fiscales y financieras que debían preparar la llegada del reino, sólo daban como resultado la pérdida de puestos de trabajo, el congelamiento de los salarios, el deterioro de los condiciones de vida, y el ensanchamiento del viejo abismo entre ricos y pobres. Pronto, el modelo llegó a ser no la economía de mercado, sino la sociedad de mercado.

Por otro lado, en no pocos países empezaron a colapsar los viejos sistemas políticos que eran el resultado de pactos de estabilidad democrática, como en el caso de Venezuela, donde socialdemócratas y demócrata cristianos se repartieron el poder tras la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958, y más recientemente como en el caso de Costa Rica, donde el presidente Oscar Arias, como candi-

dato del Partido Liberación Nacional, ha ganado de nuevo las elecciones pero de una manera precaria, frente a un candidato disidente de ese mismo partido, Ottón Solís, que se opone a las privatizaciones y al tratado de libre comercio con Estados Unidos, mientras el partido que representaba la otra mitad del sistema, el Partido de Unidad Socialcristiana, se hundió en el descalabro.

Frente al descrédito por falta de eficacia de la opción de derecha, los electores miran hacia la izquierda. Pero en el fondo, la izquierda, sin un proyecto económico propio, no tiene más que buenas intenciones expresadas en un discurso, a veces radical, lleno de promesas de cambio que no son fáciles de realizar frente a los rígidos planes de ajuste financiero. La vieja izquierda que antes demonizó a la socialdemocracia como una variante edulcorada de la explotación capitalista, no puede ir ahora más allá de un proyecto de economía de mercado reformada, que pueda beneficiar a los más pobres. Pero ninguno de los nuevos gobiernos de izquierda está hablando de cambios estructurales a fondo, como en el pasado.

Tampoco puede la izquierda ofrecer soluciones homogéneas en los distintos países de América Latina donde ha logrado acceder al poder, desde luego que el peso de la heterogeneidad es abrumador, aún para países vecinos entre sí. El discurso de Chávez se puede parecer mucho al de Evo Morales, y los dos discursos, en su retórica, se parecen al de Fidel Castro. Pero de ellos sólo Chávez puede llevar adelante experimentos populistas, porque es el único que tiene las fuentes del petróleo permanentemente abiertas. Y si Chávez amenaza con cortar los suministros de petróleo a Estados Unidos, aunque nunca se atreva a hacerlo, Evo Morales se apresura a dejar claro, ya siendo presidente, que la anunciada nacionalización de los yacimientos de gas ha de variar hacia un entendimiento pragmático con los dueños de las concesiones de explotación, entre los que se hallan compañías privadas españolas, y compañías estatales de Brasil y Argentina, donde hay gobiernos de izquierda a los que respetar, porque tienen intereses nacionales que proteger. Y sabe también que el problema internacional más agudo de Bolivia es el de su reclamo de salida al mar que debe dilucidar con Chile, donde hay otro gobierno de izquierda, también con intereses nacionales que proteger.

No es lo mismo para un líder sindical llegar a ser presidente Brasil, una de las economías más grandes y complejas del mundo, con una industria electrónica y aeronáutica de punta, que presidente de Bolivia, una de las más pobres y marginales. Y no menos distancia media entre Argentina y Uruguay, enfrentados a un conflicto de intereses por la instalación de una planta productora de celulosa de capital con participación española en el río Uruguay, fronterizo entre ambos países. Un enfrentamiento de relieves económicos, pero que se dilucida en el plano ecológico, escasamente atemperado por el hecho de que los presidentes Kirchner y Vásquez se sientan cercanos en ideología.

Pero si algo une a estos gobiernos, en cambio, es el cúmulo de contradicciones con Estados Unidos, que no tiene ninguna política hemisférica, salvo la que resulta de la aplicación de viejos cánones prejuiciados que sólo facilitan la confrontación, y la que deviene de la ambición de llegar a tener tratados bilaterales de libre comercio con cada uno de los países latinoamericanos, sin ceder de manera sustancial en sus privilegios proteccionistas.

Es probable que Manuel López Obrador, candidato de la izquierda que representa el Partido Revolucionario Democrático, gane las próximas elecciones presidenciales de México. Será otro ejemplo de gobierno heterogéneo, de acuerdo a las especificidades de la realidad mexicana, cuya vecindad con Estados Unidos marca sus problemas cruciales: los carteles del narcotráfico, cada vez mejor asentados, las migraciones masivas que un muro de concreto trata de detener, la condición de los emigrantes, y la crisis de la agricultura marcada precisamente por el tratado de libre comercio entre ambos países, del que participa también Canadá.

Pero tampoco la ola que está elevando a candidatos de izquierda a las sillas presidenciales es homogénea en el sentido de pensar que arrastrará también hacia arriba a Daniel Ortega, cuyo pacto de repartición de poder con el reo Arnoldo Alemán, condenado a veinte años de prisión por lavado de dinero, pesa más en la conciencia ciudadana de los nicaragüenses que su discurso radical teñido de populismo. No sólo por el pacto, sino porque ya estuvo en el poder, y la gente no aparta de su memoria los males que puede acarrear la confrontación, el peor de ellos la guerra, vivida en carne propia.

La izquierda tiene el desafío de buscar soluciones a las precarias condiciones de vida de los más pobres, por difícil que la empresa sea, porque en eso reside su esencia, distante del populismo y cerca de la realidad. Pero no menos importante es su hoja de conducta en el ejercicio del poder, lejos de las prácticas habituales de corrupción, aunque se trate de trasgresiones que pretenden sostener el poder mismo. El presidente Lula tuvo que pagar un precio elevado al desviarse su partido de este principio, cuando estalló el escándalo de la compra de votos de diputados. Porque lo que la gente espera es que las cosas cambien, pero que cambien sobre todo en la dimensión ética. Y en éste, y en muchos otros sentidos, la izquierda necesita demostrar que es diferente.

Ya se ve, pues, que del sombrero del mago están saliendo los conejos, pero todos vestidos de distinta manera y color.

Masatepe, marzo de 2006

La cooperación española y América Latina: una agenda compartida hacia la justicia entre hombres y mujeres

AURORA DÍAZ-RATO

Directora General de Cooperación con Iberoamérica, AECI

Tras la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Pekín, en 1995, la igualdad de género –entendida como la aceptación y valoración por igual de las diferencias entre mujeres y hombres y de los distintos papeles que juegan en las sociedades– dejó de ser percibida como un “asunto de mujeres” para considerarse un objetivo que afecta a todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo. Sólo esa visión es compatible con una concepción que asocia al desarrollo con el proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutaban los individuos, hombres y mujeres.

Las orientaciones y acuerdos de Pekín, condensados en la Plataforma de Acción, se reflejaron en distinto grado en los marcos legales e institucionales y en las prioridades políticas económicas y sociales de todos los países, incluidas las políticas de ayuda al desarrollo. La cooperación española fue dando algunos pasos para atraer la atención sobre la igualdad de género a su ámbito de acción. La Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo de 1998 otorgaba base jurídica a este objetivo y el I Plan Director (2001-04) situaba la igualdad entre mujeres y hombres como prioridad transversal en todas las actuaciones de la cooperación española.

Aún cuando el marco doctrinal no estaba adecuadamente fundamentado y no se aplicó de manera consecuente en la cooperación española, sí se lograron ciertos progresos, sobre todo en América Latina. En apenas un lustro se desarrollaron diversas iniciativas dirigidas a fortalecer los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres de muchos países centroamericanos y del cono sur. En la práctica totalidad de los países se pusieron en marcha actuaciones en materia de violencia contra las mujeres: en prevención y sensibilización; en apoyo a la reforma del acceso de las mujeres a la justicia o en el establecimiento de programas de acogida a niñas y mujeres víctimas de violencia familiar. En paralelo, se inició el proceso de consolidación de las estructuras institucionales en el exterior: las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de América Central primero y de América del Sur después, se fueron dotando de personal especializado –responsables y puntos focales de género– con el cometido de promover actuaciones específicas encaminadas al reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres. Más aún, comenzaban experiencias de transversalización de la perspectiva de género al conjunto del programa bilateral de cooperación en algunas OTC de Centroamérica y de Perú, entre otras.

La revisión y valoración de los diez años de la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín permite echar una mirada a los progresos realizados en la conquista de derechos de las mujeres latinoamericanas y, también, a los desafíos pendientes. En la pasada década se produjeron notables avances en el conjunto de la región: en todos los países se llevaron a cabo reformas políticas y cambios legislativos dirigidos a eliminar distintas formas de discriminación hacia las mujeres; el conjunto de países cuenta, así mismo, con mecanismos institucionales, en distinto grado de consolidación, para promover el adelanto de las mujeres. La participación de las mujeres en la vida pública, en particular en los parlamentos nacionales, se ha incrementado, sobre todo en aquellos países que han adoptado medidas de acción positiva. Ha habido, así mismo, un mayor reconocimiento por parte del Estado de la importancia de crear vínculos con el movimiento de mujeres. También, se han multiplicado los esfuerzos para involucrar de manera más activa y responsabilizar a los hombres y a los chicos en las estrategias hacia la igualdad de género. Los indicadores

regionales señalan, junto con el aumento de la esperanza de vida, importantes avances en materia educativa, en particular, en la educación secundaria y superior, donde las mujeres son mayoría. Sin embargo, estos logros no pueden esconder los desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas para eliminar las desigualdades y avanzar en la redistribución del poder entre los sexos. El mayor rendimiento educativo de las mujeres y niñas latinoamericanas no se traduce, necesariamente, en una mejor inserción en el mercado de trabajo ni en la reducción de la brecha salarial. Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo; están sobrerrepresentadas en la economía informal y en trabajos de baja productividad y sus salarios son inferiores a los de los varones en un 35% de promedio. La autonomía económica de las mujeres es un factor clave para incrementar su participación en la toma de decisiones pero es insuficiente si no va acompañada del reparto de las responsabilidades en el ámbito familiar. La distribución desigual del poder y los obstáculos para participar activamente en los procesos de decisión en la esfera pública, en el hogar, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto restringen gravemente el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de las mujeres. Por último, cabe señalar que los beneficios de la igualdad de género no se han distribuido equitativamente: las desigualdades de género, cruzadas con otras formas de discriminación social, racial y étnica determinan que grupos de mujeres rurales, negras e indígenas se encuentren en condiciones de extrema desprotección y vulnerabilidad. Estas diferencias revelan la persistencia de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en la región.

En la cooperación española también se han llevado a cabo cambios sustantivos. A comienzos de 2005, se aprobaba el II Plan Director de la Cooperación Española (2005-08) que señala la lucha contra la pobreza como su principal objetivo y la equidad de género como un componente fundamental para su logro. En el Plan se define que la institucionalización de la perspectiva de género es la estrategia principal para avanzar hacia la igualdad de género pero, además, se reconoce la necesidad de llevar a cabo actuaciones específicas que contribuyan a remover las desigualdades y vulnerabilidades que afectan a las mujeres. Este conjunto de actuaciones, dirigidas a empoderar a las mujeres, se sitúan en el sector denominado ‘Genero y Desarrollo’.

Un nuevo marco político, que se completará en breve con una estrategia específica, y que deja a la cooperación española mucho mejor equipada para abordar las desigualdades y tratar de corregir los desequilibrios en razón al género.

En este contexto, la cooperación española se propone apoyar a los países de América Latina y el Caribe en tres ámbitos fundamentales: por un lado, en la institucionalización del enfoque de género en sus políticas públicas y en la consolidación del funcionamiento de las instituciones que contribuyen a reducir la desigualdad de género; por otro, en el impulso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la región a través de actuaciones integrales en materia de planificación familiar, en el acceso a servicios seguros de atención médica y, también, en la prevención de la violencia de género; y por último, en la lucha contra la discriminación de las mujeres en la esfera del empleo. Para ello, se utilizará el conjunto de instrumentos de la cooperación al desarrollo y a distintos niveles. En primer lugar, a través del diálogo político con nuestros socios, de modo que la igualdad de género sea un objetivo compartido y quede reflejado de manera sustantiva en los acuerdos bilaterales de cooperación. En segundo lugar, en el marco de las actuaciones encaminadas a fortalecer los procesos de integración regional. En América Central se reforzará el apoyo que se ha venido dando a las oficinas gubernamentales de la mujer y a los ministerios e instituciones sectoriales y se intensificarán las actuaciones dirigidas a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Con los países de la Comunidad Andina, y en el marco del programa regional de gobernabilidad, se trabajará porque las reformas de las instituciones políticas y económicas permitan a las mujeres, individual y colectivamente, asegurar su participación y acceso a los beneficios resultantes de dichas reformas.

Las líneas estratégicas de actuación han sido definidas por el conjunto de actores de la cooperación española en los Documentos de Estrategia País, de acuerdo a diagnósticos nacionales. La definición de programas y proyectos bilaterales, sobre la base de evaluaciones de las actuaciones realizadas, permitirá concretar qué medidas se consideren las más adecuadas para promover los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en cada uno de los países. Las alianzas

con la sociedad civil, en particular, con las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres son esenciales para avanzar en los objetivos propuestos. Se promoverá tanto su apoyo directo como vía la co-financiación a organizaciones españolas. Los instrumentos financieros, como el Fondo de Concesión de Microcréditos, ofrecen, así mismo, ventajas singulares para avanzar en la autonomía económica de las mujeres. Por último, la cooperación española ha previsto trabajar más estrechamente con los organismos internacionales más activos en la región: con UNIFEM se desarrollarán actuaciones regionales para prevenir las múltiples formas de violencia contra las mujeres y reforzar su papel como constructoras de paz; también será objeto de atención conjunta la integración de las dimensiones de género, raza y etnia en los programas de lucha contra la pobreza. Por último, en colaboración con el INSTRAW, se pretende reforzar la participación política de las mujeres en los ámbitos de decisión local.

Finalmente, es prioritario el trabajo interno para consolidar una estructura institucional sensible y orientada hacia la igualdad de género. Para ello será fundamental contar con recursos humanos especializados, tanto en la sede central como en las oficinas en el terreno, y sensibilizar y capacitar a todo el personal de la cooperación de modo que cada actuación, cada proyecto o iniciativa que se promueva en la región constituya un paso adelante en la igualdad entre mujeres y hombres. Sólo si la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres pasa a ser responsabilidad de todo el equipo de la cooperación española será posible contribuir al cambio y a la justicia entre los sexos en América Latina.

Madrid, marzo de 2006



América Latina en la mentalidad española

PEDRO A. VIVES

Consultor

“...Aquellos que con augusta seriedad desmentían los hechos imaginados, armándose con la simpleza de la verdad, sólo ganaban aversiones. Juan Pérez de Ortubia, enviado por Ponce de León delante de él en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, al dar cuenta de sus averiguaciones, dijo haber llegado a una "isla grande, fértil y cubierta de magníficos arbolados; que tenía hermosas y cristalinas fuentes y abundantes arroyos que la mantenían en perpetua verdura; pero que no había agua ninguna con la virtud de transformar los entorpecidos miembros de un anciano en los vigorosos de un joven". Nadie le creyó. Quién iba a creerle.”

Sergio Ramírez, “La corte de las maravillas”, *El País*, 15-3-06

Los resultados del estudio *América Latina y la cooperación internacional en la opinión pública española*, realizado por el CIS a instancias de la Fundación Carolina en septiembre del pasado año (CIS, estudio 2617, septiembre de 2005)¹, que acaba de editar la Fundación en la serie Documentos de Trabajo, trazan un perfil de la opinión pública española hacia esa región del mundo que, vistos en perspectiva y detalle, nos sitúan ante una decantación antes sólo sospechada. Más que un estado de opinión, la tendencia que esa encuesta revela es, probablemente, el retorno a su cauce de la mentalidad española respecto a América a sus parámetros previos a 1985/90. Lo que ahora puede interpretarse como pérdida del interés por Latinoamé-

1. Ver en <http://www.fundacioncarolina.es/>

rica podía rastrearse en anteriores consultas posteriores a 1992², y contiene rasgos que antes de esos años no hubieran sorprendido: mayor percepción de semejanza con Europa, focalización de lo latinoamericano en Argentina y México, asunción de una atávica preeminencia de España con respecto a aquel conjunto de sociedades. En síntesis, una persistencia de prejuicios anclados en el desconocimiento sobre el mayor flujo de información acerca del área que, efectivamente, circula en España desde hace veinte o más años.

Las novedades en ese trasfondo son relevantes, y cabe decir que proceden más de los cambios socio-económicos españoles y de la coyuntura propiciada por el quinto centenario que de una transformación de la actitud hacia lo americano. Son novedades relevantes, sobre todo, la consolidación de una minoría de españoles que ahora viajan a América Latina y cuentan con una percepción en directo, también la incorporación de posiciones respecto a la inversión histórica de los procesos migratorios, la asunción del papel de España como donante en la cooperación internacional, y la aceptación mayoritaria de que la corrupción es la causante principal de los sinsabores latinoamericanos. Pero son novedades, si se reflexiona, que en poco varían la mentalidad existente a mediados del siglo xx. Son modernos, o actuales, *los temas* y las fuentes de información, pero no el modo de enfocarlos desde la cotidianeidad española. Y, sobre todo, parece subsistir un aislamiento entre qué idea tenemos los españoles de América Latina y la realidad de esta.

Las conmemoraciones en torno a 1992 generaron, sin lugar a dudas, una predisposición positiva hacia Latinoamérica entre los españoles, que dio por resultados varias consultas en las que esa región aparecía como un foco principal de nuestra atención al plano internacional. Aun entonces, nuestra opinión de lo latinoamericano creo que no pasó de ser una suposición, una hipótesis que acompañaba a las relaciones *iberoamericanas* que por esas fechas apuntaban su primera formulación en el plano oficial. En la medida en que más infor-

2. Estudios del CIS 2310 (1999), 2446 (2002) y 2574 (2004). Para fechas anteriores algunos sesgos pueden identificarse en Pedro Pérez Herrero (dir.), *América Latina y su historia según los madrileños*. Madrid, 1988; OEI.

mación no ha supuesto mejor divulgación, la tendencia a partir de aquello ha sido la pérdida paulatina de interés en beneficio de una *identidad* cada vez más europea, con la ascensión en nuestro imaginario de los Estados Unidos como objeto de atención, así como de África en el apartado de las regiones *necesitadas*. Estos nuevos síntomas son especialmente claros en generaciones jóvenes y aun en las intermedias; y su repunte demoscópico ya tiene un carácter más femenino que masculino. Es decir, no cabe aparcarlos en el casillero de las coyunturas, sino tomarlos en consideración dentro de los procesos sociales de, al menos, mediano plazo.

La tendencia no sólo afecta al interés por noticias, sino también a la prioridad en la cooperación al desarrollo. América Latina sigue siendo el primero y aun el segundo de nuestros objetivos, pero ya sin neta ventaja sobre África, Norte de ese mismo continente o países en vías de desarrollo en general. Y el acortamiento de distancias procede, insisto, de jóvenes, mujeres, el centro-izquierda y niveles altos de formación. Si desde algún conjunto social puede hablarse de prioridad clara de América Latina tanto en la atención que le presta, como en su consideración solidaria para el desarrollo, ese es el corte ideológico de la derecha, en todo caso asentada en las nuevas clases medias. Aparece todavía, lógicamente, una importante bolsa de simpatía y preferencia por América Latina, en los tramos de edad en torno a la cincuentena, y hasta los 65, instalados en el centro-izquierda y en diferentes sectores socio-económicos: componen, seguramente, las generaciones más activas en los ochenta y noventa que tanto debieron a un *galeanismo* español de transición ejemplarizante, escaso conocimiento de las estructuras y venas abiertas con que ilustrar un discurso doméstico de rápida incorporación a los nuevos escenarios de progresismo. Pero esa parte de la opinión española nos jubilaremos pronto (ensimismados en *galeánicos* debates sobre Chávez y Morales).

Lo que apunta la opinión consultada en septiembre de 2005 es que el escenario internacional al que se presta atención es europeo en primer plano, y que tras él el resto de áreas mundiales acabarán ocupando lugares muy parejos, en todo caso dependiendo de criterios de actualidad. América Latina tiene y tendrá un puesto destacado, propio, pero dicha *propiedad* la conforman rasgos pertenecientes a procesos de

la sociedad española anterior a la transición democrática. Si entonces para enfocar lo latinoamericano manejábamos un modelo *republicano* –mirando a México especialmente– y otro *gallego* –con la vista puesta en Argentina y Venezuela, que para el segundo caso bien podría llamarse *canario*–, basados en estructuras de memoria familiar y migrante, hoy en todo caso sumamos otro dominicano pautado por la visita turística, es decir, por nuevas disponibilidades de crédito y gasto en España, por el ascenso socioeconómico y, quizá por ello, por una visión de nuevo distante, en la que viejos argumentos de nostálgica compasión vienen siendo reemplazados por esquemas de moderna solidaridad.

En noviembre de 2004 (CIS, estudio 2583, noviembre de 2004) América Latina, para los españoles, es la región de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez; tras ellos apenas asoman Neruda y Borges. De esa región cuyos ritmos *nos arrebatan* y cuyo cine *nos encandila*, recordamos en pie de igualdad a Luis Miguel (cantando boleros, eso sí), Gardel y Celia Cruz: una idea de contemporaneidad en la que sólo se incrusta Ricky Martin, pero en la que Cantinflas desborda a Chayanne y Gloria Estefan, y en la que Antonio Machín e Imperio Argentina baten en *popularidad* a Andrés Calamaro, Andy García, Carlinhos Brown o Cecilia Roth. Nuestra idea de América (Latina) es, sintomáticamente, la que sigue negándole –porque no entiende– la equis a México.

Porque sucede que desde 1980 a hoy han ido surgiendo referentes nuevos que, de algún modo, introducen sesgos en nuestro modo de mirar a ese continente. El primero fue la metáfora del *punte* euro-americano hoy ya apenas aludido, pero que dejó una impronta de trascendencia benefactora en nuestra mentalidad hacia Latinoamérica. De aquella metáfora casi puede decirse que derivó la implantación de *Iberoamérica* (expresión decimonónica) con una carga de confusión. Por un lado parecía solventar la vieja pugna entre *hispano* y *latino* con una posición centrada, equidistante. Y por otro dejó correr, cuando ya se afianzaba el mecanismo de las Cumbres, el equívoco de sustituir el empleo de Latinoamérica sin aclarar que precisamente las Cumbres concertaban a esa región con España y Portugal.

Valga señalar que cuando en noviembre de 2004 el CIS preguntaba directamente sobre las Cumbres (estudio 2583), centrando en ese tema la encuesta, en la posterior pregunta sobre atención a “ese tipo

de noticias”, la decantación por “muchísima atención” perdía casi 11 puntos respecto a la tendencia en la década hacia las noticias internacionales; y los pronunciamientos por “bastante atención” perdían 33 puntos. ¿Quería eso decir que las Cumbres, lo *iberoamericano*, el discurso España-América Latina, empezaba a ser una *mala forma* de enfocar el interés por los asuntos internacionales?

Apenas un año después esos datos vuelven a su cauce y el interés por “ese tipo de noticias” –las Cumbres– arroja 18% de subida en la adición de respuestas “mucho/bastante”, aunque más del 61% de los consultados declara poco o ningún interés al respecto. Son más los hombres que mujeres con noticia de la Cumbre de 2005, y especialmente entre los 35 y 44 años. Ahora bien, puestos a saber dónde se iba a celebrar dicha reunión resulta que son los mayores de 65 años quienes mejor sabida tenían la noticia. El mayor interés por la Cumbre se daba entre los 55 y 64 años (un 46% con mucho o bastante interés); y el menor entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, que en casi un 71% declaran poco o ningún interés. Eso sí, en todos los tramos de edad hay coincidencia en que las reuniones de los mandatarios son “bastante” importantes para los países latinoamericanos, equilibradamente repartido entre hombres y mujeres que así opinan y con un repunte entre las diferentes clases medias consideradas a la hora de valorar esa importancia. ¿Y para España?

En todos los tramos de edad cae la valoración de las Cumbres para nuestro país. Las opiniones más negativas aparecen precisamente en las generaciones más jóvenes hasta llegar a los 45 años, y sólo a partir de ahí las generaciones mayores conceden más relevancia a las Cumbres para España, aunque todo eso leve, matizadamente. La ausencia de resultados prácticos de las Cumbres anteriores es la crítica más generalizada que, en casos minoritarios de agricultores, comerciantes y pequeños empresarios llega a una descalificación radical, que no es representativa. Y resulta que entre las clases alta, media-alta y nuevas clases medias, la visión negativa se acrecienta. Todo también leve y matizado, sí.

Pero, ¿qué puede estar pesando más, una lejana nostalgia *republicana*, un desencanto en la distancia a ojos del *modelo gallego*, una comprobación autocomplaciente desde la ascendencia del síndrome

dominicano? ¿Podieran ser las Cumbres, con su galimatías de fin de semana mediático y su pompa diplomática, un viento que aviva prejuicios, viejos y nuevos, de distanciamiento en la opinión pública española? Como sea, parecemos tender a considerar que esas reuniones son más necesarias, *lógicamente*, para los *pobres* del encuentro que para nosotros, nuevos y generosos *donantes*. El escaso encaje de las Cumbres en las *preocupaciones* de los españoles sin duda tiene que ver con la caída del interés por el área que lleva ésta a figurar en cuarta posición como primero de nuestros objetivos en política internacional en 2005. La plena prioridad en la política exterior española para América Latina sólo aparece desde los extremos del espectro ideológico, es decir desde derecha e izquierda netas.

Otro referente novedoso en las relaciones con América Latina son, desde el 92 aproximadamente, las inversiones de empresas españolas en la región. De entonces a ahora nuestra opinión pública poco ha modificado una idea dispersa al respecto, pues desde la consulta hecha en 1998 (CIS, estudio 2310, noviembre de 1998) el conocimiento genérico no ha variado. En el 98 un 54,2% de los consultados no sabía o no contestaba o negaba que las empresas españolas invirtieran en aquellos países. Ese mismo grupo de respuestas suma el 56% en 2005, y en él han aumentado quienes no saben –el 51,8% frente al 49,4% anterior– y no contestan. Los que, al respecto, viven en el error son menos ahora –un 1,7% frente al 4,5% en el 98–, y los que están al tanto experimentan un ligero retroceso, pues son el 44,1% en 2005 mientras que en el 98 llegaban al 45,8%.

Los datos de 2005 dicen que los más informados son los hombres, con estudios universitarios o superiores, entre los 35 y 44 años y auto-ubicados en la izquierda principalmente. Y los más despreocupados por el asunto no tienen estudios o sólo primarios, están entre los 18 y 25 años, con más perfil femenino y de derecha ideológica, encuadrados en la vieja clase media o entre obreros no cualificados. Eso sí, en lo que hay un consenso básico es en que eso de la inversión en América Latina es cosa de Telefónica, antes y ahora. Una percepción solidaria seguramente, que en 1998 llevaba a un 55,4% a recomendar que nuestras empresas invirtieran más en Latinoamérica ha decaído en 2005 al 45,2%. En esa opinión se mantienen más

hombres que mujeres, en los tramos de 25 hasta 44 años, con estudios universitarios o superiores, más decantados a la izquierda y entre las clases alta y media-alta. Y a la postre lo que crece ante esa pregunta es el “no sabe o no contesta”, un síntoma de distanciamiento que pasa del 20% a casi un 33% y cuyos perfiles coinciden en gran medida con los menos informados: jóvenes, mujeres, bajos niveles de formación pero en este caso ocupando todo el espectro de centro en materia ideológica.

La imagen que esas inversiones proyectan de España se considera, en general, benévola. Pero ahí termina la luna de miel: la *hipótesis* más extendida en cuanto al impacto de nuestras empresas en tierras latinoamericanas es que se están aprovechando de la pobreza de esos países —un 34,5% opina así—, y que las únicas beneficiadas son las empresas mismas —el 57,6% está de acuerdo con ese diagnóstico—. Conviene encuadrar esa opinión en que nuestras relaciones económicas con Latinoamérica no figuran entre las mejor valoradas (un 38,3% para figurar en tercer lugar), así como que los españoles nos situamos desde hace años en el centro-izquierda y el centro del espectro ideológico mayoritariamente: en noviembre de 2005, en concreto, el 29% en el centro-izquierda y el 26,8% en el centro. Desde esos emplazamientos, es comprensible que entre 25 y 54 años se descarten efectos positivos para el desarrollo latinoamericano, con porcentajes que, en núcleos urbanos, llegan al 70%. Esas inversiones, de algún modo, están ocupando el lugar de los conquistadores en el imaginario del ciudadano español: arriesgan, abusan y están lejos.

Si las Cumbres y las inversiones españolas son cuestiones específicas, tendencias con más alcance global explican la postergación latinoamericana en nuestra mentalidad. Parece existir, por ejemplo, una correspondencia entre las nuevas prioridades de la solidaridad española hacia África con la aplicación del foco mediático en nuestro protagonismo en la ayuda ante catástrofes, naturales o estructurales. También sucede que, en tanto nos seguimos sintiendo más próximos a los países latinoamericanos relacionados con nuestro pasado del siglo xx —Argentina, México, Venezuela o Cuba—, los latinoamericanos que nutren mayoritariamente la inmigración proceden de otros países, Ecuador, Colombia y Perú

sobre todo³, cuyas características étnicas, costumbres y percepción de las relaciones históricas con España no están presentes en nuestra idea de lo americano. Por otro lado, en la mentalidad española pareciera que el desarrollo viniera siendo sido relegado por la emergencia y un altruismo humanitario. Ese cambio de objetivo general ha recibido multitud de parabienes durante las administraciones populares, pero no se inició con ellas sino años antes a raíz del conflicto en Ruanda. No habría que hablar por tanto de un cambio de inspiración exclusivamente ideológico, sino de un giro en la auto-ubicación de la ciudadanía española en el devenir mundial sobre la persistencia, eso sí, de una creciente convicción en la solidaridad interna-cional ratificada consulta tras consulta: tanto el giro como la persistencia aludidos corresponden a nuestro tiempo; América Latina probablemente se ve descolgada en ese proceso.

Añádase un factor de transformación que sí ha tenido carga ideológica, y mediática y propagandista, que conduce a colocar en primera línea del *ideario* sobre América Latina a la corrupción de sus políticos: un reproche, desgraciadamente fundado en varias ocasiones, y que saltó a la palestra en la coyuntura de mayor debilidad política de los partidos y sectores conservadores latinoamericanos –en torno a 1990/95, cuando la generalización de procesos electorales, cuya “formalidad” ahora se trata de “revisar”, los descabalgaba de los gobiernos– y sirvió de eje de descalificación de gobiernos “de izquierda” en Perú, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Colombia, y España, claro, ante el cual resultaba imbatible la alternativa neoliberal.

Este otro icono, la corrupción, se ha instalado en la opinión española sobre América Latina y convive perfectamente con un retorno al paternalismo de *cultura hispánica* –ahora instrumentado por la constatación “moderna” de las dificultades económicas de la región–, la convicción tradicional, e ingenua, de que nuestras relaciones culturales son importantes, y que el deporte pudiera venir en auxilio de la llama viva de la historia compartida. Para encarar la tesitura –lo que no significaría *enmendar* la realidad, sino simplemente, al menos, me-

3. La inversión definitiva de los proceso migratorios españoles en relación con América Latina ya estaba presente en 1975, si bien marginalmente alcanza hasta 1980-93. Anuario de Migraciones 2002. Madrid, 2002, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

jorar nuestra comprensión de las cosas al efecto— el aparato crítico español pudiera presentar alguna que otra insuficiencia. El conocimiento de América Latina en España a través de estudios, investigación, programas universitarios, centros especializados, contó con un salto en el crecimiento de recursos entre 1985 y 1995 como nunca antes había conocido nuestra sociedad. Un crecimiento, vale decir, casi al paso de la expansión de los estudios universitarios. Cátedras, departamentos, centros de investigación, publicaciones, intercambios académicos, programas conjuntos, becas, directamente asociados a lo iberoamericano, son desde aquellos años claramente más numerosos que nunca antes. Sus resultados, sin embargo, están por evaluar.

Si nuestras relaciones culturales con América Latina son sólidas, como creemos —tal vez sea producto de esa “ilusión sobre el pasado”, característica de la sociedad española, a que se refería Ortega en su *España invertebrada*— es difícil digerir por ejemplo que ese aparato crítico crecido haya sido incapaz de trazar un espacio razonable, concreto y mínimamente seguro para el derecho de autor, siquiera en la lengua que compartimos. O que quedemos atrapados en el desencuentro en materia de patrimonio submarino. O que no contemos con voz suficiente para explicar ante el CAD nuestra cooperación en materia de patrimonio arquitectónico. Es difícil digerir que la oferta universitaria española no figure sino como alternativa de segunda en el imaginario de las generaciones jóvenes latinoamericanas.

Entre las capacidades académicas de España en relación con Latinoamérica no figuran el medio ambiente, ni el agua, ni las energías alternativas, ni la gestión del territorio, ni las industrias culturales, ni... Cuestiones que van a ser ejes de la ubicación de espacios multinacionales en el contexto mundial, y que apenas figuran en nuestras relaciones iberoamericanas en la escala de la exploración institucional: y casi siempre para “formar”, rara vez para construir juntos. Nuestro aparato crítico americanista sigue siendo sobre todo eso: *americanista*. Una expresión asociada a la historia imperial, al pasado irreversible estudiado como si fuese a alimentar nuestros más inmediatos desafíos. Arrancó en 1935, en la Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla de la que, sin entrar siquiera en la autarquía, debieron exiliarse Rafael Altamira y Ots Capdequí; los becarios del 35 fueron catedráticos en

el 41 y dieron forma a un programa científico que sigue vigente en departamentos, asignaturas y, sobre todo, en el criterio hegemónico con que la universidad española forma sobre América Latina: el de un proceso social que se agotó antes de 1950 (hay innovaciones: en la Universidad de Burgos, un master “en Cultura Hispánica” forma además sobre el mercado del arte en nuestros días; la Universidad Francisco de Vitoria lo hace sobre las oportunidades de negocio en la región). En los mejores casos, América Latina aparece asociada a la cooperación al desarrollo y/o las relaciones internacionales, y resulta reconfortante el esfuerzo programático que cabe adivinar en la Universidad de Huelva. Pero mayoritariamente nuestros socios iberoamericanos se conocen a través del cristal de la historia o las humanidades: para ensalzar a Isabel la Católica o para abrir las venas de la corrupción con suficiencia.

El seguimiento demoscópico de América Latina en la sociedad española en tanto no se busquen y gestionen cambios en el contenido de nuestras relaciones, ha de arrojar pocas novedades respecto a lo que ahora conocemos y cabe proyectar. La pérdida del interés –más próximo al *pentimento* que al conocimiento en las décadas pasadas– es probable que persista; la única incógnita, a plazos medio y largo, es si esa caída tiene un suelo ya cercano o de alcances insondables. Lo que parece cierto es que el foco en lo latinoamericano está puesto fundamentalmente desde sectores ilustrados y generacionalmente avanzados: sectores minoritarios y en inevitable retroceso demográfico. América Latina no forma parte principal del horizonte efectivo de nuestros sectores sociales medios, de nuestros sectores económicos con proyección, de nuestros jóvenes con la ilusión por contrastar.

Para bien o para mal después de 1992 hemos ido sustituyendo la declamatoria de los lazos por la obviedad de la lengua, y ni en términos culturales como creemos, ni en términos económicos esa sustitución ha dado paso a un conocimiento más cabal, más práctico, más real. Inercia y entusiasmo persisten, solidaridad y modernidad empiezan a mirar para otro lado. No parece entonces conveniente seguir buscando fuentes de eterna juventud.

Córdoba (España), abril de 2006

El nuevo cine iberoamericano

CRISTINA PERI ROSSI

Escritora

Las espero con ilusión y alegría. Las veo, las vuelvo a ver, río y lloro con ellas, recuerdo, reconozco, evoco, reconstruyo una Historia a ambos lados del Océano Atlántico y las recomiendo: son las nuevas películas españolas, argentinas o uruguayas que desde hace quince años constituyen, para quienes amamos la gran pantalla, el mejor cine que se hace en Occidente. El único que puede competir favorablemente con Hollywood y superarlo en calidad humana, en emoción y en sentimiento, sin necesidad de presupuestos astronómicos. Son el triunfo de lo cotidiano sobre los efectos especiales y de las emociones y los sentimientos frente a lo épico; a veces, son el triunfo de lo artesanal sobre la gran industria.

La gran crisis del cine europeo después de los años setenta pareció dejar las pantallas a merced de los efectos especiales, de las grandes producciones norteamericanas para un público adolescente que sustituía a los vaqueros por los robots, las ciudades por las galaxias y las pistolas por los rayos láser. Y de pronto, aparecieron las nuevas películas españolas y argentinas, realizadas con escasos recursos, excelentes guiones y un naturalismo que recuperaba las emociones, los conflictos interpersonales, la *verdad*. La categoría de lo *verdadero* en cine o en literatura escapa a la distinción entre real y falso. *El hijo de la novia*, de J. José Campanella o *La vida secreta de las palabras*, de Isabel Coixet son películas *verdaderas*, aunque se trate de ficción. Y si lle-

nan las salas es porque el público –nosotros– reconocemos en sus guiones, en sus tramas y en su realización algo inconfundiblemente humano: la alegría, el dolor, los conflictos, las contradicciones de la existencia. No nos ayudan a escapar de la realidad, sino a contemplarla a través de otros, y al reconocerla, hacerla más soportable: no sólo nosotros sufrimos, gozamos, discutimos con nuestros semejantes, nos enamoramos o nos separamos, *ellos* también lo hacen; sus debilidades hacen más tolerables las nuestras, pero su nobleza también nos permite reconocernos.

Tanto el cine español como el argentino o el uruguayo han heredado lo más característico del realismo italiano, aquel en blanco y negro que tuvo en Roberto Rossellini, en Vittorio de Sica, en Ermanno Olmi o en Bernardo Bertolucci sus mejores directores: la preocupación por el pasado reciente, por la guerra y sus consecuencias. En España hubo una guerra, en Argentina y en Uruguay, también (la siniestra operación Cóndor que unió a las dictaduras del Cono Sur fue un plan para exterminar a los sindicatos, a las organizaciones estudiantiles, a la oposición perpetrada por ejércitos nacionales contra los que consideraban el enemigo interior).

Un cine de *verdad*, sin escapismos, que aborda humildemente, y casi siempre con un toque de humor la difícil posguerra española, los cambios radicales de una sociedad llena de energía, pero, también, de contradicciones. El éxito del cine de Almodóvar radica, principalmente, en su percepción del esperpento como lo genuinamente español, y su mezcla de lo antiguo y de lo moderno, de lo folclórico y de lo cosmopolita es un aguafuerte inconfundible de los años de la transición. Quizás ninguna película representa esa combinación explosiva de lo moderno con lo tradicional como *Mujeres al borde de un ataque de nervios*. En Almodóvar la parodia bordea la caricatura, pero allí donde ésta se vuelve insoportable, surge el sentimiento, la emotividad para rescatar la situación. El éxito del reciente cine español tiene un ejemplo inconfundible en la película de Alejandro Amenábar *Mar adentro*. Inspirada por un hecho real, el suicidio ayudado de un parapléjico, no tenía ni la posibilidad del suspense ni siquiera de la comedia; sin embargo, se constituyó en una película premiada internacionalmente, y lo que es más importante: el público asistió masivamente. Un público que

no tuvo miedo ni a la tragedia, ni a la escenificación de la muerte; es decir, un público adulto, que no desea evadirse.

El cine argentino, desde el éxito imprevisto de *Martín Hache*, de Alfredo Aristarain fue proyectando sobre la pantalla una serie de películas (la comedia de costumbres, como *El hijo de la novia*, *Cleopatra* –también de Aristarain– *Una noche con Sabina Love*, de Alejandro Agreste o *Nueces por amor*, de Alberto Lecchi o el drama derivado de la dictadura, como la extraordinaria e infravalorada *Vidas privadas*, de Fito Páez, *Garaje Olimpo*, de Marco Becáis) intimistas, dignas herederas de aquel gran guionista y creador del neorrealismo italiano: Cesare Zavattini. Pero una de las cosas más importantes que aportó el nuevo cine argentino fue el reconocimiento del hecho real de que había muchos españoles en Argentina y muchos sudamericanos en España, exiliados o emigrantes cuyas vidas habían estado condicionadas por la guerra o por la dictadura. De este modo, el cine hablaba de lo que no se suele hablar: de las relaciones entre la metrópolis y la colonia, de las costumbres diferentes o de los acentos particulares, sobre la base de un fondo histórico reconocible. Este proceso semejante de ambas cinematografías encontró su mejor expresión en algunas coproducciones, en la incorporación de algunos actores argentinos al cine español, como Cecilia Roth, Héctor Alterio o Ricardo Darín y el éxito de las películas españolas en el Río de la Plata.

El público ha respondido con entusiasmo a este nuevo cine hispanoamericano que no huye de la realidad, que profundiza en ella y que sin embargo, conserva, casi siempre, un sentido del humor que va desde lo esperpéntico (Almodóvar) a lo tierno (Aristarain). Películas que abordan temas tan poco comerciales, en apariencia, como la violencia de género (*Te doy mis ojos*, de Iciar Bollain o la decadencia de una familia burguesa en el Norte argentino, como *La ciénaga*, de Lucrecia Martel) duran meses enteros en cartelera, a pesar de la escasa publicidad. Hay un público adulto para un cine adulto que no es evasivo ni superficial.

Otra característica apunta como rasgo común entre ambas cinematografías: la lenta pero segura participación de las nuevas directoras en esta visión del mundo. Con excepción de Liliana Cavani, el neorrealismo italiano no tuvo directoras mujeres, y tampoco las hubo en la

nouvelle vague francesa. Algunas, como Jeanne Moreau o Monica Vitti, fueron musas (el aporte de esta actriz a las películas de Michelangelo Antonioni cada vez es más reconocido, pese a su proverbial humildad) pero no creadoras, en el sentido que se le da al cine de autor. Era exclusivamente cine de autores, no de autoras. Sin embargo, en el nuevo cine iberoamericano comienzan a aparecer importantes directoras de cine y guionistas. No es que no hubiera ninguna; las había, pero no alcanzaban el prestigio o la popularidad de los cineastas hombres. En España, a excepción de Ana Mariscal, que realizó diez películas con la productora de su esposo, escaseaban las mujeres que estuvieran del otro lado de la cámara. En estos últimos quince años, impulsadas por el extraordinario envite que ha tenido la condición femenina en la cultura española, han aparecido directoras mujeres cuyas películas son fuertes, experimentadas y de éxito: Chus Gutiérrez, Emma Cohen, Gracia Querejeta, Iciar Bollain, Isabel Coixet, Josefina Molina, Pilar Miró o la gallega Pilar Sueiro. En Argentina y en Uruguay ocurre algo semejante.

Entre todas hay que destacar por su carácter excepcional *Whisky*, la película uruguaya que obtuvo el Colón de Oro en el XXX Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en el año 2004. Dirigida por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, el guión narra la pequeña historia de Jacobo Koller, el dueño de una modesta fábrica de medias cuya vida, monótona y rutinaria, parecía el símbolo de una sociedad mortecina, incapaz de cambiar. Hecha de silencios, de gestos menudos, la película se vuelve agobiante y sin aberturas; realizada con mínimos recursos, no sólo obtuvo este premio internacional sino el favor unánime de la crítica y el cariño del público.

Posiblemente nadie esperaba esta eclosión de una cinematografía, la iberoamericana, que no cuenta con grandes recursos económicos, que a veces tiene dificultades de distribución, pero que ha encontrado muchos espectadores, de los buenos, y además, de gran fidelidad. A tal punto que en estos momentos, el estreno de una película española o argentina puede competir sin dificultades con una norteamericana. Prueba de la salud de una cultura en castellano que se salta todos los obstáculos.

Barcelona, abril de 2006

Idea de la cooperación en la mentalidad española

PEDRO A. VIVES

Consultor

España fue receptora de ayuda internacional hasta prácticamente 1980; y antes de todo eso España ha sido una nación maltratada por el devenir de la ilustración primero, de la industrialización después, del capitalismo del bienestar hasta hace bien poco. La transición democrática, pero sobre todo el acceso a un desarrollo sostenido en el contexto de una integración en Europa, ha representado un portazo a un pasado las más de las veces ingrato. Y una parte del ruido de ese portazo parece ser, precisamente, desquitarnos de la conciencia de miseria, del aislamiento, de la insolidaridad sufrida, de las neutralidades soportadas, de las fronteras cerradas.

América Latina y la cooperación internacional en la opinión pública española, el estudio del CIS¹ y la Fundación Carolina de septiembre de 2005, presenta un consenso acerca de la cooperación al desarrollo como expresión de solidaridad colectiva que puede considerarse un rasgo definitorio, y compulsivo, de la sociedad española actual. Sociedad que viene adquiriendo una opinión acerca del destino y la efectividad de la cooperación al desarrollo, y que considera adecuado que España llegue a dedicar para ello el 0,7% de su PIB para reducir el hambre y la pobreza, por más que se reconozca escéptica acerca de esos objetivos.

1. CIS, estudio 2617 de septiembre de 2005.

Básicamente, aunque la sociedad española establece sensata y lógicamente que existe una prioridad de las necesidades internas, ello no lo considera condicionante para la solidaridad con los menos desarrollados, ni para tomar el 0,7% del PIB como objetivo razonable, pues valora que quepa un mayor esfuerzo económico que, por cierto, pone en relación con la existencia hoy de diversos frentes del desarrollo en el mundo además del latinoamericano que seguramente ha servido como fuente de sensibilización de los ochenta a esta parte.

Es comprensible que el conocimiento de la cooperación al desarrollo en el conjunto de una sociedad sea esquemático, tópico incluso. Según la encuesta que comentamos, que incluía la consulta sobre los Objetivos del Milenio, trasciende la existencia de un consenso mayoritario, pero no neto, en que el combate del hambre y la pobreza es el objetivo prioritario. Se trata, sin duda, de la idea más clara a que se dirige la solidaridad. Este acuerdo en torno a hambre y pobreza tiene un cierto acento de género y de edades avanzadas. Para los más jóvenes sin embargo esa coincidencia es más débil y prefieren situarlo más nítidamente en un segundo plano. En conjunto, cabe decir que son dos los temas que dominan el primer plano de prioridad: combate del hambre y la pobreza como queda dicho, y la defensa de los derechos humanos, ambos objetivos muy por delante de los demás que se proponían.

A la hora de conceder un segundo lugar en importancia para la cooperación, los temas destacados son sin embargo tres: de nuevo hambre y pobreza y derechos humanos, pero ahora acompañados por el logro de acceso a la educación. Por cierto que en este segundo grado de importancia aparece un cuarto asunto con perfil relativamente alto, que es la lucha contra narcotráfico y terrorismo que como opción primera no recibe tanta atención. Es relevante en esta selección de objetivos que la defensa de los derechos humanos está asociada al grado de formación de los encuestados, al contrario que la lucha contra narcotráfico y terrorismo. Y que para quienes se autoubican en la derecha, justamente los derechos humanos aparecen por delante del combate del hambre y la pobreza. Lógicamente en este apartado de conocimiento y posicionamiento respecto a los contenidos de la cooperación, el nivel educativo es la variable en la que se apoya el mayor grado de opinión formada. Seguramente relacio-

nado con ello cabe identificar en los tramos de edad más altos una mayor tendencia a no pronunciarse que, tal vez, quepa asociar a un cierto rasgo de escepticismo y no sólo a la falta de información.

Las posiciones expresadas hacia los Objetivos del Milenio (en adelante ODM) proporcionan más matices sobre los temas planteados. En primer lugar los porcentajes más altos de desconocimiento de los ODM se dan en los cortes de edad más jóvenes y de mayores, en el centro-derecha del espectro ideológico y en el medio rural. El conocimiento de los ODM está claramente asociado al nivel de estudios. En cualquier caso, un 25% de conocimiento de un tema, o de su enunciado, que puede decirse que nunca ha contado con una divulgación razonable, puede tomarse como grado satisfactorio de acercamiento de una sociedad a los contenidos de la cooperación internacional. Lo más importante a mi juicio que arroja la consulta acerca de los ODM es el enfoque pragmático, conservatista tal vez, que se proyecta en la confianza o no de consecución de los objetivos para 2015. Los índices más altos de confianza en que se consiga cada uno de ellos (“seguro que sí” y/o “probablemente sí”) se dan para objetivos a los que se puede asociar la existencia de recursos técnicos, científicos –médicos– que los hacen imaginables.

Reducir la mortalidad infantil, la mortalidad femenina en el alumbramiento, y el combate del SIDA, la malaria y otras enfermedades, concitan los mayores porcentajes de confianza en su consecución, seguramente porque se encara la salud como una cuestión técnicamente accesible: la vida cotidiana dice que esos temas se resuelven con recursos que existen. Dicho de otra manera, porque no dependen básicamente de la voluntad política: probablemente, razón por la que no se confía –o se confía menos– en lograr los ODM restantes entre los que están la pobreza, el hambre, la igualdad de género, la educación, y especialmente el medio ambiente y el alivio de la deuda. Ahí se detecta la índole pragmática de la comprensión de la cooperación. Al analizar los rasgos de las posiciones más pesimistas o escépticas en cuanto al logro de los ODM, lo primero que aparece es que tales pronunciamientos aumentan con el nivel de formación de los encuestados. Junto a ese comportamiento general, puede rastrearse que hay diferencias entre el escepticismo de derechas y el de izquierdas.

En torno al centro-derecha se ven más lejanas las soluciones para hambre y pobreza, para el acceso a la educación primaria y para la mortalidad en el alumbramiento; en segundo término ya aparecen el medio ambiente y el alivio de la deuda. Desde la izquierda sin embargo se adopta más radicalidad al desconfiar en resolver el acceso a la educación primaria, la mortalidad infantil y la relacionada con el parto, siendo más liviano el escepticismo respecto al resto de temas. Aunque, eso sí, es a la izquierda del espectro ideológico donde se dan más picos del “seguro que no”.

Un último aspecto de la visión de los contenidos del desarrollo, a través de los ODM, es la posibilidad de identificar una tendencia de desviación de opinión tanto entre los mayores de 65 años y, en menor medida, de los más jóvenes. Una desviación que no es sistemática ni siempre en el mismo sentido, pero que analizada a través de lo que hemos valorado como pesimismo o escepticismo, aparece suficientemente marcado en los ocho objetivos propuestos en la consulta. Entre los mayores de 65 años pareciera darse un menor grado de escepticismo en general, pero más claramente en aquellos objetivos que resultan menos fiables para el conjunto de la muestra. ¿Cabe advertir, a la vista de estos datos, que la sociedad española ha incorporado la solidaridad, pero que no cuenta aún con una comprensión básica del desarrollo?

La desconfianza hacia objetivos en los que pesa la voluntad política, unida a la fiabilidad de la voluntad humanitaria que pone en juego recursos conocidos, apunta hacia la duda señalada. Ciertamente los propios ODM, en tendencia mundial sustentada en políticas de ajuste y convicciones neoliberales, ha orientado la cooperación internacional más hacia la emergencia, la ayuda y la acción humanitarias, que componen el prisma con el que se enfoca y analiza la solidaridad entre sociedades modernas. En este proceso el desarrollo ha quedado desdibujado. Hoy día, y la sociedad española parece no escapar a ello, se asumen mejor criterios caritativos que propuestas de equidad. Y un síntoma relevante de todo el proceso es que los derechos humanos, como bandera de una cultura industrializada, son tanto o más asumidos desde posiciones conservadoras que de progreso, a la hora de incluirlos en una nueva filosofía del donativo. La solida-

ridad, entonces, podría estar adquiriendo valores de contención y asimilación por delante de los de igualdad y redistribución.

En cuanto al conocimiento de los protagonistas ejecutivos de nuestra cooperación, prácticamente el 60% de los encuestados desconoce si su comunidad autónoma dedica recursos a la solidaridad internacional, y el 68% si lo hace su ayuntamiento. Y sin embargo es mayor la inclinación a que las administraciones territoriales dediquen recursos al desarrollo (un 46%), que a considerar que son otras las obligaciones que deben atender (el 40%). Aparte de que sea más desconocido el plano local que el autonómico en términos generales, cabe reseñar que el apoyo a la cooperación descentralizada parece un rasgo generacional nuevo, que de momento se va diluyendo con el aumento de tramos de edad. Entre los mayores de 65 años la prioridad está en el ámbito más inmediato, lo mismo que en los niveles educativos más bajos, en la derecha del espectro ideológico, así como en las viejas clases medias y entre obreros cualificados. Llamativamente, no aparecen rasgos locales, es decir por tamaño de población, en cuanto a apoyo o rechazo de la cooperación descentralizada.

Para la cooperación son necesarias las ONGD. El 65% opina de esa forma al decantarse por asignarles más responsabilidad, frente al 25% que considera al estado responsable principal. Es decir, la cooperación es cosa de los ciudadanos, de la sociedad civil antes que del estado. Esa es una inclinación más femenina y más propia de las edades jóvenes entre los 18 y los 34 años. En sintonía con los vientos neoliberales aún vigentes, las ONGD resultan más fiables para quienes tienen estudios de secundaria y universitarios, quienes se sitúan en el centro político e incluso en el centro-izquierda, para las nuevas clases medias, quienes desempeñan empleos administrativos y para los estudiantes; pero especialmente repunta esa opinión entre quienes no tenían edad para votar en 2004 o dicen haber votado en blanco.

El recuerdo de las organizaciones más señaladas ya avisa de la existencia de solidaridad y generosidad dadivosa en nuestros esquemas. Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, UNICEF y Cáritas encabezan, por ese orden, el *hit parade* de la cooperación española. Cáritas es más nombrada especialmente por hombres mayores de 65 años, habitantes de núcleos pequeños o ciudades medias, con estudios bajos o inexistentes,

que votaron en blanco o al PP, se sitúan en el centro-derecha, se dedican a la agricultura, o son pensionistas u obreros no cualificados, e integran viejas clases medias. UNICEF cuenta preferentemente con un recuerdo más femenino, muy joven y en núcleos pequeños, que no tenía edad de voto o votó en blanco, sin diferencias notables en niveles de formación, pero menudeando en estudiantes y parados, en la derecha y en viejas clases medias. A Cruz Roja resulta difícil rastrearle rasgos destacados; si acaso mujeres, mayores de 65 años, tienen mayor recuerdo de ella. Su implantación histórica, su asociación a servicios médicos, de salud, de urgencias domésticas, quizá explique que también destaque entre entrevistados sin estudios, en centro y centro-derecha, entre agricultores y obreros no cualificados, pero todo ello de forma muy sutil. Vendría a ser una institución de toda la vida que ahora resulta ser ONG. Y Médicos sin Fronteras está en el imaginario sobre todo masculino y en los 45-54 años, con niveles de estudios altos, en el centro-izquierda, entre profesionales y obreros cualificados, en clases alta y media alta: ¿será “médicos” o “sin fronteras”, o las dos marcas las que acudan a la memoria para identificar organizaciones repartidas por el mundo llevando la fiabilidad occidental sin ataduras políticas?

Medicina, emergencia, niños y caridad cristiana: nuestra idea de la cooperación civil al desarrollo desde el emplazamiento mayoritario en el centro-izquierda, sin fronteras, que ningún publicista deberá olvidar. Pero esta cooperación que un 65% considera necesario encomendar a las organizaciones de la sociedad civil debe ser financiada por el estado, según el mismo porcentaje de los encuestados –tres décimas menos, para ser exactos–. Sólo el 21% estima que las ONGD debieran contar sólo con los recursos aportados por simpatizantes y afiliados. Estas posiciones claramente contradictorias con la filosofía que alienta las netas bondades de la sociedad civil, es compartida en todos los tramos de edad con más entusiasmo en los más jóvenes y menos en los mayores de 65 años.

La responsabilidad financiera del estado es más apoyada entre obreros no cualificados y desempleados, perspectiva que comparten las nuevas clases medias y quienes viven en poblaciones pequeñas, por debajo de los 2.000 habitantes. Y, en general, es una opinión con rasgos de género. La contradicción –en términos liberales, claro está– es

menor en los extremos ideológicos, entre comerciantes y pequeños empresarios y entre las viejas clases medias. La cooperación internacional al desarrollo, como vehículo de la pulsión solidaria existente en la sociedad española, parece lógico que encierre actitudes y puntos de vista contradictorios entre paradigmas articulados en dos décadas neoliberales, enfocados desde una mentalidad desarrollista, una mentalidad que recurre al estado como instancia garante. Es lógico, sensato, aunque quepa tildarlo de contradictorio hoy día. Al fin y al cabo, el 87% de quienes responden a la encuesta en septiembre de 2005 nacieron en la España receptora de ayuda al desarrollo.

Es posible, para terminar, referirse a una idea de la cooperación al desarrollo marcado por una pulsión propia del acceso reciente a una modernidad normalizadora en términos históricos. Tal sería el principal soporte de una inclinación hacia la solidaridad internacional masivamente aceptada y aun defendida por la sociedad española en su conjunto. En el contenido y en la articulación de dicha solidaridad habitan sin embargo elementos tradicionales, de bajo compromiso ideológico en todo caso. Además también parece compulsivo el protagonismo adjudicado a la sociedad civil, sin abandonar el depósito de confianza en el estado, en su obligación financiera, así como en la identificación de la complejidad organizativa como garante del funcionamiento, antes que en la inmediatez de lo cercano, lo pequeño y concreto, que seguramente pertenece más a sociedades con fundamentos protestantes y aun calvinistas. Nuestra modernidad solidaria, entonces, posiblemente se nutre de una añoranza de las garantías públicas a las que se reclaman más recursos para llevarla a cabo; se nutre también de una perspectiva cortoplacista, propia de un viejo espíritu dadivoso que ahora manejamos con paradigmas y objetivos de nuestro pasado reciente.

Córdoba (España), marzo de 2006



Tradición Republicana

JUDITH ASTELARRA

Profesora de Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona

Desde la tribuna de invitados de los parlamentarios, en el Congreso de Chile, presencié el cambio presidencial. Con emoción compartí las ovaciones que se le tributaron a Ricardo Lagos, al hacer su última entrada como Presidente de la República y al salir, convertido en el ciudadano Lagos. Sin duda el día pertenecía a Michelle Bachelet, pero no es sobre ella de lo que quiero hablar, sino sobre la República de Chile. Porque muchas veces, especialmente cuando Pinochet era juzgado en Londres, sentí que en este país se desconoce mucho a Chile, más allá de Allende y Pinochet. Y que los análisis de la política chilena que se han hecho reflejan, en gran parte, las vivencias de los sectores progresistas españoles en términos de su propia historia en los años del franquismo y en los de la transición.

Poco después de convertirse en presidente, en su despacho de la Moneda, Lagos, un gran amigo, me comentaba sobre los grandes ejes en los que preveía centrar su mandato. Lo social, sin duda, pero también pensaba que era necesario apoyar los importantes cambios culturales que se estaban produciendo en la sociedad chilena y, desde la perspectiva institucional, recuperar la tradición republicana. Siempre ha sido un gran analista político y el tema de la gobernabilidad ha centrado durante estos años las agendas de los organismos internacionales y nacionales de América Latina. Tres países latinoamericanos, Costa Rica, Uruguay y Chile siempre fueron considerados ejemplos de institucionalidad democrática. Uruguay y Chile han tenido interrupcio-

nes militares de las que se ha salvado Costa Rica, entre otras cosas porque no tiene ejército. En cuanto a Chile, las asonadas militares de finales del siglo XIX, de la primera mitad del XX y la dictadura de Pinochet, han ocupado un espacio de tiempo breve, si se los compara con los de funcionamiento democrático.

Sin duda, la dictadura pinochetista fue la más larga y brutal. La dureza de la represión fue un ejemplo puro y duro de falta de respeto a los derechos humanos, como nunca antes. Aún y así, fue un paréntesis en la institucionalidad republicana de Chile. De partida, no todos los oficiales chilenos formaron parte de este golpe de Estado y Pinochet tuvo que enviar al retiro a muchos militares que se oponían y asesinó al general Prats y al general Bachelet. Pero aún hay más: la continuidad republicana, a partir del fin de la dictadura, no sólo fue institucional sino que alcanzó a las personas. Varios ministros de los gobiernos de la Concertación y muchos diputados y senadores ya lo habían sido durante los años de la Unidad Popular. Conocían por ello lo que es hacer política dentro de las instituciones democráticas y recuperaron sus puestos por el ejercicio de la voluntad popular.

En la cultura política chilena, la ley y la práctica institucional siempre han tenido una gran importancia. Y un buen ejemplo de ello es que un dictador como Pinochet resolviera dotarse de una constitución que establecía que tendría que validar su mandato en un plebiscito. El plebiscito se realizó, con la participación de observadores internacionales que certificaron la corrección del proceso. Tanto el Registro Electoral como las personas que estuvieron a cargo de las mesas, independientemente de que estuvieran a favor del “sí” o del “no”, actuaron con toda corrección. A resultas del triunfo del “no”, Pinochet abandonó el gobierno. Ciertamente, la constitución también tenía otros elementos no democráticos que intentaban dejar cosas atadas, sobre todo la impunidad. Hubo algunos cambios constitucionales después del triunfo del “no” y si no fueron de más envergadura fue porque los partidos que los patrocinaron pensaron que en la siguiente elección obtendrían la mayoría necesaria (2/3) para hacer una nueva constitución. Pero, hasta el día de hoy, el país ha estado dividido en sus resultados electorales en dos mitades (lo que se agravaba en términos de representación por el sistema bino-

minal y los senadores designados). Por eso, para reformar la constitución se ha hecho necesario un pacto político entre la Concertación y la derecha, lo que tampoco es tan extraño en cualquier país democrático.

El proceso de recuperación de las instituciones democráticas ha avanzado con éxito en los tres poderes, incluido el judicial, el más difícil. Con la lentitud que supone hacerlo desde dentro de las instituciones que, como se sabe, son maquinarias burocráticas. La restauración de la democracia chilena no sólo ha incluido el restablecimiento de las instituciones, sino también ha implicado retomar la tradición sobre las formas con que se deben resolver las diferencias políticas, sin llegar a la confrontación y sobre cómo crear un espacio donde el consenso sea posible. Se comenzó con el proceso de reencuentro de las dos fuerzas políticas cuyo desacuerdo fue la principal baza con la que contaron los golpistas: la Democracia Cristiana (DC) y los partidos de la Unidad Popular. Durante los años de exilio, estos partidos (con excepción del Partido Comunista) reconocieron críticamente que la antesala del golpe había sido la creación de un clima de confrontación social y política. De este diálogo surgió la unidad de la oposición a Pinochet. También se admitió que si en 1970 ambas fuerzas políticas —que habían sumado las dos terceras partes de los sufragios con programas coincidentes en cuanto a la necesidad de profundizar las reformas— se hubieran puesto de acuerdo, no se habría producido el golpe. Así surgió la Concertación. Este análisis autocrítico ha estado ausente, hasta ahora, de la reflexión de los partidos de la derecha chilena. Sin embargo, después del abandono del apoyo a Pinochet, ya se ha aceptado la necesidad de pactos políticos con la Concertación, lo que ya inició Lagos con la supresión de los senadores designados. Este es el primer parlamento completamente democrático y se puede pronosticar el avance en materia de cambios constitucionales

En este contexto resulta interesante la recuperación de la tradición cultural republicana que impulsó el presidente Lagos. Los mandatarios chilenos siempre mantuvieron sus residencias privadas y solían ser austeros, sin el boato que suele acompañar al cargo. El palacio presidencial, la Moneda, estaba abierto al público para

que caminara por sus jardines o simplemente acortara el camino entre dos avenidas. Durante la dictadura, la Moneda fue cerrada al público, lo que se mantuvo durante los primeros gobiernos concertacionistas. Lagos no sólo la volvió a abrir, sino que transformó una de sus plazas en un gran centro cultural, convirtiéndola en la “Plaza de la Ciudadanía”.

En estos años, según la CEPAL, Chile encabeza casi todas las estadísticas en materia de reducción de la pobreza, en oferta e igualdad en el acceso a los alimentos, en gastos social por parte del Estado y en la situación laboral. Es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido de manera sostenida en educación en los últimos 16 años. Cuenta con una economía exportadora de punta que divide sus envíos por partes equivalentes entre América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos y con un crecimiento anual del PIB per cápita del orden del 4.1% en promedio de 1990 a 2004. Pero, en cambio, tiene una importante desigualdad social y como herencia de la dictadura una privatización de los servicios públicos, que aún falta recuperar. Son importantes desafíos en el terreno de la economía y la cohesión social. Y tendrá que abordarlos la primera mujer elegida para presidir la República de Chile.

Michelle Bachelet consiguió su candidatura por el apoyo ciudadano, como hizo notar cuando asumió la presidencia. Efectivamente, no había sido especialmente protagonista del juego político partidario y Chile no tiene medidas de acción positiva para las mujeres. Cuando las encuestas mostraron que el mayor apoyo dentro de los dos ejes de la Concertación lo tenían dos mujeres, muchos pensaron que los partidos se sacarían de la manga algún candidato varón, porque haberlos, los había (y con ganas). Pero, las y los chilenos querían un recambio en la élite política y Bachelet, por su condición, pero sobre todo por su historia, simbolizaba la renovación. A pesar de los pronósticos, los partidos terminaron aceptando esta demanda, más allá de sus intereses tradicionales.

Por primera vez en la historia de la República, el trapaso presidencial se ha hecho entre dos militantes socialistas y entre un hombre y una mujer. Lagos ha terminado su gobierno con la mayor cuota de popularidad de un presidente y Bachelet llega con un gran cau-

dal de apoyo entusiasta e ilusionado. Ambos reflejan en su actuación la vocación republicana y han recuperado la mejor tradición histórica de la política chilena. Un buen triunfo no sólo para el socialismo y la causa de las mujeres, sino también para el republicanismo de raíz ciudadana.

Barcelona, mayo de 2006



Mercedes Roffé, la poesía en diálogo con la poesía

MARTA LÓPEZ-LUACES

Profesora de Literatura Española, Montclair State University
Escritora, editora de *Galerna*, *Revista Internacional de Literatura*

Nuria Amat ha señalado muy sagazmente que la lectura es un diálogo con los muertos. Es verdad, y aun así –como la prosa de la misma Amat lo muestra–, pocos diálogos más vivos que los que solemos mantener con los silenciosos habitantes de nuestras bibliotecas.

Ese diálogo incesante –ese rumor continuo del que habló Blanchot– es el que está a la base de la obra de esos pocos poetas hispanoamericanos de las últimas décadas que me gustaría compartir con el lector en esta serie de notas: Mercedes Roffé, Diego Jesús Jiménez, Raúl Zurita y Amalia Iglesias Serna.

En efecto, la poesía de Mercedes Roffé (Buenos Aires, 1954) ha sido descrita de muy diversas maneras, tantas como sus poemarios propician, dada la diversidad de temas y de voces poéticas que se despliegan en ellos. Y sin embargo, basta leer y releer el conjunto de su obra, para ir descubriendo a través de todos sus libros un motivo común: el diálogo con otros poetas, con ciertos tópicos, con algún aspecto de la tradición literaria que la poeta revive y cuestiona de un modo particular en cada uno de sus poemarios.

Explorar un discurso poético en particular: ésa parecería ser la clave que uniría –más allá de sus diferencias– los libros que Merce-

des Roffé ha publicado hasta ahora. En *El tapiz* (publicado bajo el heterónimo de Ferdinand Oziel; Buenos Aires, 1983) Roffé pone en escena diversas estrategias tendientes a la (re)construcción de la figura del poeta decadente, tal como se entendió y desarrolló en la Europa –y parte de las Américas– del siglo XIX. En *Cámara baja* (Buenos Aires, 1987), la poeta desmonta otro discurso canónico: el discurso amoroso tal como fue desarrollado en diversas facetas de la historia literaria –desde Catulo y Garcilaso de la Vega hasta Violette Leduc en *La bastarda* y Djuna Barnes en *El bosque de la noche*–. En *Memorial de agravios* (Córdoba, Argentina, 2002), es el discurso de la legalidad medieval y colonial americana lo que sirve de base, no ya al discurso poético en sí, sino al prólogo con que la autora introduce –y dialoga con– sus propios poemas. Es su libro más reciente, *La ópera fantasma* (2005), el que despliega mayores matices en este sentido, en tanto ese diálogo incesante se extiende bien por encima de lo específicamente literario, indagando y revirtiendo otras lenguas, otros códigos, desde la investigación etnológica –en la sección titulada “Definiciones mayas”– hasta las fórmulas del teatro y del rito –bajo la invocación de Artaud–, así como de las artes plásticas y la música –en las dos últimas secciones– “Teoría de los colores” y “El pájaro de fuego”.

Desde la publicación de libros tan tempranos como *El tapiz*, (1983) y *Cámara baja* (1987), la obra de Mercedes Roffé ha sido reconocida como una de las más renovadoras de la poesía argentina de las décadas recientes. El constante cuestionamiento de los tópicos tradicionales y la sostenida investigación de un amplio repertorio de prácticas literarias experimentales son algunos de los rasgos –en opinión de la crítica Francine Masiello– comunes a la obra de Roffé y a las de otras destacadas voces de su generación, que más han contribuido a reformular la poesía latinoamericana de nuestra época.

En *El tapiz de Ferdinand Oziel* la figura del poeta maldito se reelabora desde ángulos diversos, explorando y subvirtiendo modelos tan claves del género como Nerval, Lautréamont, Baudelaire y Rimbaud. En el escenario poético argentino, la figura del poeta maldito y decadente ha tenido repercusiones importantes; los casos de Leopoldo Lugones y de Jacobo Fijman quizás sean los más reconocidos, por no mencionar la figura clave que fue Alejandra Pizarnik en este

sentido para las y los poetas de las generaciones siguientes. Un lugar similar ocuparía, en el contexto latinoamericano, la memoria del poeta cubano Julián del Casal. *El tapiz de Ferdinand Oziel* se propone como la traducción del francés de una obra cuyo autor sería un pintor de origen argelino, Ferdinand Oziel (1876-1902), una obra de la cual Roffé no sería sino la "editora". El volumen se cierra con un Postfacio –sucintamente firmado con las iniciales JRB–, en el que se resume la vida de Oziel, autor de *El tapiz*, y en el que se citan fragmentos de cartas y reseñas críticas de su obra –materiales todos tan apócrifos como los fragmentos en prosa que constituyen el cuerpo del poemario–. En cuanto al texto que se supone escrito por Oziel, se desarrolla alrededor de la figura de una monja que, "en honor de la Prostitución" borda un tapiz donde se representan diversos personajes y escenas de variada procedencia.

El efecto que producen todas estas capas de máscaras y voces, es el de una quiebra de las fronteras entre el "yo", el "él" y el "ella" y, más aun, entre distintas lenguas, épocas y culturas, al tiempo que otros límites y categorías se desintegran o caen en el proceso. La distancia entre sujeto y objeto y la categórica taxonomía de las formas artísticas –prosa, poema, ensayo, narración, la pintura y el arte del tapiz y de la miniatura– todo se desploma junto con las divisiones tradicionales en campos de trabajo y roles culturales, reorganizándose en un cuerpo nuevo, complejo e inestable. La tradición decadente se presenta en principio como un modo de legitimar y autorizar la propia voz poética, pero es esa misma apelación a lo ya canonizado es el vehículo que sirve para poner en cuestión algunas de las convenciones y supuestos más sólidos de la institución literaria. La aproximación de Mercedes Roffé a la figura del poeta maldito resulta, de este modo, cercana a la estrategia post-moderna de la reescritura como parodia y *critique*.

En su libro *Cámara baja*, la pregunta que funciona como eje central de la obra, sería –según una lectura posible– cómo se delimita un sentido capaz de dar cuenta del cuerpo femenino. En este libro, el cuerpo fragmentado es un objeto de deseo, pero es al mismo tiempo sujeto que desea a otros. Es un cuerpo que cuestiona las imágenes convencionales de lo femenino propias de la lírica tradicional, tanto articulando los presupuestos que yacen detrás de esos tópicos, como

abriendo un nuevo espacio de posibilidades para el “yo” lírico. En la subterránea, mínima, oscura cámara que anuncia el título de este libro, el cuerpo del amor es también el cuerpo del dolor en diálogo con otros cuerpos, construyéndose y deconstruyéndose al unísono.

Memorial de agravios (2002) se planteará como un discurso poético teñido o reinterpretado a partir de una premisa inicial: la de la denuncia y la apelación a una autoridad “superior” tal como se entendió en algunos de los primeros documentos legales de la época feudal y de la implantación colonial en las Américas. Tal como se recuerda en el Prólogo de este libro, “Memorial de agravios” es una expresión legal que se remonta a la Edad Media. En esos documentos, se explica, “un estrato de la jerarquía feudal elevaba una denuncia de las injusticias o abusos perpetrados por el señor feudal contra sus vasallos, ante una instancia de la pirámide social inmediatamente más alta que la de aquel que cometió la violencia. En la época colonial, se llamaba así a los documentos que se le enviaban al rey denunciando los abusos de sus representantes en América.” Sólo que, a diferencia de la concepción medieval y su derivado —el mundo colonial hispanoamericano—, Roffé parece querer decirnos que esa posibilidad de dar voz —y con ella, representación legal— a aquellos que no la tienen ya no parece posible. En *Memorial de agravios* lo que deja de existir es la posibilidad misma de apelar a ninguna autoridad en busca de justicia: el poder se ha vaciado de ideología; por eso de él ya no puede emanar ningún tipo de representación. Por detrás de la constante referencia al sistema jerárquico medieval y colonial, todo el libro resulta así una cabal alegoría de nuestra época. Porque si los memoriales de otros tiempos servían siquiera para darles la ilusión de una voz a los vasallos feudales y a los criollos de la América colonial, este poemario parece decirnos que en el mundo contemporáneo esa ilusión ya no tiene lugar, y que no lo tendrá mientras ciertos sectores sigan siendo sistemáticamente despojados de su voz. *Memorial de agravios* apela así a una instancia mayor, pero que ahora ya no es un estrato más de la jerarquía institucional —como en los antiguos memoriales—, sino la propia conciencia. La poesía, precisamente, por ser un medio cultural y social cuya primera premisa es mantenerse al margen de los medios masivos y su explotación comercial, puede darle voz a ese reclamo o, al menos, traer a primer plano lo

inédito de la condición actual, precisamente, en lo que tiene de más deshumanizante.

En la poesía de Roffé, los diversos registros que conforman el discurso constituyen un palimpsesto de sentidos y niveles de sensibilidad que comprometen al lector a participar en una tarea de transformación. En su obra, la yuxtaposición discursiva nos obliga a repensar las diversas tradiciones que siguen operando en nuestro imaginario actual. Esta tarea de transformación incide también en el lenguaje poético dentro de unos parámetros que podríamos denominar post-modernos. La fragmentación del yo, la simultaneidad como método, la ruptura y la multiplicidad de voces, producen estructuras de significación tendientes a cuestionar y revertir las representaciones habituales tanto del sujeto lírico como de sus objetos de observación y meditación. Es a través de esta permanente puesta en crisis de la tradición y sus tópicos más consolidados que llegamos a una reevaluación del lenguaje y de la realidad de la que intenta dar cuenta.

Para Roffé, escribir es un proceso por el que se altera el lenguaje simbólico. El poema se transforma entonces en un modo de leer la biblioteca, pero también el mundo. Un sistema que intenta traspasar los límites entre lo figurativo y lo abstracto a través de un lenguaje que constantemente subvierta el orden establecido. Por ello mismo, es verdad que tampoco se propondrá otro discurso igualmente congelado para asir lo real: la sola exposición, el desnudamiento, de los discursos literarios—las construcciones culturales e ideológicas del pasado—, basta para exponer la tensión que la historia impone sobre el sujeto.

Mercedes Roffé y su obra poética son parte de un conjunto de esfuerzos que—como se ha señalado— no sólo han dado nuevo curso a la concepción y la función de la poesía en el contexto del pensamiento hispanoamericano sino que han ayudado a iluminar la manera en que el sujeto moderno—dentro y fuera de la poesía, dentro y fuera de una específica situación contextual— se relaciona con el mundo en el que se inserta. Un mundo que—como estos discursos poéticos parecerían indicar— malamente podrá mirar hacia adelante, sin mirar atrás, y cuestionar y revertir aquellos mismos presupuestos que le sirven de base.

Nueva York, mayo de 2006



Los desafíos de la protección social en América Latina y el Caribe

JOSÉ LUIS MACHINEA

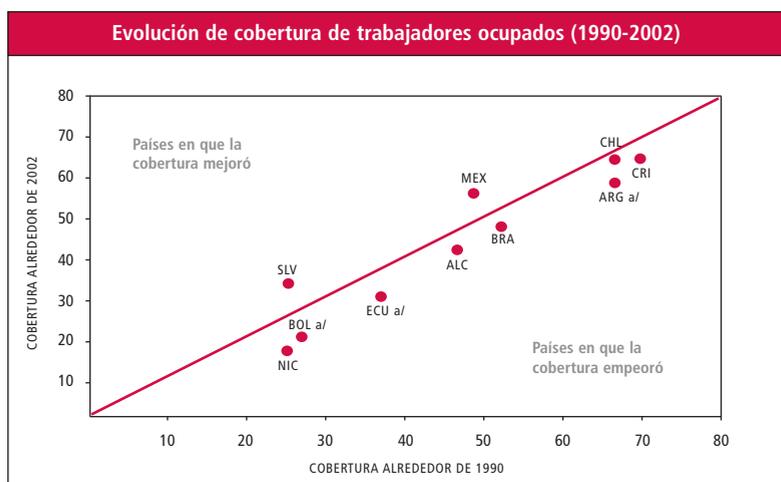
Secretario Ejecutivo de la CEPAL

La situación de la protección social en América Latina y el Caribe reclama un cambio de enfoque ante el nuevo orden global y sus repercusiones en nuestras sociedades. Los principales desafíos de la región en esta materia implican universalizar y mejorar la protección social. La formulación de políticas concretas en este sentido ha sido el objetivo de la CEPAL en el documento “La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad”, presentado en marzo de este año en Montevideo en el marco del Período de sesiones, la asamblea bianual de la Comisión, en el cual están basadas estas reflexiones.

El principal elemento que lleva a repensar los mecanismos de acceso a la protección social es el mercado de trabajo, que no ha demostrado una capacidad incluyente en términos de generación de trabajo decente ni de niveles contributivos. En efecto, las economías de la región no generan suficiente empleo, y los puestos existentes tampoco constituyen una garantía de protección social sobre la base de contribuciones salariales debido a la informalidad y las bajas remuneraciones. De hecho, el modelo de estado de bienestar tradicional, basado en el empleo formal, siempre tuvo un alcance parcial en América Latina y el Caribe. Los mercados laborales de la región

nunca lograron transformarse en la puerta de entrada universal a los esquemas de protección social, pero los cambios recientes han mermado aún más su alcance.

A pesar de la larga trayectoria de los seguros sociales en América Latina y el Caribe, la protección social por la vía contributiva abarca actualmente a solo una fracción de los trabajadores y trabajadoras. La transformación estructural del empleo en los países latinoamericanos, junto a un contexto económico más inestable, se ha traducido en una mayor vulnerabilidad ante el desempleo y una tendencia a la mayor precarización e informalización del empleo. Esta situación es particularmente compleja en los sectores rurales y en el sector informal de la economía, así como para las mujeres que cargan desproporcionadamente con las actividades no remuneradas; además, ni siquiera todos los trabajadores insertos en empleos urbanos formales y en sectores de alta productividad cuentan con una protección garantizada por la vía contributiva. En años recientes, puede destacarse las altas tasas de desempleo, que superaron el 10% en la región en 2003-2004, mientras el empleo en sectores informales representaba al 47% a comienzos de la presente década. De hecho, según los datos disponibles la cobertura contributiva disminuyó en la región entre 1990 y 2003 (como puede verse en el gráfico adjunto).



Fuente: Comisión Europea para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares.

Junto con los problemas del mercado de trabajo y las restricciones fiscales de los países, hay otros factores que agudizan la presión ejercida en los sistemas de protección social. Entre ellos se destacan los cambios ocurridos en las familias, en las que cada vez cobra menor relevancia el modelo tradicional de familia nuclear biparental; la incorporación de la mujer al mundo del trabajo (entre 1990 y 2002, la tasa de participación femenina en zonas urbanas de América Latina aumentó del 37,9% al 49,7%, pero solo el 19% de las mujeres de 15 a 64 años hace aportes al sistema de seguridad social, comparado con un 32% en el caso de los hombres); la transición demográfica (el aumento de la esperanza de vida se traduce en una mayor carga para los sistemas de pensiones, encarece la atención de la salud y acentúa la relación de dependencia entre beneficiarios y contribuyentes); y la mayor volatilidad de la economía.

Por todo ello, la protección social no puede quedar restringida a los mecanismos contributivos que ofrece el mundo laboral formal. Si bien resulta imperativo promover políticas que refuercen el crecimiento económico y generen más y mejores empleos, es necesario considerar que este proceso ha demostrado ser lento, y vulnerable al ciclo de la economía internacional. No cabe entonces esperar que en el corto o mediano plazo el trabajo se constituya en mecanismo suficiente de protección social para la mayoría de la población frente a riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento, entre otros.

La aparición de nuevos riesgos y la persistencia de aquellos preexistentes conducen a replantearse la protección social. El gran desafío es repensar la solidaridad con fines de protección social en el marco de una solidaridad integral, vale decir, tanto dentro como fuera del mundo del trabajo y, en ese marco, replantear los mecanismos de transferencia que permiten plasmar dicha solidaridad integral, garantizando progresivamente un financiamiento adecuado y estable que complemente la protección de origen laboral con mecanismos solidarios de protección no contributiva, hoy en día limitados por recursos fiscales generalmente escasos.

Las distintas reformas aplicadas en los noventa no lograron resolver los problemas de financiamiento y cobertura de los sistemas

de protección social. Es entonces fundamental contar con una agenda de políticas para mejorar el acceso, financiamiento y solidaridad de los sistemas de protección social en los países de la región, tendiendo puentes entre los derechos sociales y los criterios de política destinados a reforzar su exigibilidad. Esta propuestas se basan en la apreciación de que una mejor protección social potencia las sinergias positivas entre equidad social, democracia participativa y crecimiento económico, y constituye así un elemento clave para un verdadero desarrollo.

Las propuestas presentadas en el documento mencionado buscan tender puentes entre los derechos sociales y las restricciones económicas promoviendo un mayor acceso, mejor financiamiento y más solidaridad. Por ello, se presta especial atención a algunos de los principales temas relacionados con la protección social, como los procesos de reforma y diseño de los sistemas de salud y previsión social, y los programas de lucha contra la pobreza. En cada caso, se ofrece una serie de lineamientos que se traducen en propuestas concretas tomando en cuenta los factores peculiares de cada situación nacional, como por ejemplo los niveles de desarrollo, formalidad del mercado de trabajo, y existencia de reformas anteriores: pueden plantearse principios generales, pero no existen recetas únicas frente a la heterogeneidad de la región.

En el caso de los sistemas de salud de la región, las necesidades sanitarias y el perfil epidemiológico de nuestros países determinan una serie de prioridades frente al envejecimiento de la población y el crecimiento en la importancia de las enfermedades no transmisibles. En este contexto de crecientes costos y complejidad, la expansión de la cobertura de servicios de salud y el avance de los principios de la solidaridad debe basarse en la integración de los sistemas públicos y de seguridad social, la expansión de los sistemas de aseguramiento de cobertura universal y obligatoria, y la definición de paquetes de servicios garantizados y exigibles. Asimismo, puede destacarse el esfuerzo reciente en el fortalecimiento de la atención primaria con una serie de iniciativas recientes en distintos países de la región. Asimismo, es importante potenciar la mezcla pública-privada particularmente en la prestación de servicios.

En cuanto a los sistemas de pensiones, es imperativo introducir reformas frente al envejecimiento de la población de la región, el bajo nivel de cobertura previsional, las inequidades de género, y los problemas de sostenibilidad financiera. Las reformas de los sistemas de pensiones deben ampliar la cobertura del componente no contributivo (aquel no ligado a las cotizaciones realizadas durante la vida activa) y, al mismo tiempo, mejorar la solidaridad del componente contributivo. Esta combinación puede lograrse mediante un modelo que integre ambos esquemas, manteniendo los incentivos a la contribución y garantizando la viabilidad financiera a corto y largo plazo.

Finalmente, los programas sociales de lucha contra la pobreza deben de complementar el alivio a la pobreza en el corto plazo con la eliminación de sus causas más estructurales mediante incentivos a la formación de capital humano, de manera de romper el ciclo de transmisión de la pobreza de generación en generación. Para ello, es fundamental promover la articulación de los distintos actores públicos y estatales en esta materia, a fin de potenciar las sinergias y evitar duplicaciones en su implementación.

La viabilidad de estas propuestas requiere en última instancia de un nuevo acuerdo social que tenga a los derechos sociales como horizonte normativo, y a las desigualdades y restricciones de las economías como limitaciones que son necesarios reconocer y enfrentar. En otras palabras, se requiere conciliar los imperativos éticos que sirven de marco a un contrato centrado en derechos sociales con las restricciones financieras que implica el nivel de desarrollo de una economía. El pacto social debe incluir definiciones sobre nivel y fuentes de financiamiento, especificaciones sobre los mecanismos de solidaridad, y la definición de derechos garantizados y exigibles, para lograr avanzar hacia una protección social verdaderamente universal en la región.

Santiago de Chile, mayo de 2006

9793.

下木

7648

2219

413

Mercado, desconfianza y cooperación al desarrollo

FRANCESC GRANELL

De la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

La cooperación al desarrollo hace muchos años que perdura y no existe un consenso amplio sobre sus resultados, pues son muchos los países pobres que, a pesar de recibir ayuda, no progresan demasiado.

Es cierto que los adelantos técnicos de las últimas generaciones han generado avances espectaculares en la esperanza de vida de las poblaciones de la mayoría de los países pobres y en el acceso a determinadas categorías de bienes y servicios, pero no es menos cierto que siguen existiendo amplias capas de población de los países pobres que carecen de casi todo.

El debate sobre la ayuda está por ello más presente que nunca y esto es así tanto porque los ricos de los países ricos no parecen dispuestos a rascarse el bolsillo a favor de los países pobres, cuanto por el hecho –también incuestionable– de que los ricos de los países pobres no parecen dispuestos a compartir su riqueza con sus conciudadanos más pobres.

Tanto los organismos internacionales como las agencias de desarrollo de los países donantes, y la mayoría de las ONG, tienen la convicción de que hay que seguir adelante con la ayuda económica internacional reforzando y mejorando los diferentes instrumentos existentes, pero resulta incuestionable que las fuerzas del mercado tienen

cada vez más importancia para impulsar o no el desarrollo de los pueblos, al tiempo que la ayuda económica internacional va perdiéndola.

Después de la caída del telón de acero en 1989 se tenía una cierta confianza en que se producirían unos dividendos para la paz que ayudarían a que los países pobres pudieran acceder a nuevos instrumentos puestos a su disposición por los países ricos, pero los hechos se han mostrado tozudos y ni los flujos de ayuda oficial al desarrollo están subiendo como se había pretendido en diversas conferencias y, especialmente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo celebrada en Monterrey en 2002, ni los arreglos comerciales a favor de los países pobres, que tenía que traer la Ronda de Doha de la OMC, acaban de llegar porque los lobbies proteccionistas de los países ricos siguen teniendo mucho peso.

Esto no quiere decir que la ayuda no haya registrado ciertos avances cuantitativos y cualitativos, pero está cada vez más claro que los países que progresan en el mundo no son los que más ayuda reciben sino los que mejor se están insertando en la economía mundial, posicionándose en los flujos internacionales de comercio y turismo y atrayendo tecnología e inversiones de la mano de la globalización.

La gran cuestión es cómo debe producirse la inserción adecuada de un país en la economía mundial pues esto va por modas.

Durante largos años se produjo el debate teórico de “ayuda versus comercio” en donde se decía que lo importante no era aumentar los flujos de ayuda financiera hacia los países pobres sino abrir los mercados de los países ricos a las exportaciones de los países pobres.

Hoy en día el debate va por otros derroteros. La liberalización comercial mundial se da por descontada pese a los “reductos proteccionistas” que perduran y existe un amplio consenso respecto a que el comercio sigue siendo muy importante, pero hay muchos otros factores que influyen en las posibilidades de desarrollo. Por si esto fuera poco el sector de los servicios va ganado peso sobre las meras transacciones de mercancías, con lo que el concepto de comercio es hoy más amplio de lo que lo fue en el pasado. La puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio en 1995 consagró esta realidad para siempre jamás.

Los más viejos recordamos como en los primeros tiempos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se creía que la mejor manera de insertarse en la economía mundial era practicando políticas industrializadoras basadas en el nacionalismo, el proteccionismo y la sustitución de importaciones.

Al poco tiempo se vio que los países que se habían lanzado a crear industrias al amparo del proteccionismo y el nacionalismo llegaban muy pronto a situaciones insostenibles de incompetitividad exportadora, al tiempo que sus importaciones no cesaban de crecer al deber importar maquinaria y materias primas para alimentar las necesidades de su nueva industrialización forzada.

Visto el fracaso del nacionalismo proteccionista para promover un desarrollo económico sostenible, el mundo cambió su paradigma y, a mediados de los años ochenta, se fue avanzando hacia líneas de liberalización tanto respecto a comercio como respecto a inversiones internacionales y a otro tipo de transacciones mundiales. La caída del Telón de Acero estimuló la generalización de este paradigma. Fue la etapa de triunfo del denominado “Consenso de Washington” que ayudó al crecimiento pero la “equidad” brilló por su ausencia. La confianza en la fuerza desarrolladora del “mercado” se impuso de forma contundente ayudada por la desaparición *de facto* de la alternativa socialista.

Pronto se vio, sin embargo, que había que contar con las fuerzas del mercado para promover el desarrollo pero que esas fuerzas del mercado no eran suficientes para generar un desarrollo equitativo autosostenible en el Tercer Mundo.

Ciertos movimientos antiglobalización, indigenistas y altermundistas, y los propios estudios de las instituciones internacionales más ortodoxas hicieron que el Consenso de Washington, basado en el liberalismo a ultranza, se modificara con objeto de maximizar los factores de crecimiento que propicia el mercado tratando, al mismo tiempo, de minimizar los costes denunciados y de corregir las insuficiencias derivadas de las estrategias excesivamente liberales aplicadas a través del mencionado Consenso.

Desde finales del pasado siglo los esfuerzos de cooperación al desarrollo ya no se asientan en la idea de que desde las instituciones

pueden impulsarse los procesos de desarrollo en contra de la lógica del mercado, sino en la idea de que las instituciones deben trabajar para corregir las insuficiencias del tipo de crecimiento generado por un mercado no intervenido.

Lo más notable en esta transformación de paradigmas es que todos los actores razonables implicados en el proceso de las relaciones internacionales han visto que lo que no se puede hacer es actuar en contra del mercado sino aprovecharse de él y tratar, simplemente, de intervenir corrigiendo sus insuficiencias.

La realidad del crecimiento de la economía internacional en estos últimos años nos evidencia que son los países que más se han esforzado por integrarse plenamente en el mercado global los que más y mejor han crecido, mientras que los países en los que el mercado no ha funcionado por cuestiones de desgobierno, corrupción, falta de dirección legislativa, o desconfianza han padecido de un estancamiento en su proceso de crecimiento.

Es evidente que el triunfo de las fuerzas del mercado no siempre ha servido para que los “nuevos motores” del crecimiento (comercio e inversiones internacionales) sustitutivos de la ayuda oficial al desarrollo se orientaran hacia los países que más lo necesitan.

Muchos países en desarrollo no se han insertado bien en la división internacional del trabajo por no tener sectores competitivos para poder exportar, a pesar de los esfuerzos institucionales de promoción de exportaciones que hayan podido llevarse a cabo.

En el ámbito de las inversiones mundiales muchos países en desarrollo no se han beneficiado del *boom* de la inversión internacional –que llegó a su punto máximo antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001– porque no han sido capaces de atraer inversiones foráneas, al no tener un mercado doméstico amplio, al no disponer de recursos naturales atractivos y al no poder ofrecer eficiencia a quienes en ellos se instalen.

Por todo esto podemos concluir que son ciertas muchas de las críticas que se hacen respecto a la “tacañería” de los países desarrollados a la hora de votar presupuestos más generosos para ayudar al tercer o de abrir más sus mercados a las exportaciones de los países pobres, pero no podemos olvidar que muchos de los países pobres

del mundo no levantan cabeza porque no son capaces de establecer un marco jurídico y económico que inspire confianza a los operadores económicos nacionales y extranjeros.

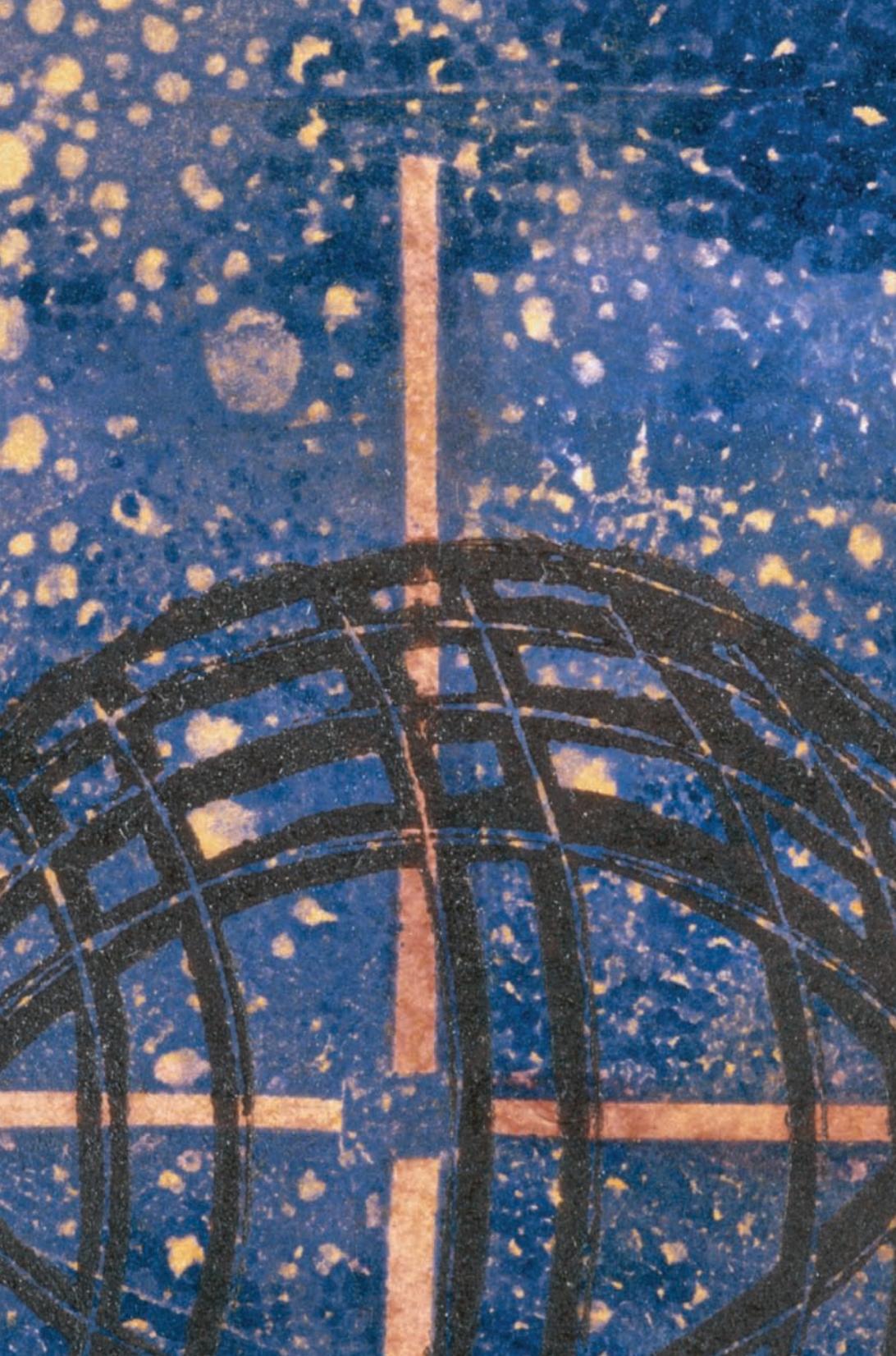
Los gobiernos pueden y deben reclamar más ayuda al desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio pero lo primero que tienen que hacer, si quieren de verdad desarrollarse, es poner su casa en orden, reconocer que las fuerzas del mercado son determinantes para que cualquier proceso de desarrollo avance y establecer una normativa clara, transparente y tranquilizadora para los operadores nacionales y extranjeros.

Ante esta realidad de poco sirven las actitudes antimercado, las actitudes demagógicas y las doctrinas populistas practicadas por ciertos dirigentes de países del Sur, que solamente pueden conducir a sus respectivos países a quedar marginados de la inserción en la economía mundial en que debe basarse cualquier proceso de desarrollo económico.

Es innegable que algunos países del Norte y algunas grandes empresas multinacionales, o hasta ciertos organismos mundiales, pueden haber incurrido en egoísmos y políticas que han conducido a generar reacciones altermundistas y de desasosiego en el Sur, pero la realidad de la economía internacional actual no da margen para demagogias.

El mercado está reñido con la demagogia, y el mercado es hoy más importante que los voluntarismos y la simple ayuda al desarrollo para explicar el desarrollo o el subdesarrollo de los pueblos.

Barcelona, junio de 2006



Nuevo gobierno en Costa Rica: paradojas y desafíos

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA¹

Catedrático de Historia y Ciencias Políticas
de la Universidad de Costa Rica

El pasado 8 de mayo el Dr. Oscar Arias Sánchez asumió por segunda vez la presidencia de Costa Rica. La primera vez que dijo “Sí, juro”, fue otro 8 de mayo hace veinte años, en 1986, cuando Centroamérica se debatía en la peor crisis político-militar de su historia. En aquel entonces era un joven político que había logrado el liderazgo de su partido “sin muletas y sin padrinos”, adalid de la lucha contra las pretensiones hegemónicas de la Administración Reagan en Centroamérica, y líder de las negociaciones regionales que le valdrían, poco después, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz. Hoy, dos décadas después, Arias es un sexagenario que defiende a trancas y barrancas el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. favorecido por el gran capital criollo y transnacional; el escogido de los sectores más conservadores del país quienes apoyaron su candidatura como única opción para preservar sus intereses.

La elección de Oscar Arias el primer domingo de febrero del 2006 siendo esperada, resultó insólita. Dominante según las encues-

1. Fue Embajador para Asuntos Centroamericanos y Director General de Política Exterior de su país. Entre mayo de 2002 y agosto de 2003 fue Secretario General del Partido Liberación Nacional, organización de la cual renunció como militante en el año 2004. Las opiniones vertidas en este artículo son estrictamente personales y no reflejan las de las instituciones con las que el autor se encuentra vinculado.

tas durante toda la campaña, tras dos semanas de recuento de votos (uno de los más reñidos en la historia reciente de Costa Rica) tan sólo pudo aventajar ligeramente a Ottón Solís, líder del Partido Acción Ciudadana, por un escaso punto porcentual, y tan sólo nueve décimas de punto por encima del 40% mínimo exigido para ganar las elecciones en primera vuelta. Pese a recibir un porcentaje mayor de votos, el partido de Arias, Liberación Nacional (PLN), eligió 25 de los 57 diputados a la Asamblea Legislativa (Congreso), cuatro menos de los necesarios para lograr la mayoría simple y muy por debajo de los 38 requeridos para formar la mayoría absoluta sin la cual buena parte de las leyes no pueden ser aprobadas.

De este contexto nació un pacto inusitado e ideológicamente espurio entre el PLN (técnicamente socialdemócrata) y el derechista Movimiento Libertario que, con cinco diputados, ha logrado colocarse en la vicepresidencia del directorio legislativo. Este pacto le permitió a los libertarios la inclusión en la agenda de prioridades oficiales el apoyo a las “empresas turísticas”, eufemismo mediante el cual ese partido cubre las vergüenzas de sus más preciadas aliadas, las empresas de casinos que se han posicionado como agentes financieros claves en el más importante sector de la economía costarricense.

El resultado electoral y sus secuelas constató un hecho histórico esencial: el sistema político costarricense atraviesa por una transición que no culmina sino que se profundiza con estos comicios. Una transición que, dominada por la gradual pero irremisible degradación del Estado Benéfactor, ha traído consigo un agudo deterioro de las condiciones de vida de la “clase media” costarricense, la cual por casi medio siglo fue la principal garante de la estabilidad política de la República.

El “milagro” costarricense, excepcional en casi toda América Latina, fue el resultado de cuatro condiciones concurrentes: a) la decisión de las élites nacionales, tras la derrota de los sectores más conservadores en el conflicto armado interno en 1948, de preservar y ampliar el sistema de garantías sociales establecido desde mediados de los años 40 y, en particular, la existencia de una amplia red de salud pública y pensiones que llegó a tener cobertura universal; b) la promoción de un extendido y poderoso sector estatal con significati-

vas potestades regulatorias en materia de servicios públicos y finanzas, construido a partir de un modelo keynesiano de corte progresista que estimuló el desarrollo de una economía de mercado basada tanto en las exportaciones tradicionales —café, banano, caña de azúcar y carne— como en las pequeñas y medianas empresas agroindustriales; c) la ampliación de la pequeña burguesía rural y urbana (la llamada “clase media”) y su cooptación política por medio de su organización sectorial, gremial y comunal a partidos “de centro” que inhibieron el desarrollo efectivo de opciones viables en los extremos del espectro ideológico; y d) el mantenimiento de una clara alianza con EE.UU. durante los años de la Guerra Fría, alianza que, sin embargo, se dio en un marco de desmilitarización real (Costa Rica abolió sus fuerzas armadas desde 1948) y, más aún, fue capaz de sobrevivir a conflictos significativos con las posiciones de Washington en temas cruciales como, por ejemplo, la resolución de la crisis centroamericana de los años 80 en la que Oscar Arias jugó un papel de indiscutible liderazgo.

Dicho modelo, “ideal” en el contexto regional, fue abandonado gradualmente a partir de la década de 1980, al calor de las reformas estructurales puestas en boga por las corrientes neoliberales. Aunque en Costa Rica su impacto fue mucho más lento que en el resto de América Latina, lo cierto es que, tras dos décadas y media de aplicación sistemática, los resultados de dichas políticas terminaron desmantelando aquel modelo. Y hoy, si bien se mantienen algunos de sus elementos básicos (como por ejemplo el seguro social, la desmilitarización y la democracia formal), la mayoría de los factores esenciales del Estado Benefactor han sido abandonados o debilitados hasta casi desaparecer. Tal es el caso de buena parte del marco regulatorio del Estado, del financiamiento de los servicios públicos —algunos de los cuales se han privatizado o serán privatizados próximamente, como el sector de telecomunicaciones y energía— o la promoción de las pequeñas y medianas empresas industriales y agrícolas que han sido abandonadas a su suerte tras la adopción de un esquema productivo “abierto”, basado en la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones, que favorecen a las grandes empresas transnacionales. La inminente ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. es la mejor prueba de este fenómeno.

Las consecuencias sociales y políticas de esta transformación han sido dramáticas: el país se ha polarizado, y experimenta un proceso de creciente y acelerada exclusión social y deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes. Más del 25 % de la población costarricense sobrevive por debajo de la línea de pobreza (es decir, con menos de 2 dólares de EE.UU. al día); más del 50 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal; el 40% de los jóvenes en edad escolar en el nivel secundario se encuentran fuera de las aulas. Datos recientes revelan la existencia, en los alrededores de San José, de 63 barrios marginales que carecen de los mínimos servicios públicos. Como corolario de todo ello, no se detiene el flujo migratorio desde Nicaragua, que ya representa entre 400 y 600 mil personas (es decir, un número equivalente a más del 10% de la población total del país). Estos inmigrantes, si bien se encuentran trabajando, lo hacen en condiciones laborales de muy dudosa legalidad y alta precariedad, y casi no cotizan a los regímenes sociales, ya de por sí muy menguados por las altas tasas de evasión y corrupción: el Ministerio de Hacienda prevé para el 2006 una evasión del impuesto a la renta cercana al 70%.

Aún si se descartan los pronósticos más catastróficos (por ejemplo, la posibilidad de que se produzcan en el corto plazo alzamientos sociales altamente violentos como los que han afectado a Argentina, Bolivia o Ecuador), la naturaleza de la crisis es tan profunda que es difícil imaginar salidas que no pasen por la puesta en ejecución de acciones democráticas pero verdaderamente radicales que, construidas a partir de un nuevo pacto social amplio, pluralista e inclusivo, modifiquen el actual régimen de dominación y sus nefastos esquemas de concentración creciente del poder económico, financiero y político.

La realidad de Costa Rica no permite hacer cálculos políticos al estilo clásico. El viejo orden bipartidista, conformado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que garantizó la estabilidad a un elevado costo ético por varias décadas, se ha roto. Los grados de legitimidad del sistema político, aunque todavía altos en comparación con los de otros países de América Latina, sufren un deterioro sostenido desde hace más de

diez años. La elevada percepción de corrupción, sumada al descrédito de la clase política promovido de manera para nada accidental por los medios de comunicación más conservadores, constituyen un caldo de cultivo nada propicio para la refundación de la República. En especial, si tal refundación ha de producirse en un contexto internacional como el presente, cuyo factor dominante, EE.UU., impone una hegemonía que limita los márgenes de autonomía relativa para lograr la diversificación de los vínculos de Costa Rica con el resto del mundo.

De todo eso se concluye que las elecciones de 2006 fueron algo más que un simple ejercicio cívico. En efecto, independientemente de los resultados finales la clave está en averiguar si las nuevas autoridades profundizarán el modelo actual sin diálogo social, lo que, habida cuenta de las alianzas dominantes que se vislumbran y de las declaraciones del Presidente, es lo más previsible. Muy pronto, entonces, podrían generarse problemas en las calles. La probable ratificación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. agudizará muchas de las tendencias excluyentes ya descritas y, con ellas, la polarización del país sin que se cuente con un mapa que oriente el tránsito por esa *terra incognita*.

Si, como dice el refrán, “por la víspera se saca el día”, los pronósticos en ese sentido no son halagüeños. La administración Arias ha iniciado funciones en medio de anuncios polémicos e innecesarios, como la intención de trasladar la sede de gobierno al único complejo cultural con que cuenta el país en el centro de la capital San José; o la contratación de algunos asesores para el Gabinete Económico que fueron parte medular del equipo negociador del TLC con los EE.UU., cuyo trabajo en otro momento el mismo Arias criticara. A ello se han de sumar dos decisiones polémicas de la Sala Constitucional, las cuales han invalidado los derechos adquiridos por los trabajadores de varias instituciones públicas a tenor de convenciones colectivas suscritas hace muchos años. El anuncio del Ministro de Hacienda sobre la imposibilidad material del gobierno de cumplir con sus promesas de campaña si no se logra una rápida y contundente obtención de fondos por medio de nuevos impuestos, y el reconocimiento del alto coste político y social que ello tendría si se echa mano al expediente menos

complicado –un aumento en el impuesto a las ventas– enrarecen el ambiente que está pasando “de castaño a oscuro”.

¿Dónde, entonces, está el *quid* de la cuestión? Pareciera que no hay salida sin pacto social, y que no habrá pacto social sin voluntad política de las élites, más allá de las elecciones, y quizás a pesar de sus resultados. Ello no debería ser difícil en un país que, desde la independencia en 1821, ha sido históricamente proclive a ese tipo de ejercicios consensuales. Sin embargo, lo que debería ser algo natural se ha complicado porque dichas élites, las más poderosas de las cuales se han transnacionalizado y son hoy ricas y se sienten invulnerables, se muestran autistas y arrogantes frente a los nuevos desafíos que enfrenta el país. En este panorama, la ausencia de la sensibilidad que en otros momentos permitió evitar la violencia y negociar un curso moderado podría reforzarse tras los comicios del 2006 y la llegada al poder de una administración que no pareciera dispuesta a desafiar el modelo de acumulación prevaleciente.

Fabrice Lehouq, politólogo francés y uno de los más sensibles analistas europeos de la realidad costarricense, ha descrito recientemente al país como un “paraíso que se perdió” (*a Paradise lost*). Un juicio similar ha expresado el estadounidense Stephen Kinzer, periodista estrella del *New York Times Review of Books* quien visitara, después de 18 años de ausencia, una Costa Rica a la que conoció próspera e igualitaria y hoy redescubre empobrecida y con la urdimbre social desgarrada. Ambos observadores han percibido los aires de cambio que han abatido al Estado Social y que hoy amenazan con llevarse consigo la estabilidad política que de aquél se derivara. Ambos han señalado la misma gran paradoja: ¿cómo lograr que Costa Rica se modernice en lo institucional (desafío que obliga a derrotar a la corrupción, la impunidad y a derrumbar las atalayas de los privilegios –públicos y privados– que atentan contra la sana gestión del sistema político en su conjunto), sin exterminar al Estado necesario para evitar que este país se “centroamericanice”?

La interrogante planteada por Lehouq y Kinzer sólo podrá ser respondida desde el turbulento mundo de la política, que en la Costa Rica contemporánea no tiene dueño. Allí radica el desafío mayor: en reconquistar la política para reconstruir los equilibrios perdidos

en una sociedad que durante décadas supo encontrar soluciones adecuadas para neutralizar el conflicto entre capital y equidad; entre ganancia privada y bienestar público.

José Figueres Ferrer, tres veces presidente de Costa Rica y comandante victorioso que disolvió el ejército nacional tras ganar la guerra civil de 1948, un día preguntó, al enfrentar a sus detractores que le reclamaban la decisión de fundar una orquesta sinfónica juvenil en medio de una crisis económica, ¿"para qué tractores sin violines?". Esa lucidez es la que Costa Rica necesita en esta hora de necesidad. Los tractores están en el campo, ¿cuándo tocarán los violines?

San José de Costa Rica, junio de 2006



Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?

BERNARDO KLIKSBERG

Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires

La idea de responsabilidad social de la empresa privada (RSE) avanza aceleradamente en el mundo y en Iberoamérica. Hay quienes la ven como una nueva moda gerencial, que se hará obsoleta prontamente como ha sucedido con otras. Hay quienes la interpretan como un ejercicio actualizado de relaciones públicas. Los datos parecen desmentir ambas visiones. En primer lugar muestran una tendencia en ascenso vigoroso. 2900 empresas de 90 países han suscrito el Pacto Global lanzado por la ONU comprometiéndose a cumplir con los 10 principios de derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción que comprende. 160 empresas líderes mundiales han fundado el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible que promueve el compromiso de las empresas con la sociedad. Crecen y se expanden organizaciones empresariales creadas para similares fines como la “Business round table” de EE.UU., “Business in the Community” de Inglaterra, el Instituto Ethos en el Brasil, y muchas otras.

Un importante grupo de prominentes instituciones financieras que manejan 6 billones de dólares de activos han recomendado recientemente a las empresas y entidades financieras colocar este tema en el centro de su agenda diaria. Señalaron: “Estamos convencidos que en un mundo más globalizado, interconectado y competitivo el

modo en que las empresas gerencien los asuntos del medio ambiente, social y de gobierno corporativo es parte de la calidad de gerencia que necesitan para competir exitosamente. Las empresas que tengan mejor desempeño en estos campos pueden aumentar el valor de sus acciones, por ejemplo gerenciado adecuadamente riesgos, anticipando acciones regulatorias o accediendo a nuevos mercados”.

En realidad la RSE es lo opuesto de una moda. Es parte de un proceso de evolución de la concepción misma de la empresa privada en las últimas décadas. Este proceso está movilizado por poderosas demandas sociales. Las mismas parten del reconocimiento de que la empresa privada es un motor esencial de la economía, y que sus actividades deben ser promovidas y facilitadas pero que, justamente por eso, por su enorme incidencia en la vida de los ciudadanos, tiene que ser considerada como una institución social con responsabilidades calificadas, y debe autoconsiderarse de este modo.

Quienes empujan en esta dirección son actores claves para las empresas y los países. En primer lugar los inversores. Desde Enron en adelante hay en EE.UU. y en otras economías una gran “brecha de confianza”. Los ejecutivos de la séptima empresa de la principal economía del mundo generaron una quiebra fraudulenta de 60.000 millones de dólares causando gravísimos perjuicios a millones de inversionistas, e hicieron perder 2.000 millones de fondos jubilatorios a sus 20.000 empleados. En juicio ejemplar la justicia termina de considerar culpables al presidente y al gerente general del Grupo y antes lo hizo con 28 ejecutivos. Pero advierte editorialmente *The Washington Post*: “Hay un riesgo en este veredicto... que algunos arguyan que el problema de la América corporativa es sólo producto de unas pocas manzanas podridas”. Advierte: “Los escándalos empresariales de esta década no son sólo por algunas manzanas en mal estado, y ponerlas en la cárcel no los va a cambiar”. El *Wall Street Journal* señala que desde julio de 2002 se produjeron 1000 condenas por fraudes empresariales, y miles de millones de dólares en multas. Los inversionistas apoyados por la opinión pública exigen mundialmente una revolución en el gobierno empresarial, con transparencia, mayor participación del accionariado masivo, regulaciones detalladas y efectivas, y crecientemente limitación de la elevación de

ingresos de los altos ejecutivos. Sin ello está en riesgo la confianza, base del sistema económico.

En segundo lugar piden RSE los consumidores. Exigen productos de buena calidad, saludables, precios justos, y se muestran en las encuestas dispuestos a premiar o castigar a las empresas en el mercado según sus niveles de RSE. El Instituto Akatu de Consumo Consciente en el Brasil está tratando de difundir la idea de que una de las dimensiones del ejercicio de la ciudadanía es el consumo. Pone a disposición de los consumidores información sobre la RSE de las empresas para que cuando compren lo hagan de modo consciente, consultando previamente esa información. Dos experimentados asesores financieros, Huston y West, evocan también a los consumidores advirtiéndoles que las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo “no pueden ser ignoradas considerando los miles de millones de dólares que empresas norteamericanas han tenido que pagar en los pleitos masivos por tabacos, asbestos, y productos farmacéuticos, y los potenciales futuros riesgos”.

En tercer término, un rol decisivo es el de la opinión pública. Una encuesta realizada en 2005 en 18 países, encontró que tres de cada cuatro personas dicen que su respeto por las empresas subiría si se asociaran a la ONU para enfrentar los problemas sociales. Estas fuerzas, y la acción de empresarios de punta con alta preocupación social, han impulsado una evolución rápida de la idea de RSE.

Podrían esquemáticamente identificarse varias etapas en este proceso, y ubicarse en cada país en qué etapa están la mayoría de sus empresas. La primera fue la etapa en que dominaba la idea de que la empresa tiene como única obligación generar beneficios a sus accionistas. Choca de frente con las nuevas y generalizadas demandas sociales. Debe generar beneficios pero preocupándose como lo señala el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible “por los empleados, sus familias, la comunidad local, y la sociedad en general, para mejorar su calidad de vida”.

De allí se pasó a la filantropía empresarial, con donaciones en aumento a una rama variada de actividades en muchos casos culturales y educativas. Esos aportes son sin duda valiosos, pero las demandas sociales piden mucho más que eso. Se espera que la empresa

además de aportar dinero, ayude a grandes causas de interés público con su denso caudal de alta gerencia, tecnologías de punta, canales de distribución, conocimientos financieros.

En la nueva y actual etapa, la de la RSE, se pide a las empresas: buen gobierno corporativo, buena relación con su personal, juego limpio con el consumidor, preservación del medio ambiente pero, junto a ello, compromiso social efectivo. Reich critica las desgravaciones que se usan solo para apoyar “cosas como escuelas de élite, salas de concierto, etc.” Señala que “hay que dejar de autoengañarse de que este tipo de filantropía hace mucho por ayudar a los pobres”.

Un último pedido es el de que las empresas globales de países desarrollados ejerzan “un liderazgo global responsable” y practiquen en sus inversiones en países en desarrollo el mismo código de buen comportamiento que aplican en sus exigentes medios nacionales.

Las empresas de punta están ingresando rápidamente en el terreno del compromiso social efectivo. Las iniciativas se suceden. IBM termina de preparar y poner a disposición de las instituciones públicas de salud un sofisticado *software* para ayudarlas a predecir con más exactitud y prepararse para la gripe aviar y otras enfermedades infecciosas. Es el primer producto de la “iniciativa de epidemias globales” que ha suscrito con la Organización Mundial de la Salud, y 20 instituciones públicas de salud. Google está preparando iniciativas para entregar masivamente computadoras a niños en África. Cisco está entrenando en el uso de internet en los países menos desarrollados. El Grupo Santander ha realizado un gran y reconocido esfuerzo en fortalecer la educación superior a distancia en Latinoamérica.

Sin embargo, a pesar de los avances la fijación en las viejas visiones, o la actitud de que la cuestión es simular que se hace RSE mientras la supuesta “moda” pasa, siguen vigentes. En el caso de Latinoamérica hay importantes esfuerzos en marcha, como los que está liderando la Fundación Carolina, institución pionera en tantos campos, pero también resistencias significativas. Los costes son altos. Las empresas atrasadas en RSE lo pagarán cada vez como indican múltiples fuentes, con menos competitividad, baja productividad del personal, y rechazo de consumidores e inversionistas.

Un frente clave es el de la educación en RSE. Se deben abrir en la región iniciativas sistemáticas de formación para los empresarios actuales, y para las nuevas generaciones que se forman en las escuelas de administración, economía, ingeniería y otras. Como enfatiza van Schaik, presidente de la Fundación Europea para el Desarrollo Gerencial, “las escuelas de negocios también tienen que adoptar el concepto de que el bien común es parte de sus responsabilidades, y como las empresas, tienen que alejarse de proteger modelos obsoletos de pensamiento empresarial”.

El tiempo apremia. En un continente como el latinoamericano, con enormes potencialidades pero con tanta pobreza (41 por ciento de la población), exclusión social (uno de cada 4 jóvenes fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo), y la mayor desigualdad de todas las regiones, el rol de la RSE en asistir a las políticas públicas en concierto con la sociedad civil, para enfrentar esos problemas cruciales y alcanzar un desarrollo sostenible es crítico. Es hora de materializarla en compromisos sociales cada vez más exigentes e innovadores.

Washington DC, junio de 2006



Partidos y outsiders en las elecciones peruanas

RAFAEL RONCAGLIOLO

Periodista y sociólogo, jefe de International IDEA
para los países andinos

En 1985, Alan García fue una esperanza y en 2006 apenas un anécdoto. Aquella vez ganó a punta de futuro y hoy llega a pesar del pasado” ha señalado el analista peruano Alberto Vergara¹.

Tiene razón. El itinerario que culmina con el triunfo de Alan García en la segunda vuelta del 4 de junio último, está trazado por un conjunto de sucesivos pronósticos fallidos:

Un año antes de las elecciones se pensaba que podía ganarlas el ex Presidente Valentín Paniagua a la cabeza de un frente llamado “Frente de Centro”, al que, una vez constituido, le faltó el ala con matiz izquierdista que todo centro reclama².

1. Vergara sigue diciendo en su análisis: “Entonces sedujo y hoy no quedaba otra. ¿Es verdad que van a elegir de nuevo a García?, me preguntan los amigos extranjeros. ¿No es acaso uno de los peores presidentes de la historia del país?, insisten. ¿Los libros escolares no recuerdan su catastrófico gobierno?, cuestionan indignados. A todo respondo que sí. Y ¿entonces?, reclaman airados. Entonces, respondo, ¡vayan a saber ustedes cómo, pero nos inventamos una opción peor que García! ¿Peor? Sí, peor.” Alan García ha sido, por cierto, el candidato con mayor rechazo (antivoto) en las encuestas pre electorales del 2006.

2. El Frente de Centro (5,75% de los votos válidos en la primera vuelta) estuvo constituido por el partido Acción Popular (AP), que fuera fundado en 1956 por el luego dos veces Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry y al que pertenece el propio Paniagua; el partido Somos Perú (SP), del ex Alcalde de Lima y ex candidato presidencial, Alberto Andrade; y la Coordinadora Nacional de Independientes (CNI), encabezada por el analista económico Drago Kisc. Andrade proviene del Partido Popular Cristiano, de Lourdes Flores Nano y el CNI nació dentro del frente Unidad Nacional, alentado personalmente por la misma Lourdes Flores Nano. En los preám-

Luego fue la ilusión de Lourdes Flores Nano, durante largos meses primera en las encuestas, que adoptó un discurso fuertemente social, desautorizado por la imagen de sus candidatos y sus trayectorias³.

Y, ya en vísperas de la primera vuelta del 9 de abril y hasta el final, el temor y terror a Ollanta Humala vino a convertir a Alan García en el antídoto de que habla Vergara⁴.

LA VOTACIÓN DEL APRA

Al mismo tiempo, el triunfo de Alan García es el triunfo del partido más antiguo, más organizado y mejor cohesionado del Perú. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fue fundada en México, en 1924, durante el primero de los muchos exilios de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. Pasó a constituirse como Partido Aprista Peruano (PAP) para las elecciones presidenciales de 1931, las primeras en que hubo voto universal, obligatorio, directo y secreto, con Registro Electoral y Jurado Nacional de Elecciones. En aquel *debut* partidario y electoral el candidato del PAP, Haya de la Torre, quedó segundo con el 35% de los votos.

bulos de la campaña electoral, los analistas y periodistas esperaban que formaran parte del Frente de Centro el novísimo Partido por la Democracia Social, de la exministra de Paniagua, Susana Villarán, y el incipiente Partido Humanista Peruano, del Presidente de la Región Lambayeque, Yehude Simon. Estos últimos hubieran balanceado la imagen más bien derechista de los otros aliados de Paniagua. Excluidas del Frente de Centro, estas dos organizaciones lanzaron la candidatura presidencial de Susana Villarán, que obtuvo 0.62 % de los votos válidos. El Frente de Centro, se ha disuelto inmediatamente después de las elecciones.

3. El frente Unidad Nacional (23.81% de los votos válidos en la primera vuelta) ha estado integrado por el Partido Popular Cristiano (PPC), fundado en 1968 como escisión del Partido Demócrata Cristiano (que, fundado en 1956, fue coetáneo de Acción Popular y su aliado en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, en 1963); Solidaridad Nacional (SN) del actual Alcalde de Lima, Luis Castañeda; y Renovación Nacional (RN) del congresista Rafael Rey, a menudo citado como miembro del Opus Dei y considerado, en el pasado, como cercano a Alberto Fujimori. Pasadas las elecciones, Renovación Nacional ha salido de Unidad Nacional.

4. Ollanta Humala (30.61% de los votos válidos en la primera vuelta), fue formalmente candidato de la Unión por el Perú (UPP) el partido formado alrededor de Javier Pérez de Cuellar para su postulación en las elecciones de 1995. Con posterioridad a su inscripción como candidato presidencial, Humala inscribió su partido, el Partido Nacionalista del Perú (PNP), que mantiene su alianza con la UPP. Pasadas las elecciones, ambas organizaciones han sufrido conflictos públicos, expulsiones y deserciones.

El partido fue perseguido entre 1931 y 1945 y entre 1948 y 1956, los largos períodos del martirologio aprista. Pero participó, sólo o dentro de alguna alianza en las elecciones de 1945, 1956, 1962, 1963, 1978 (Asamblea Constituyente), 1980, 1985 (que ganó Alan García), 1990, 1995, 2000 y 2001. Su votación histórica se situó siempre entre el 25 y el 30 de los votos, con la sola excepción de los años 90, la década de Fujimori. En el 2001, con Alan García otra vez, obtuvo 25.78% de los votos válidos. El 9 de abril del 2006 sólo alcanzó el 24.32%: su más baja votación en 75 años, salvo el periodo de Fujimori.

Y si miramos la geografía electoral de este año, el aprismo sólo ganó la primera vuelta en seis departamentos, todos en la costa que es el área moderna del Perú. Lourdes Flores ganó ampliamente en Lima (y sólo en Lima) y Humala en los otros 18 departamentos del Perú.

En la segunda vuelta, Humala ganó en 145 de las 195 provincias del Perú, y García sólo en 50, de nuevo las más urbanas y modernas. Es claro que su triunfo en la segunda vuelta se debe de manera notable a la votación obtenida en Lima, cuando ya no corría Lourdes Flores ni ninguno de los otros candidatos, salvo Humala.

Como lo ha señalado la Comisión Andina de Juristas, Humala ha captado sobre todo el voto de los territorios en que predomina el sector primario de la economía, y García el de las áreas donde predomina el sector terciario. Humala obtiene más votos en los departamentos y provincias con una posición inferior en el Índice de Desarrollo Humano y García en los que están arriba en este índice.

Pero, al mismo tiempo, puede afirmarse que el APRA obtuvo más votos en sus bastiones del norte y en los departamentos donde posee una sólida organización política (como Ica y Pasco) mientras que Humala ganó ahí donde las tradiciones políticas son débiles o han desaparecido, que es particularmente el caso de la sierra sur.

De modo que, sin caer en ningún intento de monocausalidad que pretendiera explicar la conducta electoral, sea sólo por la situación socioeconómica, sea sólo por la acción o inacción de los partidos, hay algo de diferenciación entre modernos y excluidos, entre pobres y ricos, entre las provincias y el centralismo limeño en estas elecciones. Así parece haberlo reconocido el propio Presidente electo al señalar que su prioridad inmediata de gobierno será la sierra sur.

LA NUEVA AGENDA POLÍTICA

En cualquier caso, la campaña electoral ha significado una nueva agenda política para el país. La agenda social se ha colocado en el foco de la discusión política, tal como está ocurriendo en las otras elecciones que se están realizando en América Latina en este año, que es electoral en casi todos los países. Los candidatos peruanos han señalado todos que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del país y para su gobernabilidad. Y en este temperamento han sido acompañados por los principales voceros de las organizaciones sociales, no sólo de trabajadores sino también de empresarios. La lucha contra la pobreza y la disminución de las desigualdades (los temas cruciales del Informe del PNUD sobre la democracia en América Latina) pueden constituir la base de amplios pactos y consensos nacionales. Aquí residen el desafío y el compromiso de Alan García que ha dicho en todos los tonos que no repetirá los errores de su primer gobierno.

En términos de relaciones exteriores, la elección de Alan García significa el fortalecimiento de las relaciones con Brasil, Chile y Colombia, los tres países vecinos elegidos como destinos de las visitas del presidente electo antes de la toma de posesión. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), con cuatro miembros desde el retiro de Venezuela, mantiene las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión Europea y García ya ha propuesto a Chile que retorne al seno de la Comunidad, de la que Chile fue uno de los fundadores, décadas atrás.

EL NUEVO PAISAJE PARTIDARIO

Lo nuevo de estas elecciones peruanas no es la presencia de un *outsider* como Humala. Lo novedoso es que el *outsider* no haya ganado las elecciones. A diferencia de 1990, cuando se impuso Fujimori, y del 2001, cuando triunfó Toledo, esta vez han ganado los partidos. Lo que arroja este proceso electoral es un mandato de convivencia entre partidos tradicionales y movimientos emergentes. Se anuncia incluso que para elegir a la primera Mesa Directiva del nuevo Congreso, el APRA hará mayoría con Unidad Nacional y con el Frente de Centro. Es de-

cir, con las fuerzas que representan a los tres partidos históricos peruanos que conservan vigencia (PAP, PPC y AP). Y dejando en la minoría inicial a las dos fuerzas encabezadas por *outsiders*: el nacionalismo humalista y el fujimorismo.

La valla electoral, que funcionó este año por primera vez en la historia electoral peruana, exige 4% de los votos nacionales para que un partido acceda al Congreso. Se trata con ello de evitar la fragmentación excesiva de la representación nacional. De hecho, para estas elecciones el Perú ha contado con 36 partidos políticos legalmente inscritos y 20 candidatos presidenciales. Pero este propósito aglutinante de la valla queda disminuida cuando la fragmentación se produce después de las elecciones. Por lo tanto, la tarea de dotarse de un genuino sistema de partidos sigue siendo una asignatura pendiente.

El desafío político de esta hora sigue siendo el de construir un sistema de genuinos partidos. El futuro del humalismo depende de su capacidad para convertir un estado de ánimo colectivo (la bronca) en organización coherente y disciplinada. El futuro de los partidos tradicionales en afirmar los consensos sin exclusiones y producir políticas sociales con resultados tangibles para los ciudadanos.

2006 - 2011

Por último, el quinquenio de gobierno que se inicia el próximo 28 de julio dirá si se cumple la agenda de temas de la transición democrática que no se resolvieron en el quinquenio de Toledo. Entre ellos: el regreso a la Constitución de 1979⁵, la reforma militar, la reforma tributaria⁶, el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión

5. El APRA ha propuesto el restablecimiento de la Constitución de 1979, para salir del impasse constitucional derivado de la vigencia de la Constitución de 1993, que pretendió legitimar el golpe que Fujimori dio contra el Congreso en 1992, constitución que fue aprobada por muy estrecho margen en un referéndum de dudosa limpieza. La UPP y el PNP son partidarios de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución pero han expresado que podrían apoyar el regreso a la Constitución de 1979, que permite una mayor acción del Estrado en la economía. El PPC se ha opuesto a ambas propuestas.

6. La presión tributaria es del orden de 13%, a pesar de que el Acuerdo Nacional estableció una meta de 18%, indispensable para afrontar la lucha contra la pobreza y las políticas de redistribución.

de la Verdad y Reconciliación (CVR)⁷, el establecimiento de una genuina y eficaz política anticorrupción y, sobre todo, el despliegue de una economía que logre combinar el crecimiento con el desarrollo humano. Si Alan García lo logra, siquiera en parte, habrá dejado de ser antídoto para convertirse en vitamina.

El Perú ha alcanzado cifras sólidas y sostenidas en sus indicadores macroeconómicos (debido en parte al comportamiento de la economía internacional, no sólo al mérito del gobierno). Sólo si logra indicadores sociales igualmente sólidos y sostenidos (reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad, y para ambos objetivos incremento de la presión tributaria) podrá mirar con optimismo el futuro de su estabilidad democrática.

REFERENCIAS

-Comisión Andina de Juristas, *Análisis social y político del Perú y los resultados de las elecciones generales del 2006*, texto mecanografiado, Lima, 2006.

-ONPE. Oficina Nacional de Procesos Electorales, *Perú: Elecciones Generales 2001, Informe de Resultados*, Lima, 2001

-PNUD, *La democracia en América Latina*, 2004

-Roncagliolo, Rafael, *¿Quién ganó?, elecciones 1931-80*, DESCO, Lima, 1980.

-Transparencia, *Las elecciones que el Perú merecía, informe 2001*, Lima, 2001.

- Vergara, Alberto, *Chichas y limonadas. O del futuro político del país*, texto mecanografiado, Lima, 2006.

-www.onpe.gob.pe

Lima, julio de 2006

7. Los organismos de derechos humanos han expresado su preocupación, dado que el nuevo primer Vicepresidente de la República es un marino retirado, que ha sido crítico principal de la CVR y él mismo acusado de violaciones a los derechos humanos en el pasado.

Relación entre las TIC y el desarrollo: aproximación a los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información

ESTEFANÍA CHEREGUINI

Vocal asesora del gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

Los análisis, informes y argumentos sobre la relación entre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el desarrollo son ya legión. Se han lanzado desde múltiples instancias internacionales de referencia, desde hace ya varios años, y por parte de destacados analistas económicos. Cualquier intento por citarlos se vuelve en seguida farragoso amén de quedarse corto: el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, el G8 que lanzó el DOT Force y aprobó el Plan de Génova, agencias de NN.UU. como el PNUD en sus informes de Desarrollo Humano, la Organización Internacional del Trabajo, el programa especializado infoDev del Banco Mundial

También el último informe del Banco Mundial¹ sobre el impacto de las TIC en el desarrollo económico, apunta datos al respecto destacando que las compañías que invierten en TIC crecen

1. "Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies"

más, son más productivas² y rentables que las que no lo hacen. Apunta también al hecho reconocido de que el acceso a las TIC en los países en desarrollo ha crecido de forma considerable, sobre todo gracias a la telefonía móvil³ (el caso de África es paradigmático) y a la competencia privada. Indica que los países en desarrollo recogen en sus estrategias electrónicas medidas para expandir sus infraestructuras de comunicaciones y señala el papel que juegan al respecto los partenariados públicos-privados (sobre todo para las áreas remotas y rurales). También parece que es una estrategia compartida el dedicar recursos a expandir el uso de las TIC en gobiernos y escuelas.

El citado CAD de la OCDE estima que el uso de las TIC para facilitar el crecimiento económico es razón para introducirlas en las políticas nacionales de reducción de la pobreza y redistribución⁴. El valor de las TIC para el desarrollo resalta al consignarlo en las propias metas de desarrollo de la Declaración del Milenio, (objetivo 8, meta 18⁵); además, se venía poniendo de relieve el papel que podían jugar las TIC en el logro del conjunto de los Objetivos del Milenio.

Finalmente la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), auspiciada por Naciones Unidas (NN.UU.) y organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), supuso el escenario internacional por excelencia para contrastar todas estas reflexiones. La Cumbre ha sido un proceso complejo, tanto por el gran número de actores que ha involucrado

2. Esta relación entre sector TIC y productividad queda ilustrada por el hecho de que en el período 1995-2000, se estima que casi la mitad de los aumentos de productividad experimentados por los países de la OCDE (1,4% de media anual en Europa y 2,5% en EE.UU.) se consiguieron gracias a las TIC [Fuente: Círculo de Empresarios, 2004].

3. Entre 1980 y 2005, el número de abonados telefónicos en los países en desarrollo se ha multiplicado por un factor de 30, pasando de disponer del 20% de las líneas telefónicas al 60%. (Banco Mundial).

4. “[...] although economic growth does not necessarily lead to poverty reduction, reduction in poverty is much more difficult to achieve without economic growth. If ICT does have a positive impact on national economic growth, that should be factored into general development policies for poverty reduction and redistribution.” (CAD 2004, pág. 4).

5. “en cooperación con el sector privado, hacer accesibles los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente la información y las comunicaciones”.

como por su duración, ya que discurrió entre los años 2002 a 2005, si se tiene en cuenta el proceso preparatorio y la celebración de sus dos fases. La primera fase se celebró del 10 al 12 de diciembre de 2003 en Ginebra y la segunda entre el 16 y el 18 de noviembre de 2005 en Túnez.

Las TIC están posibilitando una nueva etapa de desarrollo socioeconómico y la configuración de una nueva sociedad, la sociedad de la información (SI). Ahora bien, este fenómeno no está sucediendo de forma acompasada a nivel mundial, y al igual que las distintas regiones y países no transitan por iguales niveles de desarrollo socioeconómico en general, de igual modo la presencia de las TIC y su contribución a dicho desarrollo no es uniforme, lo que se conoce como *brecha digital*⁶. Un efecto buscado por la Cumbre era que el mayor número de gobiernos y de representantes de la sociedad civil y del sector privado fueran conscientes de este hecho, y que se sumaran voluntades y esfuerzos para conseguir que las TIC no sean un elemento más de desigualdad. La cooperación gobierno-sector privado-sociedad civil es clave. En el caso de la SI es claro que buena parte del despliegue de las infraestructuras necesarias de telecomunicaciones viene de la mano del sector privado, que la sociedad civil es protagonista de la SI y que mediante su acción puede alcanzar a determinados sectores de la población más excluidos.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA CMSI

En la excelente página web www.wsis.org se pueden encontrar todos los datos históricos, resultados estadísticos y documentos sobre la Cumbre. Indiscutiblemente el tema de trabajo de esta Cumbre era la Sociedad de la Información, pero al menos dos visiones eran posibles. *Grosso modo* aquellos países que pensaban que el centro del debate no debían ser los temas de desarrollo, sino los retos y proble-

6. El problema se reproduce en la escala de cada país, existiendo brechas digitales entre distintas zonas geográficas en el interior de los países y entre los distintos grupos sociales, replicando y reforzando en muchas ocasiones las diferencias socioeconómicas preexistentes.

mas que presenta la Sociedad de la Información, ponían énfasis en cuestiones como los problemas de seguridad ligados al uso de las TIC, la ciberseguridad (desde el ciberterrorismo al problema del *spam*), la creación de marcos jurídicos estables y predecibles, o la defensa y respeto de los derechos humanos en el mundo cibernético, como la libertad de expresión. Por otro lado, los que estaban preocupados por la contribución de las TIC al desarrollo querían que el foco de las discusiones fueran cuestiones como el uso de las herramientas TIC para coadyuvar al logro de los Objetivos del Milenio, el servicio universal, la alfabetización digital, o la financiación de las infraestructuras, aunque también resultaban de su interés la renovación del modelo de propiedad intelectual, el uso del software libre o la reforma del gobierno de Internet. Finalmente fueron asumidas todas las cuestiones que se derivaban de ambas temáticas.

En la primera fase se definió una visión común sobre la SI, que se plasmó en una Declaración de Principios y un Plan de Acción. En la segunda fase se recogieron temas que quedaron pendientes (mecanismos de financiación de las TIC para el desarrollo, gobierno de Internet), junto a la tarea de diseñar un esquema de seguimiento futuro de los resultados de la CMSI. Los resultados finales de la segunda fase de la CMSI se consignaron en dos documentos: el Compromiso de Túnez y la Agenda de Túnez.

Como resultados tangibles, además de los documentos aprobados en las dos fases, se puede citar la creación de un Foro de Gobierno de Internet como lugar de encuentro y discusión, de identificación de temas emergentes e intercambio de mejores prácticas en todos los ámbitos relativos al Gobierno de Internet, estando prevista su primera reunión del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2006 en Atenas. Por otro lado, NN.UU. ha iniciado un proceso de coordinación entre sus distintas agencias de desarrollo a fin de impulsar las actuaciones en TIC. Además, el Secretario General de NNUU puso en marcha la “Alianza Global de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo” cuya primera reunión ha tenido lugar en Kuala Lumpur los pasados 19 y 20 junio de 2006.

ALGUNOS ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA CMSI

Además de una participación activa como miembros de la UE en el proceso de la Cumbre, la delegación española se planteó preparar una contribución sustantiva al proceso de debate y reflexión en cooperación con el sector privado y la sociedad civil. En concreto, en la fase I, se elaboró el primer volumen de la obra: *La sociedad de la información en el siglo XXI: un requisito para el desarrollo*, subtítulo *Buenas prácticas y lecciones aprendidas*⁷. En dicha publicación se visibilizaban acciones en inclusión electrónica y aprendizaje electrónico. Cara a la segunda fase de la Cumbre se compendió un segundo volumen de la obra antes citada, subtítulo *Reflexiones y conocimiento compartido*. Se abrió el abanico a 7 temas⁸ y se realizó un análisis que incluía en lo posible tanto la visión española como la latinoamericana. Para esto último se contó con un revisor iberoamericano en cada uno de los capítulos, además de una ponencia de cierre del libro a cargo de José Antonio Ocampo, Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de NNUU. El libro se presentó el día 17 de noviembre en Túnez por parte del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán, en un evento oficial paralelo de la Cumbre.

Por último, y alentados por el ejemplo de la Asociación de Usuarios de Internet, que organizaba en España el 25 de octubre de 2005 el Día de Internet, se llevó a la segunda fase de la Cumbre la propuesta de que se declarase un Día Mundial al respecto. Esta efeméride serviría para dar a conocer mejor la importancia que tiene Internet como recurso mundial, así como las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y a las economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital. La propuesta fue finalmente recogida por la Cumbre como “*Día Mundial de la Sociedad de la Información*” a celebrar el día 17 de mayo de cada año y fue refrendada

7. Disponible en www.desarrollosi.org

8. Contribución de las TIC al desarrollo y a la cooperación al desarrollo, modelos de software, aprendizaje en la red, centros de acceso comunitario, accesibilidad, diversidad cultural y lingüística, y la persona en la SI.

por la Asamblea General de NN.UU. el 27 de marzo de 2006. Este año tuvo lugar la primera celebración oficial del mismo, motivo que aprovechó la UIT para lanzar un premio al respecto que recayó en su primera edición en Muhammad Yunus, fundador del proyecto Grameen Bank y en el presidente de Senegal Abdoulaye Wade, como impulsor del Fondo de Solidaridad Digital.

OTROS RESULTADOS EN ESPAÑA: GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

A veces es tanto o más interesante el proceso que el resultado al que conduce: poner en marcha la maquinaria, crear vínculos, redes de intereses, hacer visibles experiencias... Las Cumbres de NN.UU. son un mecanismo que mueve a la reflexión sobre temas de la mayor importancia para el desarrollo humano, y no es desdeñable el efecto de movilización y suma en un instante concreto de esfuerzos intelectuales que conlleva. Así, el proceso de la Cumbre ha puesto de manifiesto en España nuestras propias carencias: no como país que está inmerso en el desarrollo de la Sociedad de la Información (en la senda europea) sino por ejemplo carencias en el uso de las TIC en la cooperación española. Hay que visibilizar y potenciar el uso de las TIC en la cooperación al desarrollo, como herramienta que proporciona mejoras de gestión, eficacia y efectividad y como reconocimiento al hecho de que es un elemento sobre el que se construye el nuevo desarrollo socioeconómico de los países. Tanto en las fases de Ginebra como de Túnez se recaló específicamente el mensaje de que las agencias de ayuda oficial al desarrollo debían integrar las TIC en el desempeño de su labor.

En línea con estos mensajes el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, incluía la propuesta de elaborar una Guía para la integración de las TIC en las actuaciones de la Cooperación española. El borrador de esta Guía ya ha sido puesto a disposición de los actores del sistema de la cooperación al desarrollo para comentarios y se espera que su versión final sea presentada por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, a mediados de julio de 2006.

La Guía supone, por tanto, un primer paso en el reconocimiento de las TIC como instrumento propio de la cooperación al

desarrollo del siglo XXI. Son muchas las facetas y los papeles que pueden jugar las TIC en el sistema de la cooperación, y todas, en mayor o menor extensión, se han abordado. En este sentido, se ha considerado la utilidad de las TIC como herramienta que facilita los flujos de información y la gestión del conocimiento, cuestiones de gran valor en sistemas tan descentralizados como la cooperación española. Por otro lado, se repasa el papel de las TIC al servicio de la cooperación como instrumentos que coadyuvan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Dentro de dicha faceta se analiza su potencial para las acciones de cooperación de lucha contra la pobreza, y en campos como la salud, educación, sostenibilidad del medio ambiente, entre otros.

La Guía propone también una serie de acciones –un total de 17– para impulsar la integración de las TIC, tanto en la dimensión de trabajo interna (arquitectura informacional, estrategia de gestión del conocimiento, e-servicios, formación general en uso de TIC, etc.), como en la dimensión de trabajo externo (formación sobre la aplicación de las TIC en la cooperación al desarrollo, apoyo a proyectos de cooperación que integren TIC, elaboración de una estrategia sobre TIC y desarrollo, creación de redes de personal y proyectos, etc.) o las referidas al conjunto del sistema español de la cooperación (comité informal sobre TIC y desarrollo, portal web de la cooperación española, potenciar la investigación sobre TIC y desarrollo, conferencias...).

Parece claro que se abre una puerta y que en los próximos años se tendrán que consolidar las reflexiones y propuestas de esta Guía para lograr una integración real de las TIC en el sistema español de cooperación al desarrollo. De forma esperanzadora el camino que se empezó a andar en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en compañía de expertos de la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales, así como con socios europeos e iberoamericanos, en un proceso continuo de influencia y mejora mutua, está dando sus primeros frutos.

Madrid, julio de 2006



Culturas alternativas, culturas de punta, nosotros y nuestras circunstancias

JOSÉ ROJAS BEZ¹

Profesor Titular del Instituto Superior de Arte de Cuba

*Injértese en nuestras repúblicas el mundo;
pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.*

José Martí: *Nuestra América* (1891)

*Yo soy yo y mi circunstancia,
y si no la salvo a ella no me salvo yo.*

Ortega y Gasset: *Meditaciones del Quijote* (1914)

Reflexiones y desvelos motivados por el dominio y los influjos de una cultura sobre otra han existido siempre, aunque nombrados o conceptuados de distinta manera, desde las más remotas culturas y Estados.

Si bien los actuales términos de *globalización*, *cultura masiva* y sus similares faltaron en aquellos antiguos discursos, no escaseaban otros como *pueblo*, *tradiciones*, *contaminación*, *profecías e instrucciones*, referidos básicamente a cultos y costumbres; de manera tal que la proclamación y defensa de cierta “pureza” alentó perennes batallas de estadistas y líderes espirituales con ceño bastante fruncido, a quienes no faltaban sus razones, pues estaba en juego el equilibrio del Estado o la comunidad.

1. rojasbez@hotmail.com

Con el decursar de los tiempos fue quedando claro que los influjos no resultan necesariamente negativos. Puede que sí y puede que no.

Abundan ejemplos de cada tipo, desde la propia Antigüedad, en las hordas e Imperios devastadores o, por el contrario, en movimientos espirituales que enriquecieron al hombre, como las religiones de fraternidad y amor y como la ciencia helenística; y, personalmente, simpatizo con todo influjo que añade, aumenta las posibilidades, perspectivas, modos de ser y actuar, sin reducir al *otro*, respetando identidades y valores propios, más bien, proporcionando valores añadidos.

¿Cómo discriminar con precisión uno u otro caso?

No creo que existan patrones de medida absolutos, dígase *progreso*, dígase *evolución* o cualquier otro concepto de similar índole, siempre susceptible de interpretarse y reinterpretarse.

Creo, sin embargo, que algunos conceptos devienen señeros. Por ejemplo, *identidad y enriquecimiento de posibilidades* y, no en balde, resulta preocupación común la actual globalización, que suele implicar una masificación de la cultura y, con ello, una pérdida o empobrecimiento antes que un desarrollo o evolución enriquecedora de las identidades nacionales y regionales.

Bastante más acá, en el tiempo y ámbito sociocultural de toda América y, en especial de Iberoamérica –conjunto de naciones constituidas por las mayores confluencias e intercambios universales dados hasta hoy–, los conceptos que han modulado tal problemática hablan de *civilización y barbarie*, *Nuestra América* y, más recientemente, *cultura masiva*, *globalización e identidades*.

Sobra decir que las visiones no sólo han sido múltiples, sino aun discrepantes. Ejemplos cimeros, la del argentino Sarmiento, la del cubano Martí, la del ecuatoriano Rodó, la del mexicano Vasconcelos y la del español Ortega y Gasset.

Vale la pena reflexionar siempre sobre todas. Propósito al que invitamos y nos interesa cumplir, pero invitación que dejamos hecha dada nuestra obligada brevedad aquí donde, de todos modos, quisiéramos rememorar que hace ya 80 años, Ortega alertaba con asombrosa sagacidad, en su *Rebelión de las masas* (originado en 1926), sobre los peligros de la estandarización y, junto a ella, los influjos de los discursos y proyectos demagógicos en las masas populares.

Discreparíamos de algunos tonos y aseveraciones; pero nos vemos obligados a reconocer que los efectos empobrecedores y manipuladores de la estandarización y de la dominación técnico-económica (a más de pseudocultural) que le acompaña han sido advertidos desde hace buen tiempo.

A la evidente multiplicidad de recursos para la dominación económica o político-económica se sobreponen los fenómenos de la estandarización –desde los gustos hasta los hábitos y costumbres–, y de la masificación de las personalidades; basados a menudo en el real o supuesto *confort* pero también, y ello siempre, en los métodos de la repetición y la des-identificación potenciados por los modernos medios de comunicación y las cadenas estandarizadas de servicios públicos.

Del “yo soy yo y mi circunstancia” se busca la reducción o nivelación de los diversos “yo” a la circunstancia de una globalidad mediatizada; y bajo la aparente afirmación de un “yo” y la consigna del “individuo” y su confort, el ciudadano va siendo, en verdad, también reducido a “masa” cuando no a un estéril narcisismo: Un solo modo de vida y tipo fundamental de productos mediáticos en una supuesta variedad (desde el cine a la telenovela); un solo tipo de aspiraciones en la engañifa de cinco o seis marcas que, imponiéndose como “la mejor” cada una de ellas, conducen a “lo mismo”. Los efectos y, por supuesto, mucho menos los fines, ni siquiera se acercan al desarrollo de las potencialidades humanas y culturales de cada persona, ni de cada pueblo o región.

Tampoco podemos dialogar ampliamente ahora sobre la “era del vacío”, el “fin de la historia”, la “muerte del arte” y otros muchos paradigmas tan discutibles.

Sabemos que la respuesta no es salvar a toda costa la circunstancia (sí, sumamente mejorable), ni aferrarse, ególatras, al “yo” que somos hoy día (también perfectible); pero se impone la debida dialéctica de la superación de las circunstancias a partir del propio “yo”; así como de nuestro “yo”, mejorando paulatinamente la circunstancia donde se arraigan sus genuinas potencialidades.

Siempre fue necesaria, pero ahora más que nunca, la búsqueda de la alta espiritualidad, los altos valores que contemplan las genuinas libertades y riquezas espirituales, las de la luminosa estrella que

demanda Martí en *Yugo y estrella*, las de los discípulos del Proteo de José Enrique Rodó, así como el desarrollo de la personalidad y la cultura creativas, y no mercantiles, propugnadas por Erich Fromm, desde otra óptica, mas todas ellas contrarias lo mismo al servilismo que al populismo.

Ahora bien, el temor y la reacción enclaustradora no pueden traer una solución. El retardo tecnológico y científico-cultural, el anquilosamiento, la negación total del foráneo, conducen a consecuencias quizás peores.

Asumir la tecnología, los medios y el buen saber de aquellos más desarrollados en planos específicos, constituye siempre un reto para las identidades y libertades, pero es tan necesario afrontar ese riesgo como necesarios son los injertos para buenas cosechas.

Ello vale para el ámbito de las comunicaciones y las artes, desde los lenguajes y culturas orales hasta Internet y los más modernos productos mediáticos, incluyendo las nuevas modalidades de la imagen virtual y las técnicas de 3-D.

Desde hace décadas nos parece vivir no un nuevo milenio –partición del tiempo siempre muy convencional– sino un nuevo momento para la humanidad, período más palpable, lleno, como todos, de alegrías y pesares... y de las tensiones más diversas, una de cuyas contradicciones más traídas y llevadas parece, sin embargo, no sostenerse ya: la de los apocalípticos o integrados.

En el nuevo milenio podemos optar por el Apocalipsis o la integración, pero también participar de ambas tendencias a la vez, o de ninguna propiamente dicha. Al menos hoy, el dilema parece no ser tan obligado ya, si en verdad lo fue alguna vez.

¿Quién o qué impide buscar una nueva integración a los avances informáticos y tecnológicos, ampliando horizontes espirituales sin someterse a los derroteros ya dominantes?

Las corrientes humanistas de uso de Internet, el cine independiente, el arte pobre o el *underground*, por ejemplo, pudieran andar ya con innegables logros por dichas búsquedas. Mas, hagamos un paréntesis.

Conviene prevenirse contra ensueños vanos e ignorancias socio-culturales sabiendo que, sin estar necesariamente de acuerdo con que

el medio es el mensaje, la tecnología impone siempre ciertas reglas o condiciones y desde antaño los progresos han mostrado facetas sombrías que las generaciones posteriores debieron desbrozar.

Ahora bien, si sólo una escasa minoría de egipcios y mesopotámicos dominaron la escritura y la ciencia de sus templos, ello no significa que la escritura no fuese un avance, como también lo fue luego el alfabeto sumerio y, más tarde, la imprenta, aunque ni la lectura ni la adquisición de libros fue privilegio de cada ser humano en el Renacimiento.

Nunca el verdadero reto fue optar entre el apocalipsis o la integración, sino poner la tecnología, incluyendo los medios de comunicación y de desarrollo cultural, en función de una humanidad entendida como mayoría y, mejor aún, como totalidad de los seres humanos.

Ser culto para ser libre es una profunda enseñanza martiana que habla de la necesidad de la cultura para la libertad. También, de hecho y contextualmente subraya la aspiración a esa libertad para la cual se necesita la cultura, la más alta y actual cultura con el conocimiento y dominio de los *mass media*, y no su temor ni desdén. Proclama una cultura para el desarrollo y la libertad, y un desarrollo y libertad para la cultura, en todos sus campos y extensiones, dejando un relevante sitio a la cultura del debate.

Al rechazar todo poder detentador de los bienes materiales y espirituales, las corrientes alternativas hallarían mal remedio ufanándose y autolimitándose a sí mismas mediante la ignorancia de las virtudes de los medios, las artes y las técnicas “de punta”.

Un arte pobre en recursos, por ejemplo, puede ser tan rico en valores como el que más, pero ni puede aspirar a que todo arte sea pobre, ni consagrarse como el único que se corresponde con determinada sociedad. Su validez nunca tiene que asentarse en la invalidez de los demás. Podemos empezar con la pobreza y el bajo recurso, sacar el mayor partido a lo poco, pero no hay por qué renunciar a la esperanza ni las posibilidades de lo mucho.

Sin integrarnos equívocamente a los senderos trazados por la cultura más desarrollada o rica económicamente, podemos aspirar al diálogo y la contrapartida enriquecedora contando a la vez con las

culturas y manifestaciones alternativas, y la educación y preparación para los medios, incluyendo la Internet.

Las galaxias del rapsoda y Cicerón, de Gutenberg, Marconi, Von Neuman y otras más, pueden convivir, necesitarse y colaborar enriqueciéndose entre sí.

Nuestra América y las sociedades aún subdesarrolladas necesitan reducir paulatinamente la brecha de las nuevas tecnologías informáticas y establecer vínculos comunicacionales de amplio intercambio y conocimiento mutuo; necesitan asumir las nuevas tecnologías y *mass media* a la vez que conservar los valores genuinos heredados en las tradiciones. El reto probado y arduo es el de enriquecer, sumar creativamente, sin sustituir ni desechar *irresponsablemente*.

La dificultad radica siempre en el cómo, en hallar los caminos, que han de ser propios también, según las propias circunstancias, rechazando el mimetismo, la estandarización y la sumisión mental con un lógico desarrollo de lenguajes, discursos y artes propias que no, por propias, renuncien a lo universal.

En Ortega latió perennemente el impulso a hacer progresar la cultura sobre la base de lo más auténtico del ser y sus circunstancias; y Martí proclamaba que injertásemos el mundo en nuestras repúblicas sin que el tronco dejase de ser el nuestro, y deviniésemos cultos para ser libres; reclamamos que siguen siendo vitales en el actual mundo y su problemática de globalización y tecnología moderna versus nacionalismos y tradiciones (circunstancias y necesidades) regionales.

Holguín-Valladolid, julio de 2006

Elecciones mexicanas: lo que ya se sabe

JOSÉ MARÍA TORTOSA¹

Catedrático de Sociología, Instituto Universitario
de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante

El 2 de julio de 2006 los ciudadanos mexicanos votaron para elegir a quien será su Presidente durante el periodo 2006-2012. De un censo de 71 millones de electores, votó el 60 por ciento. Los primeros recuentos preliminares dados a conocer por el Instituto Federal Electoral (IFE), que es el encargado de organizar los procesos electorales generales, dieron la victoria al candidato oficialista del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, seguido a muy corta distancia por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por el Bien de Todos formada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que detentó el poder durante 70 años, quedó en tercer lugar y muy alejado de los dos primeros. Los recuentos posteriores, todos preliminares, redujeron la diferencia entre los dos primeros contendientes.

A primera vista, estaríamos frente a una contienda muy reñida, parecida a las últimas presidenciales estadounidenses o a las últimas generales italianas. Pero también ante un escenario alentador para una

1. Autor de *Democracia made in USA. Un modelo político en cuestión*, Barcelona, Icaria, 2004 y de *Problemas para la paz hoy: El aporte de los Estados Unidos*, Universidad Autónoma del Estado de México, 2005.

sociedad que por muchas décadas vivió con la certeza de que votar y no hacerlo era la misma cosa, pues siempre ganaban los mismos.

Estas elecciones fueron precedidas por fuertes luchas dentro de cada partido para elegir a su candidato. En el PRI, Roberto Madrazo Pintado surge como candidato en un proceso que divide aún más a su partido y en el que los viejos hábitos, los escándalos por corrupción de sus precandidatos y los errores de los años recientes le acaban impidiendo ser alternativa.

En el gobernante PAN, Calderón surge como candidato en un proceso donde entra con pocas posibilidades de serlo tras el veto del presidente Vicente Fox, quien ya antes le había apartado de su equipo de gobierno, como ministro de Energía, por “destaparse” como precandidato e iniciar sin el visto bueno presidencial su precampaña.

Por su parte, en el PRD la elección de López Obrador tampoco estuvo libre de conflictos internos. Al ser nombrado candidato quien entonces era el Jefe de Gobierno de Distrito Federal, tomaría el lugar del fundador del partido y tres veces candidato a la Presidencia de la República por el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La campaña electoral arrancó con uno de los candidatos, López Obrador, como vencedor más probable. Su ventaja, hasta los primeros meses de 2006, parecía inamovible, sobre todo cuando se pensaba que ya había resistido todo cuanto los otros partidos y el propio gobierno habían hecho para apartarle de la lucha electoral y que fue mucho.

Los ataques contra el candidato López Obrador fueron intensos y subieron de tono en el último tramo. El presidente Fox no cesó en su empeño de hacer proselitismo a favor del candidato de su partido y las principales televisiones y muchas estaciones de radio se sumaron abiertamente a la campaña a favor del candidato oficial.

López Obrador reaccionó contraatacando con las mismas armas y, al finalizar el último debate entre candidatos, acusó al cuñado de Calderón de tener intervenidos los sistemas informáticos del IFE a través de sus empresas de informática. Las consecuencias de este anuncio y las pruebas de contratos millonarios a favor del hermano de la esposa del candidato del PAN (el cuñado incómodo), removieron el apoyo montado para favorecer al candidato oficial y se desactivó su campaña de “*yo tengo las manos limpias*”.

De esta forma, la tónica de la campaña no fue la de la discusión de los grandes problemas nacionales sino el juego sucio, al tiempo que se sumaba a ellos uno que parecía resuelto: el de la duda sobre lo limpias que podían ser las elecciones.

En la noche del 2 de julio algunos periodistas de la prensa escrita habían advertido que a la casa presidencial y a las dos grandes estaciones de televisión estaban llegando encuestas cuyos resultados anunciaban una elección muy reñida, o que daban mayores posibilidades de triunfo al candidato López Obrador. En ese contexto, el IFE, cuyos recuentos confirmaban lo dicho, instrumentó una estrategia informativa que en México se calificó, cuando menos, de torpe. Pero para quienes votaron por López Obrador, lo único que se vio fue mala fe y manipulación.

Por ello, en el primer recuento de daños, el IFE queda como un claro perdedor, y ésa no es una buena noticia. Mucho esfuerzo les costó a los mexicanos tener una institución autónoma e imparcial que organizara y vigilara los procesos electorales, para que en su primera prueba de fuego se haya desmoronado. Su mala estrategia informativa, las sospechas que ya había despertado la ingerencia de un familiar del candidato Calderón en sus sistemas, las dudas sobre la autonomía del Instituto respecto al poder presidencial y el propio origen político del Consejero Presidente, terminaron por ser el desastre que no han podido evitar ni las televisiones ni la propia campaña publicitaria del IFE para limpiar su imagen. La crisis del IFE es una mala cosa, pero peor se puede poner si sigue sus pasos la autoridad electoral que califica la elección y que debe nombrar al futuro presidente antes del 6 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).

Independientemente del resultado y los cálculos que se hacen en un sentido y otro para demostrar quién tiene razón, el daño está hecho. Sea quien sea el candidato que el TRIFE nombre ganador, lo será porque eso es lo que establece la legislación electoral mexicana. No hay duda de que el ganador lo será en las elecciones más reñidas de la historia reciente de México, pero también en aquellas donde se creyó percibir mejor un intento de fraude por parte de los centros de poder. A favor de los mexicanos hay que añadir que la reacción cívica

ha sido más clara y contundente que la que han tenido los estadounidenses después de las elecciones presidenciales de 2000 y 2004 y su posible fraude al que se ha vuelto a referir recientemente Robert Kennedy Jr. entre otros.

Está claro que la clase gobernante mexicana no ha estado a la altura de una sociedad que pacientemente le ha ido dando oportunidades. Pero los intereses de los patrocinadores y simpatizantes del proyecto privatizador del candidato oficial podrían pesar más que la voluntad de respetar los resultados electorales. El petróleo, el agua, la generación y comercialización de energía eléctrica y el control de las aduanas y de las fronteras mexicanas representan una riqueza que puede opacar las aspiraciones democráticas, en una reedición del “*business politics*” de sus vecinos del Norte.

Cualquiera que sea la decisión final de las autoridades electorales, pondrá a prueba la madurez política de los contendientes. Si la decisión final del TRIFE fuera que el candidato del PAN es el ganador, muchos mexicanos pensarán que el viejo régimen no ha muerto. El PRI tal vez sólo atine entonces a vender lo más caro posible sus favores al PAN, con lo que se asegurarían nuevas derrotas electorales y reforzarán las bases para su extinción.

En este escenario, que es el más probable, el PRD y su candidato tendrían que iniciar la reconstrucción de un proyecto de verdadera oposición, con claridad y con la mayor sensibilidad para manejar el capital político que esta derrota, dadas las condiciones en que se da, les ha proporcionado. Si en un poco probable golpe de timón las circunstancias se invirtieran, el PAN tendría que hacer lo mismo.

Pero, finalmente, lo más importante no está en el modo de actuar de las cúpulas políticas que, a la postre, sea cual sea el resultado, sabrán reacomodarse. Lo verdaderamente interesante está en la gestión de la crisis y lo que esto afecta a la sociedad.

De momento, los medios más influyentes y los portavoces del PAN, llaman incitación a la violencia a que la gente manifieste su disconformidad con la gestión del proceso electoral. Pero no llaman violencia a las demostraciones de fuerza del crimen organizado, a la pobreza ni a que, sólo durante los cinco años del gobierno de Fox, cerca de cuatro millones de mexicanos han emigrado. Para esos me-

dios no es violencia su campaña desinformativa, ni sus esfuerzos para alentar a la gente a que acepte que el candidato oficial ganó las elecciones aun cuando ni los plazos legales ni las instancias formales se han agotado. Pretenden ignorar que en México no se ha olvidado “la caída del sistema” que originó el probable fraude electoral de 1988 que llevó a la Presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari frente a Cuauhtémoc Cárdenas.

En México y en cualquier democracia pedir que sea transparente una elección no puede ser delito, pero preocupantemente se está convirtiendo en un motivo para crear un clima de crispación, polarización, de provocaciones y de desmoralización. En este contexto, y sea quien sea el declarado como ganador, algunas cosas ya han quedado claras sobre la cultura política democrática y sobre las élites políticas mexicanas. Otras no tanto, como el sentido de la “otra campaña” propugnada por los zapatistas. Quedan, pues, muchos temas abiertos.

México D.F. - Alicante, julio de 2006



La nueva narrativa hispanoamericana ¿una ruptura con el Boom?

JORGE EDUARDO BENAVIDES

Escritor

I

Resulta imposible citar a los nuevos narradores hispanoamericanos sin que la sombra del *Boom* planee sobre ellos. Y esto pese a que dicha referencia queda bastante lejana ya de las nuevas propuestas narrativas de una generación de escritores que ha intentado –de manera muy consciente– alejarse de esta cercanía, más producto de los medios de comunicación y de una cierta inercia mediática que de elementos reales. Así parece desprenderse del último encuentro de narradores hispanoamericanos celebrado durante el pasado mes de julio en El Escorial, que convocó a un buen número de representantes de la nueva literatura de ese continente.

Aún así, las novelas y cuentos, los relatos y demás formas literarias de estos jóvenes escritores –Jorge Volpi, Andrés Neuman, Santiago Gamboa, Alberto Fuguet ...– ocupan desde hace pocos años un espacio cada vez más significativo en las librerías españolas, así como merecen una atención distinta de revistas especializadas y páginas de cultura, de tal manera que conviven con las obras de algunos escritores del *Boom*, cuya presencia ha continuado de manera cada vez más firme entre los lectores españoles, sobre todo en el caso de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, quienes han venido construyendo de manera continuada una obra que aún mantiene indiscutible interés y vigencia.

De allí que a uno le acometa una primera certidumbre: la nueva literatura hispanoamericana de los últimos años se ha fragmentado en corrientes y tendencias tan diversas entre sí y al mismo tiempo unidas por el denominador común del alejamiento del *Boom* —tácita o explícitamente—, que no parece probable seguir hablando de ella en términos absolutos. En realidad, nunca ha sido así, como tampoco lo ha sido en el caso de ninguna corriente literaria.

No obstante, y pese a que parece ser el *leit motiv* de muchos planteamientos críticos actuales, no creo que haya existido una ruptura brusca de intenciones y ambiciones entre los escritores de los años sesenta y los actuales, sino que —al igual que la propia reseña mediática del *Boom*— esa articulación se nos hace confusa y resulta contaminada por elementos más cercanos a intereses publicitarios y mercado, al hecho de que durante los años ochenta apenas si llegaron nuevos escritores hispanoamericanos al espacio cultural español creando la ilusión de un desierto temporal, de la inexistencia de escritores durante aquellos años y por lo tanto de una ruptura generacional.

Pero ello no significa que la producción literaria hispanoamericana no existiera ni mucho menos que hubiera derivado en una composición provinciana de escaso interés para otras latitudes. Con enormes dificultades, envueltos en un tiempo sombrío de escepticismo y desencanto, aislados en sus países o incluso en sus pequeñas ciudades, muchos continuaron escribiendo y publicando, aunque sus lectores también fueran mínimos y la circulación de su obra exclusivamente nacional o poco menos: César Aira, Sergio Ramírez, Ricardo Piglia o Alonso Cueto son algunos de esos escritores que, por edad, están más cerca de los escritores del *Boom* que la generación de Fernando Iwasaki, Ignacio Padilla, Juan Carlos Méndez Guédez, Edmundo Paz Soldán o Rodrigo Fresán, entre otros. Resulta significativo que sea el chileno Roberto Bolaño —por edad más cercano a Piglia o a Cueto que a los antes mencionados— quien se asumiera como el referente de todos ellos, y que estos lo entendieran como la propuesta narrativa que operaba como eslabón entre una generación y otra.

La nueva literatura hispanoamericana, tanto desde McOndo como desde el Crack, así como desde otras propuestas más individuales, parece advertirnos de que el *Boom* es una sombra de la que

es menester desembarazarse. Probablemente porque una de las características formales que con mayor frecuencia se le atribuye a aquel fenómeno literario es el realismo mágico —aspecto más estético que ético—, mientras que la otra es la preocupación política —aspecto más ético que estético—, no menos importante a la hora de señalar los atributos del *Boom*.

Ahora bien, mientras la primera parece definitivamente una vía muerta, vista con escepticismo tanto por los lectores como por los críticos y agotada su veta con escritores como Isabel Allende o Luis Sepúlveda en los años ochenta, la segunda característica ha ganado cierta revalorización, o al menos continúa vigente pero bajo otros parámetros: más que denuncia, desencanto; más que utopía, cinismo.

Ello probablemente se deba a que las coordenadas sociales y políticas que fermentaban el territorio hispanoamericano de los años sesenta se han agudizado en los ochenta y noventa: ya no son los totalitarismos sino las autocracias plebiscitarias y las democracias corruptas las que estimulan los planteamientos formales de los escritores, como antes lo eran aquellas dictaduras omnímodas y esperpénticas.

Sin embargo, parecen observarse allí interesantes puntos de coincidencia entre la literatura del *Boom* y la de los años noventa: en ambas existe idéntica necesidad de reconfigurar los planteamientos formales, saturados por estéticas que se consideran periclitadas. Pero también hay una nueva mirada del contexto en el que se desarrollan y por lo tanto un cierto paralelismo: desde la utopía social de mayo del 68 y la revolución cubana, en el primer caso, al desencanto de la democracia y la globalización en el segundo.

De allí que no resulta en absoluto extraño que bajo toda esa rebeldía que se le atribuye a ciertos sectores de la nueva literatura hispanoamericana —por parte de una crítica que recela de todo lo que no huele a *Boom*— exista un más que entendible rechazo a utilizar el instrumental quirúrgico con el que se diseccionaba la realidad hasta entonces. Con sus novelas y sus cuentos parecen decirnos que la nueva realidad también necesita renovadas fórmulas estéticas para ser abordada. Y esa realidad contiene elementos hasta hace poco considerados como cuerpos foráneos: la nueva narrativa hispanoame-

ricana parece entenderse, más que como cosmopolita, global, sin fronteras ni subordinaciones estéticas o temáticas. Probablemente eso sea así, y curiosamente también sea el mejor homenaje al Boom: su necesario distanciamiento es una forma de asumir una mayoría de edad.

II

Hay muchos más autores, pero creo que tres de ellos pueden dar una medida del arco tan grande que comprende la nueva narrativa hispanoamericana. El primero es el boliviano Edmundo Paz Soldán, quien ha ido construyendo una inteligente obra literaria en la que la política resulta una preocupación que a veces de manera explícita y otras implícita parece arrojar una sombra inquietante sobre sus todos sus temas. El escritor cochabambino nos ofrece una imagen de Bolivia absolutamente novedosa, distinta, altamente tecnológica, globalizada si se quiere, en la que la población indígena y los temas relacionados con la misma resultan meras sombras, lo cual era poco menos que escandaloso en un país donde los agudos problemas económicos, derivados de una brutal escisión de su sociedad, parecían hasta ese momento elementos insoslayables a la hora de crear ficción. Ello sin embargo no parece desmerecer el vigor político de sus cuestionamientos ni la perspectiva de ese mundo boliviano “occidental”. Paz Soldán ha encontrado una nueva forma de orientar las antenas de la ficción política y paulatinamente, desde su magnífica *Río Fugitivo* hasta sus últimas novelas, los lectores encontramos lo más cercano a lo que se ha dado en llamar “denuncia” y que en su caso nunca subordina ni la calidad de sus novelas ni la libertad a la hora de elegir sus temas. Él mismo dijo en una entrevista a Susana Pajares Toska de la Universidad Complutense de Madrid:

«Mis primeros cuentos ni siquiera transcurrían en Bolivia, fueron bien recibidos pero siempre con este reparo de que podrían haber ocurrido en cualquier parte y no eran "bolivianos". Esto es ridículo, como si la literatura pasara por la nacionalidad. La crítica está allí muy politizada, y no acepta que un mundo tan hueco y banal como el de la clase media burguesa pueda servir de materia novelesca. Es un mundo despreciable, pero

muy novelable, y yo tengo con él una relación de amor y odio porque es donde me crié, nunca acabo de rechazarlo del todo, aunque siempre me he sentido incómodo.»

Por otro lado, la ecléctica obra de Mario Bellatin resulta fascinante porque bajo esa aparente dispersión temática y formal subyace la elaboración de un mundo de reglas y claves arbitrarias, en la que cada libro parece creado casi por oposición al anterior y sin embargo perfectamente engarzado en su totalidad narrativa. Probablemente excluyendo *Mujeres de Sal* (1986) que contiene elementos ajenos a su obra posterior, todas sus novelas y sobre todo *Efecto invernadero* (1992), *Canon perpetuo* (1993) y *Salón de belleza* (1994), es decir, las primeras, consolidan un estilo austero, seco, de tenues evocaciones oníricas, diríamos. Inclasificable y extraño, Mario Bellatin reflexiona constantemente sobre el alcance de la ficción, su poder perturbador y sedicioso, las amplias líneas de sombra que separan ese territorio del de la realidad.

Rodrigo Fresán representa muy bien una tendencia de la narrativa hispanoamericana donde la hibridación de géneros resulta ese producto absolutamente depurado que nos hace pensar en un verdadero aprendizaje de Cortázar: ni imitación ni epigonal; en Fresán encontramos una actitud inquisitiva y aguda, bastante lúdica, propia de ese entusiasmo de lector que también había en su compatriota y que lo lleva a escribir como quien indaga, cualidad que él mismo ha manifestado en algunas entrevistas. Esa actitud, absolutamente desdénosa de un latinoamericanismo comprometido, la inclinación por la literatura anglosajona y la construcción de tramas delirantes, como en sus cuentos o desenfoques de historias reales como en *Jardines de Kensington*, constituyen las piedras angulares de una nueva forma de indagar y también, por qué no, una nueva forma de cuestionar la realidad hispanoamericana.

Madrid, agosto de 2006



Un nuevo contrato social para América Latina

ERNESTO OTTONE

Secretario Ejecutivo Adjunto a.i. de la CEPAL

Las cifras de los últimos años parecen indicar que, después de muchos avatares, América Latina ha entrado en un ciclo que nos entrega resultados económicos y sociales más positivos que aquellos que marcaron los tres primeros años del siglo XXI.

Un reciente estudio de la CEPAL¹ señala que la región crecerá este año alrededor de un 5% completando de ese modo cuatro años de expansión económica consecutiva. A ello hay que sumar que la tasa de desempleo cayó a 9,1% a fines de 2005 y esta tendencia continuará por debajo del 9% en el primer semestre de este año. Si bien es el nivel más bajo desde mediados de los noventa, en la región hay todavía 18 millones de personas desempleadas.

Por otra parte, otras estimaciones de la CEPAL indicaban que el número de personas que se encontraba en el 2005 en situación de pobreza en la región ascendería a 213 millones, de los cuales 88 millones estarían en situación de pobreza extrema o indigencia. Dichas cifras equivalen respectivamente al 40,6 % y 16,8 % de la población latinoamericana y caribeña.

1. *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2005-2006*. Julio de 2006.

Este nuevo ciclo permite un respiro en el corto plazo y en él influyen fuertemente un escenario externo favorable, las bajas de las tasas de interés y la revaloración temporal de las materias primas causadas por la eclosión de fenómenos nuevos como son la enorme demanda de economías gigantescas como China e India.

Pero sería miope cantar victoria; este respiro sólo será útil si América Latina es capaz de atesorar esta bonanza pasajera a través de cambios sistémicos que abarquen la economía, la política y la situación social, que marquen una situación distinta para enfrentar los ciclos negativos haciéndolas definitivamente menos vulnerables.

Pese a esta mejor situación el panorama latinoamericano no deja de ser preocupante, pues a la fragilidad económica y social se acompaña una fuerte fragilidad política y hasta de cierta desafección al sistema democrático, resurgimientos de atmósferas sociales que pueden minar los sistemas de negociación de los conflictos y favorecer las ofertas populistas de origen corporativo, de reacciones identitarias antimodernas de distinto signo, que se caracterizan por ser simplistas, esencialistas y unilaterales y no captan la necesidad de apreciar el mestizaje cultural de la región, que permite entender nuestra identidad de una manera no estática ni dogmática sino de asumir su continua transformación e historicidad.

La aguda percepción de injusticia social, de que quienes pagan las crisis son “los de abajo”, la visión en varios países de las elites políticas como elites corruptas y de la globalización como una conspiración de los países ricos para explotar a la región es una realidad que se refleja en el incremento de posiciones nacionalistas y extremas, como asimismo en el descrédito de muchos de los gobernantes en la opinión pública, en el desprestigio de los partidos políticos y en la extrema volatilidad del voto.

Existe una demanda ciudadana que pide más Estado, más institucionalidad, más sistemas de justicia y de seguridad ciudadana, más gestión pública. La extrema debilidad de la oferta pública en muchos países frente a esta demanda genera un vacío que puede frustrar el desarrollo y dar inicio a un nuevo ciclo de populismos, ya sean de izquierda o derecha, integrista identitario o modernista autoritario, en donde una sociedad civil que busca, en la mejor tra-

dición gramsciana articularse con el Estado sea reemplazada por una sociedad incivil que lleve a la paralización del esfuerzo de desarrollo o a procesos de sociedad con un nivel de conflicto insostenible².

Se hace indispensable el desarrollo de sistemas políticos que permitan capturar la diversidad, pero que generen cohesión social, reglas del juego respetadas y transparentes. Reivindicación de lo público y de un sistema democrático fuerte, lo que sólo puede ser fruto de un sistema político con gran capacidad de agregación y con una vocación a la vez de integración al mundo y de reducción de las múltiples manifestaciones de las desigualdades.

Es en este contexto donde han surgido reflexiones que apuntan a orientar políticas para el logro de una mayor cohesión social, misma que se presenta con una doble faz, medio y fin de las políticas públicas.

La cohesión social debe considerar a nuestro juicio dos aspectos: uno, de los hechos objetivos que existen al interior de nuestras sociedades, y otro de las percepciones, el sentido de pertenencia que los miembros de la sociedad tienen. Es decir, a los aspectos más o menos clásicos del bienestar se le deben agregar el estar bien, el sentirse parte.

En este sentido la cohesión social se constituye por la relación entre los mecanismos de reinclusión/exclusión social por un lado y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía al funcionamiento de dichos mecanismos.

Sin reconocimiento del otro y sin sentido de pertenencia no es posible imaginar acuerdos que sean percibidos por todas las partes como legítimos, y por ende, que puedan ser perdurables.

En consecuencia, la cohesión social supone en su base un “contrato social” en el cual distintos actores que comparten un sentido de pertenencia y reconocimiento mutuo “han negociado” sus “contribuciones diferenciadas” en vistas a hacer realidad los derechos sociales de todos los miembros de esa comunidad.

2. Algunos de estos conceptos fueron expuestos por Manuel Castells en el Seminario *Globalización, Estado y Ciudadanía*, organizado por University of Southern California (Center on Public Diplomacy) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 28-30 octubre 2005, Los Ángeles, California, EE.UU.

Dicho contrato deberá precisar cuantos y cuales derechos pueden ser garantizados, expandiendo su exigibilidad; con qué gradualidad y qué estructura de riesgo está la sociedad dispuesta a asumirlos como responsabilidad colectiva y determinar qué pacto fiscal puede sustentar dichos acuerdos, en el cual todos los actores se sientan de alguna manera beneficiarios.

Como dice la CEPAL “un pacto social centrado en la protección representa la culminación de un acuerdo en el que los derechos sociales se consideran como horizonte normativo y las desigualdades y restricciones presupuestarias como limitaciones que es necesario enfrentar.

Un pacto social estructurado en torno a la protección tiene tanto aspectos sustantivos como procesales. Los primeros se refieren a los contenidos y se relacionan con garantías irreductibles, formas concretas de solidaridad y transferencias, progresividad de la cobertura, prestaciones de calidad y expansión de acceso. Un pacto social de protección debe regirse por principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Esto no significa que todo beneficio sea universalizable, sino que la sociedad establece, a partir de un diálogo entre los agentes sociales, los estándares de calidad y cobertura que deben garantizarse a todos sus miembros. Además, junto con contener reglas claras y explícitas y normas sobre gestión, un pacto social debe adherir a criterios de estabilidad macroeconómica vinculada a la socialización de beneficios y sacrificios. Solo una economía con una estructura productiva estable y vigorosa que incorpore a vastos segmentos de la población y se rija por un principio de transferencias solidarias, que apunte a universalizar la protección social y el desarrollo de capacidades y oportunidades permitirá conciliar las dos caras del desarrollo: el crecimiento y la equidad.

Los aspectos procesales de un pacto social se refieren a cómo se convoca al pacto, quiénes participan, cuáles son los procedimientos de deliberación y representación, cómo se fiscalizan los acuerdos y se controla su aplicación, y cómo desempeña el Estado su papel regulador”³.

A partir de considerar estos aspectos y desarrollar políticas públicas dirigidas hacia y con los actores sociales que aseguren altos

3. CEPAL, *La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad. Síntesis*. Febrero de 2006.

niveles de cohesión social y niveles básicos de consumo político, se podría pensar en un contrato social que encarne un compromiso entre sociedad civil y el Estado, para la América Latina del siglo XXI.

Santiago de Chile, agosto de 2006



El codesarrollo en su laberinto

ALBERTO ACOSTA

Economista

La aparición y posterior consolidación de un concepto en la sociedad no es fácil. Con frecuencia asoman términos novedosos, pero que, luego de cumplir el papel de moda pasajera, en un abrir y cerrar de ojos desaparecen. Otras veces, su proposición, en la práctica, se transforma en un ejercicio de definiciones múltiples, lleno de encrucijadas y rodeos, dispuestos de tal naturaleza, que poco aportan para un adecuado entendimiento de lo que se pretende explicar. Esa, al parecer, es la doble situación que caracteriza a la palabra codesarrollo. Está de moda. Y, de paso, nos conduce a un laberinto...

El codesarrollo, que a primera vista indica que se trataría de una reflexión ligada al desarrollo compartido, ha encontrado un terreno propicio en medio del actual fenómeno migratorio. Las migraciones desde siempre han estado vinculadas a la vida del ser humano. En la actualidad, sin embargo, la realidad migratoria presenta una serie de características diferentes a las de anteriores épocas, a ser comprendidas a partir de las nuevas circunstancias que atraviesa la humanidad. Los veloces avances tecnológicos, particularmente en el campo de la intercomunicación y de los medios de transporte, han acercado las distancias a un tiempo (casi) presente. Los flujos financieros circulan por el mundo a la velocidad que impone la necesidad de la acumulación de los capitales. Las relaciones comerciales, aunque marcadas

por un remozado proteccionismo, también se han multiplicado. Y en este contexto, cuando el discurso de la apertura de los países y del libre mercado inunda el escenario, un creciente número de personas de los países empobrecidos, a pesar de las barreras y los muros que se erigen para impedirlo, busca desesperadamente acceso en las sociedades enriquecidas.

En esta encrucijada aflora el codesarrollo. Su aparición intenta dar cuenta de una alianza entre los procesos migratorios y la cooperación internacional destinada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mundo subdesarrollado, hipócritamente definido por la jerga diplomática como mundo en desarrollo, pero que debería llamarse mundo empobrecido. Este es un intento plagado de contradicciones y nuevas complicaciones.

El francés Sami Naïr, siendo funcionario del Quai d'Orsay, en 1997, inauguró el laberinto. Propuso integrar inmigración y desarrollo. Planteó que tanto el país de origen como el de acogida, en este caso Francia, podrían beneficiarse si se establece una relación consensuada que permita sacar ventajas a ambas partes. Lo que quería era situar a los inmigrantes en tierra gala en el centro de la política de cooperación al desarrollo del gobierno de París. Los principios esgrimidos fueron los de corresponsabilidad, cogestión de los movimientos migratorios y solidaridad. Este esquema, enmarcado en una coyuntura específica de dicho país y que encontraría respuestas en el ámbito legal, más allá del discurso que anuncia el aprovechamiento de las potencialidades que la migración y la cooperación encierran, tenía como su objetivo básico, por cierto no expuesto explícitamente, el frenar los flujos migratorios a territorio francés. Para conseguirlo, financiando proyectos de desarrollo en los países emisores, lo que se planteaba es desplazar a dicho países el peso de la lucha contra las migraciones irregulares. No pretendía frenar la inmigración, sino simplemente regularla en función de las demandas de mano de obra o de población de la sociedad receptora, alentando, simultáneamente, el retorno "voluntario" de grupos de inmigrantes radicados con anterioridad en Francia. Este es un empeño que se nutre del deseo de los inmigrantes de participar en la construcción o reconstrucción de las condiciones de vida en sus países de origen para viabilizar su re-

torno: el sueño de todo inmigrante, que muchas veces no pasa de tal, de ser simplemente un sueño.

A partir de esta aproximación el término adquirió vida propia. Así, desplegando el concepto de codesarrollo, muchas veces sin hacer el más mínimo esfuerzo por definirlo, se convoca a una multiplicidad de acciones y se alientan diversas iniciativas. Los más noveleros impulsores de este nuevo término son, a no dudarlo, los gobiernos y algunas organizaciones de la “sociedad civil” en los países receptores de los flujos inmigratorios, contando, para qué negarlo, con el entusiasmo interesado de personas y organizaciones de los países emisores de seres humanos (presta a lucrar de los recursos que se suman alrededor de estas novedosas iniciativas). La idea que está inserta es la de una cooperación entre iguales. Y, en una versión mucho más refinada, en el espíritu del codesarrollo se incorpora tanto el diseño como la aplicación de estrategias que alienten proyectos de cooperación para el desarrollo en los que se incluyen también las propuestas y las redes generadas por los inmigrantes, así como por sus familias y su entorno, tanto en el país de origen como en el de destino del viaje.

La idea del beneficio mutuo surge a partir del reconocimiento del papel de los emigrantes para el desarrollo. El emigrante es visto inclusive como un vector del desarrollo. Su accionar directo le transformaría en un portador del desarrollo y su influencia permitiría transportar elementos para el desarrollo. La migración, entonces, no debería ser vista como una amenaza. Lo que interesa es despertar, a través de acciones de codesarrollo, sus potencialidades en las dos puntas del proceso migratorio, tanto en los países de origen como en los de destino. Y el traslado de este reconocimiento en la práctica de proyectos específicos los transformaría en proyectos de codesarrollo. Esta acción se complementaría con el empoderamiento de los diversos actores involucrados en el control de dichos proyectos, en un ambiente de relaciones bilaterales equitativas. Con acciones medibles “aquí y allá”, con actores conectados transnacionalmente, en procesos bidireccionales, se pretende, en definitiva que las partes involucradas obtengan beneficios del hecho migratorio.

Uno de los ejes de este concepto gira alrededor de las remesas financieras. Estos montos, cada vez más cuantiosos, han desatado un

debate internacional sobre el potencial que estos flujos de dinero pueden tener para el desarrollo de los países emisores de mano de obra y cómo se debería canalizar su utilización. Para algunas economías estos ingresos monetarios son vitales. Representan un ingreso que asegura la supervivencia de muchas personas y familias. Son un medio para mantener o crear lazos de pertenencia comunitaria e incluso familiar. Intervienen en un proceso de reconfiguración de las identidades sociales, ayudando a un reposicionamiento en la escala social de muchas personas que abandonaron sus comunidades en situaciones precarias.

En este punto conviene anotar que no sólo cuentan las cada vez más cuantiosas transferencias financieras y materiales. Paulatinamente cobra fuerza el significado de otras transferencias inmateriales, aquellas remesas sociales, culturales, laborales y empresariales. Esta suma de recursos intangibles encuentra también cabida en el mundo del codesarrollo, que es acolitado por otros dos conceptos —equivocos, pero de moda— como son el capital humano y el capital social. El primero encontraría cabida en los conocimientos y experiencias que pueden adquirir los inmigrantes en los países de destino y que luego los derramarían en sus propios países, al tiempo que el segundo recoge las ventajas acumuladas colectivamente a raíz del proceso migratorio. En ambos ámbitos comienzan a aflorar proyectos denominados como de codesarrollo. En suma, integrando las anteriores reflexiones, aparece con cada vez más fuerza este concepto de codesarrollo, transmutado en aquella palabra casi mágica que acelera la definición y la aprobación de proyectos de cooperación, como un día lo fue (o lo es de alguna manera todavía), el género, lo étnico o lo ecológico.

A contrapelo de tanto discurso y buenas intenciones la realidad es implacable. El número de proyectos existentes e incluso posibles, ajustados a estas percepciones de lo que podría ser el codesarrollo, es y será muy limitado. Su práctica es aún más pobre; recordemos solamente la dificultad en cristalizar un verdadero proyecto de codesarrollo: encontrar actores vinculados en los dos extremos del flujo humano dispuestos a colaborar entre sí, dentro de los márgenes y las expectativas contempladas por las políticas oficiales de cooperación es muy complejo. Y si a esto sumamos la profunda contradicción entre los objetivos que mueven al emigrante/inmigrante con los que se definen

y aplican en las políticas de cooperación en general, el potencial de este codesarrollo es muy limitado.

Esta realidad es aún más compleja si tenemos presente el objetivo primigenio del codesarrollo, que sigue deambulando cual fantasma al que no se lo quiere develar, pero que se sabe que existe. El codesarrollo, que se originó con el francés Sami Naïr, no hay que olvidar, trata de impedir que lleguen más inmigrantes irregulares a los países enriquecidos provenientes de los países empobrecidos, y de ninguna manera pretende contribuir a cambiar, a través de una política integral, las condiciones que reproducen la inequidad en las relaciones entre los países empobrecidos y enriquecidos. ¿Será acaso el codesarrollo un ejercicio de falsa conciencia con el que se quiere ocultar determinados hechos determinantes propios de la lógica básica del sistema mundial y la ausencia de voluntad política para enfrentarlos?

Desde el otro lado, los límites surgen también por las limitaciones intrínsecas de la llamada cooperación al desarrollo. Esta no ha sido –tampoco podría ser– una verdadera palanca para superar las múltiples causas que provocan el desencanto y la frustración, la pobreza y la exclusión, el desempleo y la violencia en los países empobrecidos, expulsores de mano de obra y personal calificado. La política de cooperación, en tanto extensión de las políticas internacionales de los países ricos y como tales defensoras de sus intereses, no se da entre iguales. Además, los países donantes, muchas veces coincidentes con los acreedores de la deuda externa y casi siempre influyentes en los organismos multilaterales de crédito, son los que imponen las condiciones en la economía global, en donde se deberían buscar varias de las causas de estos desordenados procesos migratorios.

La política de ayuda al desarrollo, o en la actualidad simplemente de cooperación, que parece resumir el concepto de desarrollo desde la visión de los centros de poder mundial, “reemplaza el desarrollo por un combate a la pobreza con que se disfraza el miedo hacia los pobres”, como acertadamente afirma el escritor ecuatoriano Javier Ponce. Al tratar de paliar las duras condiciones de vida en los países empobrecidos se quiere impedir que sus habitantes pongan en riesgo el bienestar del mundo considerado como desarrollado. Y, de paso, sería como una forma de retribuir en algo los beneficios que

obtienen los países receptores de la inmigración. Esta, no hay duda, significa desarrollo para dichos países. Rejuvenece sus poblaciones y fortalece a la seguridad social ayudando, en algunos casos, a retrasar la crisis de los sistemas de pensiones. Genera mucho más riqueza que el monto de las remesas que transfiere afuera, incluyendo aquellas nuevas inversiones orientadas a sostener a los trabajadores extranjeros y sus familias. Podría incluso contribuir a crear sociedades más abiertas y quizás más tolerantes. Podría incorporar nuevos valores culturales que enriquecen a los países de destino.

El codesarrollo resulta, a la postre, un concepto gelatinoso. Si bien concentra su atención realmente en un punto, ofrece mucho, pero sigue ocultando los temas de fondo.

Quito, septiembre de 2006

México desde Italia y al revés

UGO PIPITONE

Investigador y docente, CIDE-México

Milan Kundera recurre a los clásicos para ilustrar una condición tan antigua como eterna: “Durante veinte años no había pensado en otra cosa que en regresar. Pero, una vez de vuelta, comprendió sorprendido que su vida se encontraba fuera de Ítaca” (*La ignorancia*. Tusquets, 2000). Una sensación de extrañamiento en casa propia (cualesquiera que sea) y la mezcla de transliteraciones inadecuadas que, bailando de una cultura a otra, lo hacen sentir a uno tan ligero como insustancial. Ser ciudadano del mundo es más arduo de lo que parece declamatoriamente.

Lo que sigue es la crónica de una visita a Italia de parte de este mexicano-italiano (cuando está en Italia) e italo-mexicano (cuando está en México). Un recorrido salpicado de visitas a Internet para seguir las primeras vicisitudes del proceso postelectoral mexicano a conclusión de siete décadas de dictadura democrática y un sexenio de transición intransitiva. Crónica de impresiones sobre una Italia que acaba de dejar atrás cinco años de Berlusconi.

Aclaremos lo que probablemente no necesita aclaraciones. Viajar es el reino de la superficialidad, donde las dudas que surgen de la cercanía con lo distinto no pueden ser exploradas mientras se brinca de un lugar a otro. Los dilemas se forman y se disuelven mezclados con enfados y embelesos. Mientras este viajero recorre Toscana, Marche, Romagna, Lazio y Piamonte, se desata otra matazón

entre Israel y sus vecinos. Además de Beirut, Sidón y Tiro están bajo las bombas y, siguiendo el espíritu de los tiempos, se hace un poco más arduo creer en el progreso. En Italia aletea un espíritu berlusconiano en que comunismo y Estado parecen haberse vuelto sinónimos para una derecha que pone su sobrecarga de mezquindad sobre tiempos ya difíciles.

Por otra parte, la observación desde lejos del México postelectoral recuerda cuánto camino falta todavía para que las instituciones de este país adquieran alguna legitimación luego de décadas en que la simulación populista se volvió un arte discursivo y un disfraz patriótico para ocultar abusos públicos y enriquecimientos privados. Con base en el descreimiento endémico, el candidato de la izquierda mexicana realmente existente, (Andrés M. López Obrador, AMLO) cabalga el tigre de la deslegitimación de elecciones que, según observadores propios y ajenos, fueron limpias. Probablemente no podía esperarse más de una izquierda que vivió la transición del año 2000, después de 70 años con el mismo partido en el gobierno, casi como una derrota. El PRD evidentemente prefería al PRI en el gobierno, como expresión de un patrimonio común de nacionalismo revolucionario, en versiones tan distintas como similares.

En el juego de las transliteraciones ocurre una duda: ¿no será López Obrador una versión *izquierdosa* de Berlusconi? Los dos comparten, por lo menos, dos rasgos: el primero es la alta consideración de sí mismos; personalidades sin fisuras ni dudas, monolitos de la fe. El segundo es el escaso apego a las reglas democráticas, que casi llega a la justificación de la evasión fiscal en el caso de Berlusconi y a la amenaza velada de sublevación civil de parte de AMLO. Las instituciones quedan obviamente cortas a quienes sienten la pulsión de plegarlas a necesidades propias transustanciadas en causas colectivas. El populismo puede asumir varias formas.

MÉXICO DESDE ITALIA

En la neblina informativa que desde Italia envuelve a México se perfila una perturbadora concomitancia: el más alto porcentaje (35%) del electorado mexicano que vota por la izquierda (más del doble

respecto a las tres elecciones presidenciales precedentes) y, al mismo tiempo, el liderazgo político sobre quince millones de votos de parte de un individuo de escasa lucidez y sobrada obcecación, cuya única vocación revelada es la ocupación de la presidencia. Sin asignar a AMLO la representación política de los pobres de México es obvio que la mayor parte de aquellos que votaron por él vienen del universo de la pobreza. Al margen: no es cómodo sentirse al lado de los pobres y no comparar con ellos los mismos entusiasmos políticos. Sin embargo, ¿cómo hacerlo frente a alguien que sigue moliendo los estereotipos de la mitología nacional-revolucionaria sin el menor asomo de ideas propias ni de conciencia de los nuevos tiempos y los nuevos problemas que exigen respuestas originales respecto al viejo recetario populista?

Además de los frecuentes plebiscitos telefónicos para confirmar su popularidad, cuando fue jefe de gobierno de la capital mexicana, AMLO dio pruebas sobradas de ineptitud para enfrentar asuntos tan básicos como la baja calidad de la administración local, la elevada criminalidad (entretrejida con los órganos de policía) y las pésimas condiciones del transporte público. Frente a la falta de iniciativa en estos terrenos, López Obrador compensó el vacío con conferencias de prensa diarias a las seis de la mañana, obras públicas monumentales (destinadas a incentivar el uso del automóvil), subsidios (apropiados) a los más ancianos y una asombrosa tolerancia frente a la corrupción en su propio partido. La pusilanimidad política convertida en gobierno para los reflectores. Y ahora la deslegitimación de las elecciones.

Desde lejos, el desaliento toma dos formas. La primera es la percepción de una fuerza electoral que, en lugar de ser usada para forzar a la próxima presidencia a profundas reformas institucionales y sociales, corre el riesgo de desperdiciarse en una lógica de muro contra muro que arriesga las endeble instituciones democráticas del país. La segunda razón de desaliento es la observación de una izquierda que transita de un líder carismático a otro mientras sigue sin definir una personalidad propia más allá del circo ideológico donde cualquier cosa que no encaje en la narrativa nacional-revolucionaria se vuelve conspiración neoliberal. El neoliberalismo convertido en pantalla para ocultar la propia inopia intelectual y política. La coherencia con el pasado (mitizado) se vuelve lejanía del presente, una coartada para la

ausencia del debate de ideas y la creatividad propositiva. ¿Para qué se necesitan ideas si nuestro patrimonio ideal se estableció desde la Revolución (de 1910)? La retórica es suficiente para movilizar a las masas cuando sea necesario. Las ideas sobran.

ITALIA DESDE MÉXICO

Un pequeño episodio de crónica familiar. De noche, en Villa Ada en Roma para tomar el fresco y escuchar a un conjunto cubano. En un *stand* del comienzo mi hija, que además de méxico-italica es también colombiana, se queda a hablar con unos jóvenes pacifistas que terminan por proponer las cosas de la siguiente manera: en la guerra entre las FARC y el Estado colombiano hay que tomar partido. Y ellos no parecerían tener dudas sobre el bando correcto. Mi hija pregunta qué sentido tiene entonces esa gran bandera de la paz a sus espaldas. Pregunta que queda, obviamente, sin respuesta. *Eso* también es parte de la izquierda social italiana: el aprecio, aunque sea muy minoritario, hacia una guerrilla que, además de leer mal al propio país, ha hecho del narcotráfico y del secuestro sus principales fuentes de financiamiento mientras contribuye a encadenar Colombia a una brutalidad sin fin. Como si después de Sendero Luminoso pudiera seguir cultivándose el mito de una guerrilla siempre justiciera. Una forma de lucha que, para algunos, parecería tener en la propia alteridad su misma justificación política y ética. Las acciones son lo de menos, lo importante es conservar el mito, o sea, la fe. Que otros paguen las cuentas.

Con esos dramáticos retardos culturales tiene también que enfrentarse una izquierda italiana que asume el reto de gobernar un país con medio millón de empleados en *Call centers* (una nueva forma de lumpenproletariat); un país donde apenas 17 mil personas declaran al fisco ingresos anuales superiores a los 200 mil euros y con 65 mil veleros de lujo en la rada; un país de corporaciones donde el privilegio de algunos (bancos, farmacias, notarios, etc.) es pagado por todos y donde, por primera vez, la generación actual vivirá peor que la precedente, más fragmentada, con ingresos más inciertos y menor cobertura de las pensiones.

Frente a esta multiplicidad de retos que requieren creatividad e iniciativas inéditas (nacionales y europeas), el centro-izquierda italiano tiene que hacer las cuentas con la conservación de su propia unidad en un espectro que va de fragmentos de la antigua Democracia Cristiana, a verdes, radicales, liberales-reformadores, ex-comunistas y refundadores del comunismo. Y, sin embargo, una unidad imprescindible, a menos que se quiera abrir paso al retorno de un berlusconismo que es suficientemente poderoso en la sociedad y en la economía para que disponga también del gobierno del país. Lo que implicaría el retorno a las leyes *ad personam*, a un reptante anti-europeísmo, a la solidaridad vista como un arcaísmo premoderno y a la connivencia con las aventuras militares de Estados Unidos.

El centro-izquierda italiano está condenado a la unidad. Evitar el retorno de Berlusconi al gobierno es casi un acto de responsabilidad republicana, como resulta obvio de un episodio nimio de los últimos días. El gobierno de Prodi acaba de aprobar una ley que otorga la ciudadanía italiana después de cinco años de residencia legal en el país. Y un alto dirigente de la Liga Norte, ex ministro de Berlusconi, se refiere a estas disposiciones como una forma para incentivar la invasión de los “bingo bongo”. El lenguaje y las ideas que hasta hace poco eran expresión de retardo cultural se convierten en moneda corriente.

ADMINISTRADORES LOCALES Y COMEDIANTES

A pesar del reto de contener la marea de una cultura berlusconiana que exalta (como condición de progreso) la nueva segmentación social, la izquierda italiana tiene sobre la mexicana una ventaja crítica: una tradición de buen gobierno local que ha consolidado colectividades ciudadanas exigentes y proclives a defender espacios colectivos de bienestar. Es el caso de Marche, Emilia-Romagna, Toscana, etc., donde empresarialidad difundida, buenos servicios sociales y conservación del ambiente son a menudo rasgos dominantes. Por desgracia no puede decirse lo mismo de varios gobernadores estatales de la izquierda mexicana que, repitiendo historias antiguas, dejan sus cargos con finanzas personales considerablemente mejoradas y poca (si es que alguna) mejora en otros territorios, incluidas las relaciones entre sociedad e

instituciones. Aclaremos que la mayoría de estos personajes de “izquierda” son tráfugas del priísmo que llevan al Partido de la Revolución Democrática sus propias redes locales y estrictas visiones de la política como ocupación del poder y reparto de prebendas.

Otro contraste: mientras la izquierda italiana ha sido tradicionalmente más fuerte en las regiones del centro norte del país (el área de mayor desarrollo relativo), la izquierda mexicana realmente existente, el PRD, muestra en las dos últimas décadas una mayor presencia en el sur del país, el área de menor desarrollo relativo de México. O sea, donde el país avanza más la izquierda está virtualmente ausente.

Una anotación final sobre algo que hace respirable Italia a pesar del tufillo que expide una (¿todavía?) poderosa cultura berlusconiana. Me refiero a los cómicos. Roberto Benigni, Beppe Grillo y varios otros se han convertido en una barrera cultural de la ironía y la sátira contra la frivolidad de los medios de comunicación y una cultura de “reality show” y del éxito personal a toda costa. Ver a Benigni recitar a Dante en las plazas, mientras entevera observaciones sobre el presente (e, inevitablemente, sobre Berlusconi) no es sólo un deleite, es una bocanada de aire que permite vivir mejor en medio del cinismo y la estupidez.

Pocos días antes de regresar a México, de noche en las colinas que descienden de Urbino al Adriático, un viejo amigo recita de memoria y sin el menor énfasis declamatorio, poesías de Montale, García Lorca (en italiano), Ungaretti y Leopardi. Y de pronto me doy cuenta que el genio de Benigni no nace del desierto.

México DF, septiembre de 2006

El Plan África 2006-2008

ÁLVARO IRANZO

Director General de Política Exterior para el Mediterráneo,
Oriente Próximo y África, MAEC

La adopción, por el Consejo de Ministros en mayo pasado, del Plan África 2006-2008 ha abierto una nueva etapa en las relaciones de España con la región subsahariana. Elaborado tras un amplio proceso de consultas, el Plan África constituye una herramienta útil para llevar a cabo una política exterior hacia África global y ambiciosa, pero al mismo tiempo realista y práctica.

La nueva mirada de España hacia África está libre de prejuicios o condicionamientos históricos. Sumida como estaba en un prolongado declive, España se mantuvo al margen del reparto gestado en el Congreso de Berlín de 1885. A diferencia de otros países europeos, España no tiene la rémora de haber padecido en África Subsahariana, con la parcial excepción de Guinea Ecuatorial, traumáticas experiencias postcoloniales.

En los primeros años de la Transición, los intereses españoles en África eran puntuales y fragmentarios. Mientras España se afanaba por ocupar su lugar natural en Europa y sentar sobre bases nuevas sus relaciones con Iberoamérica y el Mediterráneo, nuestra presencia al sur del Sahara prácticamente se circunscribía a la actividad de misioneros y pescadores.

Las reivindicaciones sobre la africanidad política de las Islas Canarias y el eco pasajero que recibieron en el seno de la Organización para la Unidad Africana fueron una primera llamada de atención que

se tradujo en la apertura de Embajadas y el intercambio de viajes y visitas. A partir de 1985, el ingreso de España en el grupo de países donantes trajo consigo nuevas posibilidades y ámbitos de actuación.

En los últimos treinta años, el marco conceptual ha cambiado sustancialmente. Tanto África como España han experimentado grandes transformaciones. En el continente africano han avanzado los principios democráticos y de integración con la creación de la Unión Africana, inspirada en el modelo europeo, aunque persisten graves problemas entre los que destacan la pobreza y la guerra.

España, por su parte, gracias a la solidez de su sistema político y a su sostenido crecimiento económico es hoy el octavo mayor contribuyente al sistema de Naciones Unidas y tiene un peso específico en la escena internacional del que se derivan ineludibles responsabilidades. España no puede permitirse por ejemplo, so pena de poner en entredicho su credibilidad y prestigio internacional, asumir una actitud pasiva ante el drama humano que se vive en Darfur o el complejo proceso de transición de la República Democrática del Congo.

El Plan África surge, pues, de la necesidad de llevar a cabo una profunda puesta al día de los fundamentos y medios de acción de la política exterior de España en África, pero es el fruto sobre todo de un incontestable impulso político del Gobierno para situar a la región subsahariana en el plano de importancia y prioridad que le corresponde dada nuestra proximidad geopolítica y la relevancia de los intereses y retos compartidos.

El Plan África no se reduce, como en algún lugar se ha sugerido, a un catálogo apresurado de medidas de emergencia, adoptadas para salir al paso de la crisis migratoria procedente de África subsahariana, sino que obedece a un compromiso firme y temprano del Gobierno, a una apuesta estratégica que viene a colmar un vacío histórico de nuestra política exterior y a satisfacer una creciente demanda de la sociedad, partidaria de prestar una mayor atención hacia los problemas de África.

El Plan establece una priorización tanto de objetivos, que son siete y se corresponden con otras tantas líneas de acción, como de países, distinguiendo entre aquellos merecedores de un interés prioritario, un interés específico o los que, por sus especiales circunstan-

cias, precisan un especial seguimiento. Asimismo se otorga particular importancia al reforzamiento de los lazos con dos organizaciones internacionales africanas, la UA y la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental).

En primer lugar, y habida cuenta de que África continúa siendo el continente más expuesto a situaciones de guerra y conflicto, el Plan aboga por una participación más activa en procesos de paz y apoyo a la promoción de la democracia. Un primer ejemplo práctico puede hallarse en el envío de un contingente de 130 efectivos en la misión EUFOR de la Unión Europea para reforzar la MONUC durante el proceso electoral en la República Democrática del Congo.

Desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, la AOD que España presta a la región se ha triplicado en los dos últimos años, y ha pasado de 125 millones de euros en 2003 a 450 en 2005. El presupuesto ejecutado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en África Subsahariana ha crecido en esta misma proporción: los 33 millones de euros gastados en la región en 2003 contrastan con los cerca de 100 con que se cerrará el ejercicio de 2006. En línea con el principio básico que informa el vigente Plan Director de la Cooperación Española, la lucha contra la pobreza absoluta, África ha salido de la situación de marginalidad para la Cooperación Española en la que hasta ahora se encontraba relegada. Esta contribución de España a la agenda de desarrollo africana otorga a nuestro país una mayor credibilidad y capacidad de interlocución en el continente.

El complejo fenómeno migratorio es abordado en el Plan África desde una perspectiva global. El Plan África persigue fomentar la cooperación para gestionar adecuadamente los flujos migratorios y hacer efectiva la obligación de impedir la salida de inmigrantes ilegales y permitir su repatriación.

La obligación internacional de combatir la inmigración ilegal se encuentra contenida no sólo en Acuerdos bilaterales sino también en instrumentos multilaterales como el Acuerdo de Cotonou (art. 13) o la Declaración y el Plan de Acción adoptados en la Conferencia sobre Migración y Desarrollo celebrada en julio en Rabat por iniciativa de España y Marruecos, que ha puesto en marcha una nueva diná-

mica de gestión de la problemática migratoria desde la concertación y la corresponsabilidad de los países de origen, de tránsito y de destino.

El mensaje de firmeza en la lucha contra el tráfico ilegal de personas se combina, no obstante, con una mano extendida para ofrecer nuestro apoyo en el reforzamiento de las capacidades de los países subsaharianos de origen y tránsito y el fomento de la migración legal y con todas las garantías hacia España. Esta es la filosofía que subyace bajo el modelo de lo que hemos venido a llamar Acuerdos de nueva generación impulsados por el Gobierno con nuestras contrapartes africanas. Inspirados en los principios de interdependencia y corresponsabilidad, estos acuerdos están llamados a cobrar una importancia creciente.

En el marco de la UE, nuestro gran objetivo es que la Estrategia hacia África adoptada por el Consejo Europeo de diciembre de 2005 cuente con los medios y recursos adecuados para su ejecución y se convierta en una Estrategia Conjunta de la UE y África, que debería ser consensuada por ambas partes en una Segunda Cumbre continuadora de la Conferencia de El Cairo de 2000, que España desea y espera que tenga lugar en el segundo semestre de 2007 en Lisboa.

El Gobierno español cree, y así se lo ha señalado a sus socios, que Europa puede y debe llevar a cabo un verdadero salto cualitativo en el apoyo que presta a los procesos de desarrollo y fortalecimiento democrático en África. La UE también puede y debe hacer mucho más en el terreno migratorio. A esta convicción responden iniciativas recientes del gobierno español para el reforzamiento de la operatividad de la agencia FRONTEX o la propuesta conjunta de ocho países europeos al Presidente de la Comisión al objeto de avanzar en una respuesta común al desafío migratorio, que está llamado a ser uno de los grandes retos mundiales del siglo XXI.

Hay también mucho trabajo que desarrollar en términos de dar a conocer y animar a los operadores económicos españoles para que aprovechen las oportunidades de negocio e inversión que a pesar de las dificultades ofrece la región subsahariana, que no sólo cuenta con grandes recursos energéticos y naturales, sino, lo que es más importante, con una población joven y un enorme mercado potencial. El Plan África propugna asimismo una mayor participación

en el sector de los hidrocarburos con vistas a reforzar la seguridad energética de España de manera sostenible y beneficiosa para el desarrollo económico y social de África.

En la era de la Alianza de Civilizaciones, los valores africanos y su gran legado cultural deben disfrutar de vías de transmisión y de interrelación con los otros valores que componen la gran civilización universal. A este objetivo se suma la conveniencia de difundir una imagen objetiva, apartada de los clichés deformantes, de la realidad política, económica y social del África actual. A estos fines el gobierno español ha puesto en marcha un ambicioso proyecto, la Casa África, que iniciará este año su andadura en Las Palmas, con la vocación de convertirse en el gran instrumento catalizador de iniciativas de diálogo e intercambio entre España, Europa y África.

Por último, como un objetivo específico y al mismo tiempo como medio para la consecución de los demás, el Plan África hace hincapié en el refuerzo de la presencia institucional de España en África y de los contactos viajes y visitas a todos los niveles. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha realizado ya dos importantes giras por la región subsahariana, en diciembre de 2005 y junio de 2006, además de sendos viajes a Sudán en septiembre de 2004, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de Seguridad, y a Guinea Ecuatorial en febrero de 2005. La tercera gira está prevista para el próximo mes de octubre, por los países africanos de la vecindad atlántica de Canarias.

También se han recibido en los dos últimos años importantes visitas de autoridades subsaharianas, especialmente de aquellos países y organizaciones considerados prioritarios: el Presidente Wade de Senegal en noviembre de 2004, el Presidente Obasanjo de Nigeria en septiembre de 2005, el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alpha Omar Konaré, en abril pasado, o el Primer Ministro de Níger y el Ministro de Exteriores de Malí.

En el capítulo institucional, el despliegue diplomático y consular de España en África subsahariana también está siendo actualizado y reforzado. La apertura de Embajadas en Sudán y Malí, y la próxima de Cabo Verde elevan ya el número de Misiones diplomáticas de España en África subsahariana a 19, lo que nos sitúa, junto

a otros parámetros, como uno de los principales actores internacionales en la región. Con todo, la voluntad del Gobierno es continuar abriendo más Representaciones diplomáticas y consulares, particularmente en la región africana occidental, que históricamente ha presentado un cierto déficit en comparación con otras áreas a pesar de nuestra cercanía geográfica y los grandes intereses en juego. Este esfuerzo diplomático se acompaña también de nuevas Oficinas Técnicas de Cooperación y Agregadurías sectoriales de Departamentos como Interior e Industria y Comercio.

Motivado primordialmente por la crisis de la inmigración ilegal y en el marco del Plan África, el Gobierno ha llevado a cabo también un despliegue diplomático temporal en la región occidental, de tal forma que todos los países del África occidental y particularmente aquellos que son origen y tránsito de la inmigración ilegal cuentan hoy con una antena diplomática española, lo que nos ha permitido contar con una mayor capacidad de información sobre el terreno y de interlocución con las autoridades respectivas.

El Plan África es el punto de partida de un proceso que tiene por finalidad diversificar, profundizar y dotar de más contenido a las relaciones de España con África Subsahariana. El Plan África es un programa de trabajo evolutivo, que podrá ser adaptado a las cambiantes circunstancias y que se encuentra abierto a la participación y a las aportaciones de otros actores tanto de la sociedad civil como, por ejemplo, de la administración descentralizada.

Madrid, septiembre de 2006

Violencia social y globalización en América Latina

MANUELA MESA¹

Directora, Centro de Investigación para la Paz

GLOBALIZACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

La globalización se relaciona, con frecuencia, con los flujos e interconexiones económicas, generalmente de carácter legal, y en particular con la transnacionalización de la producción y las finanzas. La globalización, sin embargo, también tiene un lado oscuro, con crecientes flujos ilícitos de personas, armas, drogas y capitales que aprovechan las oportunidades de la apertura y la liberalización, y el potencial de las nuevas tecnologías. En América Latina, que se ve particularmente afectada por estas dinámicas, la violencia tradicionalmente asociada a estas actividades también se transnacionaliza, y aunque en cada país se manifiesta de distintas formas, ya no puede ser vista a través de prismas exclusivamente nacionales, que ignoran o minusvaloran sus ramificaciones globales. De igual manera, afrontar la violencia transnacional exige políticas que desbordan el marco de la política y de la acción de gobierno del Estado-nación.

1. mmesa@fuhem.es

AMÉRICA LATINA: LAS CAUSAS Y LAS MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA

En América Latina, el fin de la guerra fría significó cambios en las líneas de fractura que originaban los conflictos violentos (Kaldor 2001: 180). Antes de 1989 esas líneas coincidían básicamente con las fronteras de los dos bloques y con los antagonismos ideológicos internos, y que el sistema político no podía solventar por medios institucionalizados. Muchos de estos conflictos cesaron en la posguerra fría, a través de procesos de paz y de democratización que facilitaron la desmovilización de los actores armados, pero dejaron un amplio arsenal disponible que sirvió para alimentar el creciente tráfico ilegal de armas ligeras presente en la región. Con éste se han rearmado distintos grupos ilegales y el crimen organizado. El poder e influencia de estos grupos no ha dejado de aumentar, llegando a impedir el pleno control del Estado en amplias áreas del territorio, como ha ocurrido con los paramilitares en Colombia; y a imponerse como fuentes de autoridad en los barrios marginales, como ilustra el desafío a la autoridad del “Primer Comando de la Capital” de Sao Paulo, o las operaciones casi militares que se han desarrollado en algunas favelas. En el conflicto colombiano, algunos actores armados aún reivindican motivaciones ideológicas, pero el control del territorio y de los recursos de las drogas se han convertido, cada vez más, en sustento económico y probablemente en la finalidad misma de la violencia. Por todo ello, los avances en la democratización no han estado acompañados por avances similares en el derecho a la vida y la integridad personal.

Es evidente que en América Latina la violencia político-militar ha disminuido, pero se han agravado otros tipos de violencia social y el crimen organizado en redes transnacionales. Los homicidios dolosos alcanzan 25,1 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto del mundo y tres veces la media mundial (PNUD 2004: 111-113). En las dos últimas décadas, la violencia fue la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de entre 15 y 44 años. El coste económico de la violencia alcanza niveles muy altos. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que éste se situaría entre los 140.000 y los 170.000 millones

de dólares anuales, lo que equivale al 12% del PIB anual regional (Buvinic y Morrison 1999). Buena parte de esos costes es atribuible a la contratación de seguridad privada, sólo accesible a los más ricos, lo que supone un factor añadido de desigualdad en la región.

VIEJAS Y NUEVAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA

La gravedad de la violencia en América Latina se explicaría por distintos factores. Muchos de ellos son la expresión de problemas sociales y políticos tradicionales de la región, como las fracturas sociales que la caracterizan –además de contar con una elevada tasa de pobreza, América Latina es la región más desigual del mundo–; la debilidad de las instituciones, que se traduce en vacíos de autoridad que ocupan distintas organizaciones criminales, en particular la ineficacia y la corrupción que minan a los cuerpos policiales y a la administración de justicia; y el legado de los conflictos armados de las últimas décadas.

En primer lugar, la exclusión social, la pobreza, la discriminación y la informalidad –según la Organización Internacional del Trabajo, casi uno de cada dos trabajadores urbanos latinoamericanos son informales– constituyen un terreno fértil para las actividades ilícitas. En particular, existe una fuerte presión migratoria que nutre las redes transnacionales de tráfico de personas. De igual manera, la concentración socio-espacial de la pobreza y la informalidad –el fenómeno de la “ciudad dividida”– está muy relacionada con la violencia urbana (Kruijt, 2006).

En segundo lugar, existe una relación entre el surgimiento de los actores armados en América Latina y la debilidad de las instituciones, que se traduce en vacíos locales de gobierno. En las barriadas y favelas de las grandes ciudades latinoamericanas, estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y de los representantes de la ley. A menudo, los actores armados privados e informales ocupan el lugar de la policía y la justicia (Koonings y Kruijt, 2006). La ausencia de la autoridad se explica por la debilidad de las instituciones públicas, pero las bandas armadas la imponen por la fuerza, pues es un requisito para poder desarrollar su actividad delictiva, generalmente asociada al narcotráfico. El poder de las mafias y

cárteles de la droga busca a menudo “legitimarse” imponiendo una forma de “orden” local, a través de la distribución de ayudas y patrocinios a grupos deportivos u otras agrupaciones locales; también imponen gravámenes, establecen toques de queda, y realizan reclutamientos forzosos y ajusticiamientos. De hecho, los nuevos actores armados son la autoridad local de facto, en las favelas o barriadas de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, y México DF. Son los nuevos representantes de una “ley paralela”, que coexiste con el resto de la sociedad. Pero esta actuación no sería posible sin las extraordinarias ganancias del tráfico de drogas transnacional.

En tercer lugar, las prolongadas guerras civiles de los países centroamericanos y andinos han dejado un legado de violencia y criminalidad y un gran número de armas de guerra ahora utilizadas para actividades delictivas. Los actuales responsables de la violencia son en muchos casos actores no estatales que operan en enclaves urbanos pobres y marginales, en ocasiones surgidos de procesos de desmovilización de las fuerzas armadas, los paramilitares y los grupos guerrilleros. Empero, también emergen bandas criminales que han logrado tener el monopolio de la violencia (ilegítimo a ojos del Estado, legítimo a ojos de ciertos sectores sociales) en países como Colombia, Guatemala y México y en un sentido más restringido, en Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras y Perú (Kruijt, 2006). En Centroamérica, por ejemplo, los procesos de paz y la desmovilización de los guerrilleros y de los paramilitares coincidió con el surgimiento de las “maras”, alimentadas en parte por la falta de oportunidades laborales para los desmovilizados y el vacío de poder que creó la posguerra en zonas urbanas y marginales.

En cuarto lugar, hay que mencionar la ineficacia y la corrupción que minan a las fuerzas policiales y al poder judicial. Para muchos latinoamericanos, la policía no sólo no puede impedir la violencia urbana, sino que es parte del problema, porque con frecuencia es abusiva, incompetente, corrupta o está implicada en los secuestros o en el narcotráfico (The Economist, 2004). Esta percepción negativa de las fuerzas del orden se debe al legado de las dictaduras, que militarizaron a la policía y la orientaron a funciones contrainsurgentes y de mantenimiento del orden interno. Con la democratiza-

ción, no ha sido fácil su adaptación a las funciones de seguridad pública. Además, algunas fuerzas de seguridad están distorsionadas por la presión externa. Es el caso de Perú o de Colombia. Éste último país cuenta con modernos medios para combatir el narcotráfico, suministrados por Estados Unidos, pero no presta atención ni es eficaz a la hora de enfrentar la delincuencia común en los barrios.

A estos problemas se le suma la debilidad y la ineficacia del poder judicial, que se traduce en la impunidad generalizada. En México, se estima que el 96% de los delitos violentos perpetrados entre 1996 y 2003 no han sido llevados a la justicia. En Brasil, de los 50.000 asesinatos perpetrados cada año, sólo el 8% han sido llevados a juicio, y se estima que el 75% de los delitos no son denunciados (*The Economist*, 2004). En Guatemala, sólo el 4% de los crímenes termina en una condena. Es muy significativo el elevado índice de presos en situación preventiva, que esperan juicio durante años en prisiones atestadas y en pésimas condiciones. En 2002, alrededor del 55% de la población carcelaria de América Latina se encontraba en esta situación. La impunidad generalizada es un poderoso incentivo para las actividades delictivas, que suelen producir grandes beneficios con muy poco riesgo para quienes las realizan.

Finalmente, la violencia y la corrupción producidas por el mercado negro permiten que el crimen organizado infiltre a las instituciones encargadas de aplicar la ley y socava el estado de derecho. El crimen organizado no puede sobrevivir sin la corrupción, y por ello busca oportunidades para crearla y profundizarla. Las organizaciones criminales tienen que quebrantar a las instituciones encargadas de aplicar la ley y de procurar la justicia para evitar que se les responsabilice por sus crímenes; este proceso daña la capacidad del gobierno para promover y proteger los derechos humanos y el estado de derecho.

LAS RESPUESTAS: ENTRE LO LOCAL, LO NACIONAL, Y LO INTERNACIONAL

Según distintas encuestas de opinión la inseguridad es la mayor preocupación de los latinoamericanos después del empleo, y esto explica las movilizaciones sociales que se han producido en estos úl-

timos años en Buenos Aires, México o Río de Janeiro, exigiendo medidas efectivas contra el crimen, la violencia y la inseguridad.

Debido a la complejidad de la violencia en América Latina, no existen respuestas fáciles. Pero a menudo las respuestas suelen ser fragmentarias y de carácter represivo, y se centran en la aplicación de la fuerza militar y policial. Las autoridades federales y estatales invierten poco o nada en la protección de las comunidades pobres, a pesar de que éstas tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos violentos. En la asignación de los presupuestos destinados a la seguridad pública se insiste en la represión, lo que “criminaliza” de hecho a las comunidades pobres. En algunos países, los gobiernos parecen haber desistido de reformar la policía, y han optado por crear nuevos cuerpos policiales de elite con más recursos materiales, mejores retribuciones y sistemas de control más eficaces. Aunque puedan brindar resultados rápidos, ello desmoraliza aún más a la policía regular.

Es necesario impulsar políticas de seguridad pública más globales, que combatan la exclusión, aplicando medidas preventivas y de inserción social. Se trata de fortalecer el tejido social local, mantener el equilibrio entre las tareas represivas y preventivas de la policía, fortalecer los gobiernos municipales y locales y, sobre todo, ganar y mantener la confianza de la sociedad. En definitiva se trata de promover el “buen gobierno” en asuntos de seguridad ciudadana. Y para ello, es esencial impulsar la confianza mutua entre las fuerzas del orden y la población local (Kruijt 2006), y la participación social en esta materia, sin caer en la tentación populista de crear grupos de “vigilantes” que puedan tomarse la justicia por su mano.

Sin embargo, es difícil que pueda tener éxito una política de seguridad pública de alcance esencialmente nacional ante una violencia cuyos vínculos y ramificaciones se extienden más allá de los confines de los países latinoamericanos, y de la propia región. Las respuestas se encuentran, en buena medida, en un mayor papel de la integración regional en la provisión de seguridad, considerada un “bien público regional” que requiere mayores cotas de cooperación entre gobiernos y otros actores regionales y extrarregionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Buvinic, M. y Morrison, A (1999). *Violence as an Obstacle to Development*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington
- Amnistía Internacional (2005). *Brasil: "Entran disparando". La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas*, Brasil, diciembre.
- Kaldor, Mary (2001). *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquets editores.
- Koonings y Kruijt. (2006). *Armed Actors. Organized Violence and State Failure in Latin America*, Londres, Zed Books.
- Kruijt, Dirk (2006). *América Latina: Democracia, pobreza y violencia: Viejos y nuevos actores*. Ponencia presentada en el curso de verano de El Escorial "Conflictos armados y construcción de la paz. El papel de la ayuda al desarrollo", 24-28 de julio.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, Nueva York, PNUD
- The Economist* (2004). "The battle for safer streets", 30 de septiembre.

Madrid, octubre de 2006



El futuro de la protección social en América Latina: la respuesta de la cooperación española

JUAN PABLO DE LAIGLESIA

Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

En su último período de sesiones la CEPAL presentó un informe sobre la situación de la protección social en la región y sus perspectivas de futuro. Esta comisión de las Naciones Unidas plantea la necesidad de reformular la protección social basándose en los principios de solidaridad y de universalidad para hacer frente a los cambios estructurales que afectan a América Latina.

Desde la Cooperación Española nos es grato ver que estos principios acceden a un lugar privilegiado en la agenda social de la región, puesto que entendemos que las políticas de protección social son uno de los pilares fundamentales para fomentar una mayor equidad en la distribución del bienestar y para ampliar y consolidar los derechos de ciudadanía.

La protección social no puede concebirse actualmente fuera del contexto de los Derechos Humanos y, específicamente, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que incluyen el derecho al trabajo, a la seguridad social, a ingresos dignos, al descanso y el tiempo libre, a la salud, al abrigo y la vivienda, y a la educación y la cultura, entre otros.

De este modo, en la AECI pensamos que la protección social es un derecho universal. Por lo tanto, como tal derecho debe de ser exi-

gible por los ciudadanos. Y es aquí donde el Estado –todos los Estados–, deben intentar garantizar este derecho y traducirlo en políticas públicas tan inclusivas como lo permitan sus posibilidades.

Esta firme convicción explica por qué, en España, desde la aprobación de la Constitución de 1978, se han impulsado de una forma tan marcada las políticas sociales; por qué se han universalizado el acceso a tres de los denominados “pilares” del Estado de bienestar –la educación, la salud y las pensiones– y por qué, en estos momentos, el Gobierno está en vías de acometer la construcción del cuarto de dichos pilares: la atención a las personas dependientes.

Esta concepción ha permitido a España desplegar un complejo sistema de protección que ha fomentado un desarrollo con cohesión social y territorial. Por eso la Cooperación Española también apoya los esfuerzos de los países de América Latina que intentan profundizar en sus políticas públicas de protección social.

América Latina tiene ante sí un escenario complejo. Las satisfactorias cifras de crecimiento económico de los últimos años no están revirtiendo en el bienestar de casi la mitad de los latinoamericanos. Recordemos que los niveles de pobreza y exclusión en la región todavía afectan entre el 40 y el 50 por ciento de su población. Un papel activo del Estado es por lo tanto fundamental para compensar esta asimetría en la distribución de los beneficios del crecimiento.

Hasta la fecha, los incipientes sistemas de protección social existentes en la gran mayoría de los países de América Latina no están logrando dar una respuesta satisfactoria a estos retos. Ello se debe, en parte, a que estos sistemas están basados principalmente en modelos de tipo contributivo y vinculados a la inserción al mercado formal de trabajo.

Lamentablemente, el elevado índice de informalidad laboral, y los bajos niveles de ingresos, son hoy día un impedimento para que una población crecientemente vulnerable se pueda beneficiar de los sistemas de protección. Este hecho es aún más preocupante si observamos la tendencia de estos últimos años, en los que de un 60 a un 70 por ciento de los empleos se han creado en el sector informal.

Esta falta de universalidad del derecho a la protección social, y la predominancia del esquema contributivo para acceder a estos de-

rechos, profundiza la brecha entre los que gozan de un empleo formal y el resto de la población.

En el mejor de los casos, a la población excluida se le ha atendido mediante actuaciones paliativas y de emergencia. Un ejemplo de ello son los programas focalizados de transferencias condicionadas, dirigidos a paliar los efectos, y no las causas de la exclusión. Pero estos mecanismos, aunque necesarios, no son suficientes para atacar las verdaderas causas estructurales del problema: la discriminación y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Esta situación nos preocupa, puesto que un desarrollo sin cohesión social ni equidad tiene pocas posibilidades de mantenerse en el tiempo. La fractura social y el crecimiento de la brecha económica pueden conducir a un nivel de tensión interna nefasto para la estabilidad política y social y el desarrollo sostenible.

En este sentido, es preciso analizar las políticas sociales en su contexto particular e ir más allá de las estadísticas agregadas. Estas estadísticas nos muestran, por un lado, que en América Latina se ha producido un crecimiento del gasto social, aunque todavía inferior a lo deseable. Pero esas mismas estadísticas, por otro lado, nos dicen muy poco sobre los beneficiarios de este mismo gasto.

En efecto, la calidad del gasto es para la región una asignatura pendiente. Las poblaciones más desfavorecidas son también, en la mayoría de los casos, las más desprotegidas, porque el gasto público en salud, educación, agua o saneamiento prácticamente no llega a los más pobres.

Para garantizar la universalidad del derecho a la protección social es esencial que ésta sea respaldada por instituciones sólidas y con una gestión transparente. Por otro lado, se necesita una arquitectura financiera sostenible para cubrir estas necesidades. En este sentido, hay que apostar por la diversificación de las fuentes de financiamiento, tales como la recaudación fiscal, las contribuciones y las alianzas público-privadas. De hecho la mayoría de los países de Europa y de América Latina se han encaminado con diferente grado de avance hacia este modelo de financiamiento mixto.

En esta búsqueda de una arquitectura estable de financiamiento de la protección social en la región para alcanzar un objetivo de uni-

versalización de derechos, el instrumento fiscal es la herramienta de mayor utilidad. De ahí la especial relevancia de reformas fiscales profundas orientadas a ampliar la base de recaudación y a aumentar la progresividad de la carga impositiva, para que no produzca efectos perversos sobre la población más vulnerable.

El Plan Director de la Cooperación Española presta a esta situación un interés especial y destaca como una de las líneas estratégicas de actuación el apoyo a la reforma de las instituciones de recaudación de ingreso y de gasto público. En el primer caso, a través del fomento de sistemas tributarios de carácter progresivo y equitativo. Pero también, en lo referido al gasto público, apoya aquellas que promuevan un gasto con garantías de transparencia y control, eficacia y eficiencia, y orientado hacia las prioridades sectoriales para la lucha contra la pobreza.

Estas reformas, para ser efectivas, tienen que descansar sobre un amplio consenso social. Y el fomento de la participación social, en la fase de definición de las políticas sociales y en su aplicación, ha demostrado ser un aspecto fundamental.

El modelo de los pactos sociales, impulsado en varios países europeos, podría tal vez ser utilizados para generar espacios que fomenten una cohesión social hasta ahora muy fragmentada en el contexto Latinoamericano. Eso sin olvidar la necesaria adaptación a cada contexto nacional.

Por esta razón el Plan Director ha establecido como otra de sus líneas prioritarias el apoyo y el fortalecimiento de los procesos y los mecanismos institucionales de diálogo social. El objetivo es la promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres para conseguir un trabajo productivo y digno, y favorecer el consenso y la participación en el mundo del trabajo y en las políticas económicas y sociales, alentando el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad y el desarrollo económico.

Pensamos que la realidad social de América Latina requiere de una revisión de los modelos de protección social vigentes. Y, consecuentemente, los aportes del Informe de la CEPAL “La protección social de cara al futuro” nos parecen de especial relevancia.

El Informe de CEPAL nos brinda tanto respuestas como elementos de reflexión adicionales. Es éste un momento particularmente

oportuno para la Cooperación Española al estarse elaborando nuestra estrategia para la gobernabilidad. La preocupación de todos es que nuestro apoyo a las políticas sociales pueda favorecer efectivamente la universalización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y con ello el bienestar de toda la ciudadanía.

Madrid, octubre de 2006



Ecuador: dos estilos y dos opciones doctrinarias

JAVIER PONCE

Periodista, diario *El Universo*

Las urnas han arrojado resultados poco esperados en las elecciones ecuatorianas del 15 de octubre, protagonizadas por trece candidaturas del más variado tono, desde bolivarianos hasta evangelistas.

Se ha ratificado la necesidad de una segunda ronda el 26 de noviembre entre los dos finalistas: Álvaro Noboa y Rafael Correa. Las sorpresas consistieron en que Noboa se impuso sobre el más candidato al que todo el mundo daba más opciones, Correa, con una diferencia de menos de cien mil votos en un electorado de nueve millones de electores; el hundimiento del candidato del estamento político, que hasta hace dos meses estaba primero en las encuestas, León Roldós; y el ascenso del hermano de Lucio Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, colocado en la partida simplemente para consolidar el partido político de Lucio y animar los últimos lugares, pero que, finalmente, llegó tercero. A ello se suma el hundimiento de los dos partidos que han protagonizado estas casi tres décadas de democracia: el Social Cristiano de León Febres Cordero y la Izquierda Democrática creada por Rodrigo Borja, los dos ex presidentes de la República en la década de los ochenta.

Álvaro Noboa es propietario de un imperio bananero, de buena parte de la exportación de café y de la producción de harinas, además

de cerca de un centenar de otras empresas, y un veterano contendor electoral: fue finalista en las elecciones de 1998 frente al demócrata cristiano Jamil Mahuad y en 2002 frente al coronel Lucio Gutiérrez, protagonista del golpe de estado de 2000 contra Mahuad.

Rafael Correa, con un vertiginoso ascenso político, fue ministro de finanzas del actual gobierno de Alfredo Palacio, autor de una polémica decisión por la que destinó a la política social recursos que se “guardaban” para el pago de la deuda externa; enemigo declarado de los partidos tradicionales y partidario radical de la reforma política y económica a través de unas Asamblea Constituyente.

La primera consecuencia del resultado es la polarización entre la propuesta del cambio que nazca de la modificación del sistema político que ha colapsado (Correa); y un cambio (Noboa), por la vía del paternalismo y el mesianismo. Noboa ha ido perfeccionando en las tres elecciones un estilo místico delirante. Llegó en esta ocasión a provocar asambleas de rezadores, imponer sus manos sanadoras sobre la cabeza de los enfermos, regalar sillas de ruedas en todos los mítines y echarse de hinojos en las concentraciones con un enorme crucifijo colgando del pecho. Una extraña versión política de los charlatanes de feria, pero encarnada en la más grandes fortuna del país.

Rafael Correa, por su lado, se presenta carismático, joven (43 años), vengador de una ciudadanía que en abril de 2005 pidió que “se vayan todos” los políticos del Estado (y nadie se fue), opuesto a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y a cualquier entendimiento con el FMI.

Rafael Correa ha despertado un aliento esperanzador en sectores asfixiados por la corrupción estatal y las mafias políticas, en momentos en que la representación política está pulverizada y la protesta en las calles es la única vía de expresión de los intereses de los segmentos sociales. Proclama en sus pancartas que “La patria vuelva”, una frase que recuerda la expresión de uno de los mayores intelectuales contemporáneos ecuatorianos, Benjamín Carrión, que proclamó, sobre la huellas de la derrota militar sufrida por el país frente al Perú en 1941: “Volvamos a tener patria”.

Noboa se apoya en el hecho de haber sobrevivido tres campañas, con la particularidad de que sus contendores se cayeron a los dos

años de gobernar; en su condición de multimillonario que le permitió imponer una publicidad sin límite y aparecer como una garantía de eficiencia (aunque toda la fortuna la debe a una herencia obtenida de manera oscura); en esa imagen de histriónico “enviado divino” como se proclama a sí mismo; y en la oferta de bienes y servicios muy concretos y sentidos por la población pobre: la vivienda, el microcrédito, el empleo ofrecido por un empresario exitoso, la atención de salud que ha mantenido durante casi una década con hospitales rodantes, financiados por él y administrados con éxito por su esposa. En síntesis: una oferta de cambio por obra de la dádiva individualizada.

A una población descorazonada, Noboa le ofrecerá el reino en la tierra; y ha probado que es capaz de convencer a grandes masas.

¿Qué puede perjudicarlo? Que su imagen mística haya tocado techo; que la oposición denuncie con fuerza las condiciones de explotación que sufren los pequeños productores y jornaleros en su imperio bananero; y que la opinión pública que le vio llegar en puntillas, sin hacer olas, al primer lugar, le obligue a definiciones que Noboa no está en condiciones de ofrecer.

En el caso de Correa, le ha ayudado su propuesta de acabar con la “partidocracia” y convocar inmediatamente una Asamblea Constituyente que modifique a profundidad un colapsado sistema político y un sistema económico que se ha mantenido entre el ajuste con perjuicio de las políticas sociales y la transferencia de recursos a los sectores de mayor poder; tiene un pasado honesto y joven, dotes de agitador popular y un prestigio de economista y académico graduado en universidades de Bélgica y Estados Unidos, afianzan su imagen.

Correa tiene la desventaja de haber llegado segundo luego de ser el más opcionado; de mantener un discurso radical que le vale entusiastas adherentes pero también temerosos enemigos –por ejemplo los banqueros–, que anuncian un apocalipsis y que no escatimarán esfuerzos para verlo derrotado.

¿Qué puede esperarse que ocurra en la segunda ronda del 26 de noviembre?

Noboa parte con ventaja: fue el candidato que terminó la primera ronda en ascenso y llegó primero; contará con el voto “vergonzante” de una derecha que perdió en las urnas pero que maneja con

habilidad el arma del “miedo”; miedo a una supuesta alianza de Correa con Chávez y Castro, miedo a una supuesta renuncia tanto a la dolarización como al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; miedo a la confrontación que se originaría si Correa pretende socavar el poder de las cúpulas políticas.

Rafael Correa deberá desvirtuar una aureola de autoritario que agita una correa en todos los mítines de campaña; necesita mirar un poco hacia el centro para captar un nuevo electorado; y aprovechar los puntos flacos de su contendor: su simplicidad de razonamiento que le ha valido la fama de ser muy poco capaz. Adicionalmente, la ausencia en Noboa de una propuesta en temas claves como la corrupción, la política petrolera, el combate a la pobreza desde políticas de estado; su condición de gran exportador de banano en detrimento de miles de pequeños productores sometidos a la dictadura de los precios impuesta por los exportadores; y el derroche de su campaña publicitaria.

Correa buscará radicalizar la confrontación entre ciudadanos y partidos, pero deberá también descender a propuestas concretas en aquello en que le lleva ventaja Noboa: la educación, la salud, el empleo, el crédito productivo. Deberá ofrecer algunas certezas a una población que ha perdido fe en el país y que, en buena medida, buscó la emigración como el último recurso (un millón de ecuatorianos se han ido desde 1998 hasta ahora).

Ninguno de los dos intentará, seguramente, alianzas con las cúpulas de los partidos. No les traería beneficio alguno. Los votos no se endosan y peor por parte de partidos en franca caída.

Esta segunda ronda será, en síntesis, una violenta confrontación entre dos estilos y dos extremos doctrinarios.

Desde 1990, cuando se produjo el primer gran levantamiento nacional indígena que modificó el panorama político y social del país, el Ecuador ha cambiado. Nuevos actores sociales irrumpieron en el espacio de la opinión pública y de la participación política. Un buen número de gobiernos municipales se convirtieron en referentes de una nueva manera de administrar el poder. Las veedurías son pan de todos los días. Sin embargo, luego de su fracasada alianza con Lucio Gutiérrez, el movimiento indígena ha ido de tumbo en tumbo y llegó a las actuales elecciones con el respaldo de menos de 3 por ciento del

electorado –la población indígena representa algo más del diez por ciento de la población–, al tiempo que los otros movimientos sociales tienen dificultades para concretar una opción política.

Los movimientos sociales miran con esperanza la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pero aquello volverá a ser una utopía si triunfa Álvaro Noboa. Será un retroceso en el desarrollo de los actores ciudadanos.

Por su parte, un cierto personalismo en la candidatura de Correa ha acabado negando protagonismo en la campaña a estos movimientos, que deberán volver a mirarse en el espejo y reconstituir sus estrategias. Noboa los combatirá o los ignorará. Correa tomó la partida sin ellos y tendrá que volver a sentarse en la mesa del diálogo, porque si triunfa con un margen muy estrecho, no habrá alcanzado en las urnas la legitimidad que necesita para imponer la reforma contra el férreo dominio de los partidos sobre la institucionalidad estatal; y tendrá que buscar esa legitimidad en una ciudadanía obligada a presionar desde los márgenes.

Quito, octubre de 2006



El continuismo en la política brasileña

MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ

Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Salamanca

Brasil es la segunda democracia de masas en el hemisferio occidental. Con un censo superior a los 125 millones de habitantes y una participación por encima de los cien millones sus comicios solamente se ven superados por los de Estados Unidos; países que coinciden con una estructura de Estado federal. Las elecciones brasileñas se vienen celebrando ininterrumpidamente desde 1986, para el caso de las legislativas, y desde 1989 para las presidenciales. La ausencia de anomalías y la paulatina introducción del voto electrónico son características de su devenir organizativo. Tras las distintas reformas introducidas desde la aprobación de la Constitución de 1988 la cita electoral registrada cada cuatro años convoca de forma obligatoria a los brasileños para la elección de un presidente, un Congreso bicameral y 27 gobernadores de los estados.

El presidente, quien puede ser reelegido de manera inmediata por una vez, requiere de una mayoría absoluta de manera que, si ello no sucediera, una nueva elección a la que concurren los dos más votados dirime el resultado final. En las cinco convocatorias presidenciales celebradas hasta el presente, solamente hubo una única vuelta en las de 1994 y 1998 cuando resultó ganador Fernando H. Cardoso

del PSDB. Luiz Inácio Da Silva, Lula, es el único candidato que concurre a todas ellas, disputando la segunda vuelta, y perdiendo frente a Fernando Collor de Mello en 1989 y frente a Cardoso en las dos ocasiones, y resultando vencedor, en segunda vuelta, en las de 2002 y de 2006.

La Cámara de Diputados elige a sus 513 miembros mediante un sistema de representación con listas abiertas donde los estados tienen un mínimo de ocho y un máximo de setenta representantes, lo cual prima a aquellos con menor población en un país donde las desigualdades demográficas de sus estados son muy grandes. Hasta las últimas elecciones no ha habido ningún umbral corrector de la representación, lo que da como resultado un Congreso enormemente fragmentado. El Senado, por su parte, cuenta con 81 miembros y se renueva por tercios cada cuatro años a razón de un senador por estado. Finalmente, los 27 estados eligen a un gobernador de manera análoga a como se elige al presidente.

Las elecciones de octubre de 2006 han confirmado la consolidación de las prácticas poliárquicas en el país, donde el juego electoral se desarrolla de manera normal, y algunos de los elementos más peculiares de la política brasileña cuyo desempeño no es ajeno a la propia realidad nacional en su dimensión tanto social como económica. En este sentido, cabe referirse a tres cuyo contenido sistémico no hace sino reforzar su mayor carácter explicativo. Se trata del personalismo, la disparidad entre los estados y la profunda brecha social existente. Estas variables son más poderosas a la hora de explicar el acontecer político que otras que han tenido una mayor resonancia en los medios de comunicación, como pudiera ser la corrupción o el efecto del “sillón vacío” en la recta final de la primera vuelta electoral.

El sistema político brasileño tiene tres opciones institucionales que, unido a una tradición de su cultura política donde el ensalzamiento de la figura del caudillo político está fuertemente presente, potencian el elevado componente personalista del mismo. Se trata del presidencialismo, del cariz mayoritario en las elecciones de senadores y de gobernadores y del voto preferencial.

El presidencialismo centraliza la atención del proceso político en la elección de un candidato cuya carrera es el objeto de aten-

ción de los medios de comunicación y de todos los múltiples actores intervinientes. La presidencia es el objetivo máximo, los candidatos que corren tras ella son las estrellas del escenario y el premio del triunfo es, aparentemente, el más alto galardón de la liza política. Poco importa que luego un presidente no pueda gobernar por no contar con un apoyo de su entorno político inmediato (su partido) o de otras instituciones como pudieran ser el Congreso o los estados. El componente simbólico del arrastre presidencial es sumamente fuerte y ello, en una democracia de masas, comporta efectos poco institucionalizadores.

El carácter mayoritario de las elecciones al Senado, donde cada cuatro años cada estado elige un senador y el de las elecciones a gobernador tiene el mismo efecto que el descrito en el párrafo anterior, pero llevado al nivel estadual, con el consiguiente reforzamiento de pautas de baja institucionalidad y alto personalismo.

El voto preferencial en las elecciones legislativas hace también que toda la campaña se centre en el candidato quien busca el voto no sólo frente a competidores de otros partidos sino frente a los propios correligionarios, quedando absolutamente relegado el partido político cuyo logo está prácticamente ausente en la publicidad.

La combinación de estos elementos lleva a un nivel obsesivo de personalización, de manera que las elecciones giran en torno a la premisa mayor que las convierte en una carrera individual donde la estrella es la presidencial.

En la primera vuelta del 1 de octubre de 2006. Lula alcanzaba 46,6 millones de votos lo que le suponía el 48,6 por ciento quedándose muy cerca de la mayoría absoluta. Las razones de su supuesto fracaso se centraban en dos argumentos: el rosario de escándalos de corrupción se había coronado en los últimos días con la aparición de una trama contra un candidato del principal partido opositor –lo que proyectaba una indudable y directa sombra de sospecha sobre el propio Lula– y, en segundo lugar, su incomparecencia en el debate televisivo le proyectaba como un líder prepotente e indigno de recibir el apoyo de las clases medias más ilustradas. Sin embargo, no se tenía en cuenta otro elemento que no estuvo presente en los comicios de 2002, cuando en la primera vuelta Lula al-

canzó el 46,4¹, y que era la presencia de dos candidatos que le sobrepasaban por la izquierda, como era el caso de Cristovam Buarque del PDT, que ahora arrastraba a dos millones y medio de electores (2,6 por ciento), y, sobre todo, a una antigua militante del PT, He-loisa Helena, liderando una coalición de partidos de izquierda y que obtenía 6,5 millones de votos (6,8 por ciento).

En la segunda vuelta del 29 de octubre, Lula recibe 58,2 millones de votos, cifra que acumula los obtenidos en la primera vuelta por él mismo y los de Buarque y Helena, que representan el 60,8 por ciento de los votos válidos, porcentaje prácticamente idéntico al de la segunda vuelta de 2002 que fue del 61,2 por ciento. Ello habla de una gran estabilidad en el electorado brasileño tras cuatro años de gobierno y repite el patrón de 1994 y de 1998 cuando Cardoso obtuvo, respectivamente, el 54,3 y el 53,0 por ciento. Así, se puede mantener que existe una pauta de cierta fidelidad hacia el liderazgo sin que tenga merma en el mismo el desgaste de la acción de gobierno. El nuevo rédito electoral de Lula también procede de su capacidad de reconducir la campaña electoral para satanizar a Geraldo Alckmin del PSDB con el fantasma de las privatizaciones del periodo 1995-2002, como insistentemente puso de manifiesto en los cuatro debates televisados celebrados.

Brasil muestra una enorme disparidad entre sus estados que se traduce en un comportamiento político muy diferenciado. Los resultados de la primera vuelta presidencial evidenciaron que Lula era un ganador neto en el Norte y en el Nordeste donde arrasó con el 56 y el 67 por ciento del voto, respectivamente. Perdía frente a Alckmin en los estados del Oeste y del Sur y estaba en una situación de casi empate en el Sudeste donde ganaría con la proyección de los votos de Buarque y Helena. Este proceder según la agrupación regional de los estados se ha mantenido cabalmente en la segunda vuelta. Una explicación de dicho comportamiento electoral lleva a incorporar factores diversos que van desde el carácter histórico más clientelar del Norte y del Nordeste cuya maquinaria ahora ha estado más en-

1. Es decir, entre la primera vuelta de 2002 y la de 2006 Lula había conseguido incrementar su apoyo en algo más de dos puntos porcentuales, aspecto que debe tenerse en cuenta porque significa el apoyo primario realmente directo con que cuenta un político.

grasada por las políticas sociales de Lula, a la propia ausencia tradicional del Estado que ha sido reinvertida en los últimos tiempos por el asistencialismo de Lula, sin desdeñar el hecho de que la izquierda ha tenido un baluarte electoral en los estados del Sudeste. Se ha hablado de la existencia de un voto fracturado geográficamente, pero la división es más compleja, no es únicamente del Norte y del Nordeste pobre frente al resto del país.

Brasil es también un país escindido socioeconómicamente donde la línea de la pobreza, ciertamente mucho más relevante en el Norte y el Nordeste, afecta a todo el país proyectando un marcado componente de clase. Pero la desigualdad social ha disminuido bajo Lula y, de la misma manera, la población en situación de extrema pobreza (del 28 al 23 por ciento), acercándose el ritmo de crecimiento económico real de los pobres a un ritmo del diez por ciento (cuando apenas el de la clase media alcanza el dos por ciento). Un estudio llevado a cabo por Timothy Power de la Universidad de Oxford encuentra una correlación muy importante entre el voto a Lula y la penetración de la política asistencialista conocida como Bolsa Familia, pero también con el programa ProUni y con el incremento de los salarios mínimos al 22 por ciento en términos reales desde 2003². También se constata que el menor grado de preparación que afecta a los más numerosos sectores pobres incide sobre el grado de (des)conocimiento de los problemas de corrupción y, por tanto, minimiza sus efectos.

Lula encara su segundo mandato con igual bagaje porcentual de votos lo que le revalida en su indiscutible liderazgo nacional. En la arena política se ha registrado cierto distanciamiento con su partido puesto en evidencia en el hecho de que en su campaña electoral Lula prescindió de cualquier vinculación con el PT. Lula cuenta con apoyos legislativos inicialmente menores que en 2002, pero el descenso del número de diputados del PT y cierto alejamiento de éste puede ser compensado con la mayor incorporación al gabinete de miembros del PMDB y del PSB, además de contar con el aval en el Congreso del PDT. En la cámara baja, donde se dan cita en torno a

2. El 47 por ciento del electorado tiene unos ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Esta población votó de manera prácticamente unánime a Lula.

doce partidos³ y el apoyo expreso a Lula no llega a la mitad de los diputados, el PT con 83 diputados pasa a ser el segundo partido después del PMDB con 89, y si bien pierde siete escaños con relación a las elecciones de 2002 gana dos con respecto a la constitución última de su grupo parlamentario tras las crisis que precipitaron la salida de diputados. En el Senado los apoyos de Lula disminuyen con respecto al periodo precedente y el PT pierde un senador. En cuanto al ámbito de los estados la situación de Lula es algo más cómoda ya que sus socios controlan un buen número: el PT cuenta con 5 gobernadores, el PMDB con 7 y el PSB con 3.

Por todo ello, si desde la presidencia Lula podrá continuar con las políticas sociales ya iniciadas, en el ámbito de la propuesta reforma política así como de otras iniciativas de mayor calado, una de las claves de su gobierno será la compleja y procelosa negociación permanente, lo cual le obligará a buscar constantemente alianzas o entrar en el peligroso juego tan típico de la política brasileña del transfuguismo.

Salamanca, noviembre de 2006

3. Un mes después de celebradas las elecciones el número es incierto toda vez que, si bien veintidós partidos obtuvieron representación, solamente siete de ellos superaban el umbral recientemente establecido del cinco por ciento: PMDB, PT, PSDB, PFL, PP, PSB y PDT, pero otra agrupaciones pugnan vía el agrupamiento por un reconocimiento, es el caso de PTB, PL y PPS

Mujeres líderes iberoamericanas

AMELIA VALCÁRCEL

Catedrática de Filosofía Moral y Política, UNED
Consejera de Estado

Hay cincuenta mujeres ocupando la sala. Pertenecen a los ámbitos más variados, la academia, la política, los sindicatos, los movimientos sociales; son iberoamericanas y españolas. Van a trabajar durante cinco días para poner en común problemas, análisis, referentes y una agenda, la de la Igualdad. Toda reunión comienza con un proyecto, y aun antes del proyecto siempre hay una idea. Y las ideas tienen bases más o menos amplias. La Comunidad Iberoamericana es una de las bases más amplias con la que se pueda contar, la cuarta a nivel mundial. Pero sólo es así si hablamos de la lengua común y nosotras tenemos muchas más cosas en común. Cada una, una reconocida capacidad de impacto y un sólido currículum feminista. En otras palabras, liderazgo establecido o futuro, porque la manera en que se reconoce a una mujer líder es, en gran parte, analizando primero la gran agenda del desarrollo y observando quiénes se sitúan en el efectivo trabajo de llevarla adelante. Las mujeres, aunque pese decirlo, todavía son en muchos lugares el futuro, no, como sería lo justo, la mitad del presente.

Por lo tanto los objetivos de estas reuniones parten de uno previo: reconocer y reunir a esas mujeres y darles una plataforma de encuentro, un cálido y firme apoyo en lo que vienen haciendo, apren-

der de ellas y con ellas, hacer red. Vienen una de cada país y tienen edades muy variadas, o, dicho en términos más plásticos, el cabello de todos los tonos. Algunas ya han estado en España, para otras es la primera vez, pero vienen porque lo que podemos hablar y hacer les interesa, como les interesan la democracia española y sus avances en la Agenda de la Igualdad. Vuelan separadas, volamos, cada una con nuestros pensamientos y comenzamos todas a reunirnos una tarde antes de la sesiones efectivas. Es siempre algo delicado para las españolas explicar qué queremos, porque es muy nuevo: queremos cambiar los énfasis con Iberoamérica y tomar a nuestras iguales completamente en serio; queremos ayudar, pero tenemos que saber en qué y cómo; y hay que transmitir que es del todo cierto que queremos aprender. Sabemos que podemos ir juntas y que en algunos sitios lo tienen menos fácil. No hemos sido cooptadas de las redes clásicas, de las grandes familias, de los recintos privadísimos del saber. No, todas somos, bien al contrario, demócratas de base. Eso también lo tenemos en común.

Incluso poder verse no es tan fácil. Aunque algunas se conocen –de leídas, por reuniones, por referencias comunes–, en ocasiones no se han visto o no se han encontrado en bastante tiempo. Todas formamos un grupo que es nuevo y hay que fraguarlo. Los caminos de nuestra cooperación hace muy poco que contemplan la agenda de género, de modo que lo imprescindible es crear confianza, confianza en que se va en serio. Cada una tiene su experiencia, su modo de ordenarla, su catálogo de asuntos pendientes en lo que a las mujeres toca, porque las situaciones de Iberoamérica también son variadas. Lo primero es hacerse con un lenguaje, con un diccionario, común. Aunque en nuestra Comunidad no es cierta la sentencia de Wilde, “Inglaterra y Estados Unidos son dos países idénticos, excepto la lengua, que es lo que los separa”, algo hay; por ello, cada una hace un esfuerzo para entender lo que la otra dice y a qué se refiere. Como, sin embargo, el nivel es muy alto, siempre quedan las indicaciones comunes a las Declaraciones y los Documentos previos, de modo que se pueda ir caminando. Unificamos lenguaje y referencias, lo primero.

Así, las agendas se van poniendo en hora, en paralelo, para poder también presentarlas con una metodología sencilla. Vamos ad-

quiriendo confianza mutua; nos vamos oyendo. En alguna parte he escrito que la conversación de nosotras las mujeres ha mejorado mucho desde que el patriarcado no nos ahoga tanto. Y es un enorme orgullo, placentero además, escuchar tantas voces autorizadas desgranando lo que ocurre en cada país, cuáles son los retos, qué pudiera hacerse. Como además las historias de vida son tan diferentes, pueden sentarse e intercambiar datos y opiniones mujeres que normalmente no lo podrían hacer, dado lo parcializado que está el mundo. La gente de la política con la de las artes, la de los movimientos sociales con la de la academia, la de las instituciones internacionales con la de la cultura; el feminismo actúa de masa crítica y denominador común. Porque su agenda es todavía muy extensa. Y el intercambio funciona. Por lo general, y acabado el primer día de trabajo, las miradas se transforman. Allí hay algo, algo que quiere existir, amistad y respeto mutuo. Y ánimo, comienza a haber mucho ánimo. Y nos vamos al Museo del Prado.

Los temas son muchos y hay días para ellos: cooperación, leyes, avances en igualdad, paridad, derechos sexuales y reproductivos, violencia, saber... todos abordados mediante sesiones de estudio, exposición y debate. Los conducidos a la par, una española que expone el camino aquí recorrido y cada una de las invitadas que relatan el suyo. Luego se hace un resumen entre las moderadoras, también una de cada lado del Atlántico. Se pretende, es claro, lograr unificar las agendas a uno y otro lado, pero también la manera de presentarlas: su orden, prelación, lenguaje, referencias, etc. Por una parte intentamos mostrar y explicar los logros españoles y poner en común terminología, debates, referencias y estrategias. Por otra, conocer y aprender de Iberoamérica. Los días resultan muy intensos porque las sesiones de trabajo y estudio se completan con la visita y conocimiento directo de las instituciones y de una serie de personalidades españolas especialmente relevantes: Vicepresidenta del Gobierno, Presidenta del Tribunal constitucional, Secretaria de Estado de Cooperación, Secretaria de Estado para Iberoamérica, Presidente de la Junta de Andalucía, Secretario de la SEGIB, Presidenta de la Comisión de Igualdad Congreso-Senado, Secretaria de Igualdad, Ex Presidente del Gobierno, Directoras de la Fundación Carolina y del

Instituto de la Mujer, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, periodistas, asociaciones feministas, sindicatos, agrupaciones expertas en género, académicas, líderes sociales, en fin, una representación lo más nutrida posible de Gobierno, Parlamento y Juridicidad que de clara imagen de los cambios operados en España en cuanto a Igualdad, del camino recorrido, su metodología, sus desafíos, y de sus actores principales.

Vamos conociendo espacios, Madrid, el Parlamento, Moncloa, la Casa de América, Sevilla, su Parlamento, la calle.. A veces parece que la ciudadanía compartida se toca con los dedos. La gente se implica; las asociaciones se implican; las personas de la Fundación Carolina que ayudan en todas las intendencias también se implican. Y yo conozco que voy a pasar el resto del año acordándome de que este espíritu no se pierda; realizando pequeñas comunicaciones, haciendo que la red se sienta viva. Nosotras queremos a nuestra gente y, si bien la política necesita de plazos largos para dar frutos duraderos, como lo será una buena red de mujeres en los campos más distintos pero vinculadas entre sí y con nosotras por un suelo común de ideas, nosotras sabemos que tenemos que darnos prisa porque lo nuestro es urgente y más frágil. Pese a las resistencias que se le quieran oponer, el movimiento de las mujeres seguirá avanzando y lo hará preferentemente en esa parte tan complicada de Occidente que es Iberoamérica. Queremos hacer el camino juntas. Sabemos una cosa fea de decir, pero muy cierta: que el machismo mata, empobrece y atonta. Y no nos resignamos a verle conducir ni la política ni la vida cotidiana de nuestros países.

Hay cosas que nos levantan la moral. En el segundo encuentro vemos mucho más cerca los objetivos del primero. Ya tenemos red y vamos teniendo resultados. No es poca cosa que Enrique Iglesias se haya comprometido a elaborar una Agenda Iberoamericana para la Igualdad y que en los foros de la sociedad civil previos a las Cumbres nuestras voces y discurso vayan a estar presentes, como nos planteamos ya en el primer encuentro, sino que además hemos conseguido una declaración de Primer Nivel, de los Jefes de Estado, en la que afirman su compromiso con la promoción de políticas de igualdad, la erradicación de la violencia de género y la protección

eficaz de los derechos de las mujeres. También nuestra cooperación ha trabajado bien: tendremos nuestra agenda en ella, con decisión y apoyo. Igualdad real, libertad y dignidad de las mujeres; democracia feminista: esa es la clave de muchas cosas en el mundo presente.

Oviedo, noviembre de 2006



Apuntes para una agenda de desarrollo en América Latina

NARCÍS SERRA

Presidente de la Fundación CIDOB

América Latina se encuentra en un buen momento por lo que se refiere a su crecimiento económico. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se espera que el crecimiento de la región se eleve al 5% para el año 2006 y que el PIB por habitante aumente en 3.5 puntos porcentuales. Las previsiones para el 2007 no son menos esperanzadoras, puesto que se prevé que el crecimiento se sitúe en el 4.5%, lo que significaría el quinto año de crecimiento consecutivo para la región¹. Esta situación de crecimiento económico viene acompañada de un aumento de las exportaciones de bienes y servicios, del consumo total, de la inversión y del ingreso nacional para el periodo 2003-2005 respecto a principios de la década de los noventa.

Pero pese a este panorama esperanzador, Latinoamérica vive todavía azotada por dos factores que impiden el bienestar de buena parte de su población: la pobreza y la desigualdad. Según datos de la misma CEPAL, durante el año 2005 un 40.6% de la población vivía en situación de pobreza mientras que un 18% lo hacía en condicio-

1. Estos datos provienen de MACHINEA, José Luis (2006). "La Coyuntura Económica de América Latina: hay lugar para el optimismo?" Paper presentado en el seminario *Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina* organizado por la Fundación CIDOB en Barcelona, los días 6 y 7 de octubre de 2006.

nes de pobreza extrema². Traducido en número de personas, estas cifras nos indican que, a día de hoy, unos 213 millones de latinoamericanos viven en la pobreza y unos 88 en situación de indigencia. Si bien es cierto que en términos globales la incidencia de estas lacras se ha reducido algunos puntos porcentuales respecto a años anteriores, las mejoras no se corresponden al nivel de crecimiento generalizado que ha experimentado la región. En 2004, y en términos de cumplimiento de los Objetivos del Milenio, el conjunto de la región de América Latina y el Caribe se encontraba tan sólo al 34.2% del total de progreso requerido para el año 2015 (es decir, un 60%)³. Si miramos la situación por países, son precisamente aquellos territorios y poblaciones en peor situación los que menos avanzan en la reducción de la pobreza⁴.

En cuanto a desigualdad, América Latina es la región con más inequidad del mundo, sólo por detrás de África subsahariana⁵. La media del Coeficiente de Gini para 18 países de América Latina es del 51.8, mientras que la de Europa se sitúa en el 31.8 y la de España en el 32.5. Entre Nicaragua (país de la región con menos desigualdad) y Guatemala (país con más inequidad) existe una diferencia de 16.8 puntos, siendo un 43.1 el índice de Gini para Nicaragua y un 59.9 el de Guatemala⁶. Estos niveles de desigualdad de ingresos y consumo se traducen en una difícil mejora del desarrollo y la prosperidad, puesto que perpetúan los altos índices de pobreza de la

2. Datos de CEPAL (2006). *Panorama Social de América Latina 2005*. Santiago, Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas. p. 21.

3. Véase NACIONES UNIDAS (2005). *The Millennium Development Goals: A Latin American and Caribbean Perspective*. Santiago, Chile. United Nations Publications. p. 252.

4. AYUSO, Anna (2006). "Pobreza, desigualdad y cohesión social: más allá de los Objetivos del Milenio" en *Pensamiento Iberoamericano*, nº 0. Nueva época. Madrid. AECI - Fundación Carolina (en imprenta).

5. BANCO MUNDIAL (2005). Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006: Equidad y Desarrollo. Bogotá. Banco Mundial.

6. Cálculos realizados a partir de PNUD (2005). *Informe sobre Desarrollo Humano 2005*. New York: PNUD. Un coeficiente de Gini con valor 0 representa la igualdad perfecta y uno con valor 100, la desigualdad perfecta.

gión. Igualmente, y debido a la situación de tensión social y política que se deriva de una percepción generalizada de injusticia, estos niveles de desigualdad actúan como mecanismo de deslegitimación de las instituciones y del Estado de derecho⁷.

América Latina se encuentra, pues, ante una situación dual. Los buenos resultados en materia de crecimiento económico contrastan con la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdad. Ante esta constatación, algunos de los mejores economistas iberoamericanos se reunieron el pasado mes de octubre en Barcelona para discutir sobre las políticas económicas necesarias para establecer un nuevo pacto social en América Latina⁸. Aprovechando la favorable coyuntura económica de la región, la reunión consideró indispensable el avance en torno a dos ejes prioritarios: una reforma fiscal que aborde el problema de la desigualdad sin renunciar a la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos naturales como catalizador del crecimiento.

La política fiscal es uno de los mecanismos que el Estado utiliza para realizar políticas de redistribución de la renta. En buena parte de los países latinoamericanos, si observamos lo que la estructura fiscal supone para la población con relación a su nivel de ingresos, vemos que los ciudadanos que más pagan son aquéllos que menos ingresan⁹. Además, los ingresos del Estado dependen en buena medida de impuestos indirectos como el IVA y no de impuestos sobre la renta, lo que denota un claro carácter regresivo del sistema impositivo¹⁰. Junto con esta falta de progresividad del lado de

7. Véase en este sentido AYUSO, Anna (2006) *op.cit.* y SERVÉN, Luis (et.al.) (2006). “Fiscal Reform for Social Equity in Latin America”. Paper presentado en el seminario *Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina* organizado por la Fundación CIDOB en Barcelona, los días 6 y 7 de octubre de 2006.

8. Las conclusiones y el programa del segundo seminario de la Agenda de Desarrollo Iberoamericana, *Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina*, se pueden consultar en: http://www.cidob.org/es/actividades/desarrollo_y_cooperacion/politicas_economicas_para_un_nuevo_pacto_social_en_america_latina

9. Véase en este sentido SERVÉN, Luis (et.al.) (2006) *op.cit.*

10. Véase LORA, Eduardo (2006). “El Futuro de los Pactos Fiscales en América Latina”. Paper presentado en el seminario *Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina* organizado por la Fundación CIDOB en Barcelona, los días 6 y 7 de octubre de 2006.

la recaudación, existen también importantes impedimentos para que, del lado del gasto, la política fiscal se convierta en un instrumento de redistribución de la riqueza. A menudo el gasto tiende a concentrarse en aquellos grupos con ingresos más elevados, lo que implica que los beneficios de un gasto social creciente en la región vaya destinado a una pequeña parte de su población. Asimismo, el gasto público en Latinoamérica tiene un carácter pro-cíclico. Ello implica que cuando las necesidades de la población son mayores, la capacidad recaudatoria del Estado disminuye y, por ende, también lo hace el gasto social del Estado y su capacidad redistributiva.

La abundancia de recursos naturales de que goza América Latina no siempre se traduce en aprovechamiento de las ventajas comparativas que ello supone ni en crecimiento económico de sus países. Latinoamérica es la región del mundo que concentra la mayor cantidad de exportaciones de productos primarios como minerales, alimentos y combustibles¹¹. La evolución de las exportaciones de dichos productos ha tenido una tendencia al alza en los últimos tiempos, lo que ha suscitado el debate sobre la inexistencia de correlación entre aumento de las exportaciones y crecimiento económico. Algunos autores han considerado que la abundancia de recursos naturales puede ser un problema para el desarrollo de una región, debido en buena medida a la volatilidad de sus precios. Sin embargo, el problema radica en la falta de diversificación de las exportaciones de dichos productos, lo que impide la elaboración de subproductos intensivos en tecnología y con mayor valor añadido. La receta de la diversificación de las exportaciones podría ser una buena solución para que los ingresos de la venta de dichos productos reviertan en nuevas inversiones en éste y otros sectores productivos. Igualmente, desarrollar mecanismos de ahorro y desahorro eficientes permitiría paliar los efectos de la volatilidad de los precios de los recursos naturales. Por su lado, el sistema fiscal aplicable sobre estos recursos debería ser capaz de compatibilizar un ingreso adecuado para el Estado y la atracción de la inversión privada.

11. Véase MANZANO, Osmel (2006). "El Rol de los Recursos Naturales en el Desarrollo de América Latina". Paper presentado en el seminario *Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina* organizado por la Fundación CIDOB en Barcelona, los días 6 y 7 de octubre de 2006.

El breve análisis de estos ejes temáticos nos permite apuntar dos elementos indispensables para afrontar la situación dual que vive América Latina: el establecimiento de un pacto social y la consolidación de unas instituciones fuertes que nos permitan avanzar hacia el desarrollo y la cohesión social de la región. Las distintas trabas institucionales y de política económica reducen la eficiencia y la equidad de las políticas fiscales y de gestión de los recursos naturales. Igualmente, la escasa capacidad redistributiva de las políticas fiscales en Latinoamérica socava la estabilidad y legitimidad de las instituciones políticas de la región. Para afrontar con garantías el establecimiento de un pacto social en América Latina es indispensable antes la consolidación de unas instituciones públicas capaces de llevar a cabo tales políticas sociales. Pero no sólo las instituciones importan, sino que la política tiene también un papel fundamental. La historia y las instituciones condicionan el margen de acción de la política, pero no lo determinan. En este sentido, sin un contexto de estabilidad política, la reducción de la pobreza y la desigualdad en el largo plazo no parecen posibles. El establecimiento de un pacto social entre los distintos actores del Estado y la sociedad civil constituye, pues, la mejor receta para poner en práctica las políticas económicas de desarrollo y de lucha contra la desigualdad que América Latina necesita.

Barcelona, noviembre de 2006



Nicaragua: en busca del consenso

SERGIO RAMÍREZ

Escritor

La victoria de Daniel Ortega en las elecciones celebradas el primer domingo de noviembre en Nicaragua parece ser irreversible, como parece también irreversible que su pacto de repartición de poder con el convicto ex presidente Arnoldo Alemán, queda asegurado por cinco años más. Las bancadas del FSLN, el partido de Ortega, y del PLC, el partido de Alemán, obtendrán entre ambos los escaños suficientes en la Asamblea Nacional para alcanzar los dos tercios necesarios para reformar la Constitución si así les conviene, y seguir nombrando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Consejo Electoral, y demás funcionarios claves del aparato de poder.

Las previsiones de las encuestas llevaban a pensar que la Asamblea Nacional quedaría repartida en cuatro fuerzas equilibradas, que cualquiera que fuera el presidente electo obligaría a una negociación en cuanto a las decisiones claves, y se fortalecería el espacio democrático. Pero bajo la premisa del “voto útil”, el caudal del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que llevaba como candidato a Edmundo Jarquín, disminuyó sensiblemente, y pese a que la Alianza Liberal (ALC) de Eduardo Montealegre alcanzó el segundo lugar en las votaciones, estas dos fuerzas que se declararon, cada una por su lado, en contra del pacto, quedarán en minoría.

Ortega debe apelar necesariamente a la continuidad del pacto con Alemán para alcanzar esa mayoría en la Asamblea Nacional que los electores no le concedieron, pues con cerca del 40 por ciento de los votos queda lejos de alcanzar, por sí solo, ni siquiera la aprobación de las leyes ordinarias. Y su principal arma para doblegar, o atraer a Alemán, sigue siendo la condena a veinte años de cárcel que pese sobre éste último por lavado de dinero. Ahora más que nunca Alemán necesita de Ortega para obtener una amnistía, o al menos mantenerse en el estado de libertad condicional de que disfruta.

Ortega había pasado a ser ya el actor principal del pacto, con más poder que Alemán. Ejerce un control absoluto sobre el sistema judicial, con jueces y magistrados que no dudan en cumplir sus instrucciones para dictar sus sentencias, aún en los casos de justicia común. Y también ejerce ese control sobre el Consejo Supremo Electoral, desde que su presidente, Roberto Rivas, que se alineaba con el bando liberal, se pasó al bando sandinista como consecuencia del otro pacto que Ortega logró con el cardenal Miguel Obando. Rivas es un allegado íntimo de Obando.

Desde la presidencia, Ortega tendría ahora la oportunidad de cerrar el cerco sobre todas las instituciones estatales, que resultarán sin duda más debilitadas aún en su independencia. Y faltará ver cuál es la actitud que tomarán tanto el Ejército de Nicaragua como la Policía Nacional, que pese al origen sandinista de sus mandos superiores han logrado en los últimos quince años consolidar su papel institucional, lejos de toda ingerencia en los asuntos políticos. No hay duda que el respeto o no de este papel será una de las pruebas más claras acerca de las intenciones de Ortega en cuanto a su forma de gobernar.

La reforma constitucional que permitió a Ortega ganar la presidencia con un nivel de votos bajo, es la corona del pacto, una concesión que le hizo Alemán, dada la imposibilidad en que Ortega ha estado siempre de obtener cotas superiores al cuarenta por ciento. En estas elecciones ha sacado aún menos votos que la vez anterior. Esto crea para él un problema que deberá enfrentar desde el principio, y es la falta de consenso. Del otro lado, el sesenta por ciento que no votó por él no hubiera querido verlo nunca como presidente, según

las encuestas, lo que abre un escenario de polarización, sobre todo frente a la clase media, temerosa de cambios abruptos, y frente el sector empresarial.

Ortega, con todo el poder que ahora tendrá en sus manos, el mayor que se haya visto en la historia del país concentrado en una sola persona desde tiempos de Somoza, deberá maniobrar en aguas difíciles para buscar el consenso nacional que le permita empezar a gobernar sin confrontaciones. Ya tiene el respaldo del cardenal Obando, y de los obispos que aún siguen siendo fieles a Obando tras a su paso a retiro. Pero ahora deberá buscar cómo entenderse rápidamente con los banqueros y los empresarios.

La cercanía con Chávez y con el gobierno de Cuba no va a ayudarlo precisamente en esta tarea, cercanía que seguirá siendo vista con suspicacia por la derecha empresarial. Y para no alterar la andanza económica del país, deberá sacar buenas notas desde el primer mes en el gobierno.

Lo peor que podría ocurrir a Ortega es que la desconfianza en su gobierno provocara una corrida de capitales, y que la inversiones extranjeras, que empiezan a crecer en el país, sobre todo en el sector de turismo, resultaran ahuyentadas. Para evitarlo, tendrá, en primer lugar, que jurar fidelidad al FMI en cuanto al cumplimiento de los parámetros con que los últimos tres gobiernos conservadores se han comprometido, y así mantener estables los índices de la economía. Luego, deberá convencer a los inversionistas extranjeros de que Nicaragua es un territorio fiable, y que no correrán el riesgo de intervenciones estatales en el ámbito de sus negocios, ni se verán amenazados por expropiaciones ni tomas de tierras cuando se trata del área agrícola.

No existe ningún equipo de economistas y expertos financieros de primera línea alrededor de Ortega, y aquellos comprometidos con las viejas creencias de la economía estatal y la planificación, no le servirán de mucho. Pese a su retórica anticapitalista, todo hace indicar que deberá acercarse a los mismos empresarios en busca de sugerencia de nombres para los cargos claves de ministros de Finanzas, Economía, y presidente del Banco Central. No sería raro ver a alguno de los ministros del actual gobierno conservador seguir en sus cargos.

Y le resta lo que es aún más crítico, definir sus relaciones con Estados Unidos.

Washington hizo todo lo posible para evitar la elección de Ortega, y ahora ha recibido su triunfo con hostilidad. Quienes aconsejan al presidente Bush sobre los asuntos de Nicaragua pertenecen a la generación de políticos que manejó la guerra de los contras bajo la administración Reagan, y se han quedado estancados en su visión de los ochenta, de modo que un acercamiento no será del todo fácil. Y no le servirá a Ortega su viejo discurso antiimperialista, ni le ayudarán sus estrechas relaciones con Chávez, quien de seguro pasará ahora a ser un huésped frecuente en Nicaragua.

Ortega siempre abogó en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y a favor del ALBA, la propuesta de integración económica latinoamericana de Chávez. Pero el ALBA es apenas una propuesta, sin mecanismos definidos, y sin muchos socios, mientras el TLC con Estados Unidos entró ya en vigencia, y sabe que abandonarlo, o limitar su aplicación, sería suicida. De modo que, por este camino, es que deberá buscar, sin retórica, cómo tender un puente de entendimiento. Pero tampoco la oferta de Chávez de entregar a Nicaragua todo el petróleo que necesita a precios concesionales, puede ser echada en saco roto.

Por mucho que Ortega no guste al gobierno de Estados Unidos, si la comunidad internacional reconoce su elección como legítima, Washington no podrá alegar muchos motivos de hostilidad, y esperarán seguramente que sea Ortega quien dé el primer paso.

Se trata de un presidente legítimamente electo, conforme las reglas del juego electoral que todos los demás aceptaron. Y si la responsabilidad de buscar el consenso es principalmente suya, también es de todos los demás. Al fin y al cabo, todos los nicaragüenses están ahora subidos en el mismo barco, y si no un naufragio, la zozobra misma en la travesía podría llegar a tener consecuencias incalculables para una economía demasiado frágil. Basta citar el ejemplo de que el treinta por ciento de los gastos presupuestarios del país proviene de donaciones internacionales. Algo que no hace sino confirmar nuestra matrícula como uno de los tres países más pobres de América Latina, junto a Haití y Honduras.

Pero la comunidad financiera ha empezado por dar buenas señales. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la condonación de la deuda del país, equivalente a unos 400 millones de dólares, y Ortega ha sostenido una primera reunión con una misión del FMI, en la que mostró su disposición de negociar un próximo acuerdo, que conllevará necesariamente más de la aplicación de las reglas de disciplina financiera, contrarias a cualquier tentación de populismo.

Todo parece tranquilo en lontananza, y, mejor que eso, nadie parece desear las tormentas.

Masatepe, noviembre de 2006

Construyendo la Comunidad Iberoamericana

ENRIQUE V. IGLESIAS

Secretario General Iberoamericano

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Montevideo la decimosexta Cumbre Iberoamericana. Durante un año, la Secretaría General Iberoamericana trabajó intensamente en el cumplimiento de los mandatos recibidos en la XV Cumbre, celebrada en Salamanca, y, en líneas generales, en la construcción de una Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Varios han sido, a mi juicio, los principales ámbitos de actuación relacionados con la reciente Cumbre de Montevideo.

En primer lugar el conjunto de reuniones ministeriales sectoriales y de foros específicos de alto nivel que se han celebrado durante el *curso iberoamericano*, o en el contexto de la propia Cumbre. Se realizó también el *II Foro Parlamentario Iberoamericano* que aproximó la voz de las soberanías nacionales a los máximos mandatarios.

Al mismo tiempo se comenzaron a convocar, desde Salamanca, dos encuentros de alto nivel cuyas segundas ediciones tuvieron lugar en el mismo marco de la XVI Cumbre. El *Encuentro Empresarial* reunió a cerca de dos centenares de empresarios para debatir sobre el mejor aprovechamiento, la consolidación y la perdurabilidad de la bonanza económica que vive América Latina. El *Encuentro Cívico* acercó igualmente la voz y la opinión de las organizaciones no gu-

bernamentales más relevantes de Iberoamérica. Debo destacar la utilidad de ambos eventos así como el hecho de que han comenzado a adquirir un interesante perfil propio. Paralelamente se celebró, organizado por la alcaldía de Montevideo, el Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales.

En segundo lugar quiero referirme a la actividad de la propia Secretaría General Iberoamericana, SEGIB. Este órgano de apoyo institucional y técnico de la Conferencia Iberoamericana constituye un núcleo de movilización que cumple con los mandatos de los mandatarios y promueve actividades adicionales que contribuyen a consolidar nuestra Comunidad.

Durante este periodo hemos dividido nuestra actividad en cuatro grandes áreas: político-institucional, económica, social y cultural.

En el área político-institucional se celebró el Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. El tratamiento interdisciplinario de esta problemática tuvo como resultado concreto unas conclusiones que constituyeron un apoyo muy importante en las deliberaciones de la Cumbre. Como consecuencia se aprobó el *Compromiso de Montevideo*, un documento completo y riguroso que constituye, comparativamente con otras regiones y espacios internacionales, uno de los acuerdos más avanzados conseguidos en esta materia. Como botón de muestra señalaré el reconocimiento al acceso de cualquier inmigrante, cualquiera que sea su condición migratoria, a los servicios de salud, educación y tutela judicial.

Estamos impulsando igualmente otras actividades con la colaboración de diversas instituciones y organizaciones de América y Europa. Desde la SEGIB queremos optimizar sinergias entre todos aquellos que estamos involucrados en causas y objetivos convergentes. Destaco en este sentido la fructífera colaboración que se viene desarrollando con instituciones españolas como la Fundación Carolina y el Real Instituto Elcano, y también la que, en otro plano, hemos establecido con organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina o la Organización Internacional de Migraciones. Un capítulo especial en este sentido lo constituye nuestra cercana cooperación articulada con las organizaciones integrantes del Sistema Iberoamericano, a saber, la Organiza-

ción de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).

En el ámbito económico estamos tratando de apoyar los procesos inversionistas en América Latina. En cuanto al sector energético resaltamos la importancia que tienen, cada vez más, las energías renovables. Quiero mencionar, entre otras iniciativas ejecutadas por la SEGIB por mandato de los mandatarios, el Foro Iberoamericano de Desarrollo Social, el Encuentro sobre Extensión del Crédito y Servicios Financieros, la Conferencia sobre Energías Renovables, la Reunión sobre Alianzas Estratégicas del Sector Turístico, la Conferencia sobre Canje de Deuda por Educación, y el Encuentro sobre Facilitación de la Inversión Extranjera Directa en Centroamérica y Panamá.

El área social es fundamental en nuestra labor. Nos estamos concentrando en el apoyo a las prácticas de lucha contra la pobreza, y en cómo enfrentar la violencia urbana. También estamos abordando, con la colaboración de la OEI, otras necesidades muy importantes como el fomento de la alfabetización –en Montevideo se ha aprobado el Programa de Alfabetización (2007-2015) para jóvenes y adultos–, la creación de un Espacio Común del Conocimiento y, en este contexto, los intercambios de profesores y estudiantes y la puesta en marcha de un programa de intercambio de estudiantes universitarios (el “Erasmus” iberoamericano). Asimismo se está gestando un convenio iberoamericano en materia de seguridad social que será de gran relevancia, especialmente en lo que tiene que ver con el aspecto migratorio.

En el ámbito cultural quiero destacar la aprobación en Montevideo de la *Carta Cultural Iberoamericana*. En ella quedan definidos los principios que fundamentan nuestra unidad cultural, reconociéndose al mismo tiempo la realidad objetiva y cuantificable del gran volumen de nuestras industrias culturales. Creo que es el factor cultural, con nuestra identidad y tradiciones, lo que mejor identifica y define a nuestra Comunidad en el escenario internacional. También en lo relativo su gran diversidad: a través del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Ca-

ribe los mandatarios acaban de aprobar la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Nativas.

Tenemos programas específicos y exitosos de cooperación en este campo, como *Ibermedia*, orientado a la producción e industria cinematográfica; y hemos puesto en marcha un gran proyecto de promoción cultural en el contexto de la Cumbre, *Iberoamérica crea*, que ha dado cita a grandes artistas de nuestra Comunidad y ha creado un excelente clima de acercamiento entre la juventud iberoamericana y las Cumbres.

En el área de la cooperación en general se ha aplicado en la decimosexta Cumbre una evaluación y una racionalización de los programas existentes, y se ha presentado un *manual operativo* para la más coherente gestión de la cooperación iberoamericana. Hemos puesto en marcha el programa *Iberescena*, orientado a la promoción de las artes escénicas. Los Fondos Voluntarios aprobados nos permitirán cumplir compromisos en el corto plazo.

En lo que se refiere a la actividad de la SEGIB añadiré un quinto factor, correspondiente con los mandatos recibidos: la consecución de una mayor proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana. Ya somos observadores en Naciones Unidas, hemos establecido un convenio de colaboración pormenorizada con la Comisión Europea, y también diversos acuerdos con cerca de treinta organismos internacionales. En Montevideo hubo una importante presencia de organizaciones internacionales invitadas. Más de veinte nos han acompañado en nuestro máximo cónclave creando de este modo una gran “masa crítica internacional” en torno a Iberoamérica.

El tercer gran aspecto ha sido la propia Cumbre de Montevideo. Los mandatarios abordaron tres temas principales: la situación actual de Iberoamérica; el fenómeno migratorio; y la proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana. Respecto al segundo ya me he referido al logro que, en mi opinión, ha supuesto la aprobación del *Compromiso de Montevideo*.

Los debates fueron tranquilos, positivos y constructivos. El Presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, impulsó algunas ideas como el establecimiento de alianzas empresariales entre ambos lados iberoamericanos del Atlántico, la creación de un Fondo Ibero-

americano para el acceso al agua potable –apoyado por España y Venezuela–, o la vinculación efectiva iberoamericana a la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones.

En la Cumbre se habilitó también un tiempo y un espacio para que los empresarios y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil se pudiesen encontrar, e interactuar, con los Jefes de Estado y de Gobierno.

Me referiré también al momento histórico que, en mi opinión, vive actualmente América Latina. Desde una perspectiva política debemos valorar el hecho de que los procesos democráticos se desenvuelven dentro de los marcos legales establecidos. En el aspecto social debemos enorgullecernos del dinamismo de nuestras sociedades y saber aprovechar la enorme y positiva energía que esto representa.

Desde una perspectiva económica hay que reconocer que América Latina está atravesando un periodo de bonanza, con un cierto crecimiento económico. Este crecimiento tiene dos puntos de apoyo: una coyuntura internacional favorable que se refleja en los precios de las materias primas, y una correcta gestión macroeconómica. Un *subfrente* que debemos consolidar también es el de la competitividad. Aquí se abre un gran desafío para la inversión, la formación de recursos humanos, la consolidación de sistemas de seguridad jurídica y todos los elementos que puedan favorecer el incremento de la productividad.

El frente social sigue siendo la gran deuda pendiente. Pero creo que si continuamos creciendo con políticas adecuadas en materias como la educación, la salud y el empleo, podremos abordar los problemas con mayor confianza. La pobreza y la inequitativa distribución del ingreso deben ser abordados con perspectiva y combinando medidas de corto y de medio y largo plazo. En el frente institucional debemos afrontar la reforma del Estado, y otras como la fiscal y las microeconómicas, sin descuidar la necesaria estabilidad macroeconómica.

La inserción internacional de América Latina a través de los procesos de integración constituye una clave de lo que podríamos llamar el frente internacional de nuestra Comunidad. Debemos insistir en el fortalecimiento de los procesos de integración subregional y, al

mismo tiempo, abrírnos al mundo. En este sentido reitero la necesidad de seguir proyectando internacionalmente a Iberoamérica desde nuestros principios, valores, cultura y lenguas compartidos.

Quiero, por último, referirme al impacto mediático de la Cumbre y a su importante reflejo en la opinión pública. En Montevideo la presencia de los medios de comunicación fue masiva. La inasistencia de algunos mandatarios fue resaltada por alguna prensa como un indicador del mayor o menor éxito de la Cumbre. Estuvieron en todo caso representados la totalidad de los Gobiernos iberoamericanos. Pero debemos dejar claro que estamos trabajando para construir una sólida Comunidad Iberoamericana de Naciones, no una Cumbre de gobernantes. La Cumbre de máximos mandatarios es la más alta instancia decisoria de la Conferencia y del Sistema Iberoamericanos, pero la *Comunidad* es algo que se construye a partir de múltiples proyectos sociales, económicos, culturales y políticos, y a partir del cumplimiento de los mandatos recibidos: es un trabajo constante y permanente durante todo el año que ya está dando notabilísimos resultados. Sin negar la naturaleza mediática que inevitablemente tiene una Cumbre –y que representa un aspecto que hay que cuidar especialmente y sobre el que debemos realizar un esfuerzo adicional– no se puede caer en el error de confundir una cosa con la otra.

Son, en definitiva, muchos los motivos para apoyar la construcción de una auténtica Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y éste es el objetivo central de la Secretaría General; éste es nuestro objetivo común iberoamericano.

Madrid, diciembre de 2006

Nombres Propios

EDITADO POR LA FUNDACIÓN CAROLINA,
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR
EN MADRID, EN ENERO DE 2007
EN LOS TALLÉRES GRÁFICOS IMPRESA



Índice temático

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA

Luces y sombras de la política en América Latina	23
<i>Manuel Alcántara Sáez</i>	
Las tareas de Evo. Bolivia el día después	41
<i>Joan Prats</i>	
Fiebre reeleccionista en América Latina	49
<i>Daniel Zovatto</i>	
Elecciones en Chile	59
<i>Ludolfo Paramio</i>	
Las incógnitas del nuevo escenario latinoamericano	63
<i>Máximo Cajal</i>	
Bachelet presidenta	73
<i>Amelia Valcárcel</i>	
Elecciones presidenciales en Chile	77
<i>Guy Bajoit</i>	
El sombrero del mago	95
<i>Sergio Ramírez</i>	
Tradición Republicana	129
<i>Judith Astelarra</i>	
Nuevo gobierno en Costa Rica: paradojas y desafíos	153
<i>Luis Guillermo Solís Rivera</i>	
Partidos y <i>outsiders</i> en las elecciones peruanas	167
<i>Rafael Roncagliolo</i>	

Elecciones mexicanas: lo que ya se sabe	187
<i>José María Tortosa</i>	
México desde Italia y al revés	211
<i>Ugo Pipitone</i>	
Ecuador: dos estilos y dos opciones doctrinarias	237
<i>Javier Ponce</i>	
El continuismo en la política brasileña	243
<i>Manuel Alcántara Sáez</i>	
Nicaragua: en busca del consenso.....	261
<i>Sergio Ramírez</i>	

COMUNIDAD IBEROAMERICANA E INTEGRACIÓN REGIONAL

Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa	13
<i>Leire Pajín</i>	
La Cumbre de Salamanca: una nueva apuesta por el espacio iberoamericano	31
<i>Celestino del Arenal</i>	
La Comunidad Sudamericana de Naciones: algo se mueve en América del Sur	37
<i>Francisco Aldecoa</i>	
Construyendo la Comunidad Iberoamericana.....	267
<i>Enrique V. Iglesias</i>	

DESARROLLO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA

Latinoamérica 2006: superar la melancolía, atrapar la oportunidad	83
<i>José Juan Ruiz</i>	
Los desafíos de la protección social en América Latina y el Caribe	141
<i>José Luis Machinea</i>	
Un nuevo contrato social para América Latina	199
<i>Ernesto Ottone</i>	
Apuntes para una agenda de desarrollo en América Latina.....	255
<i>Narcís Serra</i>	

COOPERACIÓN Y DESARROLLO

Ganando la batalla contra el hambre	55
<i>Emilio Lamo de Espinosa</i>	
Mercado, desconfianza y cooperación al desarrollo	147
<i>Francesc Granell</i>	
Idea de la cooperación en la mentalidad española	121
<i>Pedro A. Vives</i>	
Relación entre las TIC y el desarrollo: aproximación a los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.....	173
<i>Estefanía Chereguini</i>	
El codesarrollo en su laberinto	205
<i>Alberto Acosta</i>	
El Plan África 2006-2008.....	217
<i>Álvaro Iranzo</i>	
Violencia social y globalización en América Latina.....	223
<i>Manuela Mesa</i>	
Mujeres líderes iberoamericanas.....	249
<i>Amelia Valcárcel</i>	

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

La cooperación española y América Latina: una agenda compartida hacia la justicia entre hombres y mujeres.....	101
<i>Aurora Díaz-Rato</i>	
América Latina en la mentalidad española	107
<i>Pedro A. Vives</i>	
El futuro de la protección social en América Latina: la respuesta de la cooperación española	231
<i>Juan Pablo de Laiglesia</i>	

CULTURA

América Latina y el informe PISA.....	67
<i>Julio Carabaña</i>	

El público (Hay Festival).....	91
<i>Carmen Posadas</i>	
El nuevo cine iberoamericano	117
<i>Cristina Peri Rossi</i>	
Mercedes Roffé, la poesía en diálogo con la poesía	135
<i>Marta López-Luaces</i>	
Culturas alternativas, cultura de punta, nosotros y nuestras circunstancias	181
<i>José Rojas Bez</i>	
La nueva narrativa hispanoamericana ¿Una ruptura con el Boom?.....	193
<i>Jorge Eduardo Benavides</i>	

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

La RSE y la Fundación Carolina	19
<i>Ramón Jáuregui</i>	
Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?	161
<i>Bernardo Kliksberg</i>	

Índice de autores

ACOSTA, ALBERTO

El codesarrollo en su laberinto 205

ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL

Luces y sombras de la política en América Latina 23

El continuismo en la política brasileña 243

ALDECOA, FRANCISCO

La Comunidad Sudamericana de Naciones:
algo se mueve en América del Sur 37

ARENAL, CELESTINO DEL

La Cumbre de Salamanca: una nueva apuesta
por el espacio iberoamericano 31

ASTELARRA, JUDITH

Tradicón Republicana 129

BAJOIT, GUY

Elecciones presidenciales en Chile 77

BENAVIDES, JORGE EDUARDO

La nueva narrativa hispanoamericana.
¿Una ruptura con el Boom?..... 193

CAJAL, MÁXIMO

Las incógnitas del nuevo escenario latinoamericano 63

CARABAÑA, JULIO	
América Latina y el informe PISA.....	67
CHEREGUINI, ESTEFANÍA	
Relación entre las TIC y el desarrollo: aproximación a los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.....	173
DÍAZ-RATO, AURORA	
La cooperación española y América Latina: una agenda compartida hacia la justicia entre hombres y mujeres.....	101
GRANELL, FRANCESC	
Mercado, desconfianza y cooperación al desarrollo	147
IGLESIAS, ENRIQUE V.	
Construyendo la comunidad iberoamericana	267
IRANZO, ÁLVARO	
El Plan África 2006-2008.....	217
JÁUREGUI, RAMÓN	
La RSE y la Fundación Carolina	19
KLIKSBERG, BERNARDO	
Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?	161
LAIGLESIA, JUAN PABLO DE	
El futuro de la protección social en América Latina: La respuesta de la cooperación española	231
LAMO DE ESPINOSA, EMILIO	
Ganando la batalla contra el hambre	55
LÓPEZ-LUACES, MARTA	
Mercedes Roffé, la poesía en diálogo con la poesía	135
MACHINEA, JOSÉ LUIS	
Los desafíos de la protección social en América Latina y el Caribe	141
MESA, MANUELA	
Violencia social y globalización en América Latina.....	223

OTTONE, ERNESTO	
Un nuevo contrato social para América Latina	199
PAJÍN, LEIRE	
Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa	13
PARAMIO, LUDOLFO	
Elecciones en Chile	59
PERI ROSSI, CRISTINA	
El nuevo cine iberoamericano	117
PRATS, JOAN	
Las tareas de Evo. Bolivia el día después	41
PIPITONE, UGO	
México desde Italia y al revés	211
PONCE, JAVIER	
Ecuador: dos estilos y dos opciones doctrinarias	237
POSADAS, CARMEN	
El público (Hay Festival)	91
RAMÍREZ, SERGIO	
El sombrero del mago	95
Nicaragua: en busca del consenso	261
ROJAS BEZ, JOSÉ	
Culturas alternativas, cultura de punta, nosotros y nuestras circunstancias	181
RONCAGLIOLO, RAFAEL	
Partidos y <i>outsiders</i> en las elecciones peruanas	167
RUIZ, JOSÉ JUAN	
Latinoamérica 2006: superar la melancolía, atrapar la oportunidad	83
SERRA, NARCÍS	
Apuntes para una agenda de desarrollo en América Latina	255

SOLÍS RIVERA, LUIS GUILLERMO	
Nuevo gobierno en Costa Rica: paradojas y desafíos	153
TORTOSA, JOSÉ MARÍA	
Elecciones mexicanas: lo que ya se sabe	187
VALCÁRCEL, AMELIA	
Bachelet presidenta	73
Mujeres líderes iberoamericanas.....	249
VIVES, PEDRO A.	
América Latina en la mentalidad española	107
Idea de la cooperación en la mentalidad española	121
ZOVATTO, DANIEL	
Fiebre reeleccionista en América Latina	49

